

Huelgas

Hitos en la historia de la clase obrera argentina
(1936-2001)

Nicolás Iñigo Carrera y Roberto Elisalde (comps.)

Martin Acri, Joaquín Calvagno, Nicolás Iñigo Carrera, Guillermo Caviasca,
María Celia Cotarelo, Patricia Chaves, Roberto Elisalde, Fabián L. Fernández,
María Isabel Grau, Gustavo Guevara, Ernesto Salas

Huelgas

Hitos en la historia de la clase obrera argentina (1936-2001)

Huelgas

Hitos en la historia de la clase obrera argentina
(1936-2001)

Nicolás Iñigo Carrera y Roberto Elisalde (compiladores)
Martin Acri, Joaquín Calvagno, Nicolás Iñigo Carrera, Guillermo
Caviasca, María Celia Cotarelo, Patricia Chaves, Roberto Elisalde,
Fabián L. Fernández, María Isabel Grau, Gustavo Guevara,
Ernesto Salas

Cátedra: Problemas de la Historia Argentina



Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Decano Américo Cristófolo	Secretario de Investigación Marcelo Campagno	Consejo Editor Virginia Manzano Flora Hilert
Vicedecano Ricardo Manetti	Secretario de Posgrado Alejandro Balazote	Marcelo Topuzian María Marta García Negroni Fernando Rodríguez
Secretario General Jorge Gugliotta	Secretaria de Transferencia y Relaciones Interinstitucionales e Internacionales Silvana Campanini	Gustavo Daujotas Hernán Inverso Raúl Illescas Matias Verdecchia Jimena Pautasso Grisel Azcuy Silvia Gattaioni
Secretaria de Asuntos Académicos Sofía Thisted	Subsecretaria de Bibliotecas María Rosa Mostaccio	Rosa Gómez Rosa Graciela Palmas Sergio Castelo Aylén Suárez
Secretaria de Hacienda y Administración Marcela Lamelza	Subsecretario de Hábitat e Infraestructura Nicolás Escobari	Directora de imprenta Rosa Gómez
Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil Ivanna Petz	Subsecretario de Publicaciones Matias Cordo	

Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras
Colección Libros de Cátedra

ISBN 978-987-8927-36-7

© Facultad de Filosofía y Letras (UBA) 2022

Subsecretaría de Publicaciones

Puan 480 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

Tel.: 5287-2732 - info.publicaciones@filo.uba.ar

www.filo.uba.ar

Huelgas : hitos en la historia de la clase obrera argentina, 1936-2001 / Martín Acri ... [et al.] ; compilación de Nicolás Iñigo Carrera ; Roberto Elisalde. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires, 2022. 364 p. ; 21 x 15 cm. - (Libros de cátedra)

ISBN 978-987-8927-36-7

1. Historia Argentina. 2. Historia Contemporánea. 3. Huelgas. I. Acri, Martín. II. Iñigo Carrera, Nicolás, comp. III. Elisalde, Roberto, comp. CDD 331.892982

Índice

Presentación	11
<i>Nicolás Iñigo Carrera y Roberto Elisalde</i>	
Capítulo 1	
La huelga general de masas de enero de 1936.	
Lucha económica / lucha política	17
<i>Nicolás Iñigo Carrera</i>	
Capítulo 2	
La huelga de los colectiveros de septiembre de 1936	39
<i>Joaquín Calvagno</i>	
Capítulo 3	
La huelga metalúrgica de 1942. Productividad empresarial y resistencia obrera	61
<i>Roberto Elisalde</i>	
Capítulo 4	
17 de octubre de 1945. La lucha democrática de la clase obrera argentina	91
<i>Nicolás Iñigo Carrera</i>	

Capítulo 5

Las huelgas metalúrgicas durante el peronismo. Conflictos
en torno al control obrero de la producción (1946-1953) 115

Roberto Elisalde

Capítulo 6

Crisis de fuerza social y protesta obrera. El movimiento huelguístico
de 1954 141

Fabián L. Fernández

Capítulo 7

1956: los 42 días de la huelga del orgullo metalúrgico 167

Ernesto Salas

Capítulo 8

Las ocupaciones de fábricas en 1964 en el proceso de constitución de
una estrategia revolucionaria de la clase obrera 189

María Isabel Grau

Capítulo 9

Córdoba, mayo de 1969. Resonancias latinoamericanas
e interpretaciones en disputa 215

Gustavo Guevara

Capítulo 10

El Mendozazo (1972). Un acontecimiento multiforme 241

Patricia Chaves

Capítulo 11

Jornadas de junio y julio de 1975 267

María Celia Cotarelo y Fabián Fernández

Capítulo 12

La huelga de abril de 1979. "Jornada nacional de protesta" 291

Guillermo Caviaasca

Capítulo 13

La huelga docente de 1988. De la huelga de los 43 días
a la Marcha Blanca...

321

Martín Acri

Capítulo 14

Tres insurrecciones. La insurrección espontánea de diciembre de 2001 341

María Celia Cotarelo

Los autores

359

Presentación

Nicolás Iñigo Carrera y Roberto Elisalde

El libro que presentamos recorre un amplio espacio temporal que corresponde en su casi totalidad a un período en la historia de la clase obrera que comienza alrededor de los años treinta y se prolonga hasta mediados de los años setenta del siglo pasado. Al momento de iniciarse este período el movimiento obrero organizado sindical y políticamente tenía ya alrededor de medio siglo de luchas y algunas fracciones obreras habían ganado la suficiente fuerza como para ser protagonistas de las luchas políticas y sociales en Argentina, papel que se multiplicó exponencialmente en el período siguiente. También la huelga se había constituido, en el ámbito nacional, como forma de lucha de la clase obrera: nos referimos a la huelga general y la huelga con movilización.

Diez de los trece trabajos que contiene el libro corresponden al período señalado (1930-1970), signado en Argentina por el desarrollo del capitalismo predominantemente en extensión y, en el campo de las relaciones de fuerza políticas, por una tendencia, por cierto no lineal, a la ciudadanía de los trabajadores y/o a la constitución de

protagonismos políticos que no siempre fueron a la medida de las necesidades y límites impuestos por el sistema. Los cuestionamientos a los regímenes institucionales proscritivos o las estrategias productivistas del capital en clave de subordinación del trabajo (desde las fábricas hasta los espacios formativos) se enfrentaron con picos huelguísticos de alta virulencia que atravesaron la realidad social nacional durante estos años.

Un período en el que la estrategia que se dio la mayoría de la clase obrera tuvo como meta incorporarse al sistema institucional político y jurídico, reformándolo, democratizándolo y defendiendo los espacios conquistados en la lucha. Pero esa lucha, como podrá apreciarse en los capítulos que siguen, se dio frecuentemente por fuera del sistema institucional.

Los tres últimos trabajos corresponden al nuevo período que estamos transitando actualmente, signado por el desarrollo capitalista en profundidad y el dominio del capital financiero, personificado en la oligarquía financiera y caracterizado por la tendencia a la repulsión de amplias masas trabajadoras de los espacios sociales que ocupaban.

Los hechos recogidos en este libro muestran la utilización por parte de los trabajadores de distintos medios de lucha (por ejemplo, ocupación de establecimientos, lucha callejera, cortes de rutas y calles, etcétera) pero todos tienen en común la presencia en ellos de la forma huelga. En sus confrontaciones, sean éstas por reivindicaciones inmediatas libradas contra los capitalistas personificación del capital del que esos obreros son atributo, sea contra las políticas de un gobierno, contra el gobierno mismo o contra el régimen establecido, el proletariado utiliza distintos medios de lucha, desde el robo y el motín hasta la insurrección. Estos medios también pueden ser utilizados por otras fracciones sociales. Pero solo la huelga es propia de la relación capital-trabajo

asalariado, desarrollándose (desde un punto de vista lógico, no necesariamente cronológico) desde la huelga en una unidad productiva hasta la huelga general, pasando por las huelgas por rama o por lugar.

En la huelga general el conjunto de los obreros se enfrenta al conjunto de los capitalistas y al gobierno del estado. Se expresa *potencialmente* en ella la lucha contra la forma de organización social basada en la relación capital-trabajo asalariado, tengan o no conciencia de ello los que la llevan a cabo. Cuando esa lucha alcanza su forma desarrollada toma lo esencial de la política: la organización del poder del Estado; pero entonces la forma que toma supera la huelga general, que pasa a ser la forma auxiliar o subordinada. Esto puede apreciarse en algunos de los hechos analizados en este libro, que, convocados como huelgas generales, se desarrollaron hasta tomar otras formas, como la movilización callejera del 17 de octubre o las Jornadas de junio y julio de 1975, e incluso rasgos insurreccionales, como el Cordobazo / Rosariazo, Mendozazo o diciembre de 2001.

A la vez, como puede apreciarse en otros hechos, la penetración de las luchas de la clase obrera en el sistema institucional jurídico y político tuvo como resultante la creciente institucionalización de formas de organización, como el sindicato, y de lucha, como la huelga. Es por eso que el lugar de una huelga en el proceso de formación de la clase obrera solo puede conocerse en relación con un proceso histórico determinado por el período revolucionario o contrarrevolucionario en que se produjo, incluyendo los momentos ascendentes o descendentes, la forma ofensiva o defensiva y el signo de política positiva o negativa, de la lucha de la clase obrera.

La huelga general se localiza en la lucha política de la clase obrera pero esto nada nos dice sobre qué grado de conciencia de su situación objetiva tienen sus protagonistas.

Si aceptamos que, a grandes rasgos, la situación objetiva de la clase obrera remite a dos situaciones: 1) la de expropiada de sus condiciones materiales de existencia, desposeída históricamente como clase, que solo puede recuperar el dominio sobre las fuerzas productivas sociales alterando de raíz las relaciones de propiedad vigentes; 2) la de conjunto de asalariados/as, que, dadas las actuales condiciones, solo pueden acceder a sus medios de vida por medio del salario, es decir, que necesitan de capitalistas que requieran de su capacidad de trabajo y paguen ese salario; encontramos la base material de dos formas de conciencia: la de *expropiada* que pone en cuestión las relaciones de propiedad y el régimen económico, político y social, y la de *asalariada* que no pretende alterar esas relaciones sino lograr las mejores condiciones dentro del orden social vigente, reformándolo. Como podrá apreciarse en algunos de los capítulos que siguen, ambas formas de conciencia pueden darse entrelazadas (en diferentes proporciones) en un mismo hecho. En otros solo se observa la conciencia de asalariado.

Pero todos los hechos analizados han ocupado un lugar en el proceso de formación de la clase obrera, sea que se presenten como hechos del conjunto o de una fracción.

El otro rasgo que tienen en común los hechos analizados en este libro es su condición de hitos en el proceso de formación de la clase obrera en Argentina, sea a nivel del conjunto de la clase o de una fracción específica. Hechos como el 1 de mayo de 1936, el 17 de octubre de 1945, las huelgas de 1954, el Cordobazo y Rosariazo, las Jornadas de junio y julio de 1975, la huelga de “los 25” de 1979 y la insurrección espontánea de 2001 marcaron experiencias que hacen a la construcción de la clase obrera y a la conciencia, sea como expropiada o como asalariada, de su fuerza. Huelgas como la de enero de 1936, de los choferes de 1936, los metalúrgicos de 1942, 1946/53 y 1956 y la lucha de los docentes en

1987/88 fueron fundamentales para la constitución de fracciones obreras que ocuparon y/o ocupan un lugar central en el movimiento obrero, aunque todas ellas formaron parte de procesos políticos más generales de construcción de fuerza popular como, por ejemplo, los intentos por formar un Frente Popular en los años treinta o la Resistencia Peronista en los años cincuenta.

A la vez, todas ellas constituyeron hechos relevantes para el conjunto de la sociedad argentina, cambiando, en algunos casos, el curso de su historia. Un rasgo común a estos hechos es que, si bien el principal —y en algunos casi exclusivo— protagonismo correspondió a la clase obrera, hubo también participación de otras fracciones sociales.

Los capítulos que componen el libro tienen en común la presentación de una *crónica* o *reconstrucción histórica de los hechos seleccionados*, apuntando a conocer los procesos económicos y políticos en que se desarrollaron, sus principales protagonistas y los debates político-sindicales que los signaron. En los hechos analizados, en procesos históricos de los que forman parte junto con otros para tratar de alcanzar los objetivos de la lucha planteada, se procura investigar procesos de enfrentamientos sociales, reparando e identificando las estrategias (alianzas sociales y políticas, acciones de clase) que se dan los protagonistas en cada uno de los momentos determinados de la historia de la sociedad argentina. En cada texto se analizan en clave de *conceptualizaciones* o *reflexiones finales*, elaboraciones que aspiran a problematizar la complejidad de los procesos históricos de los que forman parte los hitos seleccionados.

Por último, nos resta destacar que los trabajos que integran esta publicación son resultado de investigaciones de largo aliento, en algunos casos reeditadas especialmente para esta publicación desde perspectivas que expresan diversos puntos de vista, bagajes teóricos y concepciones

historiográficas que, en este caso, creemos, enriquecen y aportan a la reconstrucción de los procesos seleccionados.

Agradecemos especialmente a las/os profesoras/es-investigadoras/es participantes de esta compilación: Fabián Fernández, Ernesto Salas, María Isabel Grau, Gustavo Guevara, María Celia Cotarelo, Guillermo Caviasca y Martín Acri. Sin su trabajo esta publicación no hubiera sido posible. Todas/os ellas/os son parte de nuestras universidades públicas (Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario y Universidad Nacional de Cuyo) y, tal como consignan sus referencias, una parte de ellas/os desempeñan tareas en el Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA) y otras/os en la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América Latina (RIOSAL).

Capítulo 1

La huelga general de masas de enero de 1936

Lucha económica / lucha política

Nicolás Iñigo Carrera

El 7 y 8 de enero de 1936 la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores fueron conmovidos por un hecho que el diario *Crítica* comparó en ese momento con la Semana de Enero de 1919 (la mal llamada “Semana Trágica”). La huelga general declarada por el Comité de Solidaridad con los Obreros de la Construcción, en huelga desde octubre del año anterior, incluyó una movilización obrera y popular en la que fueron incendiados, apedreados, volcados o destruidos 81 vehículos de transporte o policiales, hubo pequeñas barricadas con el fin de cortar calles y se produjeron choques callejeros y enfrentamientos armados con la policía, en los que resultaron muertos tres policías y alrededor de diez manifestantes. Durante la mañana del día 7 la policía tuvo que replegarse a las comisarías y gran parte de la ciudad quedó en manos de los manifestantes. Fueron movilizadas tropas del ejército y la marina.

La envergadura y contundencia de este hecho, la fuerza que mostró en la huelga y la lucha callejera de la clase obrera, permiten comprender cómo, pocos meses después, la Confederación General del Trabajo, que no había

llamado a la huelga aunque declaró su solidaridad, pudo convocar a los partidos políticos opositores al gobierno de la Concordancia al acto del 1 de mayo, que reunió cien mil personas en Buenos Aires y abultadas multitudes en todo el país. La fuerza acumulada por la clase obrera permitía a su capa más organizada pretender ponerse a la cabeza de una alianza política opositora que, finalmente, se frustró.

Cómo se fue construyendo esa fuerza en el ámbito de la lucha política de la clase obrera argentina solo será marginalmente tocado en este capítulo. Si bien todo hecho de lucha contiene las tres direcciones —económico-práctica, política y teórica— (Engels 1970) de la lucha de clase de la clase obrera, las contiene en diferentes densidades. La huelga general de enero de 1936 devino política pero surgió de un hecho localizado principalmente en la dirección económico práctica de la lucha de la clase obrera: la huelga de los obreros de la construcción iniciada en octubre de 1935.

La salida de la crisis de 1929

Las condiciones en que se produce la huelga general de 1936 remiten a un doble proceso de crisis: la crisis capitalista mundial iniciada en 1929 y la crisis del sistema político que comienza con el golpe de Estado de septiembre de 1930.

La crisis económica fue relativamente breve en Argentina. Una de sus principales manifestaciones fue el aumento de la desocupación. El censo de desocupados realizado por el Departamento Nacional del Trabajo en 1932 dio un total de 333.997 desocupados en el país (Departamento Nacional del Trabajo, 1939: 5319), equivalente al 2,86% del total de la población (Departamento Nacional del Trabajo, 1933: 20); las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y la Capital Federal daban cuenta de las tres cuartas partes de

la desocupación registrada. Estas cifras fueron cuestionadas por el diputado socialista Francisco Pérez Leirós, quien con datos económicos y demográficos calculó ese porcentaje en 18,76% de la “población trabajadora” (Cámara de Diputados, 1933: 932), por el senador socialista Mario Bravo (Senado de la Nación, 1936: 206-215, 220-268) y por el periódico anarquista *La Protesta* (4-2-1932).¹ 1932 fue el año de mayor desocupación; dos años después, y según el Departamento Nacional del Trabajo, los efectos de la crisis sobre el empleo habían desaparecido, particularmente en ramas como “construcción y materiales” (Departamento Nacional del Trabajo, 1939: 42); sin embargo, hubo manifestaciones, saqueos y destrozos protagonizados por desocupados de la Villa Esperanza (Puerto Nuevo) en 1933 (Iñigo Carrera *et al.*, 2011).

A la vez que la situación económica empeoraba las condiciones en que se desarrollaba la lucha de los obreros, el gobierno encabezado por el general José F. Uriburu, con su política dirigida a aplastar cualquier resistencia, apelando a la aplicación de la Ley Marcial y de la Ley de Residencia, brindaba una oportunidad a los empresarios para recortar salarios, despedir e imponer condiciones de trabajo desfavorables para los trabajadores. Aunque los gobiernos de Uriburu y Agustín P. Justo tuvieron un discurso de respeto a las organizaciones obreras que se mantuvieran dentro de la ley, fueron frecuentes las denuncias sobre “los abusos cometidos por la clase capitalista al amparo” del estado de sitio, además de la delación ante las autoridades de los militantes sindicales.² A la coacción económica propia del capitalismo, agravada por el fuerte incremento de la desocupación, se sumó la fuerza coercitiva de la maquinaria estatal, en un

1 En noviembre de 1933 *La Protesta* hablaba de medio millón de desocupados.

2 Cfr. *Bandera Proletaria*, año IX, núm. 470, 17-9-1930, p. 1. CGT, *Boletín*, año I, núm. 2, 15-2-1932. “Con el levantamiento del estado de sitio resurgen las actividades sindicales”, en CGT, *Boletín*, año I, núm. 3, p. 1, 15-3-1932.

grado aun mayor que el utilizado por el depuesto gobierno de Yrigoyen frente a los trabajadores en huelga.

La persecución desatada por el gobierno de Uriburu aumentó el aislamiento de la clase obrera. Sin embargo, la llegada al gobierno nacional —elecciones fraudulentas mediante— de Agustín P. Justo, así como la restauración del Congreso Nacional, creó mejores condiciones para la lucha obrera. La dirección sindicalista de la CGT, fundada días después del golpe de Estado, mantuvo una fluida relación, no exenta de reclamos, con el gobierno, como lo había hecho con Uriburu.

Inmediatamente después del levantamiento del estado de sitio, dispuesto por el gobierno a comienzos de 1932, hubo un fuerte incremento en el número de huelgas y huelguistas, fundamentalmente por intereses inmediatos, que alcanzó sus momentos más altos en 1932 y 1935/36.

Índice de huelgas, huelguistas y días de huelga (Capital Federal, 1929 = 100)

Año	Huelgas	Huelguistas	Días de huelga
1929	100	100	100
1930	110,62	103,75	153,12
1931	38,05	16,15	11,93
1932	92,92	122,25	284,24
1933	46,02	12,24	9,80
1934	37,17	91,75	162,41
1935	61,06	184,44	578,22
1936	96,46	302,21	294,18
1937	72,57	176,83	113,26
1938	38,94	31,38	50,04
1939	43,37	69,75	52,75

Fuente: Departamento Nacional del Trabajo, Investigaciones sociales, Buenos Aires, 1939, p. 49.

En 1932 los obreros también llevaron a cabo grandes huelgas por rama. La recientemente fundada Unión General de Obreros Petroleros declaró la huelga en Comodoro Rivadavia, de la que participaron no solo los obreros sino también técnicos, ingenieros y baquianos (Gómez, 1973). Los telefónicos pararon durante más de 50 días. Los obreros del calzado estuvieron en conflicto más de 40 días. Los obreros de los frigoríficos pararon durante 15 días (Peter, 1968). También hubo huelgas generales en localidades como Mar del Plata y Morón (Archivo DIPBA, s/f: 66 y 79). En 1934 se destacó la huelga de los obreros del calzado, la del puerto de Buenos Aires y en 1935 la de los obreros de la madera, que se extendió por tres meses.³

Las luchas a las que nos hemos referido, inscritas principalmente en la dirección económica de la lucha de la clase obrera y en las que primaron como meta las reivindicaciones inmediatas, devino en lucha política, principalmente en defensa de las organizaciones sindicales y por la libertad de reunión y asociación, como se observa en el proceso de la huelga de los obreros de la construcción, declarada en octubre de 1935 y que se prolongó hasta enero de 1936.

La huelga de los obreros de la construcción

El 17 de octubre de 1935 se realizó una asamblea general del Sindicato de Albañiles y Anexos, donde se aprobó la declaración de la huelga general a partir del 23 de octubre. 30.000 huelguistas se reunieron en el estadio Luna Park, dando comienzo a la huelga (Chiarante, 1976; Íscaro 1940).

3 En el capítulo *La lucha democrática de la clase obrera* nos vamos a referir a las huelgas generales declaradas por la FOLB-FORA y el CUSC desde 1930, entre las que se destacan la de diciembre de 1932 y agosto de 1933 en Buenos Aires y la de 1935 en Santa Fe, ubicadas en la dirección política de la lucha, en un momento ascendente de la lucha de la clase obrera.

Los albañiles reclamaban mejoras salariales, reconocimiento del sindicato, descanso dominical absoluto, jornada de cuatro horas los sábados, abolición del trabajo a destajo, y responsabilidad empresarial en los accidentes de trabajo con pago de los jornales correspondientes.⁴

Otros gremios de la construcción se fueron plegando a la huelga y, el 9 de noviembre, la Federación de Obreros de la Construcción (FOSC) declaró la huelga general de la rama que, de la ciudad de Buenos Aires y localidades circunvecinas, se extendió a todo el país e incluso a la ciudad de Montevideo.

En apoyo a la huelga se formó un Comité de Defensa y Solidaridad, constituido por alrededor de setenta organizaciones sindicales, de primer y segundo grado, de obreros y otros trabajadores asalariados de la industria y el comercio y algunas organizaciones gremiales de pequeños patrones, todas ellas localizadas en la Capital Federal, y algunas federaciones locales del Gran Buenos Aires y de La Plata. Ese Comité declaró la huelga general de solidaridad para el día 7 de enero de 1936, acompañada de asambleas que a lo largo de la mañana se realizarían primero cerca de los límites de la ciudad, más tarde adentrándose sucesivamente en otros puntos para ir convergiendo a las 16 horas en un acto en la Plaza Once. Algunas de las organizaciones adherentes sumaron a la solidaridad con los obreros de la construcción otras metas: la Federación de Líneas de Autos Colectivos protestó “por la persecución de que se hace objeto al colectivo y contra los intentos monopolistas”, la Federación Obrera del Vestido lo hizo en defensa de las leyes 11.729 y 10.505 y el Sindicato Único de Obreros de la Madera por el retorno al país de un deportado y la libertad de todos los presos sociales.

4 Uno de los desencadenantes de esta huelga fue un accidente en una obra en construcción en el que hubo varias víctimas entre los obreros.

La Mesa Directiva Provisoria de la CGT-Independencia 2880⁵ declaró el día 6 su solidaridad con la huelga general, pero considerando imposible dar un apoyo más efectivo por falta de tiempo, y anunciando que, de continuar la intransigencia patronal, adheriría a la huelga, incluyendo ferroviarios y tranviarios. La CGT-Catamarca 577 declaró su solidaridad, pero no adhirió, invocando su estatuto. La FORA, enfrentada al Sindicato Obrero de la Construcción (SOC) y a la FOSC, emitió una declaración en contra del paro.

En la organización del Comité de Defensa y Solidaridad y en la organización de las asambleas y actos programados para el día 7 también participaron el partido Comunista y los anarquistas Alianza Obrera Spartacus y la Federación Anarco Comunista Argentina (FACA). La dirección del Partido Socialista apoyó la huelga de los obreros de la construcción facilitando sus locales para reuniones y comedores y apoyó la huelga general de solidaridad, pero sin participar activamente en su organización y rechazó, más tarde, los incendios de vehículos y enfrentamientos armados con la policía; sí participó el ala izquierda de ese partido, que después se escindió formando el Partido Socialista Obrero (Marianetti, 1970: 112).

La huelga general se hizo efectiva en la Capital Federal y localidades vecinas, como Ciudadela y Quilmes, donde la paralización de actividades fue total; y en San Martín y Berazategui donde, además del paro total, se produjeron enfrentamientos con la policía y detenidos; en Avellaneda el paro fue parcial. La huelga general no tuvo repercusión en las provincias; no hubo huelga en Córdoba ni en Rosario,

5 En el proceso de ascenso de la lucha obrera, la dirección sindicalista de la CGT fue desplazada en diciembre de 1935 por una dirección más afín con los socialistas a la que sumaron más tarde los comunistas. La nueva conducción asentada en la sede de la Unión Ferroviaria adoptó el nombre de CGT Independencia 2880, mientras que los sindicatos que apoyaron a la antigua dirección se llamaron CGT Catamarca 577.

donde en cambio sí se cumplía la huelga de los obreros de la construcción. Sin embargo, el hecho tuvo alcance nacional en tanto afectó a la sociedad del conjunto del país.

La huelga general con movilización⁶

El Comité de Solidaridad convocó a comenzar la huelga a las 6 de la mañana y a movilizarse a los actos programados en distintos puntos a las 9, a las 10 y las 11, avanzando desde la periferia de la ciudad hacia el centro para confluir a las 16 horas en la plaza Once en un acto central.

El gobierno, por su parte, preparó su fuerza armada: desde la noche anterior la policía mantuvo retenes de caballería e infantería en el Departamento Central de Policía y “medidas de prevención” en las comisarías. La vigilancia fue especialmente importante en los barrios netamente obreros, como la Boca y Barracas. Se estableció un servicio especial de vigilancia en la cárcel de Villa Devoto, donde se encontraban presos políticos y sociales. Fueron acuarteladas tropas de ejército y la marina. Y a las 6 de la mañana comenzó el patrullaje de la ciudad por brigadas policiales. Un poco más tarde, alrededor de las 8:30 agentes de Orden Social clausuraron los locales del Comité Pro Defensa y Solidaridad (Belgrano 1853) y, poco más tarde, la Federación de Sindicatos de la Construcción y el Sindicato de Obreros Albañiles y Anexos (San Juan 2874) y el Comedor para Obreros Albañiles en Huelga (San Juan y Pasco) tomaron muchos detenidos, entre ellos los dirigentes Molesini, Pierrucione, Cruz y al secretario general del Comité de Solidaridad,

6 La información fue recogida de los diarios *Crítica*, *La Prensa*, *La República* y *La Vanguardia* y, en menor medida, de *La Nación*. También en entrevistas a dirigentes y militantes políticos y sociales del período y escritos de algunos participantes como Domingo Varone y Pedro Chiarante.

Mateo Fossa. En el mismo sentido actuó la Sección Especial Contra el Comunismo.

A las 5 ó 6 de la mañana los conductores de los colectivos y autos colectivos interrumpieron su actividad. La mayor parte del personal del tranvía Lacroze no se presentó a trabajar a pesar de que el sindicato que los agrupaba no adhirió al paro, pero circulaban ómnibus, tranvías y trenes.

Adherentes a la huelga, muchos llegados desde localidades de la provincia, comenzaron a concentrarse en el norte, noroeste y oeste de la Capital. Al mismo tiempo, piquetes de huelguistas comenzaron a recorrer talleres, fábricas y comercios ubicados en los barrios más alejados invitando a cerrar los negocios y a los medios de transporte a parar. A las 8, numerosos grupos de manifestantes recorrían la ciudad, salvo el centro, y atacaban a los transportes, tanto de pasajeros (especialmente los tranvías de la empresa Anglo) como de carga (carros, chatas, etcétera).

Los manifestantes enfrentaron a la policía en Villa Devoto y Parque Chacabuco; en Villa Urquiza y Villa Pueyrredón, piquetes de entre 200 y 500 huelguistas se concentraron alrededor de dos establecimientos industriales, y fueron dispersados por la policía, que tomó varios presos. Poco después, intentos policiales de dispersar a grupos formados por decenas de manifestantes dieron lugar a tiroteos cerca de la estación Villa Urquiza (dos policías y un manifestante muertos), La Paternal (dos manifestantes heridos), Villa del Parque (un manifestante herido y apresado) y nuevamente en Villa Urquiza (un policía muerto). En otros lugares de la ciudad, como Villa Crespo y Liniers, miles de personas intentaban realizar las asambleas convocadas (muchos manifestantes heridos).

Piquetes impidieron la circulación de los trenes del ferrocarril Lacroze, dañando las vías, incendiando dos vagones e intimando al personal a plegarse a la huelga. La empresa

Ferrocarril Central Terminal Buenos Aires suspendió los servicios, lo mismo que el tranvía de la empresa Anglo Argentina en Villa del Parque, Villa Devoto, Chacarita, Villa Mitre hasta Villa Urquiza. A las 10 dejaron de circular los trenes del Ferrocarril al Pacífico, a los que previamente miles de manifestantes habían apedreado y tiroteado, porque fueron levantadas las vías entre Villa del Parque y Villa Devoto. Y se produjeron ataques a varias estaciones ferroviarias. También suspendió sus servicios la empresa La Alianza. En todos los barrios, y particularmente en los nombrados, “muchachos, mujeres, chicos, hombres” (*La Prensa*, 8-1-1936) apedrearón e incendiaron ómnibus, tranvías, transportes de mercaderías e instalaciones ferroviarias.

Los diarios porteños describen:

Más allá de Pueyrredón, la atmósfera era de inquietud, de nerviosismo y de expectativa. La gente se había echado a las calles y esperaban nerviosamente la producción de acontecimientos [...]. Los negocios habían bajado, casi sin excepción, sus cortinas metálicas y la circulación se limitaba a algún automóvil periódico a la caza de sucesos y a los vehículos policiales cuya impresionante sirena disolvía grupos y precipitaba corridas. Grupos compactos, numerosísimos, llenaban las calles de las barriadas populares. Las casas de los inquilinatos, donde se hacían inverosímiles cantidades de personas, habían volcado su contenido en las arterias. Las veredas y las calzadas estaban totalmente atestadas de gente. Hombres, mujeres y niños las colmaban... (*Crítica*, 7-1-1936)

Durante buen espacio de tiempo los revoltosos fueron dueños de la situación y cometieron cuantos atentados les vino en gana [...]. Cuando la policía sa-

lió al encuentro de los autores de la revuelta éstos la enfrentaron decididamente dando muerte a tres representantes de la institución guardadora del orden e hiriendo a varios otros. (*La Prensa*, 8-1-1936: 10)

Cuando un vehículo de transporte de pasajeros —tranvía u ómnibus—, se avizoraba en el horizonte de la calle, la muchedumbre de la barriada se arremolinaba dispuesta a la acción. Se lo detenía, se invitaba a los pasajeros, cortés pero categóricamente a descender, se hacía lo mismo con los conductores y luego de alzar cuidadosamente los vidrios se los destruía a certeras pedradas. Consumada esta primera parte de la obra, si era un ómnibus se lo tumbaba a esfuerzo colectivo de brazos y luego se lo incendiaba. Si se trataba de un tranvía la imposibilidad de volcarlo hacía que se lo incendiase, después de una metódica destrucción de todo su interior. (*Crítica*, 7-1-1936: 1)

Quedaron así aislados los barrios de Chacarita, Villa del Parque, Villa Urquiza, Villa Mitre, Paternal y parte de Flores. No circularon los trenes ni medios de transporte de pasajeros o de carga. La policía, desbordada, comenzó a retirarse de las calles y se atrincheró en las comisarías. Desde las 9 de la mañana aproximadamente y hasta el mediodía, los barrios del norte, noroeste y oeste de la ciudad quedaron en manos de las masas movilizadas.

Hacia el mediodía comenzó el contraataque. Civiles armados que se desplazaban en automóviles atacaron a balazos a los manifestantes reunidos en las calles. Mientras el presidente de la Nación interrumpía sus vacaciones, el ministro de Guerra, Gral. Basilio B. Pertiné, ordenaba a un batallón de la Dirección de Arsenales hacerse cargo de la custodia del Departamento Central de Policía, bajo el

mando del Teniente Coronel Filomeno Velazco, que había sido jefe de la Guardia de Seguridad durante el gobierno del general Urriburu y gozaba de gran popularidad en la policía, mientras se ordenaba abandonar el lugar a todo el personal femenino. A las 13, camiones blindados de la policía de la municipalidad y cedidos por bancos privados se ubicaron frente al Departamento Central, ocupados por agentes con armas largas. Guardias armados vigilaban el Banco de la Nación y fuerzas especiales de la policía reforzaron la guardia en las agencias de Villa Urquiza y Mataderos, de donde además se retiraron los fondos, en prevención de ataques, lo mismo que en los bancos privados de la zona. La policía de la provincia de Buenos Aires reforzó sus efectivos en el partido de San Martín y tomó medidas en otros distritos vecinos. Fuerzas del Escuadrón de Seguridad y agentes ciclistas y motociclistas comenzaron a patrullar las calles de Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Urquiza.

La Jefatura de la Policía de la Capital declaró que, a partir de las 15, el movimiento había quedado “dominado”. Sin embargo, hacia las 16 una columna de alrededor de 300 manifestantes a la que se fueron sumando grupos reunidos en las esquinas sin que la policía pudiera impedirlo, avanzó por la Avda. Sáenz hasta que chocaron con un cordón policial en Sáenz y Cnel. Roca (Nueva Pompeya) produciéndose un tiroteo de cuarenta disparos; la policía tomó treinta presos y quedaron dos heridos graves, uno de los cuales murió. A la misma hora, en Pueyrredón y Valentín Gómez, a dos cuadras de la Plaza Once, un grupo de manifestantes resistió un ataque con gases y quedó herido un policía.

Las acciones fueron disminuyendo y, avanzada la tarde, solo en algunos barrios hubo concentraciones en las esquinas, que se dispersaban o avanzaban en distintas

direcciones cuando llegaba la policía. Hubo muchas detenciones realizadas por brigadas policiales que salían de todas las comisarías. Al finalizar el día había varios centenares de presos;⁷ sin embargo, y a pesar de la acción de la fuerza armada del gobierno, no circulaban vehículos de numerosas líneas de ómnibus y tranvías y otras redujeron su recorrido habitual.

En esas circunstancias, los miembros del Comité de Defensa y Solidaridad que permanecían libres declararon la continuidad de la huelga general por 24 horas más, reclamando la libertad de los presos. Pidieron la adhesión de la CGT que respondió que no podía hacerlo sin consultar a las organizaciones miembro, pero ofreció su gestión por la libertad de los presos, la reapertura de los locales y su mediación en la huelga de la construcción.

8 de enero. La huelga por la libertad de los presos

Durante la noche la policía patrulló las circunscripciones donde la huelga general de masas había tenido mayor intensidad: Flores, Villa Devoto, Vélez Sarsfield, Villa Urquiza y Saavedra. Al comenzar el día la huelga seguía con toda intensidad y el comercio minorista en los barrios permanecía cerrado. Al mediodía se agotaron las mercaderías de los puesteros de verduras y carniceros.

Desde las primeras horas comenzaron los enfrentamientos con la policía, que armada con carabinas, pistolas de gases y ametralladoras, patrullaba permanentemente las calles en camiones blindados. Lo mismo hacían agentes de investigaciones, vestidos de civil. Antes de las 8 de la

7 Las cifras varían según las fuentes: según La Prensa son alrededor de 400; según La Vanguardia, "varios centenares"; según Crítica, 3.000.

mañana, una columna de 300 manifestantes intentó entrar a la Capital Federal desde Vicente López, por la avenida Cabildo, y fue dispersada por la policía, retirándose hacia la provincia, para repetir el intento media hora después. En distintos puntos de la ciudad (Mataderos, Parque Avellaneda, Floresta, Villa Devoto, Villa Real, Villa del Parque, Monte Castro, Villa Mitre, Saavedra, Villa Urquiza y Belgrano; también en localidades ferroviarias como Santos Lugares y Ciudadela) hubo apedreos de vehículos de transporte y corridas, y nuevos intentos de formar columnas, que fueron rápidamente anulados por la policía, en medio de corridas y toma de presos. Hubo choques callejeros entre manifestantes y policías en el barrio de Mataderos; en un área de alrededor de 200 manzanas, que abarca partes de los barrios de Villa del Parque, Villa Mitre y Paternal, centenares de personas se mantuvieron en la calle, a pesar del patrullaje policial.

La vigilancia policial y de la guardia de la empresa Ferrocarril al Pacífico tampoco pudo impedir que destacamentos formados por cien a doscientos obreros obstruyeran el funcionamiento de los trenes aflojando bulones, destruyendo un cambio, un semáforo y otros elementos, y colocando objetos y ómnibus incendiados en las vías; fueron cancelados dieciocho trenes. Los maquinistas del Ferrocarril del Oeste se negaron a prestar servicios aduciendo haber sido amenazados.

Finalmente, con la ciudad ocupada por la policía, con agentes armados con máuser apostados en lugares determinados y un patrullaje realizado por brigadas que totalizaban más de 1.500 agentes, y ante las formales promesas de reapertura de los locales y libertad de los presos, el Comité de Defensa y Solidaridad dio por finalizada la huelga general a las 18 horas. Las tropas del ejército y de la armada que custodiaban el Departamento Central de Policía, los depósitos

de aguas corrientes, las usinas, etcétera, comenzaron a retornar a sus guarniciones donde quedaron acuarteladas.

Sin embargo, en la Capital, continuaron por unas horas las dificultades para que circularan los trenes. Y en las primeras horas del día 9 hubo piquetes en el puerto y en una fábrica, en la localidad de San Isidro.

Conceptualización del hecho

La descripción permite precisar quién es el sujeto de la huelga general de enero de 1936, conceptualizar el hecho y localizarlo con relación a la dirección predominante de la lucha de clase de la clase obrera, a las estrategias de esa clase social y a su proceso de formación en Argentina.

Un hecho que tiene su antecedente en una lucha económica-profesional de los obreros de la construcción pero del que se distingue constituyendo un hecho diferente: no puede reducirse a un momento de la “gran huelga de los obreros de la construcción”. La declaración de la huelga de solidaridad y la intervención del gobierno lo constituyen en un hecho predominantemente político en el que las masas movilizadas enfrentaron no solo al capital sino al gobierno y, potencialmente, al Estado.

En la huelga general y en la lucha callejera participaron no solo los obreros organizados en sindicatos. Más de las tres cuartas partes de las acciones individualizables que hemos registrado en la mañana del día 7 fueron atribuidas por las fuentes periodísticas a “muchachos”, “mujeres” y “personas favorables a la huelga”; solo una quinta parte a “obreros”. Participaron mujeres y niños, es decir, la familia obrera, pero también trabajadoras a domicilio y obreras de fábrica. También jóvenes, “mozalbetes que no hacen nada provechoso” (*La Razón*, 7-1-1936), que pertenecían a las capas

pauperizadas del proletariado.⁸ Y hubo una cierta “división del trabajo”: los obreros protagonizaron las marchas, los piquetes, los enfrentamientos armados con la policía y la destrucción de vías del ferrocarril; los “jóvenes”, las mujeres y los niños realizaron la gran mayoría de los apedreos, vuelcos e incendios de los vehículos de transporte. Es notable la ausencia de fracciones sociales no proletarias en las acciones callejeras y en las declaraciones solidarias con la huelga.⁹

El hecho se produce totalmente por fuera del sistema institucional, y, en buena medida, es llevado adelante por las fracciones y capas menos institucionalizadas del proletariado. Superando las relaciones sociales que tienden a la fractura de la clase obrera (por fracciones según inserción en la actividad productiva, origen étnico, género, edad) y que cristalizan en el sistema institucional lo que se impone en el hecho es una tendencia a la unidad de la clase obrera. Esa ruptura de las relaciones corporativas otorga a la huelga general de enero de 1936 el carácter de hecho de masas. Encontramos reunidos en un mismo espacio de tiempo y lugar los distintos medios y formas de lucha que venía desarrollando la clase obrera (la huelga general, las manifestaciones, los piquetes para garantizar el cumplimiento de la huelga, la lucha callejera, el enfrentamiento armado con la policía), a la vez que se manifestó la disposición a la lucha en las movilizaciones y choques callejeros y enfrentamientos

8 Información recogida en entrevistas.

9 Hubo apoyo de los dueños de colectivos (afectados por la creación de la Corporación del Transporte), pero no encontramos referencia alguna a la participación del movimiento estudiantil en las acciones callejeras: la Federación Universitaria Argentina (FUA) no hizo ninguna declaración aunque sí participaron militantes de organizaciones políticas, que eran estudiantes, pero no en tanto tales. Por el contrario, el conflicto protagonizado por las Juntas de Defensa de la Producción en el Chaco en ese mismo momento, por poner un ejemplo, recibió la solidaridad de organizaciones empresarias, vecinales y estudiantiles de todo el país.

armados con la policía que dejaron a los manifestantes dueños de la situación en buena parte de la ciudad.

Concentración en tiempo y espacio y disposición a la lucha nos permiten caracterizar al hecho como un combate social, el encuentro de capas y fracciones proletarias frente a la fuerza armada del gobierno, lo que localiza al hecho en la dirección política de la lucha. Estos rasgos nos permiten conceptualizarlo como hecho de masas y plantear que lo que comenzó como huelga general con movilización se constituyó en huelga general de masas y, por ende, política.

A la vez, la ausencia de otras fracciones sociales en la convocatoria a la huelga general y en las acciones callejeras es un indicador de cuál es el carácter del hecho desarrollado el 7 y 8 de enero de 1936. La lucha de clase de la clase obrera tiende a presentarse en dos manifestaciones, una *democrática* —en la que aliada con otras fracciones sociales intenta democratizar el régimen político y social— y otra *social* —en la que, sin la alianza de otras fracciones sociales, se enfrenta al capital—. El hecho del 7 y 8 de enero se inscribe dentro de esta última. Esta característica coloca al hecho investigado en una escala diferente a otros, significativos para el análisis del período pero que se localizan dentro de la lucha democrática de la clase obrera, como es la huelga general y manifestación del 1 de mayo de 1936 y el 17 de octubre de 1945.¹⁰

Finalmente, en el relato se hace observable la tendencia que caracteriza no solo al hecho que estamos investigando sino a toda la historia de la clase obrera argentina desde comienzos del siglo XX: sus luchas tienden a tomar la forma de luchas de masas callejeras, enfrentándose a alguna fuerza armada del aparato estatal; toman una forma insurreccional.

10 Nos ocuparemos de esos hechos en el capítulo correspondiente al 17 de octubre de 1945.

Localización del hecho

Se hace observable —aun en un período en el que, sobre todo hacia su final, existió una tendencia a la institucionalización de crecientes fracciones y capas sociales (entre ellas fracciones y capas de la clase obrera)— la existencia de luchas de masas que se dieron por fuera del sistema institucional. La drasticidad y extensión de la lucha callejera, tanto en este hecho como en otros de la década, refuta la afirmación de que se trató de un período caracterizado por la conciliación de clases y la ausencia de luchas. Pero el que en determinados hechos se hiciera presente una estrategia de confrontación con el sistema institucional no invalida que la mayoría de la clase obrera organizada sindical y políticamente se planteara como meta formar parte de ese sistema y no superarlo. Esto puede observarse incluso en la huelga del 7 y 8 de enero: si bien en el momento de la lucha callejera, la lucha de la clase obrera se colocó por fuera del sistema institucional, la disciplinada y unánime finalización de la huelga, siguiendo las directivas del Comité de Solidaridad, donde predominaban quienes apuntaban a incorporarse al sistema, muestra que esta última era la estrategia predominante. A diferencia de lo ocurrido en la Semana de Enero de 1919, cuando el levantamiento de la huelga general por la FORA IX, fue ignorado por una buena parte de la clase obrera, que asumió la continuidad de la lucha callejera impulsada por la FORA V, en enero de 1936 la protesta de la Federación Anarco Comunista Argentina (FACA) y del Comité Regional de Relaciones Anarquistas (CRRRA) por la finalización de la huelga general no consiguió convocar a los trabajadores. En la huelga del 7 y 8 de enero se hicieron presentes las dos estrategias existentes en la clase obrera, y la que tenía como meta penetrar el sistema institucional,

reformándolo pero sin superarlo, resultó la seguida por los trabajadores.¹¹

¿Qué lugar ocupa la huelga general de masas del 7 y 8 de enero dentro de la historia de la clase obrera argentina? ¿Por qué constituye un hito en esa historia?

Con este hecho la clase obrera se hace presente en el escenario político, enfrentándose al gobierno, y al intervenir en el escenario político crea las condiciones para postularse como dirigente de la alianza política que comienza a gestarse en esos momentos y emerge pocos meses después, el 1 de mayo de 1936. No es que antes de esta huelga la clase obrera estuviera ausente, pero su contundencia y extensión, que la convierten en la huelga general más importante de la década de 1930 y comienzos de la siguiente, constituyen una demostración de fuerza y crea las condiciones para convertir a la fracción más institucionalizada en convocante de una alianza social popular.

Es este aspecto el que queda velado cuando se considera a esta huelga no en su especificidad sino como un momento de la huelga de los obreros de la construcción.

Bibliografía

Archivo DIPBA (s/f). *Anarquistas*, pp. 66 y 79.

Cámara de Diputados (1933). *Diario de Sesiones*, tomo II, p. 932.

Chiarante, P. (1976). *Memorias*. Buenos Aires, Fundamentos.

Departamento Nacional del Trabajo (1933). *La desocupación en la Argentina. 1932*, p. 20.

11 El desarrollo de las dos estrategias puede verse en Iñigo Carrera (2012 y 2016).

Departamento Nacional del Trabajo (1939). *Boletín Informativo*, núm. 220-221-222, época VII, p. 5319. Buenos Aires.

Departamento Nacional del Trabajo (1939). *Investigaciones Sociales*, p. 42. Buenos Aires.

Engels, F. (1970). *Las guerras campesinas en Alemania*. Buenos Aires, Andes.

Gómez, R. (1973). *La gran huelga petrolera de Comodoro Rivadavia (1931-32). En el recuerdo del militante obrero y comunista Rufino Gómez*. Buenos Aires, Centro de Estudios.

Iñigo Carrera, N. (2012). *La estrategia de la clase obrera. 1936*. Buenos Aires, Imago Mundi.

Iñigo Carrera, N. (2016). *La otra estrategia. La voluntad revolucionaria 1930-1935*. Buenos Aires, Imago Mundi.

Iñigo Carrera, N. (dir.) et al. (2011). *Sindicatos y desocupados. 1930/1935 - 1994/2004. Cinco estudios de caso*. Vicente López, Dialektik - Pimsa.

Íscar, R. (1940). *Breve historia de la lucha, organización y unidad de los trabajadores de la construcción*. Buenos Aires, s/e.

Marianetti, B. (1970). *Las luchas sociales en Mendoza*, Mendoza, Ediciones Cuyo, p. 112

Peter, J. (1968). *Crónicas proletarias*. Buenos Aires, Esfera.

Senado de la Nación (1936). *Diarios de Sesiones 1936*, tomo III, pp. 206-215 y 220-268.

Fuentes periodísticas

Crítica

La Prensa

La República

La Vanguardia

La Nación

La Razón

Bandera Proletaria, año IX, núm. 470, 17-9-1930.

CGT, *Boletín*, Año I, núm. 2, 15-2-1932.

CGT, *Boletín*, Año I, núm. 3, 15-3-1932.

La Protesta, 4-2-1932.

Entrevistas a dirigentes y militantes políticos y sociales de la época.

Capítulo 2

La huelga de los colectiveros de septiembre de 1936

Joaquín Calvagno

Antecedentes

Introducidos en 1928, los autos colectivos se consolidaron como el medio de transporte de pasajeros predominante en la ciudad de Buenos Aires. Los colectiveros trabajaban en sus propios coches junto con sus peones y administraban sus propias líneas. La reglamentación de los servicios y la influencia del socialismo en el Concejo Deliberante propiciaron de la creación, en 1933, de la Federación de Líneas de Autos Colectivos. La Federación, cuyos dirigentes pertenecían a la izquierda socialista, reunía a casi todas las líneas locales y las representaba ante las autoridades. La Unión Chauffeurs, un baluarte de la Federación Obrera Regional Anarquista (FORA), otrora muy influyente en el gremio automotor, se encontraba debilitada por la represión de los gobiernos conservadores de la primera mitad de los años treinta. Tras la crisis de la Unión Chauffeurs, colectiveros anarquistas opuestos a la estrategia de la directiva socialista de la Federación iniciaron una disidencia interna desde la revista *El Colectivo*.

En marzo de 1934 se elevó al parlamento nacional, donde el oficialismo tenía mayoría en ambas cámaras, un proyecto de ley que contemplaba la creación de la Corporación de Transporte de Buenos Aires, un *holding* al que se integrarían compulsivamente todos los transportes, incluyendo los colectivos (García Heras, 1994: 132). La Federación de Líneas dio inicio a una campaña para difundir los problemas que este “monopolio” causaría a la población capitalina. Entre 1934 y 1936 activistas socialistas y de la Federación organizaron cientos de conferencias públicas en distintos barrios de la capital a través de los Comités Populares Contra el Monopolio del Transporte. “[D]ejando a un lado intereses partidarios” y de clase, interpelaban a “la población trabajadora, obreros, estudiantes, empleados, industriales, etc.” (*La Vanguardia*, 25 de octubre de 1934: 4).¹ Además de las entidades defensoras del automotor —Touring Club, Automóvil Club Argentino— y los sectores empresarios de la industria —que conformaron una Comisión Nacional de Defensa del Transporte Automotor e Industrias Afines—, los colectivos apelaron a las sociedades vecinales, los sindicatos obreros y a la movilización popular. La lucha contra el “monopolio” se desplegó en fases de movilizaciones y huelgas, que alcanzaron alta conflictividad al coincidir con los picos de lucha obrera o política.

En oposición al proyecto de coordinación, la Federación impulsó paros sectoriales en septiembre de 1934 y enero de 1935 entre colectivos, talleres de carrocerías y comercios afines e impulsó un movimiento de alcance nacional entre organizaciones similares del interior, gestando un Congreso Nacional de Transporte Automotor e Industrias

1 Este era un procedimiento típico de la apelación socialista: reclamar la representación de un sujeto plural que encontraba su unidad en los intereses generales de la ciudad y la nación, contrapuestos a los de una empresa extranjera (Privitelio, 2003: 88-89).

Afines. En 1934 se pronunciaron contra el “monopolio” sindicatos bajo la influencia de socialistas —textiles, gráficos y comercio— pero también *sindicalistas revolucionarios* —marítimos,² telefónicos, portuarios—. La CGT se dividía entre algunos sindicatos dirigidos por socialistas, que estaban en contra del proyecto de coordinación, y la mayoría de ferroviarios, maquinistas y tranviarios, que por motivaciones corporativas estaban a favor del mismo,³ junto con dirigentes confederales que rechazaban involucrarse en cuestiones políticamente sensibles. Los comunistas no atendieron al asunto, con excepción del sindicato de la madera, que en el invierno de 1934 protagonizó una importante huelga con el apoyo de la Federación de Líneas. Pero en 1935, el comunismo inició un cambio estratégico y, coincidiendo en la cuestión del imperialismo y del frente único, colaboró con la izquierda socialista en las luchas de los colectiveros a través del Comité Popular Mixto Contra el Monopolio, de la Liga Antiimperialista y de sindicatos como madera y vestido (Herrera, 2006: 135). Las diversas tendencias en que estaba dividido el movimiento libertario mantenían con respecto a la Federación de Líneas y a la cuestión del monopolio del transporte, posiciones que iban desde el distanciamiento (caso del Comité Regional de Relaciones

-
- 2 ¿Por qué los *sindicalistas revolucionarios* de la Federación Obrera Marítima apoyaron a los colectiveros? Primero, se sospechaba que la coordinación respaldaría a los ferrocarriles en desmedro de los transportes automotor y fluvial. Segundo, las organizaciones marítimas y portuarias mantenían antiguos vínculos solidarios con los sindicatos del transporte terrestre. Tercero, la Federación Obrera Marítima sostenía un largo conflicto con la empresa de Navegación Mihanovich, que controlaba casi todo el tráfico fluvial y parte del marítimo, y tenía una importante participación de capitales británicos. Parafraseando al secretario de los marítimos: ellos sabían bien lo que era un monopolio.
 - 3 En particular, la Unión Tranviarios tenía grandes diferencias estratégicas y organizativas con la Federación de Líneas, con la que disputaba la representación de la rama del transporte urbano de pasajeros.

Anarquistas) hasta un apoyo más decidido (Spartacus),⁴ pasando por otras intermedias (como la FORA, a la que pertenecía la Unión Chauffeurs, que se proclamaba a favor de las empresas del automotor). Pero, en los hechos, los libertarios brindaron un apoyo que, aunque minoritario, fue vital a la hora de la movilización.

El primer antecedente inmediato de la huelga de los colectiveros de 1936 fue el movimiento de protesta en contra de la sanción de la ley de coordinación del transporte, ocurrido en septiembre de 1935. Éste comenzó en la Capital Federal y sus alrededores pero evolucionó en un movimiento de alcance nacional que afectó a varios centros urbanos y confluyó con el movimiento de protesta y la huelga general contra la intervención federal en Santa Fe, con un importante movimiento huelguístico en Córdoba, con un incremento de la tensión política en la provincia de Buenos Aires —donde frente al retorno de los radicales al juego electoral, los conservadores apostaban a retener el poder recurriendo otra vez a la aplicación sistemática del fraude— y con una huelga estudiantil que expresó su solidaridad con los obreros del transporte. Estas distintas situaciones provocaron una severa perturbación político-social y, según algunos observadores, estuvieron cerca de cuajar en una huelga de masas de alcance nacional. Los colectiveros tuvieron el apoyo solidario de socialistas —viajantes, empleados de comercio— y comunistas —madereros, vestido, construcción, metalúrgicos—, marítimos (*sindicalistas*) y cartoneiros (penelonistas), portuarios y obreros del automotor de Spartacus y la FORA. A este arco de fuerzas netamente

4 La Alianza Obrera Spartacus pretendía alejarse del sectarismo e ir a la unidad junto con tendencias ajenas al anarquismo, concediendo importancia a los problemas políticos del momento, tales como la lucha contra el monopolio del transporte. Spartacus procuró organizar a los personales del automotor, incluyendo a los lavadores y del ómnibus, y, pese al corto número de activistas, sus acciones influyeron en las luchas obreras de 1935 y 1936 (Benyo, 2005: 31-32 y 39-46).

obreras, se agregaron diversas entidades representativas del comercio y de la industria automotor. No participaron de la huelga los sindicatos de la industria ni los ferroviarios y tranviarios afiliados a la CGT, que omitió cualquier información al respecto. Los servicios de tranvías funcionaron con normalidad y los ómnibus solo interrumpieron la circulación el día 30 de septiembre en forma parcial. Aun así, la huelga de 1935 introdujo dificultades en el transporte de pasajeros, especialmente en los barrios alejados, y produjo algo del impacto psicológico de una huelga en el transporte.

La Federación de Líneas —que acrecentó sus vinculaciones con sindicatos comunistas y socialistas—⁵ tendría una nueva oportunidad de demostrar su solidaridad en los conflictos obreros en ocasión de la huelga de la construcción del verano de 1935/1936, que constituye el segundo antecedente inmediato de la huelga de los colectiveros de 1936. La huelga de la construcción paralizó la industria durante tres meses, comprendió a 60.000 trabajadores, se extendió prácticamente a todo el país y desembocó en la huelga general más importante desde 1919, que tuvo un impacto formidable sobre los sectores dirigentes y patronales. La Federación de Líneas adhirió al Comité de Defensa y Solidaridad de la Construcción y a la huelga solidaria por veinticuatro horas del 7 de enero de 1936, además de protestar por la persecución de los colectiveros y contra la sanción de las leyes de coordinación. Los colectiveros contribuyeron con aportes monetarios, concedieron pases libres a los huelguistas y dispusieron coches para transportar a sus hijos hasta el campo de deportes de los municipales (Iñigo Carrera, 2004: 129-131 y 136; D'Antonio, 2000: 256). El paro de colectivos fue total desde el principio del día 7

5 Integraban este Frente Obrero madereros, gráficos, cortadores de confecciones, metalúrgicos, la Agrupación Local de Trabajadores del Ómnibus, textiles, peluqueros y biseladores.

y dio a la huelga mayor efectividad, pues solo circularon tranvías y algunos ómnibus. Los colectiveros “dirigieron las operaciones de sabotaje y de incendio contra los vehículos y los trenes no adheridos [...] al paro” (*Bandera Argentina*, 8 de enero de 1936), en especial contra los bienes de la Anglo (Iñigo Carrera, 2004: 184). Desconociendo lo decidido por la Federación de Líneas (que, al margen del Comité de Defensa y Solidaridad, había declarado la vuelta al trabajo), los colectiveros continuaron la huelga durante el 8 de enero, pues entendían que aquel acto de solidaridad les sería “pagado luego con la misma moneda” (*El Colectivo*, enero de 1936). Como era usual, la intendencia emplazó a los colectiveros a reanudar los servicios bajo amenaza de retirar los permisos de circulación e incautar los vehículos. Aunque estas medidas no fueron aplicadas, la municipalidad mantuvo su vigencia, avisó a los colectiveros que las aplicaría en situaciones similares y, como represalia y amedrentamiento, procedió a aplicar multas arbitrarias y a secuestrar los coches durante días por cualquier infracción.

Al comenzar el año 1936, el alza de la conflictividad obrera y el sacudimiento que produjo la división de la CGT se acompañó del desafío que supuso la reincorporación del radicalismo y la tentativa de articulación de una alianza opositora. El Concejo Deliberante no servía ya a los colectiveros como instrumento de lucha y se limitaba a estériles declaraciones de protesta por la enajenación de las atribuciones del cuerpo deliberativo y de la autoridad municipal sobre los asuntos del transporte a manos del parlamento nacional (Walter, 1993: 185, 187 y 189-190). Pero bajo un fantasmal Frente Popular, desde mayo de 1936, radicales y socialistas se unieron para resistir el ingreso de los diputados oficialistas elegidos por el fraude, dificultando los trámites parlamentarios. Era probable que el Senado, donde el oficialismo conservaba una mayoría abrumadora, aprobara

la ley, pero el Frente Popular abría a los dirigentes de la Federación la posibilidad de una negociación en su tratamiento o una posible postergación de éste; inclusive, un eventual triunfo de una alianza opositora en las elecciones presidenciales de 1937 podría evitar la aplicación de la ley. Al tiempo, la Federación se preparaba para el conflicto incrementando sus vinculaciones con los sindicatos comunistas, como construcción y madereros, ahora junto con la CGT, que coincidieron en un acto por las libertades obreras y la unidad sindical y contra el “monopolio” de los transportes. En lo que habría de ser un *momentum* en la tentativa de conformar el Frente Popular, la CGT conmemoró el 1 de mayo de 1936 junto con la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Progresista —que había perdido su baluarte santafesino en manos de la intervención nacional— y la Federación de Líneas, donde se llamó a la “oposición a todo monopolio privado y en especial al monopolio del transporte” (CGT, 19 de junio de 1936: 1).

El 12 de diciembre de 1935 un grupo de asociados de la Unión Ferroviaria habían tomado por asalto las oficinas centrales del sindicato (Av. Independencia 2880) que alojaban a las autoridades de la CGT. La consiguiente división de la CGT y el enfrentamiento interno dentro de la Unión Ferroviaria impulsaron a la directiva de ésta, baluarte de la CGT de Independencia 2880, a buscar el apoyo de afiliados radicales, socialistas y comunistas, prometiendo involucrar al movimiento sindical en los asuntos políticos. La participación de la CGT de Independencia 2880 en la tentativa de Frente Popular, la presencia de los afiliados socialistas en ella y la nueva táctica más agresiva decidida por el Partido Socialista con respecto a los agrupamientos sindicales, lo mismo que la integración de los comunistas a la central, explican que la Federación de Líneas se aproximara a ella,

solicitándole una resolución terminante contra los monopolios. El congreso constituyente de la CGT no produjo despacho sobre la cuestión del antiimperialismo. Sin embargo, el 4 de abril la Inspección General de Justicia resolvió intervenir la Unión Ferroviaria, a pedido de los dirigentes enfrentados con la directiva y como una reacción del gobierno ante la constitución de una central obrera en la que destacaba la influencia del opositor Partido Socialista. En consecuencia, a principios de abril la Unión Ferroviaria y La Fraternidad decidieron retirar su apoyo al proyecto de coordinación (Matsushita, 1986: 155-160 y 191-193). Posteriormente, también los congresales de la Unión Tranviarios decidieron unirse al repudio de la Corporación de Transportes porque no se había atendido su pedido de incluir un representante sindical en el seno de la misma. La posición de la CGT de Independencia 2880 se expresó en el mitin del 14 de junio convocado en rechazo de la intromisión en la vida sindical, reunión a la que significativamente fue invitada la Federación de Líneas.

Alentada por esta evolución en las conducciones sindicales, la Federación de Líneas comenzó desde abril las gestiones para constituir un comité con todos los sindicatos que habían apoyado sus movilizaciones y otros que, como los ferroviarios, habían rectificado su posición. El 30 de junio se constituyó el Comité Intersindical contra el Monopolio y la Reacción, integrado por organizaciones dirigidas por comunistas, espartaquistas, anarquistas y socialistas de izquierda, la mayoría de las cuales ya mantenían vínculos con los colectiveros.⁶ La función del Comité —creado en un

6 Contando inicialmente con veintiocho organizaciones, el Comité llegó a sumar un total de alrededor de cuarenta en el momento previo a la huelga de septiembre de 1936. Los datos no son exhaustivos; comprenden unas veinte organizaciones, aunque podemos suponer que se trató de las más importantes. Dentro del cuadrante comunista estaban los madereros, metalúrgicos y sindicatos de la construcción como yeseros o albañiles de San Martín, entre los cuales influía

contexto en el que el gobierno había prohibido los actos públicos al aire libre y la represión caía sobre las organizaciones obreras, especialmente comunistas y anarquistas— era hacer efectiva la solidaridad con los colectiveros en la protesta. La creación de un Comité Intersindical controlado por socialistas de izquierda y comunistas despertó recelo en la directiva de la CGT de Independencia 2880 y los sindicatos del riel, que incitaron a los sindicatos confederados a abandonar el mismo (Matsushita, 1986: 193). Por otra parte, a principios de septiembre el proyectado frente político opositor perdió la poca entidad que le quedaba desde el momento que los opositores llegaron a un acuerdo para destrabar el funcionamiento del parlamento (Persello, 2004: 196-197). De forma que la CGT no podía apostar a una oposición que otra vez se deshilvanaba frente a un gobierno que volvía a ganar la iniciativa. Finalmente, el diferendo dentro de la Unión Ferroviaria se había morigerado tras el congreso extraordinario de agosto, y los ferroviarios aspiraban a no malquistarse con el gobierno, que se había demostrado

el grupo Spartacus. A estos se sumarían posteriormente el importante sindicato de Albañiles, Cemento Armado y Anexos, que defeccionaría a último momento de la huelga, y la Federación de Espectáculos Públicos, ambos dirigidos por los comunistas, así como un número de sindicatos de oficios conducidos parcial o totalmente por anarquistas: electricistas, herreros de obra, picapedreros, plomeros y cloaquistas y anexos y el de pintores, un bastión del grupo Spartacus. También ocuparon un lugar en el Comité la Federación de Obreros Gastronómicos, Peluqueros, Peinadores y Anexos, Sindicato de Obreros en Dulce y la Agrupación Local de los Trabajadores del Ómnibus, influidos por la izquierda socialista, lo que quizá fuera también el caso del Sindicato de Obreros en Calzado. Revistó asimismo en el Comité Intersindical la Unión de Linotipistas Mecánicos y Afines, una pequeña organización autónoma en la que convivían anarquistas (entre quienes estaba Ernesto Romano, de Spartacus), independientes y *sindicalistas*; la Federación Obrera Marítima, un baluarte *sindicalista* de la CGT de Catamarca; la sólida Federación de Obreros Constructores Navales, autónoma, y las sociedades de portuarios y carreros, ambas afiliadas a la FORA, lo que garantizaría un sólido apoyo para la huelga en la zona del puerto de la capital; expendedores de nafta y lavadores y limpiabronces de autos, impulsados por espartaquistas y foristas. Participaron también del Comité Luz y Fuerza, Unión de Obreros de la Bebida y Anexos y Sindicato Obreros de la Nueva Cervecería.

dispuesto a intervenir en sus asuntos si lo consideraba necesario.⁷

Mientras la CGT de Independencia 2880 tomaba distancia del Comité Contra el Monopolio, ocurría lo contrario con los dirigentes de la CGT de Catamarca 577. Esta sufrió una alteración drástica a raíz de que, conforme al congreso extraordinario de la Unión Ferroviaria que ratificó su afiliación a la CGT de Independencia 2880, los ferroviarios renunciaron a sus cargos en la Junta Ejecutiva de la CGT de Catamarca 577. En esta central se acrecentó la influencia de sectores alineados en el movimiento antimonopolista, como los *sindicalistas revolucionarios* de la Federación Marítima y sindicatos, como los cartoneros, influidos por el Partido Concentración Obrera, capitaneado por José Penelón, firme defensor del colectivo en el Concejo Deliberante. En agosto la CGT de Catamarca 577 convocó a los sindicatos autónomos a ingresar a la central e incluyó el problema del monopolio del transporte en su plan de realizaciones (Matsushita, 1986: 195-197).

Además de buscar apoyos en el movimiento obrero y el régimen político, la Federación de Líneas y sus aliados apelaron a organizaciones de la sociedad civil e instancias de movilización ya conocidas, pero también aquí se enfrentaron con un gobierno que quería evitar a toda costa que se repitiera un movimiento como el de enero de 1936. La Federación multiplicó la propaganda, que mantenía un sesgo unionista, aunando a “Industriales, comerciantes, obreros, intelectuales, de todas las tendencias” (*Crítica*, 24 de junio de 1936: 19). Entre enero y mayo de 1936 se realizaron veintiséis mítines callejeros contra el monopolio,

7 Significativamente, el mitin del 17 de agosto, al que asistieron representantes del Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Progresista, junto con la Federación de Líneas, no contó con el aval de la CGT ni de la Unión Cívica Radical.

la mayoría de ellos a cargo de los comités populares por barrio, y se inició una campaña de afiches y solicitadas. Al igual que había ocurrido en 1935, se pronunciaron contra la coordinación las organizaciones empresarias ligadas al automotor y el comercio minorista, encabezado por los almaceneros. Pero desde abril la policía prohibió los actos públicos, que a partir de entonces debieron realizarse en lugares cerrados, lo que resultaba más complicado y oneroso. La Federación de Líneas reactivó los contactos con todos los núcleos del interior del país a través de la Confederación Nacional del Automotor. Pero, estratégicamente, en 1936 el gobierno separó el tratamiento de las dos leyes de coordinación, lo que introdujo una división en lo que en 1935 había sido un movimiento unificado, aislando a los colectiveros porteños del resto del país. Por otro lado, como represalia contra la agitación de los colectiveros, la intendencia les impuso multas y castigos desmedidos, retiró a la Federación de Líneas reconocimiento oficial y buscó, sin éxito, negociar directamente con los delegados de línea. Estas medidas pueden haber contribuido a acrecentar las disidencias internas, que culminaron en mayo de 1936 con la expulsión de la Federación de algunas líneas y el retiro de otras tantas, que se agruparon en varios Comités de Relaciones, lo que predisponía mal al gremio para la lucha que debía asumir de inmediato. A esto se agregaba la represión que cayó sobre la militancia libertaria, que se disponía a secundar el movimiento contra el “monopolio”. En reacción a una huelga en protesta por las persecuciones, en julio de 1936 la policía clausuró todos los locales de los sindicatos de la FORA y los talleres de impresión de *La Protesta*, secuestró material de imprenta y detuvo a numerosos activistas de Spartacus. Así, la militancia ácrata no pudo alistarse en pleno en la huelga.

La huelga de septiembre de 1936

El sábado 19 de septiembre por la noche, unas cuarenta organizaciones adheridas al Comité Intersindical contra el Monopolio y la Reacción se reunieron en carácter urgente ante el anuncio de que sería firmado el despacho aconsejando la aprobación del proyecto aprobado por diputados el año anterior. Como resultado de las advertencias de la CGT y de la presión ejercida sobre el Partido Comunista en la provincia de Buenos Aires y sobre la Federación Obrera de Sindicatos de la Construcción, ésta decidió reconsiderar su actitud y ordenó a los albañiles permanecer a la expectativa en sus puestos de trabajo. El único sindicato importante hasta entonces dirigido por los comunistas que no defecionó del Comité Intersindical fue el de la madera, de cuya dirección significativamente los comunistas fueron expulsados. Tampoco las autoridades del Partido Socialista prestaron su cooperación al movimiento solidario pues desconfiaban de los disidentes socialistas del ala izquierda que destacaban en el Comité Intersindical. En reacción a las exigencias de los izquierdistas de involucrar a los sindicatos en los asuntos políticos, los dirigentes del Partido se aferraron a una estricta separación entre política y gremialismo. Además, los dirigentes socialistas procuraban defender las posiciones conquistadas en la CGT de Independencia 2880, donde la Unión Ferroviaria abogaba por no confrontar al gobierno. En consecuencia, la Comisión Socialista de Información Gremial presionó a sus afiliados para que se abstuvieran de enrolar a sus sindicatos en el Comité Intersindical y los responsables de *La Vanguardia* se negaron a prestar sus talleres de impresión para editar los volantes que convocaban a la huelga (Programa de Historia Oral, 1971: 24 y 31).

La huelga de los colectiveros se extendió entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre de 1936 y comprendió dos

paros solidarios impulsados por el mencionado Comité Intersindical: el 21 y 28 de septiembre. Pueden distinguirse dos fases diferentes de la huelga, separadas por la huelga general del 28 de septiembre, que marca el punto cúlmine de la movilización obrera y popular. En la industria y el comercio automotrices la huelga comenzó siendo amplia, aunque no absoluta, pero fue luego desigual. Los taxistas de la Unión Chauffers se sumaron a la huelga, aunque los anarquistas aclaraban que aprovechaban la coyuntura para poner en ejecución el método de la acción directa y enfatizaban que la coincidencia con una fracción burguesa —se referían así a los colectiveros— era un hecho meramente accidental. Gracias a la influencia de socialistas y radicales en la notabilidad barrial, el comercio minorista se plegó al paro, especialmente en los barrios, “en los que el vecindario local se halla estrechamente vinculado a los colectiveros por relaciones de toda naturaleza” (*Crítica*, 22 de septiembre de 1936: 6). Pero excepto en el puerto y algunas pocas secciones industriales,⁸ la convocatoria de la huelga solidaria del 21 de septiembre fue paupérrima entre los obreros. Esto se debió en parte a la falta de apoyo de los sindicatos más importantes, incluyendo a aquellos orientados por el Partido Socialista y el comunismo. También se mencionó que faltó presión activa por parte de los colectiveros, lo que coincide con las manifestaciones de que el movimiento se mantuvo en un carácter pacífico. Finalmente, la escasa repercusión del conflicto se debió a que —siguiendo órdenes del gobierno, que deseaba evitar un episodio como el de la huelga general de enero de 1936— la policía desplegó una eficaz acción de vigilancia y represión, más intensa que en ocasión de la huelga del transporte de septiembre de 1935.

8 Los sectores afectados por la huelga deben haber coincidido con aquellos cuyos sindicatos impulsaron el Comité Intersindical Contra el Monopolio y la Reacción. Al respecto, véase la nota 6.

Fueron prohibidas las reuniones sindicales y clausurados los locales de los sindicatos que se habían plegado al paro, la sede de la Federación de Líneas, las secretarías de varias líneas y los locales donde realizaban habitualmente sus reuniones. La policía logró evitar la proliferación de actos de terrorismo y detuvo a varias personas, a las que secuestró materiales explosivos. La Sección Orden Social de la provincia de Buenos Aires detuvo a los activistas de varios sindicatos, que fueron procesados por asociación ilícita.

El martes 22 el paro continuó entre los colectiveros con absoluta unanimidad. Los sindicatos que habían declarado el paro ordenaron la vuelta al trabajo, aunque declaraban que se mantenían a la expectativa. El miércoles 23 la huelga del colectivo continuó con la misma intensidad. Desde el principio, la intendencia intentó dividir a los colectiveros, debilitar la dirección de la Federación y cooptar a un sector de los mismos, explotando los vínculos directos entre los representantes de las líneas ante la municipalidad. La Federación respondió que cualquier resolución debía provenir de una asamblea general del gremio. El intendente respondió emitiendo dos decretos. El primero conminaba a los colectiveros a reanudar las actividades bajo la amenaza de retirar sus registros de conductores, suspender las habilitaciones y absorber los depósitos de garantía. El segundo decreto retiraba la personería jurídica a la Federación, con el argumento de que había resistido las decisiones del ejecutivo y se había convertido en fuente de desorganización del transporte público. El decreto asumía que podría negociar con los delegados por línea reconocidos por la municipalidad sin necesidad de hacerlo con la Federación. Sin embargo, la reunión que sostuvieron los representantes del ejecutivo con los delegados por líneas —cuya concurrencia fue prácticamente nula— no dejó ningún resultado en firme, manteniendo los colectiveros una adhesión total al

paro. Ante el fracaso de esta tentativa, el 23 la municipalidad amenazó con suspender los permisos de circulación y retirar los registros de los conductores, para tomar control temporario de los vehículos y hacerlos circular conducidos por funcionarios de la Dirección de Tráfico, secundados por la policía. Uno de los dos sindicatos en que estaba dividido el gremio municipal, la Asociación Trabajadores de la Comuna, afiliado a la CGT de Catamarca 577, se pronunció en contra de esta medida y se constituyó en sesión permanente. La Junta Ejecutiva de la CGT de Catamarca 577 expresó su desagrado porque a los trabajadores municipales se les hubiera encargado conducir los coches incautados, exponiéndolos así a “conflictos espirituales”. Ratificó su posición contraria a toda forma de monopolio, expresó su simpatía hacia todos aquellos asalariados que lo resistían y consideró que la implantación del “monopolio” era una estrategia “para favorecer intereses de los grandes capitales en perjuicio de los pequeños” (CGT Catamarca, 2 de octubre de 1936: 1). A solicitud de la Federación, el otro sindicato de municipales, la Unión Obreros Municipales, adherido a la CGT de Independencia 2880, dio instrucciones a sus afiliados de no participar de esa operación. Aunque congruente con su posición nacionalista, el periódico *CGT* se hizo eco de las resonancias nacionalistas y antiimperialistas de la protesta, la Comisión Administrativa de la CGT de Independencia 2880 no adoptó ninguna medida concreta en apoyo del movimiento, excepto nombrar una Comisión de Estudios de los Monopolios, que tras un año caducaría sin producir su informe.

A pesar de la oposición de los dos sindicatos municipales, la Dirección de Tráfico procedió a incautar los autos colectivos a partir del día 24 y puso en circulación un número de los mismos. Según los socialistas, la intendencia pretendía aprovechar la coyuntura para expropiar definitivamente

los vehículos. Sin embargo, el público se negó a utilizar sus servicios, dando prueba del apoyo popular que merecía el movimiento. Como resultado de este nuevo fracaso, el secretario de Obras Públicas de la municipalidad se vio obligado a convenir con los representantes de la Federación una ampliación del plazo para reanudar sus actividades y permitir la reapertura de su local para celebrar una asamblea resolutive, que fue calificada como imponente. La Federación puso como condición previa al levantamiento del paro que los coches incautados fueran devueltos a sus propietarios.

Mientras negociaba con la intendencia, la Federación de Líneas insistía en continuar la lucha, reeditar la experiencia del año anterior e impulsar una huelga general de extensión nacional para el lunes 28, día en que el Senado trataría las leyes de coordinación. Organizaciones del interior comunicaron que estaban dispuestas a secundar ese movimiento. El 24, en Rosario, diversas organizaciones obreras se solidarizaron con el movimiento, lo mismo que el comercio local, y se plegaron a la huelga gran cantidad de garages, casas de camiones de reparto mayorista y el transporte de pasajeros (con la excepción de los ómnibus de la Empresa Municipal Mixta), agrupados en la Junta Central de la Federación Argentina de la Industria Automotriz. En Paraná la suspensión de actividades fue total, adhiriéndose incluso los bares y órganos periodísticos. El sábado 26, una asamblea de colectiveros en la que se dieron cita ocho mil personas ratificó la decisión de convocar una huelga general para el lunes siguiente, invitar al comercio minorista a cerrar sus puertas y, según los activistas de la FORA, fueron aprobadas medidas de acción directa. El Comité Intersindical impulsó la huelga entre los sindicatos y, junto con la Federación de Líneas, presionó a la Federación Obrera de Sindicatos de la Construcción para unirse al movimiento. Los comunistas y anarquistas que convivían en la dirección del sindicato

acordaron que el asunto fuera resuelto en una asamblea general del gremio. Los comunistas aconsejaron mantenerse al margen, dado “el carácter incierto” del movimiento, en tanto los anarquistas insistieron en satisfacer el compromiso solidario asumido con los colectiveros en ocasión de la huelga del verano de 1936 (*El Auto Argentino*, septiembre de 1937: 62). Las partes llegaron a una fórmula de transacción y acordaron realizar una huelga de brazos cruzados.

El lunes 28 de septiembre se hizo efectiva en la capital federal la huelga general contra el “monopolio” declarada por el Comité Intersindical. A diferencia de lo ocurrido el 21 de septiembre, el movimiento fue bastante intenso, tanto en la capital como en el interior. La paralización fue total en la zona portuaria, lo mismo que en la construcción y en buena parte de la industria. Interrumpieron sus actividades los gremios patronales de la industria automotriz, el comercio minorista de la capital y el transporte automotor en su conjunto. No circularon taxímetros, carros ni camiones, alentados por el Sindicato de Carreros y la Unión Chauffeurs, afiliados a la FORA, y por la Asociación de Propietarios de Camiones que representaba a dueños de vehículos y flotas. Los comercios cerraron sus puertas, especialmente en Pompeya, Flores, Caballito y Devoto, donde desde días atrás grupos del Comité Intersindical recorrían los comercios incitando a adherir a la huelga. Igual que el 21 de septiembre, la huelga de solidaridad en Paraná fue total. El periódico de derecha *Bandera Argentina* llegó a comparar la huelga del 28 de septiembre con la huelga general de enero de 1936 (30 de septiembre de 1936: 1). *El Colectivo* evaluó que la convocatoria había sido notablemente superior a la del lunes 21, especialmente en las orillas de la urbe, pero lamentó que otra vez hubiera faltado la actividad callejera (octubre de 1936: 24). La agitación se limitó a algunas acciones impulsadas por pequeños grupos que realizaron propaganda y algunos

atentados aislados dirigidos a instituciones británicas y medios de transporte, con el propósito de sembrar el pánico entre los usuarios, extender la suspensión del transporte e impulsar la huelga general.⁹ Las declaraciones de elevado tenor nacional y antiimperialista —la Federación de Líneas presentó su “campaña en contra de las empresas imperialistas” bajo la bandera de “la liberación nacional” (*Crítica*, 22 de septiembre de 1936: 4), mientras el Sindicato de Obreros en Dulce proclamaba defender “la industria nacional” contra “la entrega de nuestra economía al imperialismo extranjero” (*Crítica*, 26 de septiembre de 1936: 5)—, los ataques sobre los bienes de empresas extranjeras y las requisitorias de los senadores Palacios, de La Torre y Eguiguren dieron al movimiento el tono de una lucha del “pueblo argentino” contra “el capitalismo inglés” (*Crítica*, 29 de septiembre de 1936: 5) que impresionó vivamente a los observadores y residentes británicos.¹⁰

Pese a la magnitud de la huelga del 28 de septiembre, ese día el Senado aprobó por veintiséis votos contra seis, la ley

9 La prensa gráfica solo menciona cuatro atentados, todos los cuales tuvieron lugar el día de la huelga general del 28 de septiembre de 1936. Un petardo estalló en las puertas de la embajada británica en Buenos Aires. Una bomba incendiaria provocó la destrucción de un coche vagón de segunda clase del que acababa de bajar un nutrido grupo de trabajadores, en la estación Gerli del Ferrocarril Sud a las 6:09. Otra bomba incendiaria estalló en la estación de Plaza Constitución a las 6:25 en un vagón de segunda clase del que acababa de bajar un numeroso grupo de trabajadores que arribaban por la mañana a la capital. Un tranvía fue incendiado en Pompeya por un grupo de cuatro personas armadas que hicieron descender al pasaje, rociaron el vehículo con nafta y lo prendieron fuego. Los agitadores detenidos eran colectiveros afiliados a Federación de Líneas, que se encargó de su defensa, aunque es posible que al mismo tiempo revistieran en Spartacus, que favorecía este género de sabotaje “continuo y efectivo”, en lugar de las “acciones espectaculares o heroicas” (Benyo: 79-80).

10 Aunque Matsushita (1984: 197) afirma lo contrario, incluso los libertarios habían absorbido la estructura del sentir nacional: la Unión Chauffeurs convocaba a realizar otro 7 de julio de 1807 ante una invasión hecha por medio de “la más refinada diplomacia y el soborno más descarado” y abrochada en el parlamento por políticos entregados “al capitalismo imperialista que invade el mundo entero” (*Organización Obrera*, 2.^a quincena de agosto de 1936: 3).

que creaba la Corporación de Transportes. A partir de ese momento, el movimiento de protesta inició una fase descendente y variaron su composición y objetivos: habiendo sido en el inicio una acción concertada por un amplio arco de fuerzas en oposición a la sanción definitiva del proyecto de coordinación, desde el 29 de septiembre se convirtió en una acción defensiva encarada exclusivamente por los colectiveros contra las medidas adoptadas por la intendencia, que había amenazado con anular las autorizaciones para el funcionamiento de las líneas e incautado numerosos vehículos. A pedido de la Federación, representantes radicales y socialistas lograron que se permitiera la reapertura de los locales obreros y se dejaran sin efecto las resoluciones que pesaban sobre los colectiveros, a condición de que estos reanudaran de inmediato sus servicios. El 1 de octubre, una asamblea de delegados de líneas resolvió dar por finalizada la huelga, al mismo tiempo que, en signo de repudio y frustración, empresas de transporte británicas fueron blanco de ataques aislados e improvisados (disparos, pedradas). El 2 de octubre la intendencia devolvió los vehículos incautados a los colectiveros, que normalizaron todos los servicios al día siguiente.

La ley que creaba la Corporación del Transporte fue sancionada y promulgada de inmediato: la huelga había fracasado y florecieron las tentativas para debilitar o dividir a la Federación. Pero la magnitud del movimiento de protesta obrera y popular, la organización eficaz y disciplinada de la Federación y sus aliados y el amplio apoyo que había gozado, demostraban el costo político que, aun para los gobiernos conservadores, supondría la aplicación de una ley que beneficiaría a la Anglo, especialmente en lo que hacía a la incorporación de los colectivos —que recién se aplicó en 1942— y al impopular aumento de las tarifas —que nunca sería aplicado—.

La lucha de los colectiveros contra el “monopolio” se desplegó en varias fases de movilizaciones y huelgas y, en comparación con la controversia sobre las concesiones eléctricas, revistió un nivel de conflictividad notable, especialmente al coincidir con los ciclos de lucha obrera o crisis políticas. La huelga de septiembre de 1936 no alcanzó una extensión nacional semejante al movimiento de 1935 ni existieron circunstancias políticas que agravaran la conflictividad. El movimiento de protesta se vio entorpecido por las acciones de la administración conservadora, que logró escindir el movimiento de Buenos Aires del resto del país, desactivó la tentativa de una alianza político-electoral y parlamentaria opositora, actuó para moderar el activismo obrero (intervino en el diferendo de los ferroviarios y en la división de la CGT, intensificó la presión sobre el Partido Comunista y sus sindicatos y la represión del anarquismo), consiguió cooptar a una parte del movimiento vecinalista e intentó debilitar a los mismos colectiveros, deseando evitar que se repitiera un acontecimiento como la huelga general de enero de 1936. El movimiento obrero se encontraba fraccionado por razones propias (corporativas, estratégicas, organizativas, políticas, facciosas): la CGT, dividida; el Partido Socialista, en ciernes de una nueva escisión; los libertarios, constreñidos por una nueva ola represiva; los trabajadores del transporte urbanos, divididos entre los tranviarios y varios otros agrupamientos gremiales; para colmo, el protagonismo de los comunistas y de la izquierda socialista en la lucha contra el “monopolio” despertaba crecientes suspicacias. De forma que, si bien el movimiento de los colectiveros recibió el apoyo de franjas dinámicas y comprometidas del activismo político y sindical, una parte importante de este se mantuvo al margen de la lucha.

Bibliografía y fuentes

- Benyo, J. (2005). *La Alianza Obrera Spartacus. Anarquismo, vanguardia obrera e institucionalización del movimiento sindical en la década de 1930*. Buenos Aires, Libros de Anarres.
- D'Antonio, D. (2000). Representaciones de género en la huelga de la construcción. Lozano, F. G., Pita, V. S. e Ini, M. G. (comps.), *Historia de las mujeres en la Argentina*, tomo II. Buenos Aires, Taurus.
- Federación Obrera Marítima, *Libro de actas del Consejo Federal de la F.O.M. (1933-1934)*.
- García Heras, R. (1994). *Transportes, negocios y política. La Compañía Anglo de Tranvías, 1876-1981*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Gesualdo, V. (1988). Historia del colectivo. *Todo es Historia*, núm. 252.
- Herrera, C. M. (2006). Corrientes de izquierda en el socialismo argentino, 1932-1935. *Nuevo Topo*, núm. 2.
- Iñigo Carrera, N. (2004). *La estrategia de la clase obrera, 1936*. Buenos Aires, Madres de Plaza de Mayo.
- Matsushita, H. (1986). *Movimiento obrero argentino, 1930-1945. Sus proyecciones en los orígenes del peronismo*. Buenos Aires, Hyspamérica.
- Ordenanzas y resoluciones y minutas de comunicación sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en el período de sesiones de 1936.
- Persello, A. V. (2004). *El partido radical. Gobierno y oposición, 1916-1943*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Privitelio, L. de (2003). *Vecinos y ciudadanos. Política y sociedad en la Buenos Aires de entreguerras*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Sommi, L. V. (1939). Crítica al monopolio del transporte urbano. Argumentos, *Revista de Estudios Sociales*, núm. 8.
- Versiones taquigráficas de las sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires (1932-1937).
- Walter, R. (1993). *Politics and Urban Growth in Buenos Aires, 1910-1942*. New York - Cambridge, Cambridge University Press.

Fuentes periodísticas

Bandera Argentina (1936).

Crítica (1935-1937).

CGT (1934-1937).

CGT (Catamarca) (1936).

El Auto Argentino (1934-1937).

El Colectivo (1935-1936).

El Obrero Ferroviario (1935).

Izquierda. Crítica y acción socialistas (1935).

La Hora (1941).

La Internacional (1935-1936).

La Opinión, Avellaneda (1936).

La Prensa (1936).

La Protesta (1929, 1935-1936).

La Vanguardia (1928-1940).

La Voz del Chauffeur (1936).

Organización Obrera, Órgano de la FORA (1935-1936).

Spartacus. Obrero y campesino comunista-anárquico (1935).

The Review of the River Plate (1934-1936).

Capítulo 3

La huelga metalúrgica de 1942

Productividad empresarial y resistencia obrera¹

Roberto Elisalde

Introducción

En este artículo vamos a analizar la huelga metalúrgica de junio-julio de 1942. Tendremos en cuenta el proceso que dio origen al Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica (SOIM) desde su fundación hasta su crisis en 1943, y las relaciones que tuvo con los empresarios y el Estado.

Este conflicto duró dieciocho días y fue uno de los más extensos que llevó a cabo el gremio de este sector antes de 1954. Las empresas Siam, Impa, Catita, Merlini, entre otras, fueron las compañías más involucradas, ya que la mayoría de los obreros de estas firmas participaron activamente en estos acontecimientos.

La razones de la huelga metalúrgica de 1942 estuvieron ligadas al reclamo de mejoras salariales, vacaciones pagas y cambios en las condiciones de trabajo. Sabemos,

1 Este artículo es parte de una investigación revisada y publicada en *Mundo del trabajo en la Argentina: 1935-1955. La Siam Di Tella: productivismo, educación y resistencia obrera* (Buenos Aires, Biblos, 2019).

especialmente por investigaciones realizadas sobre este proceso (Doyon, 1970; James, 1990; Elisalde, 2001; Schiavi, 2008), que esta protesta también estuvo estrechamente ligada a los cambios en la organización de la producción en las empresas metalúrgicas, caracterizadas por la aplicación de criterios más definidos en clave de organización científica del trabajo, disciplinamiento laboral y aplicación de técnicas de racionalización productiva (taylorismo-fordismo). Este conjunto de medidas se expresaba, desde la perspectiva empresarial, en la búsqueda de un mayor rendimiento de la fuerza de trabajo obrero y, a la vez, en un abaratamiento del costo laboral. Este proceso se extendió por varias décadas, provocando, como consecuencia, un ciclo de conflictividades desde los años cuarenta y que ascendió en un intenso pico huelguístico en 1954, más allá, incluso, de los cambios políticos de cada etapa.

Precisamente, las demandas por más salario y las estrategias de resistencia en la fábrica a la pérdida del control obrero de la producción van a explicar la prolongación e intensidad de este escenario de luchas, a la vez de resaltar las dinámicas obrero-patronal que caracterizaron a la Argentina de esos años; período en el que se destacó una mayor organización obrera y empresarial, y, principalmente, con la presencia cada vez más fuerte del Estado como ámbito en el que se dirimían los conflictos entre el capital y el trabajo.²

2 Las investigaciones de Daniel James y Eugene Doyon (referencias en la bibliografía) sostienen una perspectiva interpretativa del conflicto laboral basada en el activo papel de los trabajadores en tanto resistencia al control de la producción en las plantas y expresado a través de fuertes picos huelguísticos en los años cuarenta y cincuenta.

Orígenes del Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica (SOIM)

El Soim remonta sus orígenes hacia la década de 1920. Fue creado en 1923 sobre la base de la unificación de varios sindicatos de oficios, como el de los bronceros y la Federación Obrera Metalúrgica. Este último gremio había dirigido la importante huelga llevada a cabo en los Talleres Vasena en 1919. En 1924, el Soim debió movilizarse en reclamo de mejoras salariales. Lo hizo a través de huelgas parciales que duraron casi todo el año. El sector más activo fue la rama de cromo-hojalateros, pertenecientes a las Industrias Padilla.

La mayoría de los obreros fundadores del gremio metalúrgico eran militantes de raíz anarquista, socialista y luego comunista. Participaron de la Federación Obrera de la República Argentina (FORA), del V Congreso y también formaron parte de la creación de la Unión Sindical Argentina (USA), de orientación sindicalista revolucionaria. En los congresos de la USA sostuvieron los principios de la Internacional Sindical Roja, de tendencia comunista.

En su larga historia sufrieron algunas divisiones, la mayor parte ligada a los problemas que les causó su política pro-internacionalista. Debido a ella, hubo enfrentamientos entre los sectores de la izquierda tradicional (anarquistas y socialistas) y los grupos moderados del sindicalismo (sindicalistas revolucionarios y obreros independientes). La adhesión a la USA le significó al sindicato metalúrgico el retiro del gremio del sector anarquista.

En 1929, luego de ser expulsados de la Unión Sindical Argentina, el SOIM creó junto a otros sindicatos de orientación comunista el Comité de Unidad Sindical Clasista. Esta organización sindical se caracterizó por sostener posiciones internacionalistas y clasistas; en la práctica gremial esto

le generó a los sindicatos pertenecientes al Comité un aislamiento del resto del movimiento obrero.

A partir de 1935, y con importantes cambios en la política internacional del Partido Comunista (período de los Frente Populares), el sindicalismo de esta orientación buscó alianzas con grupos de la denominada “burguesía progresista” y otros sectores del movimiento obrero. Esta nueva situación significó que disolvieran el Comité de Unidad Sindical Clasista (CUSC), y sostuvieran como posición política ingresar en las organizaciones obreras unitarias como la Confederación General del Trabajo (CGT). Como consecuencia de estos cambios, el gremialismo comunista, entre 1935 y 1939, creció en forma significativa.

En 1935 el Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica solicitó su ingreso a la CGT. La incorporación no fue sencilla: la conducción de la entidad pertenecía a los sindicalistas revolucionarios y socialistas y se había creado luego de la fusión entre la Confederación Obrera Argentina (COA), de tendencia socialista, y la USA, sindicalista revolucionaria. Ninguno de los dos grupos tenía intenciones de permitir el ingreso de los comunistas. Sin embargo, al cabo de un tiempo, por cuestiones de estrategias político-ideológicas y de pujas de poder, uno de los sectores promovió el acceso de esta corriente a la CGT.

Luego de marchas y contramarchas, en diciembre de 1935 el SOIM, junto a otros gremios de tendencia comunista, fue aceptado como sindicato de la CGT. Esta decisión se debió mucho más a conflictos internos dentro de la central obrera que a un cambio de actitud hacia los comunistas. Una vez resueltos los problemas político-institucionales, la mayor preocupación del gremio metalúrgico conducido por militantes del Partido Comunista fue resolver cómo continuar con la organización del gremio y seguir obteniendo el apoyo del conjunto de los trabajadores. El SOIM destacaba que

las reivindicaciones obreras no debían ser olvidadas, reclamaba mejoras en las condiciones de trabajo, salarios que contemplen su nivel de vida e insistía en afirmar que, si bien la producción crecía, los salarios y las condiciones de trabajo no se modificaban.

Esta situación llevó al sindicato metalúrgico a impulsar en abril de 1939 su primera huelga de importancia (de 24 horas), que afectó a un importante número de establecimientos en Rosario, Salta, Capital Federal y Avellaneda. La respuesta del empresariado fue negativa: se opuso a conceder mejoras en los salarios y sus otras demandas, tal como reclamaban las consignas de la nueva huelga. La adhesión fue importante sobre todo en la capital, donde el sindicato estaba más sólidamente organizado. Sin embargo, los resultados tampoco fueron exitosos para los trabajadores: el empresariado se negó a conceder las reivindicaciones solicitadas esgrimiendo que ya las había otorgado y que, además, el SOIM “no representaba los verdaderos intereses de los obreros metalúrgicos” (*La Vanguardia*, abril de 1942).

A pesar de todo, esta no fue la última ofensiva sindical tendiente a lograr mejoras para los trabajadores del sector. El 26 de junio de 1942, el SOIM, luego de extensas negociaciones con el empresariado, declaró, en un mitin realizado en el Luna Park y con la presencia activa de casi 15.000 obreros metalúrgicos, una huelga por tiempo indeterminado hasta la obtención de las siguientes reivindicaciones: “mejoras salariales; vacaciones pagas, en acuerdo a ley 11.729 y mejores condiciones de trabajo” (*La Vanguardia*, junio de 1942).

La huelga metalúrgica de junio-julio de 1942

La Vanguardia: “Declaró la huelga el gremio metalúrgico”; *La Nación*: “Ha sido declarada ilegal la huelga de los metalúrgicos”; *Orientación*: “Sigue firme la huelga metalúrgica”.

La Vanguardia (diario de tendencia socialista), *La Nación* (liberal-conservador) y *Orientación* (quincenario comunista): tres titulares, tres formas de opinar sobre uno de los conflictos más extensos e intensos de la década. Se inició el 26 de junio y se prolongó hasta el 13 de julio. La huelga generó 330.000 jornadas perdidas (el 52% del total de ese año) y contó con la participación de más de 22.000 obreros, es decir, un 55% del total de participaciones en todas las huelgas del mismo año. Esto significó un promedio de 23 jornadas perdidas por huelguistas; encuadrados en el período 1940-1944, estos valores son similares a los del período 1935-1939, que, como hemos dicho, fue una de las etapas de mayor tensión social.³

La dirección política del conflicto fue asumida por el SOIM. Si bien era un gremio mayoritariamente conducido por comunistas, “había algunos socialistas y anarquistas, pero eran la minoría”, nos recuerda Muzio Girardi (1994), por entonces secretario general del sindicato.

El SOIM contaba hacia esa época con una representación de 4.000 obreros cotizantes sobre un total de 60.000 metalúrgicos aproximadamente. Es indudable que era un gremio en desarrollo; sin embargo, no debemos atenernos solamente a esta variable —número de cotizantes— para analizar la debilidad o fortaleza organizativa y política de los sindicatos de aquellos tiempos. Esta era una etapa en la que la tasa de sindicalización era baja: “en 1936 los afiliados

3 Estos datos fueron reconstruidos a partir de la información brindada por periódicos de la época: *La Vanguardia*, *Orientación*, *La Nación* y *La Prensa*.

representan el 12% de los asalariados en la industria y se elevan apenas a un 14% en 1941” (Torre, 2006). Asimismo es menester señalar el dinamismo y firmeza que el comunismo aportó a mediados de la década de 1930 a la organización del movimiento obrero argentino, especialmente en las ramas de la construcción, la metalurgia, la alimentación y la industria textil: “Los comunistas fueron el sector más activo del movimiento obrero entre 1935 y 1939 ya que en lugar de concentrarse en problemas inmediatos, preferían una etapa de intensa organización” (Horowitz, 1984: 279).

En el caso de la industria metalúrgica, el SOIM procuró resumir los intereses del conjunto de los obreros del sector y su crecimiento fue continuo en términos de organización y representatividad. Así, en marzo de 1942, los metalúrgicos crearon la Federación Obrera Metalúrgica y Minera en la que participaron delegados de Buenos Aires y del interior del país.⁴

En enero de ese mismo año, el SOIM llevó adelante un plan de acción consistente en la elaboración de un petitorio cuyos ejes principales fueron los siguientes: mejores condiciones de trabajo —rechazaban las medidas de intensificación laboral propuestas por numerosas empresas del sector— (Dorfman, 1995), aumento salarial entre un 10% y un 25%, según las categorías y vacaciones anuales pagas acorde a la ley 11.729. Se desplegó, además, una gran campaña publicitaria y se preparó una asamblea para el 23 de ese mes. Se resolvió profundizar la lucha, entrevistar al gobierno, presionar a la patronal y desarrollar un gran programa de agitación.

4 “El acto fundacional contó con personalidades del campo político, militar y sindical: el Sr. Ministro de Guerra, el presidente de la UCR, el secretario del Partido Socialista, el secretario de la CGT, delegados y activistas del gremio metalúrgico, etc.” (*Orientación*, marzo de 1942).

El 12 de febrero, el SOIM se entrevistó con el director del Departamento Nacional del Trabajo, Pellet Lastra, a quien manifestó su buena disposición a la negociación para el logro de alguna solución para sus reclamos:

Confiamos que los industriales comprenderán la justicia y lo modesto del pedido obrero y que elevarán los salarios en consecuencia. Los obreros no deseamos crear dificultades a la producción; solo queremos hacer frente a la enorme carestía de la vida con un pequeño aumento de salarios [... y concluyen advirtiendo] si los patrones no entienden razones, serán los culpables de la lucha obrera. (*Orientación*, febrero de 1942)

Tal vez porque subestimaban la fuerza del Sindicato Metalúrgico o bien por una actitud de habitual indiferencia hacia los problemas obreros, lo cierto es que el empresario de la rama no esperaba que la medida asumiese tal magnitud. En todo momento desconocieron la representatividad del gremio y se negaron a considerar siquiera el petitorio que les habían acercado. Así, por ejemplo, el 12 de marzo el Departamento Nacional del Trabajo había convocado a una reunión al SOIM y a la sección metalúrgica de la UIA. Luego de rechazar los empresarios el pedido obrero, Luis Colombo, presidente de esa institución, aconsejó a los industriales no negociar con los trabajadores y señaló: “no sentarse en una misma mesa con los obreros [...] son unos agitadores” (*La Vanguardia*, marzo de 1942).

Y hay más: la UIA, sección metalúrgica, elaboró un documento a modo de respuesta oficial al petitorio obrero en el que desconocía al SOIM como representante de los trabajadores metalúrgicos, se oponía a los aumentos salariales, ya que estos se habían llevado a cabo en 1930 (!),

y al otorgamiento de vacaciones pagas. Además, cuestionaba los siguientes ítems:

1. Personería efectiva de dicho sindicato para abrogarse la representación de los obreros metalúrgicos;
2. Improcedencia de un aumento general de salarios con sujeción a porcentajes fijos, sin tener en cuenta los ya efectuados en septiembre de 1930 [sic] y 3. Concesiones de vacaciones con arreglo a la ley 11.729 y consiguiente reconocimiento de la misma. [Firmado por la Cámara Argentina de Hojalatería Mecánica, cuyo vicepresidente era Miguel Miranda]. (*La Vanguardia*, marzo de 1942)

En cuanto al tema salarial, los obreros relativizaron los contenidos de la publicación empresaria y rechazaron sus argumentos. Empero, las principales patronales insistían en señalar los altos salarios que pagaban. Según este sector, el porcentaje general de aumentos para las diversas categorías de trabajadores se elevaba a más del 19,5%. Sin embargo, la mayoría de ellos no ganaban esas cifras. Sucedió que ciertos valores salariales, como en este caso, eran acordados entre el gobierno y la UIA (en algunas circunstancias se sumaba el gremio); pero en muchas ocasiones estos “convenios” eran desconocidos por la base empresarial, desatendiendo los acuerdos de su organización.⁵

De todos modos, la mayor parte de los aumentos anunciados por el empresariado, según opinión del sindicato, fueron acontecimientos minoritarios y aislados de la situación salarial general del sector. Así, por ejemplo, la sección

5 Recordemos que no solo las organizaciones obreras eran débiles en estos tiempos, sino que la patronal también se encontraba en un proceso de transición organizativa que en algunos casos debió ser alentado por el propio Estado.

mecánica de la empresa Siam Di Tella otorgó aumentos “debido a que los obreros, como ganaban poco, se iban a otro taller” (Archivo Siam).

El 28 de mayo, los trabajadores metalúrgicos, cansados de esperar alguna respuesta positiva de los empresarios, realizaron una huelga general de veinticuatro horas. El motivo era el incumplimiento de lo demandado en el petitorio. Surgieron, luego, conflictos parciales debido a la intransigencia patronal, que en algunos casos se expresó en represalias sobre los huelguistas. Frente a esta situación el clima era tenso. Los metalúrgicos reclamaban aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo con los mismos argumentos que los obreros de la construcción, los sastres y los empleados de comercio.

A pesar de los reclamos, “siguen pasando los días y el problema no tiene adecuada solución”, nos dice el 17 de junio *La Vanguardia*. Ese mismo día el SOIM reafirmó su advertencia: “Los obreros metalúrgicos pararemos el 26 si no hay respuesta a nuestros reclamos” (*La Vanguardia*, junio de 1942).

Paralelamente, el sindicato realizaba gestiones en todos los niveles. El 19 de junio se entrevistó con el presidente del Senado, Robustiano Patrón Costa, y con el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Vicente Solano Lima. En todas las oficinas recorridas la respuesta fue la misma: “Entendemos sus reclamos, pero la forma de resolverlos no es con huelgas”. Se les pedía tiempo y paciencia. Por su parte, los empresarios complicaban cualquier intento negociador de los poderes políticos. Emitían declaraciones donde resaltaban las “óptimas condiciones salariales” de los obreros metalúrgicos y se negaban rotundamente a negociar con el SOIM. Esa actitud contrastaba claramente con la posición del gremio, que en todo momento expresó buena disposición para la negociación. Más aun, en varias

oportunidades buscaron la intervención del Estado para presionar a la patronal y conseguir sus demandas.

Pese a todo, bajo el gobierno de Castillo (1940-1943), los comunistas tuvieron pocas oportunidades para el diálogo. Ya no eran los tiempos del Frente Popular —bajo la presidencia de Roberto M. Ortiz (1938-1940)— cuando presionaban al Estado a través de la presentación de petitorios y demandas como medida para obtener sus reclamos:

Los dirigentes (comunistas) al igual que otros líderes obreros, iban con regularidad a pedir ayuda al gobierno [...]. En 1939, el sindicato de textiles controlado por los comunistas, presentó 311 asuntos a las autoridades nacionales y a la Provincia de Buenos Aires. Bajo Castillo estos canales fueron parcialmente cerrados. En 1941 y 1942 el DNT se rehusó a negociar con los gremios comunistas más importantes. (Horowitz, 1984: 280)

No obstante, y pese a que el gobierno de Castillo prefería reprimir a los comunistas antes que negociar con ellos, la solución del conflicto metalúrgico, como veremos luego, debió llegar con la intervención estatal.

Cabe aclarar que esta capacidad y la buena disposición al diálogo no alteraron ni modificaron el manejo autónomo y combativo de los gremios comunistas, al menos en un principio. Lo que sucedía era que esta corriente sindical, al igual que la mayoría de los sectores del movimiento obrero argentino, estaba incorporando al caudal de sus estrategias de lucha la presión sobre las estructuras del Estado para obtener sus reivindicaciones (Iñigo Carrera, 2004; Aricó, 1986).

Finalmente, el 26 de junio se realizó la asamblea metalúrgica que debió resolver un plan de acción a seguir por los/as

trabajadores/as frente a la intransigencia negociadora de la patronal. Más de 15.000 obreros/as metalúrgicos/as desbordaron el Luna Park: fue, sin duda, la concentración más importante que hubo realizado el SOIM hasta entonces; y donde sobresalió, particularmente, la presencia de mujeres metalúrgicas. *La Vanguardia* decía al respecto: “Fue un acto multitudinario [...] hubo una masiva presencia de mujeres, que hacían inequívocas exteriorizaciones de su decisión de apelar a la huelga para imponer las mejoras solicitadas” (junio de 1942).

Cabe mencionar que, por esos años, tanto el SOIM como luego lo hizo la CGT reclamaban que “las mujeres metalúrgicas debían percibir la misma retribución que los hombres, si realizan la misma tarea”, y señalaban que “esta medida debía extenderse a todas las mujeres de la industria” (*La Vanguardia*, agosto de 1942).

Como en buena parte de las luchas obreras que involucraban a trabajadoras mujeres, las demandas para este sector no solo eran habitualmente relegadas por las diferentes patronales, sino también eran, en muchas circunstancias, tardíamente incorporadas por las representaciones gremiales en sus pliegos de lucha. El caso del sindicato metalúrgico, bajo la conducción comunista, evidenció una atención particular a las demandas de las trabajadoras. Aunque, como afirman numerosos trabajos sobre representación gremial y género, las organizaciones sindicales fueron reticentes a hora de aceptar o promover delegaciones gremiales femeninas durante estos tiempos.⁶

En la asamblea del 26 se votó la moción presentada por uno de los oradores, “votándose por aclamación y por unanimidad,

6 Un interesante y actualizado artículo que problematiza la relación entre historiografía, movimiento obrero y género es “De la historia política a los estudios de género: la historiografía sobre el mundo del trabajo en el siglo XX”, de Ludmila Scheinkman (*Trabajo y Sociedad*, núm. 33, Santiago del Estero, 2019).

entre manifestaciones de entusiasmo, la huelga hasta la obtención de sus reivindicaciones” (*La Vanguardia*, agosto de 1942). Esta medida fue impulsada por la totalidad de las regionales presentes: Capital Federal, Avellaneda, Quilmes y San Martín, entre otras.

Muzio Girardi, secretario general del gremio, fue el encargado de fundamentar la decisión ante la asamblea: reclamó mejores salarios y recalcó el “sentimiento patriótico elevado del obrero metalúrgico”, deseando que no se parase la producción. Rescató, asimismo, que los trabajadores habían buscado la conciliación y el arbitraje, proponiendo como árbitros a ministros del Poder Ejecutivo y a otras personas que no podían ser tachadas de izquierdistas; pero criticó a las patronales metalúrgicas:

Los industriales se han negado a sentarse a una misma mesa a discutir, tomaron represalias y se encerraron en el terreno de la intransigencia [...] incluso llegaron a decir que no depondrían su actitud ni aun cuando se lo pidiera el Presidente de la Nación. (Girardi, 1994)

Ante esa respuesta, los/as obreros/as no tuvieron otra alternativa que la huelga, según señala uno de los trabajadores que participó en aquella jornada. Años después, el propio Girardi nos recordaba algunas de las circunstancias —y estrategias de la dirigencia— que rodearon al mitin obrero del 26 de junio de 1942:

La táctica era que nosotros no declaráramos la huelga. La huelga la tiene que declarar la asamblea. No la dirección. Entonces hablando, el delegado tal va echando leña al fuego [...] Ya hay clima de lucha [...] y empiezan en la tribuna y van gritando: ¡Huelga! ¡Huelga! [...] bueno usted va tomando eso y dice: Sí,

ihuelga! pero para [hacerla] hay que defenderla [...] porque para ir a la huelga no es como ir a tomar mate. A cada rato yo tenía que intervenir para explicar algunas cosas, de esta manera vamos ganando gente [...] estaban enardecidos [...] querían la huelga. (Girardi, 1994)

La huelga se extendió durante dieciocho días. Los/as trabajadores/as, en ese tiempo, debieron sufrir por parte de la patronal y del gobierno todo tipo de presiones, despidos, suspensiones y cárcel para la dirigencia del gremio y sus delegados. Muzio Girardi, su secretario general, fue detenido en dos oportunidades durante la protesta.

Tampoco los grandes medios de prensa estaban a su favor. Por ejemplo, el diario *La Nación* durante todo el conflicto suministró información sumamente escueta de lo que ocurría. El 28 de junio publicaba una solicitada de la UIA que denunciaba los motivos de la huelga y reclamaba la vuelta al trabajo. El diario no expresó en ningún momento la opinión de los/as trabajadores/as, aunque sí informaba acerca de las disposiciones de seguridad y orden que estaban tomando el gobierno y los empresarios para garantizar la libertad de trabajo. Recién con la finalización del conflicto y la vuelta al trabajo, *La Nación* se explayó con algo más de interés sobre la cuestión:

En el estadio de la Federación de Box, se realizó ayer la asamblea extraordinaria convocada por el Soim [...] la reunión se realizó con una cantidad extraordinaria de trabajadores de esta industria [...] y decidió reanudar hoy el trabajo de todos los metalúrgicos. (*La Nación*, julio de 1942)

Las adhesiones a la lucha de los/as metalúrgicos/as en el plano político-sindical llegaron, sobre todo, de los gremios comunistas (construcción, gráficos y trabajadores del vestido, entre otros). Sin embargo, a medida que el conflicto se extendía, otros gremios, que no eran comunistas, fueron adhiriéndose al reclamo metalúrgico. Ejemplo de ello fueron el Sindicato de Gastronómicos, los Obreros Unidos de la Cerámica, el Sindicato Obrero de Peluqueros y Peinadores, Unión Obreros de la bebida y anexos, entre otros.

Por su parte, la CGT, dominada por los socialistas, demoraba su pronunciamiento sobre la huelga. Recién el 8 de julio, a seis días de la finalización de la medida de fuerza, este organismo trató el tema. Al respecto, *La Vanguardia* publicaba una nota en la cual intentaba justificar la demora en el pronunciamiento de la central obrera (*La Vanguardia*, julio de 1942).

Sobre el final del conflicto, la CGT emergió como mediadora entre los trabajadores/as metalúrgicos/as y las autoridades. Entre tanto, la dirigencia del SOIM continuaba desplegando todo un arsenal de estrategias para ganar la huelga: por un lado, procuraba fortalecer el espíritu de lucha de los huelguistas y apoyarlos materialmente a través de la creación de un fondo de huelga y de la solidaridad de varios gremios; y por otro, buscaba llevar la problemática de sus reclamos hacia los poderes políticos de peso. Así, propusieron la formación de una comisión arbitral integrada por empresarios, trabajadores y la Iglesia (invitaron al monseñor Miguel D'Andrea), mientras que el Departamento Nacional del Trabajo (DNT) intentaba mediar en la situación. El tema también llegó al Congreso de la Nación: el 6 de julio, el diputado socialista Silvio Ruggeri planteó en la Cámara Baja un pedido de investigación sobre las causas del conflicto metalúrgico y puso énfasis en atender a las irregularidades salariales y a las condiciones de trabajo.

Paralelamente, los empresarios continuaban con su intransigencia, a pesar de los intentos del DNT por encontrarle una salida.

A pesar de la radicalidad inicial, a medida que pasaban los días sin resoluciones concretas, la huelga comenzaba a debilitarse. Diversas fueron las circunstancias que provocaron esta situación: las presiones del gobierno de Castillo, la intransigencia del empresariado (decían que solo iban a negociar con el gremio si levantaba la medida de fuerza), la actitud conciliadora y moderada de la CGT y la posición que asumió el Partido Comunista, que si bien en el inicio apoyó la huelga, al final de ella planteó la necesidad de acordar la suspensión de la medida. Girardi, años después, sostuvo al respecto:

El Partido se puso a favor de la huelga. Apoyó con todo el activo [... Sin embargo] la huelga no se podía mantener con el solo apoyo del Partido [...] además después de quince días de huelga ya no podía [...] me dijo Codovilla: nosotros no podemos estar permanentemente sosteniéndoles la huelga, hay que darle curso. (*La Vanguardia*, julio de 1942)

Los acontecimientos se aceleraban. El sindicato convocó a una asamblea para el día 13 “para considerar la vuelta al trabajo” según adelantaba el día anterior al mitin el diario *La Vanguardia* (julio de 1942). Y eso ocurrió al día siguiente: la asamblea obrera decidió suspender la huelga, tras dieciocho días de lucha y con el objetivo de reanudar las negociaciones. Esperaban obtener los aumentos requeridos, las vacaciones pagas y el mejoramiento en las condiciones de trabajo.

El SOIM condicionó la continuidad de la suspensión de la huelga a la reincorporación de todos los obreros despedidos

y suspendidos. La CGT, por su parte, asumió la intermediación entre los/as trabajadores/as y la patronal.

La huelga había terminado pero el conflicto continuaba. Contrariamente a lo que se habían comprometido los empresarios, las mejoras salariales no llegaban. E incluso en empresas muy importantes se profundizaban reformas managerialistas con la finalidad de racionalizar los términos productivos e intensificar el rendimiento obrero. Esto, para los trabajadores, significaba solo una cosa: empeoramiento de sus condiciones laborales.

Durante todo el mes de agosto, la patronal respondió con masivos despidos y suspensiones: “la empresa Torres y Tali, de Quilmes, suspendió a 2000 obreros; San Martín de Avellaneda, a 200; en Borati y Cristófano, a 20; en IMPA, a 500. Di Tella suspendió nada menos que a 1500 obreros metalúrgicos” (Girardi, 1994). Y la lista continuaba...

Esta actitud generó inmediato desconcierto entre los trabajadores/as y, especialmente, en la dirigencia. Por su cuenta, algunas fábricas suspendieron el trabajo en solidaridad con sus compañeros/as despedidos/as. El SOIM, por su parte, denunció a los industriales que se “oponen a cumplir con las pautas del acuerdo entre el gremio y el gobierno, colocándose así, contra el propio gobierno de la Nación y contra los intereses del país” (*Orientación*, julio de 1942).

La CGT, a través de sus representantes Carlos Almarza y Mariano Cianciardo, se entrevistó con el asesor legal del Ministerio del Interior. El objetivo era gestionar la reincorporación de los despedidos y suspendidos (*La Vanguardia*, julio de 1942). Los resultados no fueron los deseados por la dirigencia gremial: el sector empresarial se negó a modificar su política de intransigencia consistente en “no reincorporar a los obreros que hubieran participado en la huelga” (*La Vanguardia*, julio de 1942). La “solución”, a modo de colroario, llegó con el arbitraje estatal: el 20 de agosto, luego

de inexplicables dilaciones y resistencias por parte de la patronal, el Departamento Nacional del Trabajo expidió un laudo ministerial por el cual se le otorgaban a los trabajadores metalúrgicos algunas mejoras en sus salarios:

Que en cuanto a la variación del costo de vida es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta en todo acto de regulación del nivel de los salarios [...] esta proporción es aproximadamente de un 10% desde enero de 1941 a julio de 1942, por lo cual resultaría justo que los salarios experimenten un aumento paralelo. (*La Vanguardia*, agosto de 1942)

El SOIM convocó a una asamblea en el estadio Luna Park. En ella, los/as trabajadores/as metalúrgicos/as resolvieron aceptar el laudo:

Si bien el laudo no reúne las aspiraciones pedidas (el aumento salarial otorgado estaba por debajo de lo solicitado y no hubo una respuesta concreta sobre la reincorporación de despedidos y suspendidos), significa un avance en la situación de los obreros metalúrgicos. (*Orientación*, agosto de 1942)

Esta era la caracterización del resultado de la huelga realizada por los dirigentes comunistas del SOIM. Sin embargo, no todos los sectores políticos del gremio estuvieron de acuerdo en la suspensión del conflicto y en los logros obtenidos. Para algunos dirigentes, la resolución de la medida no había sido lo más adecuado para los intereses obreros: “las cosas no estaban tan claras al final de la lucha de 18 días” (Perelman, 1962).

Lo cierto es que en el laudo nada se decía sobre el pedido de mejoras en las condiciones de trabajo y menos acerca de la suspensión por parte del empresariado de las medidas

de organización científica del trabajo que muchas empresas ya habían comenzado aplicar, como la Siam, Catita y Tamet, por ejemplo.⁷

Lo que sí quedaba claro era que para la suspensión de la medida fue necesario el arbitraje del Estado. Los obreros solicitaron su intervención como última chance de presión sobre la intransigencia patronal y los empresarios aceptaron la intermediación porque sintieron que con ella lograrían detener la prolongada huelga.

Consecuencias del fin de la huelga metalúrgica⁸

La etapa anterior al peronismo se caracterizó desde la perspectiva de las relaciones entre el Estado y los sindicatos por la intervención de las autoridades como árbitro o mediador entre los gremios y los empresarios en conflicto. Sin duda, las intenciones del Estado se basaban en evitar el desencadenamiento de graves convulsiones sociales que pusieran en peligro las bases del sistema. Por ello, la participación y búsqueda de soluciones en esa época surgió generalmente luego de grandes huelgas (Gaudio y Pilone, 1983).

De este modo, el Estado asumió el carácter de intermediador de los problemas sociales y normativizador de un tipo de relaciones tomadas como “privadas” y, por lo tanto, pertenecientes al ámbito de la sociedad civil. Según los registros que apuntan Ricardo Gaudio y Jorge Pilone, las políticas de mediación y negociación colectiva con

7 En el caso de la Siam, desde 1941, a partir de los acuerdos con la Westinghouse, la empresa llevó a cabo las reformas que, según anunciaba el informe titulado “Plan Reynders”, implicaban una intensificación del tiempo de trabajo sin garantizar mejoras en las condiciones de desempeño laboral. *Cfr.* Archivo SIAM-UTDT.

8 Para una crónica de la huelga de 1942 puede consultarse Elisalde (1995) y también Gurbanov y Rodríguez (2007).

intervención del Estado comenzaron a ser de importancia a partir de 1935-1936. En la mayoría de los casos, la fórmula conciliatoria que encontraba el Estado se expresaba en los laudos. Un ejemplo de esta fórmula fue el laudo ministerial aplicado en el conflicto de los metalúrgicos.

Esta estrategia de presión gremial sobre el Estado llevado adelante por el sindicalismo comunista⁹ no se interrumpirá en las décadas siguientes; incluso con el advenimiento del peronismo se presentará como una continuidad y no una ruptura en las experiencias de lucha del movimiento obrero argentino.

En la resolución y balance final del conflicto metalúrgico de 1942 coinciden globalmente tanto la CGT como el SOIM. Empero, no todas las opiniones del campo gremial estuvieron de acuerdo. Un grupo de obreros metalúrgicos encabezado por Ángel Perelman —dirigente del SOIM en los años cuarenta— planteó su oposición al laudo: entendían que las cuestiones fundamentales que habían impulsado la huelga de dieciocho días no se lograron. “El aumento que se consiguió fue de apenas el 10%, y las vacaciones pagas que pedíamos ni figuraban en el laudo [y las condiciones de trabajo ni siquiera se modificaron]” (Perelman, 1962). Esta controversia con el secretario general del SOIM, Muzio Girardi, expresó no solo el debate por la resolución que tuvo el conflicto sino que opuso opiniones, criterios y tácticas de dos proyectos de sindicalización radicalmente opuestos.

La postura de Perelman —según la conducción comunista del SOIM— siguió una línea pragmática y economicista, es decir, una política de organización gremial basada en el mantenimiento de estructuras sindicales, dispuestas a la presión y luego a la negociación con los poderes gubernamentales de turno.

9 Concepto desarrollado por el entrevistado en: *Entrevista a Vicente Marischi* (1994).

La otra postura —señalaba Girardi— la representó el sindicalismo comunista, sector del gremialismo que se caracterizó por tener una gran capacidad organizativa. Los comunistas se apoyaron en las estructuras del partido para llevar a cabo su tarea de sindicalización. Célula partidaria y gremio actuaban en forma conjunta.

Sin embargo, el contexto histórico de aquellos años va a influir de manera destacada en el proceso de organización sindical y especialmente en sus concepciones políticas. Durante la época de los frentes populares (desde fines de los años treinta), los comunistas adoptaron la estrategia de priorizar la organización de la fábrica más importante de un barrio determinado. Se aseguraban que en ella hubiera buenos dirigentes, colocaban miembros del partido en la industria elegida y, luego, si demostraban capacidad, se los ascendía hasta los niveles más altos en la responsabilidad de la organización sindical. Esta “fracción” de dirigentes sindicales —así la llamaban los comunistas— era la responsable política ante el partido.

El enfrentamiento entre las posiciones de Perelman y Girardi fue evidente, también, en la caracterización que cada uno de los sectores realizó sobre el momento político en que se desarrolló la huelga. Ángel Perelman caracterizaba de este modo el comienzo del conflicto:

Más de 15.000 obreros metalúrgicos ante el terror de los dirigentes comunistas proclamaron la huelga general. El movimiento duró dieciocho días. Muzio Girardi y su grupo de comunistas ofrecía públicamente a las empresas “democráticas” la solución del conflicto en aras de la lucha contra el nazismo [se refiere a los intentos de acercamiento político a Di Tella por parte de la dirigencia del comunismo]. (1962)

El marco político de la huelga, como se sabe, estuvo signado por la Segunda Guerra Mundial; su influencia en nuestro país significó la división de las fuerzas políticas y sindicales en “pro-aliados” y “nazi-fascistas”. A la primera posición adhirieron, a partir de 1941, los comunistas, quienes llamaron a este alineamiento “bloque democrático”. A este grupo se sumaron también empresarios, como por ejemplo Torcuato Di Tella, “supuestamente” en representación de la “burguesía nacional” (Elisalde, 2001).

Así, Perelman no solo denunciaba las tácticas políticas de la conducción del SOIM y del comunismo argentino, sino que también criticaba aspectos importantes de los resultados de la huelga:

La comisión [mediadora que arbitró sobre el conflicto] estuvo formada por el Dr. Alfredo Palacios [...] M. D'Andrea, el obispo de las elegantes señoras de la sociedad, otro “democrático”; y finalmente, el ministro del interior, Culicciati, técnico del fraude y la represión policial. (Perelman, 1962)

La postura del sector sindical crítico se centraba en que las intenciones de los dirigentes comunistas eran la de levantar “en el acto” la huelga si el gobierno aceptaba la constitución de la mencionada comisión mediadora:

Pero el ministro resolvió el conflicto a su manera: llamó a los dirigentes comunistas y les dijo que o levantaban la huelga o los mandaba a todos al Sur. Ante esta actitud gubernamental los prudentes dirigentes comunistas convocaron a una Asamblea general del gremio que dividieron en dos partes: una se celebró en la Federación de Box de la Capital y otra en el cine

Rivas de Avellaneda. Esas dos asambleas se celebraron con tan solo la anticipación de 24 hs. (Perelman, 1962)

La cuestión principal que subyace a las objeciones que formuló Perelman era que los comunistas tuvieron, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, una actitud de abandono de las reivindicaciones gremiales, privilegiando políticas de apoyo a los intereses de los “aliados” y sus necesidades para triunfar en la guerra.

Generalmente, este tipo de interpretaciones toman como ejemplo la actitud de los comunistas en gremios como el de la alimentación. Allí trataron de evitar los conflictos debido a que la producción de carnes y alimentos podía ser útil para la provisión de los ejércitos aliados. A pesar de ello, no hay suficientes pruebas que avalen la idea de que este tipo de decisiones hayan significado la única causa de la debilidad del comunismo hacia mediados de los años cuarenta. Esta aseveración encuentra un mayor cuestionamiento en el caso del conflicto metalúrgico de 1942. Por las características del sector industrial, la metalurgia y su producción en la Argentina no eran necesarias para las fuerzas aliadas, a diferencia de la exportación de carnes. Es por ello que “parar” las fábricas de este sector poco podía afectar a los intereses de la lucha antifascista. En todo caso, lo magro de la obtención salarial y las escasas modificaciones en las condiciones de trabajo —avance en las reformas modernizantes de base taylorista-fordista en las plantas— pueden ser algunas de las razones más destacadas a tener en cuenta en la evaluación final del conflicto.

La creación de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la disolución del SOIM

El 24 de abril de 1943 se crea un nuevo gremio metalúrgico: la Unión Obrera Metalúrgica. Nació como resultado de la escisión del Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica y su origen, según afirman sus propios fundadores, estuvo estrechamente ligado a los resultados de la huelga de 1942. La propia CGT avaló en su momento la existencia de la nueva representación:

En una entusiasta reunión de obreros de los principales establecimientos metalúrgicos de la Capital Federal y localidades circunvecinas [...] se aprobó, por unanimidad lo siguiente: Bajo la denominación de Unión Obrera Metalúrgica constituyose [...] una entidad gremial formada por empleados y obreros, sin distinción de sexos, de los establecimientos metalúrgicos [...] son sus propósitos representar al gremio ante los poderes públicos, los empleadores, las demás organizaciones de trabajadores, etc. (*La Vanguardia*, 1943)¹⁰

En la opinión de Perelman, las pésimas condiciones en las que terminó la huelga de 1942 impulsaron a “varios compañeros mecánicos [...] afiliados socialistas [...] disconformes con la orientación del partido comunista de nuestro gremio” a la creación del nuevo sindicato metalúrgico.

El nuevo agrupamiento contó con el apoyo de una de las dos CGT, que desde 1936 se encontraba dividida en la CGT n.º 1, con predominio socialista y sindicalista, y la n.º 2, con fuerte presencia comunista y otro sector socialista.

10 “Con ardor sin precedente constituyose la UOM”, tituló *La Vanguardia*, en abril de 1943, sobre la formación del nuevo gremio metalúrgico.

La Unión Ferroviaria les facilitó su sede a los nuevos dirigentes de la UOM (Perelman, 1962).

Como es de suponer, la opinión de los dirigentes comunistas del SOIM era radicalmente opuesta y crítica a la creación del nuevo sindicato; así lo manifestaba el propio Muzio Girardi: “En sindicato [se refiere a la UOM] se crea con todos los restos que quedan por ahí anticomunistas [...]. Y algunos trotskistas que andaban por ahí, como ese bandido de Perelman” (Girardi, 1994).

Lo cierto es que más allá de las críticas de Girardi, la UOM —y no el SOIM— estuvo destinada a perdurar en el tiempo y erigirse a partir de la década de 1940 como el único gremio representante de los trabajadores metalúrgicos.

Diversos fueron los factores que explican la continuidad del sindicato creado por Perelman y un grupo de metalúrgicos de diferentes extracciones políticas, pero, sin duda, ninguna de ellas podría comprenderse si no se tiene en cuenta la existencia de procesos políticos de cambios que se estaban desarrollando en esta etapa.

Por un lado, el enfrentamiento surgido entre sectores sindicales dentro del SOIM, especialmente luego de los resultados de la huelga de 1942, argumentado —según la oposición— por la decisión de los delegados comunistas de suspender la medida.

Se suma a esto el golpe militar nacionalista de 1943, que persiguió políticamente al comunismo. La mayoría de los dirigentes sindicales de esta tendencia fueron encarcelados, entre ellos el secretario general del SOIM, Muzio Girardi.

Otro proceso habitualmente citado por la historiografía es el crecimiento de los “sindicatos paralelos”¹¹ a los gremios

11 Los gremios paralelos fueron un fenómeno común en esos años; surgieron a partir de las diferencias políticas entre socialistas y comunistas, especialmente en los años treinta y cuarenta. La UOM fue un claro ejemplo de ello (Del Campo, 1983).

conducidos por los comunistas. En este caso, cabe aclarar que la UOM fue creada antes del golpe de 1943 y por un sector de disidentes socialistas (y sindicalistas revolucionarios) que, como fue señalado, denunciaba la política acuerdista del comunismo por promover la suspensión de varios conflictos que contaban con su decisiva presencia o dirección.

Hacia fines de 1943 y en los años sucesivos, la UOM obtuvo el reconocimiento “como el único gremio del sector” por parte de la CGT y por la mayoría de los obreros del sector (*Boletín CGT*, 1942). En 1945, el SOIM ya no tuvo más posibilidades de continuar existiendo. A pesar de la resistencia de algunos de sus dirigentes, su disolución oficial no fue más que el reconocimiento de una realidad que pesaba por igual en todos los sindicatos comunistas. La UOM comenzaba a erigirse como el único gremio representante de los trabajadores metalúrgicos.

Reflexiones finales

Es habitual en la historia del movimiento obrero argentino la mención y el análisis de los grandes períodos huelguísticos durante 1930 y 1940. Generalmente, las explicaciones historiográficas acerca de las razones que motivaron estos movimientos sostienen que los trabajadores impulsaron conflictos por reivindicaciones salariales, por la legitimación de sus gremios o por la búsqueda de mejoras en sus condiciones de trabajo.¹² Sin negar estas motivaciones que fueron centrales, entendemos que también existieron otros factores claves de incorporar al análisis, en este caso, ligados al permanente proceso de resistencia obrera frente a las

12 Para una panorámica de las producciones historiográficas del período sobre el movimiento obrero argentino *cf.* Camarero (2013).

estrategias del capital por lograr un mayor control del trabajo, con la pretensión de lograr una mayor productividad a partir de la aplicación de planes de racionalización productiva, tal como lo demuestra la evidencia empírica presentada por numerosas investigaciones relacionadas, en particular, en las firmas metalúrgicas de mayor volumen del sector (Doyon, 1970; Schiavi, 2016; Elisalde, 2001 y 2020).

En un proceso de acumulación capitalista sin redistribución de ingresos y pésimas condiciones laborales, tal como lo denunció el gremio, los/as obreros/as metalúrgicos/as impulsaron en 1942 un proceso huelguístico que se intensificó hacia mediados de ese año y que tuvo como consecuencia una fuerte represión empresaria a través de despidos y denuncias.

Los/as trabajadores/as metalúrgicos/as adhirieron en forma contundente a la medida de fuerza, acordaban con los reclamos generales del conflicto y repudiaban de manera explícita las nuevas estrategias de producción e innovación tecnológica que las grandes firmas comenzaban a aplicar.

La huelga tuvo un desarrollo y una organización intensa sobre todo en las grandes firmas como Impa Catita, Tamet, Siam. Muchos de los dirigentes medios del sindicato metalúrgico eran trabajadores/as de estas empresas y el apoyo obtenido —al decir de las fuentes de las propias patronales y obreras— fue contundente a lo largo de todo el conflicto. La respuesta de la patronal fue aplicar despidos y suspender nada menos que a más de un millar de obreros/as metalúrgicos/as. Esta actitud generó inmediato desconcierto y rechazo entre los trabajadores, especialmente en la dirigencia que había impulsado la finalización de la huelga. Por su cuenta, algunas fábricas suspendieron el trabajo en solidaridad con sus compañeros/as despedidos/as, y el SOIM denunció a los industriales que no aceptarían los acuerdos arribados si estos tomaban represalias con los/as

huelguistas.¹³ El fin de la huelga metalúrgica dejó un sabor amargo entre los trabajadores, los salarios no fueron los esperados y la ofensiva patronal generó mayores despidos. Esta situación profundizó el fuerte enfrentamiento dentro de la organización del SOIM que llevó a la división del gremio y al surgimiento de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en mayo de 1943.

Bibliografía

- Aricó, J. (1986). "Los comunistas y el movimiento obrero", en *Revista Ciudad futura*, N° 4.
- Camarero, H. (2013). Antiguas controversias, nuevos enfoques: clase obrera, sindicalismo y comunismo en la Argentina durante la primera mitad del siglo XX. Un estado de la cuestión. *PolHis*, año 6, núm. 11, primer semestre.
- Del Campo, H. (1983). *Sindicalismo y peronismo*. Buenos Aires, CLACSO.
- Doyon, E. (1970). *Perón y los trabajadores*. Buenos Aires, Solar-Hachette.
- Elisalde, R. (1995). El sindicalismo preperonista: de la huelga metalúrgica de 1942 a la creación de la UOM. *Realidad Económica*, núm. 135.
- Gaudio, R. y Pilone, J. (1983). Estado y relaciones laborales en el período previo al surgimiento del peronismo 1935-1943. *Desarrollo Económico*, vol. 2, núm. 9.
- Gurbanov, A. y Rodríguez, S. (2007). La huelga metalúrgica de 1942 y la crisis de la dirigencia comunista en los orígenes del comunismo. *Nuevo Topo*, núm. 4, septiembre-octubre.
- Horowitz, J. (1984). Ideologías sindicales y políticas estatales en la Argentina, 1930-43. *Desarrollo Económico*, núm. 24, vol. 94.
- Iñigo Carrera, N. (2004). La estrategia de la clase obrera, 1936. Buenos Aires, Asociación Madres de Plaza de Mayo.

13 "Denunciamos a los empresarios que oponen a cumplir con las pautas del acuerdo entre el gremio y el gobierno, colocándose así, contra el propio gobierno de la Nación y contra los intereses del país". En *La Vanguardia*, julio de 1942.

- James, D. (1990). *Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Montgomery, D. (1989). *El control obrero de la producción*. Madrid, Ministerio de Trabajo.
- Perelman, A. (1962). *Cómo hicimos el 17 de octubre*. Buenos Aires, Coyoacán.
- Scheinkman, L. (2019). De la historia política a los estudios de género: la historiografía sobre el mundo del trabajo de la primera mitad del siglo XX. *Trabajo y Sociedad*, núm. 33. Santiago del Estero.
- Schiavi, M. (2008). *La resistencia antes de la resistencia. La huelga metalúrgica y las huelgas obreras de 1954*. Buenos Aires, El Colectivo.
- Torre, J. C. (2006). *La vieja guardia sindical y Perón*. Buenos Aires, Untref.

Fuentes

Archivo Siam. Biblioteca Universidad Di Tella.

Boletín de la CGT, abril de 1942.

El Obrero Metalúrgico, mayo de 1941.

La Nación, julio de 1942.

La Vanguardia, abril, junio, julio y agosto de 1942.

La Vanguardia, abril de 1943.

Orientación, febrero, marzo, julio y agosto de 1942.

Entrevistas¹⁴

Adolfo Dorfman (1995). *Realidad Económica*, núm. 132.

Muzio Girardi (1994). Mimeo.

Vicente Marischi (1994). Mimeo.

14 Entrevistas realizadas por Roberto Elisalde.

Capítulo 4

17 de octubre de 1945

La lucha democrática de la clase obrera argentina

Nicolás Iñigo Carrera

Rupturas y continuidades

La importancia de la huelga general con movilización de masas a la que nos vamos a referir en este capítulo ha sido bien sintetizada como el momento en que “por primera vez en nuestra historia, una movilización de la clase obrera determinaba así un cambio sustancial en la situación política nacional” (del Campo, 2005: 321). El surgimiento del peronismo abrió un gigantesco proceso de ciudadanía¹ a la vez que implicó un profundo cambio en la composición de las fuerzas políticas que llevaba a que quienes se habían enfrentado durante décadas pasaran a formar parte de una misma fuerza y se enfrentaran con quienes habían compartido su militancia. Ambos hechos explican el énfasis de la historiografía en la ruptura que significó el surgimiento de ese movimiento político.

1 Las organizaciones sindicales que a comienzos de la década de 1940 tenían alrededor de 400.000 afiliados incrementaron ese número a más de dos millones diez años después. En 1916 solo participó de las elecciones presidenciales el 15% de la población considerada en edad de trabajar; en 1946 lo hizo el 25% y en 1951 el 60% de esa población.

Sin embargo, si se centra la observación en la estrategia de la clase obrera, que tiende a ser invisibilizada para reducir el proceso histórico a las distintas estrategias de las clases dominantes, cabe preguntarse cuánto de ruptura y cuánto de continuidad hubo en ese momento, que encuentra su base material en el desarrollo del capitalismo predominantemente en extensión, con el consiguiente proceso de atracción de población y la consolidación de las relaciones salariales, propias del desarrollo del dominio del capital industrial, proceso que se prolongó hasta los años sesenta del siglo XX.

Los hechos de octubre de 1945, considerados como parte de un proceso histórico más prolongado, permiten abordar este problema.

Génesis y formación de un movimiento social de oposición

El gobierno encabezado por el general Uriburu, surgido del golpe de estado del 6 de septiembre de 1930, tuvo como uno de sus objetivos destruir las organizaciones obreras más radicalizadas y subordinar al resto. La fusión, poco después del golpe de estado, de la Confederación Obrera Argentina (COA) y la Unión Sindical Argentina (USA) en la Confederación General del Trabajo, conducida por la corriente sindicalista, enemiga de los partidos políticos, le permitió al nuevo gobierno encontrar un interlocutor en el campo obrero, relación que se prolongó con fluidez en el gobierno del general Justo hasta 1935. Los sindicatos más importantes y consolidados — que por su posición en la actividad productiva tenían la capacidad de paralizar la circulación de mercancías, incluyendo el comercio exterior y las comunicaciones, como los ferroviarios— contaban con una fuerza y posiciones dentro de la sociedad que, a la vez que todos los gobiernos debían tomar en consideración, no

estaban dispuestos a arriesgar en una confrontación con ningún gobierno. Otros gremios, por su posición en la actividad productiva y su organización más reciente o más débil, no tenían esa capacidad. Esta diferencia fue el asiento material de dos estrategias que disputaron la conducción del movimiento obrero organizado en la primera mitad de los años treinta.² Si bien todos mantenían como meta en su discurso la instauración de una sociedad basada en la propiedad colectiva de los medios de producción, los organizados en la CGT y el Partido Socialista tenían como estrategia formar parte del sistema institucional, penetrándolo y reformándolo por la vía parlamentaria o la negociación sindical, mientras que los otros, organizados en la FORA, la FOLB, Autónomos, FACA, la Alianza Obrera Spartacus (anarquistas) o el CUSC (comunistas) expresaban una voluntad revolucionaria de superación inmediata del capitalismo.

Desde la instauración del gobierno de Uriburu comenzó la resistencia con las limitadas huelgas generales convocadas por la FOLB, algunas apoyadas por el CUSC, y en los reclamos y actos de los socialistas. Esa resistencia continuó frente al gobierno de Justo.

En 1932 se inició un momento ascendente de la lucha de la clase obrera y comenzó a gestarse un movimiento social en el que tuvo un lugar central el movimiento obrero organizado sindical y partidariamente, y en el que por momentos (huelgas generales de diciembre de 1932, agosto de 1933 y 7 y 8 de enero de 1936) se impuso la estrategia que utilizaba como medios de lucha la huelga general y la lucha callejera, logrando convocar a trabajadores organizados en sindicatos que no eran foristas, comunistas, espartaquistas o fauquistas. El mayor grado de unidad en la acción de los obreros se vio acompañado por la alianza con fracciones de

2 El tema está ampliamente desarrollado por Iñigo Carrera (2016).

pequeña burguesía personificadas en los estudiantes universitarios y secundarios, que también se movilizaron en las calles, y con algunos de los conspiradores yrigoyenistas que protagonizaron levantamientos armados.

Ese movimiento social de oposición tuvo un carácter popular —en tanto expresaba a los excluidos del poder político— y democrático —en tanto su meta era que más fracciones sociales pudieran influir en las cuestiones públicas—; y también antiimperialista en tanto se oponía a la dominación que Estados Unidos y Gran Bretaña ejercían sobre el país.

El antifascismo contribuyó a generar un mayor grado de unidad de la clase obrera. El ascenso de Hitler al gobierno de Alemania y la guerra civil española potenciaron esa línea de confrontación que pasó a ser un eje en una incipiente alianza social, que sumaba a quienes se declaraban anticapitalistas (fueran reformistas o revolucionarios), mayoritarios en el movimiento obrero, y liberales, con peso en el movimiento estudiantil e intelectual.

A mediados de la década puede señalarse un hito en el desarrollo del movimiento de oposición: si en los primeros años quienes se proclamaban revolucionarios disputaban la iniciativa, desde 1935-1936 esa iniciativa, seguida por la mayoría de la clase obrera organizada, la tuvo la alternativa de penetrar el sistema institucional y formar parte de él, reformándolo pero sin modificarlo de raíz. Su estrategia fue luchar dentro del sistema institucional político, mediante la negociación directa con el gobierno o por la vía electoral. Ese movimiento de oposición nunca pudo tomar forma en un frente electoral: en 1937 la UCR no aceptó formar un Frente Popular y en 1942 los partidos opositores no llegaron a acordar la constitución de una Unión Democrática Argentina.³

3 Si bien coincidían en el nombre y en muchos de sus componentes, esta primera Unión Democrática fue diferente de la que se conformó en 1945-1946.

La clase obrera organizada fue un pilar del movimiento de oposición al gobierno y sus políticas. El movimiento obrero tenía la fuerza necesaria para plantearse la cuestión del estado, aunque solo fuera en el terreno de lograr una igualdad político-jurídica con las clases dominantes, es decir, sin pretender poner en cuestión la raíz del sistema institucional, pero sí formar parte de él e influir en los asuntos públicos, tal como lo había planteado el Programa Mínimo de la CGT, publicado en 1932, con la demanda de intervención y contralor de la organización obrera en diversos organismos del Estado. Esta estrategia impulsaba la alianza con fracciones de otras clases sociales, también excluidas, en mayor o menor medida, del poder político.

Esta es la alianza social que se manifiesta en el acto del 1 de mayo de 1936. Detengámonos en este acto. Fue convocado por iniciativa de la CGT, que invitó a los partidos opositores al gobierno de la Concordancia, que respondieron formando parte de la Comisión Organizadora y llevando como oradores a sus principales dirigentes.⁴ En el acto central hablaron tres oradores en nombre de la CGT, tres por el PS, dos por la UCR, uno por el PDP, uno por el PC y uno (del PS) por la comisión organizadora; entre ellos, los ex candidatos presidenciales de la Alianza Civil, derrotados en la elecciones fraudulentas de 1931: Lisandro de la Torre (PDP) y Nicolás Repetto (PS). Los representantes de la CGT afirmaron la necesidad de que la central obrera tuviera como tarea participar en la solución de los problemas nacionales e internacionales, más allá de los referidos específicamente a las relaciones laborales y de los trabajadores.

4 Solo la UCR envió a dos diputados nacionales que no eran dirigentes de primera línea: Arturo Frondizi y Eduardo Araujo.

La convocatoria, de tono anticapitalista, además de la afirmación de las libertades democráticas, la condena al fraude electoral, la amnistía para los presos políticos, la libertad sindical, el cumplimiento de la legislación laboral, la elevación del nivel de vida de la clase trabajadora y el plan de emergencia de la CGT, reclamaba el control del capital financiero internacional y la lucha contra su política imperialista, la oposición a todo monopolio privado y finalizaba con una invocación a la paz, la libertad y la justicia social. El programa máximo de ese movimiento lo hemos sintetizado en tres banderas: la *independencia económica* frente a los países imperialistas, la *libertad política* frente a la opresión y el fraude electoral ejercidos por el gobierno nacional y las organizaciones filofascistas, y la *justicia social* frente a las condiciones económicas y sociales (Iñigo Carrera, 2000). La convocatoria, que según las fuentes de la época reunió cien mil manifestantes en Buenos Aires y miles más en las principales ciudades del país, tuvo una extensión nacional.

El hecho de que la CGT fuera la convocante nos indica que la clase obrera intentaba postularse como dirigente de una alianza que pretendía gobernar la nación y esto planteó la necesidad de fijar políticas que fueran mucho más allá de sus reivindicaciones económicas inmediatas. La meta de participar en el gobierno del estado-nación introdujo la necesidad de disputar el dominio de ese territorio con las potencias imperialistas y potenció el carácter antiimperialista del movimiento de oposición.⁵

5 El surgimiento de una "conciencia nacional" en el movimiento obrero se relaciona con la situación que atravesaba Argentina en la esfera de las relaciones de fuerza internacionales y con el lugar que el movimiento obrero fue ganando en las relaciones de fuerza políticas más que con una contraposición entre una "vieja" clase obrera, de origen europeo, que seguía a los partidos de izquierda, frente a una "nueva" clase obrera, de origen criollo, resultado de las migraciones internas, que se inclinaba a seguir un caudillo. Varias investigaciones (Baily, 1984; Matsushita, 1986; Calvagno, 2005) han mostrado que las organizaciones más importantes del movimiento obrero se habían

En su lucha por mejorar sus condiciones cotidianas de vida, tanto en el aspecto material como espiritual y moral, los trabajadores organizados fueron más allá de la defensa de los intereses económico-corporativos inmediatos para pasar a la defensa de sus intereses como conjunto de asalariados en tanto tales, esto es, como personificación de capital, como polo de la relación capital-trabajo asalariado. Habían superado su organización como “grupo profesional” para organizarse como “grupo social” (Gramsci, 1986), buscando la igualdad con las otras clases de la sociedad. Esto implicaba darle carácter político a la lucha y construir alianzas con fracciones sociales no obreras, sin salir de los límites de la sociedad capitalista.

Crisis y recomposición de las alianzas

La lucha entre las potencias imperialistas, principalmente Gran Bretaña y Estados Unidos, pero también Alemania, por ejercer su dominio, o al menos su influencia, tiñó la política argentina, cruzada por la confrontación entre los partidarios de entrar en la guerra junto a los Aliados y los partidarios de mantenerse neutrales, sea por simpatía con los países del Eje o por defender la histórica posición internacional de Argentina, que, de hecho, coincidía con la necesidad británica de abastecerse en un país neutral. A la vez, la nueva situación impuesta por el incremento en el desarrollo de la industria requería mantener las condiciones de protección del mercado interno generadas por la guerra.

“argentinizado” antes del surgimiento del peronismo. Por otra parte, el cambio en la orientación política de los dirigentes sindicales que provenían de la izquierda a dirigentes peronistas no se dio en 1943 sino a fines de 1947. A la vez, se produjo el abandono de la meta socialista sustituida por la “realidad efectiva que debemos a Perón”.

Esa fractura de la burguesía argentina recorrió toda la sociedad: cada uno de los bandos enfrentados convocó a otras fracciones sociales y, fundamentalmente, a los obreros. Y engendró el golpe de estado del 4 de junio de 1943,⁶ que afectó también al movimiento de oposición gestado en los años treinta, trastocando radicalmente las alianzas políticas y dando lugar a la emergencia de un nuevo movimiento político que abarcó a la mayoría de la clase obrera. La crisis política se resolvió en un gigantesco proceso de ciudadanización e institucionalización de la mayoría de la masa trabajadora.

El golpe de estado encontró al movimiento obrero dividido entre quienes planteaban una mayor vinculación con los partidos políticos opositores y un mayor involucramiento de la CGT en la política nacional (CGT n.º 2) y quienes, sin renegar necesariamente de los partidos, postulaban un mayor distanciamiento de ellos (CGT n.º 1). La Unión Sindical Argentina, fuertemente “apartidista”, la muy reducida FORA y los sindicatos autónomos completaban el mapa. Esta fractura de los cuadros del movimiento obrero puede dar cuenta transitoria, coyuntural, de un momento descendente de su lucha, pero el movimiento de largo plazo, iniciado en 1932, fue ascendente.⁷

A su vez, los cuadros militares necesitaban una base social para evitar la derrota de su “revolución” y, después de un fracasado intento con la UCR, la encontraron en el

6 El profundo desprestigio del gobierno, la ilegitimidad de su origen fraudulento, su política de subordinación al imperialismo y los negociados públicamente conocidos crearon el apoyo para el golpe de estado del 4 de junio de 1943. Sus autores se presentaron como los adalides de una regeneración ética del país y de una política nacionalista.

7 Situación diferente de lo ocurrido en Italia y Alemania de esos años en los que el triunfo del fascismo solo fue posible frente a una clase obrera derrotada. En Argentina, lejos de estar derrotada, la clase obrera constituía la columna principal de la nueva fuerza social triunfante y, por momentos, disputó la conducción de esa fuerza.

movimiento obrero, a la vez que apuntaban a evitar que ese movimiento estuviera conducido por socialistas y comunistas, aunque fuera por reivindicaciones económicas: no aceptaban el reformismo si era conducido por la izquierda, y el solo uso de la fuerza material no garantizaba esa meta.

El gobierno tomó algunas medidas populares (aumento salarial para los empleados públicos, rebaja de los alquileres, reglamentó el trabajo de los menores, salario familiar para los ferroviarios, otorgó créditos para los empleados estatales, rebajó los arrendamientos rurales y estableció el patrocinio jurídico gratuito), al tiempo que aumentó el control sobre los sindicatos prohibiéndoles toda ideología contraria “a los fundamentos de nuestra nación y al régimen jurídico social” establecido (del Campo, 2005: 182) e intervino los dos grandes sindicatos ferroviarios. En noviembre creó la Secretaría de Trabajo y Previsión, que debía fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral —función que el antiguo Departamento Nacional del Trabajo no tenía— al frente de la cual fue nombrado Perón, que estableció una relación con los dirigentes de los sindicatos que aceptaban dialogar con él o con las líneas opositoras cuando esto no ocurría; otros sindicatos fueron intervenidos. Sin embargo, difícilmente podría explicarse la adscripción de la mayoría de la clase obrera al peronismo por la represión a los dirigentes opositores.

Durante su gestión (octubre de 1943 - octubre de 1945) Perón dejó sin efecto la reciente reglamentación que subordinaba los sindicatos al aparato estatal, exigió a las empresas el cumplimiento de sus disposiciones y amplió la asesoría jurídica de la STP. Los sindicatos con mayor capacidad de presión obtuvieron muchas de sus variadas demandas. Por ejemplo, los ferroviarios lograron la licencia anual aumentativa, un subsidio para la construcción de su policlínico, un

plan de asistencia y previsión con sanatorio para tuberculosos, pago de los días feriados al personal a jornal, autorización para que maquinistas y señaleros pudieran usar anteojos sin que se les redujera la categoría y el sueldo, participación de representantes obreros en los tribunales médicos, aumento de sueldos al personal del puerto de Buenos Aires y La Plata, reincorporación de cesantes, participación en la Administración General de Ferrocarriles, inclusión de pensionados y jubilados en el régimen de previsión social ferroviario, devolución de retenciones al personal de los ferrocarriles del Estado, aporte estatal para las escuelas de maquinistas y fogoneros de La Fraternidad, anulación del laudo presidencial de 1934 y devolución de las retenciones hechas, en virtud de ese laudo, a los sueldos. Otros gremios lograron el estatuto del periodista y del personal civil de la Nación y el reconocimiento de la Unión Tranviarios como representante de los trabajadores del transporte urbano. Se resolvieron numerosos conflictos de “obreros del vidrio, de la carne, textiles, del mueble, del cartón, de la electricidad, de la alimentación, y de los astilleros, y [...] habían obtenido mejoras los metalúrgicos, lancheros, portuarios, del vestido, de la cerámica, escoberos, obrajeros del Chaco y petroleros” (del Campo, 2005: 209). Hubo aumento del salario mínimo para el personal de Obras Sanitarias, pago de jornales al personal de la administración pública los días de asueto, reglamentación de la forma de pago de los salarios, prohibición del trabajo femenino antes de las siete de la mañana, sueldo mínimo para operadores cinematográficos, aumento para los empleados judiciales, rebaja de los precios de los artículos de primera necesidad (2005: 218); incorporación del personal de las empresas de seguros, ahorro y capitalización en la caja de jubilaciones bancaria, aumento del salario mínimo en la industria del vestido, creación de la División del Trabajo y Asistencia a la Mujer en la STP,

comienzo de la construcción de un barrio para obreros en San Martín, reglamentación del trabajo de los telegrafistas, convenios de gráficos, marítimos, cartoneros, mejora de salarios y condiciones de trabajo para los panaderos, estatuto para los bancarios (del Campo, 2005: 228). En octubre de 1944 se estableció el Estatuto del Peón, que legislaba sobre una fracción obrera con poca capacidad de presión pero sujeta en muchos casos a condiciones laborales que implicaban relaciones personales cuasi serviles y generó una fuerte resistencia de las organizaciones empresariales rurales, que adujeron que rompía la disciplina y armonía entre patrones y obreros. En los quince meses posteriores a mayo de 1944 se firmaron cerca de 700 convenios, mientras que entre 1941 y 1943 se había firmado solo 400 (Torre, 1990). El resultado fue que entre 1944 y 1946 hubo una inversión en las tendencias de distribución del ingreso nacional. Más aún, se incorporaron dirigentes sindicales al Consejo Nacional de Posguerra y se crearon los Tribunales del Trabajo para la Capital y Territorios Nacionales.

Estas medidas fueron acompañadas de un discurso que fue cambiando para hacer cada vez más énfasis en el papel de los trabajadores: los “malos políticos”, las “ideologías extrañas”, los “agitadores a sueldo” desaparecieron del discurso de Perón, que se volvió contra los “intereses mezquinos” y la “oligarquía” y las apelaciones a “la unión del pueblo argentino” fueron reemplazadas por la contraposición entre “pueblo” y “oligarquía” (del Campo, 2005: 204). Fracasados los intentos de Perón de buscar apoyo en el radicalismo sabattinista, el gobierno se encontró con que, ante su aislamiento externo e interno, su único apoyo, además de minúsculos grupos nacionalistas y parte del ejército y la iglesia católica, era la parte del movimiento obrero que se expresó en favor de la neutralidad y autodeterminación frente a las presiones estadounidenses.

Por su parte, los sindicatos no aceptaron a ciegas la propuesta de Perón, salvo en lo que hace a la legislación favorable, pero tomando distancia de la formación de un movimiento político hasta que encontraron cerradas otras alternativas.

La realización del interés de los obreros en tanto asalariados expresaba el interés del capital en general, es decir, de la relación social capital y trabajo asalariado, sustentado en la clase obrera y contrapuesto coyunturalmente a los intereses singulares de “grupo profesional” (fracciones) y de grupo social de los capitalistas, expresados por sus organizaciones económico corporativas, en particular las del gran capital. Así queda expresado en la declaración que 321 organizaciones patronales encabezadas por la Bolsa de Comercio y la Cámara de Comercio publicaron en junio de 1945 con el nombre de “Manifiesto de las Fuerzas Vivas”, en el que rechazaron la política de la Secretaría de Trabajo, atacando la intervención gubernamental en las relaciones laborales, a la que se sumaron otras de Confederaciones Rurales Argentinas y la Cámara Argentina de Grandes Tiendas. Los capitalistas privilegiaban sus intereses económicos inmediatos (oponiéndose a los aumentos de salarios, aguinaldo, vacaciones) y futuros (“indisciplina” laboral, disputa de poder en el lugar de trabajo y en la sociedad), mientras que Perón, como puede apreciarse en su discurso en la Bolsa de Comercio, los convocaba a priorizar su interés político más general, como real clase dirigente, es decir, como dirección intelectual y moral de las fracciones sociales aliadas.

El 17 de octubre⁸

A lo largo de 1945 se sucedieron las movilizaciones, frecuentemente con enfrentamientos callejeros, tanto por lo que se iba constituyendo como peronismo como desde sus opositores. Obligado Perón a renunciar a sus cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión el día 9 de octubre y, más tarde, arrestado, las movilizaciones y choques callejeros, incluyendo tiroteos, se multiplicaron. El 12 de octubre una manifestación de fuerte tono antimilitarista y antigubernamental reunida frente al Círculo Militar, y en la que hubo una presencia obrera claramente minoritaria, exigió la entrega del gobierno a la Suprema Corte de Justicia y terminó en un fuerte tiroteo entre policías y manifestantes. Finalmente se llegó a una transacción: el general Farrell seguiría ocupando la presidencia pero con un nuevo gabinete ministerial formado por el procurador general de la Nación Dr. Juan Álvarez, hombre de la Suprema Corte. Solución rechazada por la CGT que caracterizó a quienes integrarían el nuevo gabinete nacional como “figuras representativas de la oligarquía tradicionalmente enemiga de los trabajadores”. Mientras tanto, colaboradores de Perón se reunían con dirigentes sindicales para lograr su libertad y retorno al gobierno.

El 15 de octubre comenzó una movilización obrera que no cesaría hasta el 18. Fue masiva en Avellaneda, Valentín Alsina, Rosario, Tucumán (convocados por la FOTIA) y Chaco; en Berisso entre 700 y 1.000 obreros, convocados por el Sindicato Autónomo de Obreros de la Carne, se enfrentaron con la policía (*La Prensa*, 18-10-1945). La huelga

8 El siguiente relato fue realizado a partir de la información que brindan los diarios *La Época*, partidario de Perón, *Noticias Gráficas*, *Clarín* y *La Prensa*, opositores, y los libros de Luna (1969), Gambini (1969), del Campo (2005), Torre (1990) y Pont (1984).

de hecho se fue extendiendo a fábricas y talleres ferroviarios del sur y el oeste del Gran Buenos Aires. La movilización continuó el 16 avanzando desde el sur sobre la Capital Federal a pesar de los intentos de la policía por frenarlos con gases lacrimógenos; algunos manifestantes llegaron a las cercanías de Plaza de Mayo, que ya no abandonarían. A la tarde y a la noche la policía, incluyendo compañías de gases y bomberos, disolvió grupos que gritaban “volverá” y “Perón sí, otro no” y pequeñas manifestaciones que siguieron hasta la madrugada, con toma de presos (*Clarín*, 17-10-1945).

A la vez, en Avellaneda y Valentín Alsina grupos armados recorrían las calles y columnas de obreros marcharon hacia la capital; lo mismo en Berisso y Ensenada, pero en este caso los manifestantes marcharon a la ciudad de La Plata.

En la noche del 16, después de una ardua discusión y por 16 votos a favor y 11 en contra, el Comité Central de la CGT convocó a la huelga general para el día 18, declarándose contra “todo gabinete de la oligarquía”, por la formación de un gobierno que fuera una garantía de democracia y libertad y que consultara a los sindicatos, la realización de las elecciones libres, levantamiento del estado de sitio y libertad “de todos los presos civiles y militares que se hayan distinguido por sus claras y firmes convicciones democráticas y por su identificación con la causa obrera” (obvia alusión a Perón), mantenimiento y ampliación de las conquistas sociales, aumento salarial, “reparto de la tierra al que la trabaja” y cumplimiento del Estatuto del Peón.

La huelga general recibió la adhesión de la Unión Sindical Argentina y de sindicatos que no formaban parte de la CGT, como Telefónicos, Empleados de Comercio y frigoríficos de Berisso, cuyos dirigentes reivindicaron “el sentido eminentemente proletario y anticapitalista que tiene este movimiento” (Luis Gay) y rechazaron lo que caracterizaron como “maquinaciones de la oligarquía” (Luis Gay en *La Época*,

17-10-1945): la entrega del gobierno a la Corte Suprema (Ángel Borlenghi en *La Época*, 17-10-1945 y Cipriano Reyes en *La Prensa*, 17-10-1945).

La posición mayoritaria entre los sindicatos, expresada en la declaración de la CGT que convocaba a la huelga general, apuntaba a mantener las conquistas laborales y sociales logradas, el llamado a elecciones y evitar un retorno a la situación anterior al golpe de estado de 1943, sin referirse directamente a Perón. En cambio, para los que iniciaron la huelga (obreros azucareros de Tucumán, frigoríficos de Berisso) la meta abiertamente declarada era la libertad de Perón.

Pero otros sindicatos nacionales y locales, algunos de ellos de peso —como, entre otros, la Federación Obrera Nacional de la Construcción, la Federación Obrera de la Industria de la Carne, la Federación Gráfica Bonaerense, la Federación Obrera del Vestido, La Fraternidad, la Unión Obrera Textil, el Sindicato de Obreros y Empleados de YPF, conducidos por socialistas o comunistas—, se opusieron a la huelga.

En síntesis, el movimiento sindical estaba dividido y aliado, en muy diferentes proporciones, en alianzas políticas con fracciones de burguesía o con cuadros políticos y militares de ésta. La alianza a la que adscribía la mayoría movilizada, en la que, a su vez, convivían los que explícitamente pedían la libertad de Perón con quienes la pedían sin nombrarlo, articulaba los intereses de los obreros en tanto asalariados con los de los funcionarios, fundamentalmente militares, que trataban de evitar la derrota de su proyecto nacionalista. Pero expresaba el interés del capital en general (relación capital/trabajo asalariado), sustentado en la clase obrera y contrapuesto coyunturalmente a los intereses singulares de los capitalistas y sus organizaciones corporativas. La otra fuerza tenía su base social en la pequeña burguesía y otras fracciones de las llamadas “clases medias”,

en especial los estudiantes universitarios y los profesionales, y en una parte minoritaria del movimiento sindical; incluía a todos los partidos políticos, las organizaciones empresarias y, en general, a las instituciones más tradicionales, excepto la Iglesia católica, y recibió el apoyo de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Ambas partes del movimiento obrero organizado buscaron el apoyo de cuadros militares: en Tucumán, trabajadores de los ingenios, cantando el Himno Nacional y la marcha “4 de Junio”, se dirigieron a la sede de la 5.ª Región Militar, cuyo jefe fue ovacionado cuando cerró su arenga con las palabras “Orden, cultura y respeto; viva la Patria” y se comprometió a avanzar con los obreros sobre Buenos Aires para “defender la Revolución” (*La Época*, 17-10-1945). Por su parte, el Sindicato de Obreros y Empleados de YPF, que se declaró contra la huelga, realizó gestiones ante el jefe de la base naval para impedir la (*Clarín*, 17-10-1945).

A pesar de estos llamados a rechazarla, la huelga general se extendió el 16 y el 17, de manera que el 18, cuando debía comenzar el paro convocado por la CGT, la huelga general era casi total en todo el país.

El 17, obreros de los frigoríficos de Berisso marcharon hacia La Plata y atacaron las agencias de algunos diarios, el Jockey Club y otros clubes y la universidad. En Avellaneda y Lanús las fábricas quedaron desiertas y las columnas obreras avanzaron sobre la Capital Federal. La policía levantó el puente Pueyrredón y fue reforzada la guardia, pero los manifestantes cruzaron en botes o caminando por otros puentes. También ocuparon trenes y avanzaron sobre Buenos Aires desde Rosario, San Juan, Córdoba, Tucumán y Mendoza (*La Época*, 18-10-1945). En la Capital Federal los obreros se concentraron frente a la Casa de Gobierno y el Hospital Militar, donde se encontraba Perón. A las cinco de la tarde los concentrados cubrían más de la mitad de la plaza.

Mientras tanto la situación parecía encaminarse a una definición militar: el 17, los partidarios de Perón dentro del ejército se hicieron fuertes en regimientos de la Capital Federal y en la Quinta División, asentada en Tucumán, que amenazó con marchar sobre Buenos Aires. Por su parte, sus oponentes habían atrincherado tropas en el edificio del Correo y contaban con las unidades de Campo de Mayo y con la Marina de guerra. Pero en el transcurso del día 17, el apoyo de las fuerzas de Campo de Mayo se diluyó y solo una parte de la Marina, dispuesta a atacar y disolver la concentración de las masas que se estaba produciendo en la Plaza de Mayo, se sublevó por unas horas, el 18.

Finalmente, Perón fue trasladado a la Casa de Gobierno, donde rechazó el consejo de Filomeno Velazco y Alberto Teisaire, de tomar directamente el gobierno, y siguió la propuesta de Domingo Mercante de retirarse del gobierno y del ejército y presentarse como candidato en las elecciones ya convocadas. Después de su discurso, en el que llamó a la multitud a retirarse pacíficamente, tuvo lugar un fuerte tiroteo entre jóvenes militantes de la Alianza Libertadora Nacionalista que encabezaban una columna y personas atrincheradas en el diario *Crítica*, opositor a Perón, al que se sumó la policía; hubo un muerto y más de 50 heridos; en la madrugada la policía impidió que el diario fuera incendiado por manifestantes, a los que dispersó usando gases lacrimógenos.

Desde la mañana del 17 y durante el 18 también hubo marchas y concentraciones con cuadros sindicales como oradores en Rosario, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza, San Luis, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa y Río Negro. En La Plata, Lomas de Zamora, Santa Fe y San Luis, los manifestantes se dirigieron a las sedes de los gobiernos provinciales o municipales, reclamando la palabra de los funcionarios. En Rosario

hicieron lo mismo frente a la delegación de la secretaría de Trabajo y Previsión. En Tucumán y Mercedes (provincia de Buenos Aires) marcharon a la sede de la guarnición militar y reclamaron la palabra del jefe de la unidad (*La Prensa*, 19-10-1945).

Lo mismo que en la Capital Federal, los manifestantes señalaron como enemigo y apedrearon a algunos diarios (*La Opinión*, *El Día*, *La Nación* y *La Prensa* en La Plata y *La Voz del Interior* y *Córdoba* en Córdoba). El otro objeto de los ataques fue la universidad y los estudiantes universitarios (en La Plata, Tucumán, Córdoba y Santa Fe). En Córdoba también fue apedreado el Instituto Argentino Norteamericano.

Mientras en algunas partes los actos y manifestaciones contaron con apoyo oficial, en Rosario fueron disueltos por la policía (*La Prensa*, 19-10-1945).

Las metas declaradas de la parte mayoritaria del movimiento obrero movilizado fueron la defensa de las conquistas logradas con la intervención de la Secretaría de Trabajo y Previsión, identificadas con la justicia social, con un discurso anticapitalista o al menos enfrentado a los capitalistas concretos de ese momento, al tiempo que invocaban los valores democráticos y rechazaban la “restauración oligárquica” encarnada en la Corte Suprema de Justicia, expresión de “la oligarquía reaccionaria y setembrina”;⁹ una parte sumaba la demanda de la libertad de Perón. Para los enrolados en el antiperonismo, la meta explícita era la defensa de la libertad y la “normalidad constitucional”, con la entrega del gobierno a la Corte. Ante esas dos alternativas, la mayoría de la clase obrera movilizada eligió la defensa de sus conquistas, adhiriendo a la huelga y a la movilización callejera.

9 Acta de la Reunión del Comité Central Confederal de la CGT, 16 de octubre de 1945. Reproducida por Pont (1984).

Más allá de los discursos, el hecho tomó un carácter de lucha del proletariado contra la burguesía: la mayoría de los obreros movilizados se manifestó contra la amenaza de una restauración de la situación anterior a 1943 indicada por la negativa de muchos patrones, animados por el desplazamiento de Perón, a pagar el doble jornal correspondiente al feriado del 12 de octubre, los rumores de que la legislación laboral implantada desde 1943 sería anulada, el despido de delegados obreros, el “Manifiesto de las Fuerzas Vivas” que rechazaba la política de la Secretaría de Trabajo, reclamos empresarios que parecían encontrar eco en el reemplazante de Perón en la secretaría de Trabajo y Previsión, todo coronado por la propuesta de gabinete ministerial encabezado por el procurador Juan Álvarez, apoyado por todos los partidos políticos y las organizaciones empresarias, e integrado por ex funcionarios de los gobiernos fraudulentos de la década anterior y de empresas imperialistas, algunas, como la CADE, involucradas en hechos de corrupción.

La masa mostró su disposición a la lucha, desbordando y subordinando a las organizaciones tanto sindicales como políticas, movilizándose desde tres días antes de la fecha fijada para la huelga general por la CGT y para la “Marcha de la Verdad” por el diario peronista *La Época*, tratando de llegar a Plaza de Mayo a pesar de los intentos policiales por dispersarla. Si bien en general los manifestantes se concentraron frente a las sedes de quienes consideraban parte de su propia fuerza, en La Plata, Córdoba y la Capital Federal atacaron las trincheras desde donde operaba su enemigo: sus organizadores (diarios y clubes) y su base social, los universitarios, cuya movilización había culminado en la renuncia, y posterior prisión, de Perón.

Esta disposición al enfrentamiento fue diferente de la que mostraron las conducciones políticas de ambas fuerzas enfrentadas que mostraron una clara decisión de que la lucha

decisiva por el gobierno del Estado no se librara en las calles ni por las armas sino en un enfrentamiento electoral, que ambas fuerzas se consideraban en condiciones de ganar. La lucha por el gobierno del Estado no se dirimió en octubre sino en las elecciones del 24 de febrero de 1946. El enfrentamiento librado entre el 15 y el 18 de octubre creó las condiciones para la batalla decisiva que se libraría en el ámbito electoral. Aunque entre diciembre de 1945 y enero de 1946, ya en plena campaña electoral, la confrontación volvió a las calles con motivo del decreto que instauraba el aguinaldo, fue nuevamente diferido para ser resuelto en las elecciones de febrero, en las que venció la fórmula Perón-Quijano por 1.527.231 votos frente a los 1.207.155 votos que recibieron los candidatos de la Unión Democrática (Tamborini y Mosca).

La estrategia de la clase obrera

En resumen, durante los años treinta emergió un movimiento de oposición que se enroló la mayoría de la clase obrera organizada. Esa alianza social se fracturó y se recompusieron nuevas alianzas, que se enfrentaron en las calles en la segunda mitad de 1945 y electoralmente en febrero de 1946. Sin embargo, este enfrentamiento no fue resultado de un cambio de metas ni de estrategia de la clase obrera sino que, por el contrario, los cuadros obreros enrolados en ambos bandos pugnaban por formar parte del sistema institucional. Las dos alternativas presentadas por esos cuadros obreros, como puede verse en los programas del partido Laborista y de la Unión Democrática planteaban una extensión de los derechos sociales y políticos, la democracia política, además de la nacionalización de los servicios públicos y algunas medidas que afectaban la propiedad del capital y los terratenientes.

Frente a las alternativas planteadas, la mayoría de la clase obrera organizada buscó la alianza que le permitiera no solo mejorar sus condiciones de vida sino influir sobre el régimen político y social vigente, a lo que se sumaba la potencial —y pronto frustrada— autonomía que implicaba la formación del Partido Laborista. Para los cuadros obreros, todos ellos antifascistas, la cuestión pasaba por ponerse “los pantalones largos” o aceptar quedar subordinados a sus direcciones partidarias.¹⁰

La fuerza antiperonista seguía atada a la confrontación entre fascismo y antifascismo. A pesar de que su discurso hacía hincapié en la democracia y el antifascismo, incluía en su seno a todas las expresiones del antiguo régimen. La posición de los empresarios y sus organizaciones corporativas, que formaban parte de esta alianza, señalaba el camino de la posible restauración de la situación previa al golpe de estado del 4 de junio. Las organizaciones empresarias rechazaban de hecho lo que el movimiento orgánico de la sociedad argentina estaba imponiendo: una mayor institucionalización de la relación capital/trabajo asalariado, y por ende de la clase obrera.

La manifestación democrática de la lucha de la clase obrera, que busca las mejores condiciones para influir en los asuntos públicos, adquirió preeminencia por sobre su lucha socialista, anticapitalista. En su *lucha democrática* —concepto cuya definición no pasa por la vigencia de las

10 “Nosotros buscamos un acercamiento con los radicales y los socialistas, para entendernos en una acción común. Pero ellos solo querían que nosotros les diéramos nuestros votos. Nosotros pretendíamos algo más: pretendíamos tener representantes en la gestión de la política social que debía continuarse en el futuro gobierno constitucional” (Luis Gay, citado en Torre, 1990: 142). “Y nosotros hemos resuelto que el movimiento sindical argentino, colocándose a la altura de los más adelantados del mundo, gravite en la solución de los problemas políticos, económicos e institucionales de la República y va a gravitar con absoluta independencia” (Ángel Borlenghi, citado en Murmis y Portantiero, 2004: 153).

instituciones republicanas ni necesariamente por la realización de elecciones—, la clase obrera manifestó su disposición a defender las mejores condiciones para desarrollar su fuerza.

En resumen, la opción de la mayoría de la clase obrera por el peronismo significaba elegir la alianza que mejor le permitía realizar la meta planteada en su estrategia desde la década anterior: influir en los asuntos públicos y penetrar el sistema institucional, reformándolo, sin pretender superarlo. Ciudadanizarse; esto es, la plena realización de su conciencia de asalariada. Un momento de su experiencia histórica necesario para la construcción de su conciencia de expropiada.

Bibliografía

- Baily, S. (1984). *Movimiento obrero, nacionalismo y política en la Argentina*. Buenos Aires, Paidós.
- Calvagno, J. (2005). Incremento de la conciencia nacional en el movimiento obrero argentino: un examen a partir del periódico *CGT* de 1939. S/e.
- Del Campo, H. (2005). *Sindicalismo y peronismo. Los inicios de un vínculo perdurable*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Gambini, H. (1969). *El 17 de octubre de 1945*. Buenos Aires, Brújula.
- Gramsci, A. (1986). *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno*. México, Juan Pablos.
- Iñigo Carrera, N. (2012). *La estrategia de la clase obrera, 1936*. 3ª edición, corregida y aumentada. Buenos Aires, Imago Mundi.
- _____ (2016). *La otra estrategia. La voluntad revolucionaria, 1930-1935*. Buenos Aires, Imago Mundi.
- Luna, F. (1969). *El 45. Crónica de un año decisivo*. Buenos Aires, Jorge Álvarez.

- Matsushita, H. (1986). *Movimiento obrero argentino, 1930-1945*. Buenos Aires, Hyspamérica.
- Murmis, M. y Portantiero, J. C. (2004). *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Pont, S. (1984). *Partido Laborista: Estado y sindicatos*. Buenos Aires, CEAL.
- Torre, J. C. (1990). *La vieja guardia sindical y Perón*. Buenos Aires, Sudamericana.

Capítulo 5

Las huelgas metalúrgicas durante el peronismo

Conflictos en torno al control obrero de la producción (1946-1953)

Roberto Elisalde

Los años del peronismo estuvieron atravesados por numerosos conflictos entre el capital y el trabajo.¹ Los obreros metalúrgicos protagonizaron buena parte de este proceso llevando a cabo acciones y reclamos expresados en intensas huelgas. Aumentos de salarios, discusión de nuevos convenios y reconocimiento de las comisiones internas, junto con la férrea oposición a que la productividad fuera incorporada a los costos laborales, conforman el arco de problemáticas presentes en todo el período (Doyon, 1970: 180).

La dimensión de las demandas sociales fueron tales que los empresarios denunciaban que en las plantas fabriles los trabajadores llegaban incluso a cuestionar la autoridad del patrón, y que se encontraban en una actitud ofensiva respecto de la institución empresarial. Denunciaban que desde las comisiones —delegaciones obreras— ponían en tela de juicio la estructura jerárquica de las fábricas.

1 Numerosos trabajos de investigación señalaron las características conflictivas en el mundo laboral de esta época. Cfr. Doyon (1970) y Elisalde (2008).

Los/as obreros/as de las grandes empresas metalúrgicas (en producción, número de trabajadores y tecnología avanzada) estuvieron a la cabeza de los planteos gremiales a las patronales, al mismo tiempo que contaron en sus plantas con destacados niveles de organización sindical.

Por su parte, los gerentes de estas mismas firmas se encontraban representados en la Federación de Industrias Metalúrgicas de la Argentina, y fueron la voz cantante en las reuniones de representación empresarial frente al Estado y los/as obreros/as en aquellas instancias de negociación y/o tratamiento de los conflictos con el gremio metalúrgico.

Las empresas de gran volumen como Siam, Tamet, Impa, Catita, entre otras,² fueron quienes tomaron las decisiones más duras desde la perspectiva del capital respecto de la aplicación de sanciones a las protestas obreras. Las publicaciones y documentación del empresariado dejaron constancia de esta aseveración en profusas declaraciones, artículos e intervenciones políticas y gremiales a lo largo de todo el período (Elisalde, 2020: cap. 2).

En este sentido, los/as obreros/as metalúrgicos/as sostuvieron fuertes disputas con las patronales del sector —tal como lo demuestran los picos huelguísticos de 1947, 1948, 1949 y 1954— en los que la puja entre capital y trabajo no solo expresó demandas salariales sino también fuertes enfrentamientos por el control de la producción y en rechazo a las políticas managerialistas que buscaban la intensificación del trabajo obrero.

A consecuencia de ello, la historiografía debate sobre la naturaleza, intensidad e implicancias de estos conflictos. Algunos investigadores lo reducen a luchas de orden reivindicativo-salarial, basando sus argumentaciones en las temáticas tratadas con centralidad por la prensa de los

2 Ver Archivo Siam Di Tella, Revista Tamet y Archivo IMPA, entre otras publicaciones.

grandes diarios o simplemente por los enunciados más sobresalientes de las publicaciones sindicales. Sin embargo, tal como pudimos analizar en la huelga metalúrgica de 1942 y como veremos en el ciclo de huelgas que abarcan hasta 1954, los reclamos obreros excedían este marco. De hecho, desde esos emblemáticos conflictos, los metalúrgicos supieron expresar —tal como dejaron evidencia en Siam, Impa, Catita y Tamet— el rechazo a las políticas productivistas de las patronales que en 1941-1942 se presentaron bajo el nombre de proyectos modernizadores como el “Plan Reynders” (para el caso de la firma Siam Di Tella, por ejemplo) o acciones/congresos de “Productividad” en los años cuarenta y cincuenta.

La aplicación de tecnologías de “racionalidad y eficiencia” no tenían otro fin más que eliminar “porosidades del tiempo laboral”, intensificarlo e incorporarlo a la fijación del salario los principios de la “organización científica del trabajo”. En otras palabras, centralizar desde la perspectiva del empresario un mayor control de la producción. En este sentido, las históricas reformas llevadas a cabo desde 1942 fueron un claro anticipo de las medidas impulsadas en los años subsiguientes para todas las empresas del sector. La resistencia a la pérdida del control de la producción se manifestó de numerosas formas, especialmente a través de la discusión de los convenios colectivos de trabajo. Para ello, es fundamental considerar las particularidades que presentaban los nuevos marcos regulatorios del trabajo —en este caso el metalúrgico—, ya que los obreros metalmeccánicos disputaron con argumentos políticos y gremiales las relaciones de poder en el marco del espacio fabril, generando un proceso de fuertes tensiones de clase durante los dos gobiernos peronistas.³

3 Un aspecto relevante de este proceso fue la clara distinción que la mayoría de los trabajadores

Relaciones entre empresarios, obreros y Estado: convenios, huelgas e intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (1946-1948)

Gran parte de la conflictiva relación entre capitalistas y trabajadores estuvo signada por las discusiones en torno a las pautas de aplicación de los convenios colectivos para la rama metalmeccánica. Ante cada instancia de negociación se generó un intenso debate, no solo en los aspectos reivindicativos salariales sino también acerca del rol de los trabajadores en la producción, la disciplina en la fábrica y las formas de representación, entre otras problemáticas. De conjunto, estas consideraciones expresaban una disputa teórica y política sobre las relaciones de poder y la construcción particular de las subjetividades en las plantas. En 1948 los convenios colectivos ya eran un mecanismo extendido en el marco de las relaciones laborales y los realizados antes de ese año fueron escasos y ciertamente simples (Gaudio y Pilone, 1983: 178).

Después del triunfo peronista, las antiguas prerrogativas patronales sobre el derecho de contratar, despedir, transferir y promover la fuerza de trabajo fueron reducidas principalmente por medio de la introducción del principio de la antigüedad y la elaboración de una intrincada clasificación de tareas, comúnmente llamadas “el escalafón” que garantizaban igual remuneración por igual tarea dentro de la fábrica y en toda la industria.⁴ Debido a que estabilizaba la

identificados con el peronismo realizaron respecto a las disputas con el empresariado, en la mayoría de los casos disputaron en la planta, a la vez de destacar su apoyo a las reformas sociales llevadas a cabo por el gobierno peronista de ese entonces (Berrotarán, Jáuregui y Rougier, 2004).

- 4 En esos años se introdujeron importantes beneficios suplementarios. Además de las vacaciones anuales establecidas por decreto, el trabajador, si era estudiante de medio tiempo, tenía derecho a una licencia extraordinaria con goce de sueldo durante el período de exámenes. Se le otorgaban excepciones similares bajo las mismas condiciones en el caso de contraer matrimonio (general-

posición de los trabajadores en la jerarquía laboral, el escalafón no solo disminuía la facultad patronal de administrar la fuerza laboral como una masa relativamente indiferente, sino que también dificultaba el uso de este poder como una medida disciplinaria a la que a menudo recurrían los supervisores a fin de quebrantar la voluntad de los “agitadores sindicales”.⁵

Un renombrado empresario y dirigente de la Cámara Argentina de la Industria Metalúrgica caracterizaba como “muy difíciles” las negociaciones por convenio con los trabajadores; consideraba que eran instancias sumamente desgastantes y que los obreros se las arreglaban para desarrollar sus propias tácticas a fin de obtener mayores ventajas en el transcurso de estas:

... Nos hacían ir a las 4 de la tarde y nos tenían hasta las 2, 3 o 4 de la mañana [antes de sentarnos a negociar]... —¿Habían problemas con las huelgas? —Sí, [claro]... En esa época estábamos ganando mucho dinero, por eso claudicábamos tanto a los pedidos que no eran razonables, [pero] no queríamos perder producción... (Cluterbuck, 1973: 25)

La discusión en 1946 y 1947 sobre el salario de los metalúrgicos implicó un acalorado debate sobre las pautas de dichos aumentos. En muchos casos tanto los patrones como los trabajadores terminaron solicitando el arbitraje del Estado.

Las publicaciones empresariales de la época (*Metalurgia*, entre otras) hacen referencia —ya en 1947 y con el inicio de discusión del convenio colectivo— a un petitorio

mente, diez días) y en caso de muerte de un familiar directo (cuatro días). Además del aguinaldo, también se preveía el pago de un suplemento especial por cada año de antigüedad y una asignación mensual por cada hijo menor de quince años.

5 Así los llaman las fuentes empresariales al activo sindical en las fábricas (Doyon, 1970: 184).

presentado por la UOM en el que expresaban sus diferencias con la propuesta empresarial. También destacaban una inquietud, que se constituyó en el *leitmotiv* de los reclamos de las patronales durante este período: la existencia de las comisiones internas por fábrica. Los empresarios plantearon, en todo momento, una controversia sobre estas formas de representación obrera cuestionando su legitimidad y afirmando “que solo tratarían con los delegados del sindicato” (*Metalurgia*, 1947: 11).

Para el convenio de 1947, las propuestas y condiciones de los patrones eran fijar aumentos entre el 15% y 65%, según las categorías. La UOM afirmaba que, “en vista de la propuesta irrisoria de la patronal en lo que a sueldos se refiere... pretenden con esto seguir dilatando... [la posibilidad para alcanzar algún acuerdo]”. Y entendía que era una provocación que podía derivar en medidas de fuerza. El gremio atribuía a “las razones de intransigencia patronal, lo bajo de los sueldos de empleados de la industria metalúrgica” y afirmaba que “no se responsabilizan por las situaciones posteriores que puedan surgir”, dejando abierta la posible convocatoria a una huelga del sector.

El 22 de marzo de 1947 y en el marco de las negociaciones entre patrones y trabajadores, se presentó un acta en la que los delegados rechazaron de manera contundente la propuesta de la patronal. Entre los representantes del sector empresarial se destacaba Guido Clutterbuck, dirigente de la Cámara de Industrias Metalúrgicas, uno de los voceros del conjunto de las empresas metalúrgicas. La relación entre el pensamiento del principal hombre del staff de la emblemática firma Siam y el conjunto de la representación de fábricas del sector metalúrgico (Federación Metalúrgica) queda ratificado a través de los propios archivos de la empresa e incluso en las entrevistas realizadas años después a los mismos dirigentes.

La revista *Metalurgia*, vocera de los intereses empresariales, denunciaba la solicitud obrera de exigir aumentos al margen del convenio, señalaba la anormalidad del pedido y enfatizaba su preocupación, ya que consideraba que muchas de las nuevas demandas de mejoramiento salarial eran llevadas a cabo por las comisiones internas: “Los reclamos por salario son impulsados por las comisiones internas [...] y acompañados de manifestaciones en el sentido de que los obreros trabajarán a desgano de no verse satisfechos en sus demandas” (*Metalurgia*, 1947: 12).

Precisamente 1947 fue uno de los años en los que la aplicación del nuevo convenio metalúrgico se tradujo en la expresión de las tensiones existentes en el marco de un modelo económico de desarrollo industrial por el que, tanto empresarios como trabajadores, reclamaban —desde diferentes perspectivas— iniciativas tendientes a garantizar un mayor control de la producción.

Fueron más que elocuentes las estrategias discursivas de las que se valió la patronal para impugnar lo que consideraban una afrenta obrera —a partir del nuevo convenio— a las relaciones de orden y disciplina fabril, espetando, incluso, cierto desafío obrero a las consideraciones del propio Perón. Los empresarios, a través de sus principales emisarios, señalaban al respecto:

El nuevo convenio [...] enfrenta abiertamente las exhortaciones del Sr. Presidente de la Nación J. D. Perón, pues mientras su excelencia invita a los obreros a aumentar la producción, estos, por órgano de las comisiones internas que representan al sindicalismo en las fábricas, plantean cuestiones fuera de lugar que no hacen sino reducirlo o —empleando el mismo término del Excelentísimo Sr. Presidente de la Nación— sabotearla y no solo se limitan a prometer un aumento

de producción si se accede a sus requerimientos [...] Firmado: Guido Clutterbuck. (*Metalurgia*, 1947: 16)⁶

Otro aspecto señalado en el texto de la Cámara empresarial y que volvió a ocupar un lugar relevante en la compleja trama de disputas en torno a 1947 y 1948 fueron las referidas “comisiones internas”. Para los empresarios, estas formas de participación obrera directa y por planta se constituyeron en las causantes del “desborde de los acuerdos institucionales”; por ello, las patronales sindicaban a sus delegados como “verdaderos sabotadores”. En las metalúrgicas La Cantábrica, Tamet y Catita, entre otras, las comisiones internas tuvieron una importante participación e, incluso, desde los años cuarenta un destacado protagonismo en las medidas de fuerza llevadas a cabo por la UOM, como lo demuestran los documentos empresariales.⁷

Las comisiones internas y la resistencia a la “ley fabril”: la huelga de 1948

Ahora bien, es sabido que las formas de representación del trabajo a través de delegaciones por fábrica fueron parte de la historia del movimiento obrero. Las comisiones internas cumplieron un rol fundamental en el ejercicio y la disputa por el control en los lugares de trabajo, a la vez de

6 Esta nota de la Cámara Metalúrgica evidencia que los empresarios buscaban un soporte a sus denuncias en las palabras del propio Perón, señalando un virtual desafío a su autoridad en caso de continuar con cualquier forma de protesta obrera. Fue una estrategia recurrente a fin de reforzar sus posiciones *productivistas*, alentadas desde 1947, y no desde 1954 como habitualmente se menciona en la historiografía especializada. Cuando esta táctica no lograba los resultados esperados por los empresarios, estos denunciaban que Perón sobreactuaba su perspectiva acerca de los “acuerdos del capital y el trabajo” y que su política era claramente favorable a los obreros.

7 Entrevista a Antonio Sudiero (1973), dirigente de la Siam.

constituirse en una de las causas centrales de la oposición a las patronales.

La acción de estas comisiones expresó una forma de control obrero para garantizar la aplicación de la legislación laboral y los convenios colectivos acordados por los gremios al incorporar en la fábrica una representación orgánica de delegados que podían discutir con las patronales sin temor a que se tomaran represalias. Fue una forma de participación directa y vinculó del mismo modo al sindicato con el conjunto de los trabajadores e “hizo posible que los militantes estuvieran al tanto de las preocupaciones de sus bases” (Doyon, 1970: 186).

La implantación de las comisiones internas no se vio beneficiada por un respaldo legal en el régimen de asociaciones profesionales. El régimen no hacía referencia explícita y los sindicatos argumentaban a su favor basados en una cláusula del artículo 49 que garantizaba a los trabajadores el derecho a elegir a sus representantes, aunque no se aclaraba el nivel, ni el tipo de funciones. Los patrones se opusieron a ellas y solo aceptaron otorgarles un reconocimiento legal limitado hacia 1947, cuando comenzaron a incluirlas en las negociaciones colectivas de los sindicatos más poderosos. Hacia fines de 1950 su presencia se extendió a la mayoría de los sectores.

Los empresarios exhortaban a la UOM a limitar sus demandas, de modo de no establecer cambios en los acuerdos realizados en el marco de las convenciones colectivas de trabajo. Y enfatizaban la necesidad de “no patrocinar petitorios de aumentos de salarios que modifiquen las condiciones del convenio celebrado”, en clara referencia a los reclamos de los obreros por planta a través de las delegaciones por empresa (*Metalurgia*, 1950: 5).

En las protestas empresariales se evidenciaba un reclamo al propio gobierno por haber permitido y alentado estas

formas de organización directa. La documentación empresarial suscripta por toda la dirigencia metalúrgica argumentaba su oposición con algunos datos históricos sobre los orígenes de estas comisiones. El desorden y la indisciplina comenzaron a ser parte de los argumentos que utilizaron los empresarios para cuestionarlas. Con estas sugerencias, las patronales nuevamente reclamaban el control y el límite de las comisiones. Entendían que esas formas de participación “distráían” del trabajo a una buena cantidad de obreros por fábrica.

1948 fue un año de alta inestabilidad para los metalúrgicos. Los empresarios argumentaban que fue un período en el que tuvieron altos costos debido a los elevados salarios y a la realización de fuertes inversiones; de allí que en numerosas plantas los patrones se opusieron y no dieron cuenta de las mayores subas salariales, pese a ser acordado con las cámaras empresariales, los sindicatos y el Estado.

En ese año, mientras se debatían los términos del convenio paritario y se cuestionaba a las comisiones, los trabajadores presentaron un petitorio reclamando un conjunto de mejoras, sobre todo salariales, y cuestionaron los criterios para la organización de la producción.

Frente a esta situación, la Cámara Metalúrgica planteó que, de concederse el petitorio, habría problemas de competencia productiva e inflación. Además, denunciaba que los obreros se tomaban atribuciones que eran privativas de las autoridades nacionales al fijar pautas salariales y criterios para organizar la producción.

La propuesta de los trabajadores se tradujo en la elaboración de un escalafón nuevo: “Oficial mínimo dividido en dos categorías A: 2,35 \$ y B: 2,10 \$ Medio oficial 1,90 \$” (*Metalurgia*, 1948: 11). Los empresarios lo consideraron una exageración y salieron a cuestionar el planteo obrero, nuevamente, a través de la palabra y representación de Guido Clutterbuck.

La Cámara Argentina de Industrias Metalúrgicas entendía que los cambios que estaban sucediéndose en el gobierno de Perón no estaban dentro de sus reivindicaciones; por ello, deseaban “apurar” la decisión de algunas leyes clave para el sector, a la vez que dejaban constancia de los puntos en los que no estaban dispuestos a negociar. Proponían solicitar al gobierno que, al reglamentar la Ley de Asociaciones Profesionales, se tuviera en cuenta la no sindicalización conjunta de obreros y empleadores.⁸

Por último, los empresarios señalaron en 1948 que la única posibilidad de otorgar mejoras salariales y cambios en las condiciones de trabajo solamente se concretarían a partir de obtener mayores rendimientos en la productividad.

En una entrevista publicada por la revista *Mundo Metalúrgico* (1947), Aquiles Merlini —dirigente destacado del sector— se refería enfáticamente a la existencia en esos años (1946-1947) de una muy baja productividad de los obreros, a la vez que solicitaba el ingreso de inmigrantes, sin duda como una forma de abaratar la mano de obra, ampliando las reservas de fuerza de trabajo obrera.

La Cámara Argentina de Industrias Metalúrgicas realizó en ese periodo un estudio en el que determinaba la naturaleza de los aumentos en los últimos tres años y destacaba el porcentaje de los incrementos directos e indirectos que las nuevas condiciones mínimas de trabajo representaban sobre los salarios, también mínimos, fijados desde el convenio de agosto de 1946. Los trabajadores, por su parte, señalaban al empresariado que estos aumentos en nada afectaban los elevados márgenes de ganancia de un sector que se encontraba en expansión. La patronal consideraba que bajo estas

8 Por estos años, la sindicalización mixta era una propuesta impulsada por el gremio metalúrgico, reclamando la incorporación gremial de los capataces. Para los empresarios esta medida era inaceptable; señalaban que se ponía en juego la “jerarquía y la disciplina en la planta”.

condiciones de producción las posibilidades de competir en el mercado internacional se verían seriamente comprometidas, a la vez de puntualizar que era responsabilidad de las autoridades estatales el cumplimentar a través de resoluciones, los aumentos salariales y su oposición a cualquier forma de aumentar la productividad (*Metalurgia*, 1949: 11).

Hacia fines de 1948, la tensión entre obreros y empresarios no disminuyó, especialmente en la zona sur del conurbano bonaerense, donde se encontraban las fábricas metalúrgicas más importantes. Decididos a dar batalla por lo que consideraban sus derechos, los trabajadores, pese a las exhortaciones del propio gobierno peronista, llevaron a cabo medidas de fuerza tendientes a garantizar aumentos salariales, evitar que prosperase la relación entre productividad y mejoras, y disputar desde varios frentes la autoridad, los tiempos y la hegemonía de los empresarios en las plantas. Los trabajadores sentían que eran nuevos tiempos, que la lucha que llevaban adelante no era solamente económica sino también política.

Finalmente, los/as obreros/as metalúrgicos/as convocaron a una huelga los días 5 y 6 de noviembre de 1948, apoyada por la mayoría de los trabajadores, y naturalmente rechazada por los empresarios. El resultado de esta huelga no satisfizo las demandas de las diferentes seccionales de la UOM involucradas. El paro fue total, pero las formas de acuerdo para el levantamiento generaron resquemores en diversos sectores fabriles. Por ello, numerosas comisiones internas pertenecientes a grandes plantas de la zona sur del conurbano bonaerense, como por ejemplo la Siam Di Tella y La Cantábrica, llamaron a continuar la huelga. Esta situación provocó fuertes discrepancias desde varios sectores gremiales, especialmente la dirigencia nacional de la UOM; e incluso fue declarada ilegal por el propio gobierno. Por su parte, la prensa empresarial cuestionó la medida:

Otra huelga injustificada: [...] Como se recordará, la resolución del Director de la Secretaría de Trabajo y Previsión de fecha 15 de noviembre del año próximo pasado, no fue acatada por una parte de los obreros de Avellaneda, a pesar de ser ampliamente generosa respecto a sus demandas, y resolvieron continuar la huelga, alzándose contra esa resolución y contra las directivas de la Unión Obrera Metalúrgica que dispuso la vuelta al trabajo. (*Metalurgia*, 1948: 6)

Numerosas crónicas sobre la conflictividad obrera metalúrgica se detienen en 1948 y la retoman en 1954; sin embargo, el proceso de tensión social fue constante. En muchos casos no se expresó a través de huelgas, sino en acciones como el trabajo a desgano, boicots, tomas, e incluso huelgas parciales por planta y por distritos. En este proceso, nuevamente la zona sur del gran Buenos Aires fue la más involucrada, dada su mayor concentración fabril.

De esta manera, los numerosos conflictos localizados en los primeros años del gobierno peronista expresaron una fuerte lucha redistributiva, asumiendo, en ocasiones, un carácter de clara ofensiva obrera, con altos niveles de politización en el circuito laboral.⁹ Este proceso de profundización de la lucha social contó también con un neto involucramiento de la esfera estatal y gubernamental como terreno propicio para su desarrollo, al ser parte y proveer, en numerosas circunstancias, recursos y jurisprudencia volcada, en la mayoría de las situaciones, en favor de los trabajadores. Los tribunales laborales o las recurrentes convocatorias a arbitrar en los momentos de tensión social fueron algunos de los indicios que demuestra el activo papel del Estado en este proceso. Así lo argumentan estudios sobre estas problemáticas.

9 Entrevista a Eduardo Barainca (1999).

Es insostenible adjudicar a la ola de huelgas una función predominantemente expresiva más que instrumental. Las huelgas que promovieron no fueron una reacción defensiva sino más bien un desafío a la distribución de los recursos materiales y de autoridad en el sistema de producción... (Doyon, 1970: 122)

Los empresarios, por su parte, continuaban sosteniendo que más allá de la naturaleza de las intervenciones estatales, en los años del peronismo se habían alterado las jerarquías en las empresas y que las comisiones internas y las políticas sociales que les otorgaban legalidad habían creado una suerte de quiebre en la ley fabril. Especialmente objetaban aquellas instancias de organización obrera que dentro de la fábrica cuestionaban y disputaban los criterios de autoridad del capital para fijar unilateralmente los términos del control de la producción y la distribución de los beneficios. Respecto a este tema, Torcuato Sozio, un dirigente empresario metalúrgico, señalaba:

Lamentablemente en la época de Perón se dio una suerte de ruptura de jerarquías dentro de la planta. Ese es uno de los cargos que se puede hacer al período peronista; porque se distorsionó el manejo de la autoridad dentro de las fábricas... (Sozio, 1973: 27)

Conflictos por la productividad y la organización en las plantas (1949-1953)

Cuatro o cinco meses después de la última huelga de 1948 comenzó a gestarse un nuevo movimiento huelguístico. Las comisiones internas, tal como fue señalado, generaron instancias de democratización desde las bases que

cristalizaron una sólida organización entre los/as trabajadores/as. Desde estos ámbitos de democracia directa se fue gestando una “experiencia de clase” y consolidación del poder obrero en las plantas. Los empresarios podían comprobar que las negociaciones y los acuerdos que se establecían con los dirigentes debían tener su correlato de ratificación indefectible en las diferentes plantas metalúrgicas.

Hacia 1949 la insatisfacción patronal se profundizaba. Argumentaban el excesivo incremento de los costos laborales en los tres primeros años del gobierno y en sus críticas responsabilizan a la política oficial sindicando a los obreros y sus comisiones internas como los principales responsables de esta situación. En diversos medios y publicaciones manifestaban que el costo de la mano de obra en la industria metalúrgica era excesivo.

Según los patrones, estas nuevas instancias de resistencia eran encabezadas por grupos que realizaban reclamos por fuera de las reivindicaciones estrictamente económicas, y afirmaban que a eso se debía que tuvieran continuidad. Sin embargo, lo que los patrones no decían era que cada medida de fuerza tenía como consecuencia el despido o la suspensión de numerosos delegados y activistas de fábrica, con lo cual era presumible que una vez interrumpidas las instancias de huelga, el conflicto continuara en aquellas seccionales que se vieran afectadas por estos motivos. Esto fue lo que ocurrió en las empresas metalúrgicas en octubre de 1949 cuando los trabajadores decidieron ir nuevamente a la huelga.

Una vez desatado el conflicto, los empresarios de la Cámara Metalúrgica repudiaron la protesta y la denunciaron enviando telegramas de aviso a la policía y al gobierno. Los argumentos que sostenían señalaban como responsables —nuevamente— a las comisiones internas, e incluso diferenciaban y le quitaban responsabilidad política y gremial a las delegaciones tradicionales de la UOM:

La huelga era encabezada por elementos bien conocidos, a fin de lograr la reincorporación de los obreros que no se reintegraron oportunamente a sus tareas [...]. No habiendo logrado el resultado apetecido, un llamado congreso de delegados dispuso, sin intervención de la Unión Obrera Metalúrgica, un paro general de una hora de “brazos caídos” el viernes 2 para continuar como huelga general a partir del día siguiente. (*Metalurgia*, 1949: 3)

Esta línea de oposición de los agrupamientos empresariales, como vemos, fue una constante, tanto en el primero como en el segundo gobierno peronista. Los acuerdos entre el capital y el trabajo —en clave de alianza de clases— que representó al peronismo deben ser interpretados bajo una perspectiva en la cual el conflicto no solamente estuvo presente sino que además ocupó un lugar trascendente y continuo. Era claro para los empresarios que la lógica económica del “círculo virtuoso” de impulsar una mayor producción y consumo les resultaba redituable, pero lo sería aún más —entendían— si lograban disciplinar a los trabajadores.¹⁰ De allí que el empresariado encontrara oposición en cada una de sus propuestas de maximizar la productividad y poner coto al creciente poder fabril de los obreros. En muchos sentidos, las tensiones de la alianza social, más que en una línea de acuerdos, se tradujo en una permanente resistencia a la pérdida del control del trabajo frente al capital. Fue un proceso exacerbado por una fuerte politización del circuito productivo que colocaba al capital en

10 A esto había que sumarle los redituables beneficios que el empresariado obtuvo a través de la política crediticia durante estos años, incluso sin distinción del tipo de empresa (Rougier, 2017; Basualdo, 2010).

situación de revisar sus criterios de reproducción e incluso de la propia gestión de acumulación.

Según la visión de los empresarios, la resistencia de los trabajadores fue caracterizada por estos como actos de “holgazanería”, llevadas a cabo con “lentitud y desgano”, o simplemente como oposición a las propuestas de organización laboral de la patronal.

En los conflictos laborales de 1949 nuevamente la patronal metalúrgica señalaba como responsable de estas acciones a las comisiones internas. De allí que la discusión obrero-empresarial para la elaboración del nuevo convenio colectivo de 1949 obtuvo la propuesta de las cámaras metalúrgicas de regular la existencia y el funcionamiento de las comisiones:

A los efectos de mejorar la disciplina interna de las fábricas, consideramos también necesario incluir en el nuevo convenio el reglamento de las comisiones internas a fin de establecer las normas a que deben ajustar su desempeño a estos organismos, lo mismo que su composición, deberes y atribuciones [...]. Firmas: Cámara Argentina de Industria Metal (Merlini), Confederación de Industrias Metalúrgicas Livianas. (*Metalurgia*, 1949: 5)

Finalmente, en el convenio de 1949 se delimitaron ciertas cuestiones relacionadas con la reglamentación de las comisiones internas. Allí se determinó que la patronal debía aceptar el derecho a percibir sueldo a los miembros de las comisiones que debieran desarrollar gestiones gremiales en el Ministerio de Trabajo y otras dependencias nacionales. Además, se impidió la aplicación de sanciones a los delegados sin causa justificada y sin previa comunicación

al sindicato para la realización de una instancia previa de conciliación.¹¹

Reglamentos internos, ausentismo y tarjeta de producción

Tal como pudimos evidenciar a través de la documentación empresarial, durante estos años son insistentes los reclamos patronales respecto a que las demandas obreras alteraban la legislación fabril y, por lo tanto, su autoridad. La expresión empírica de la norma y el mando del capital sobre el trabajo se dimensiona en la naturaleza y respeto que el capitalista desea imprimirle a las reglamentaciones diarias en la planta (Marx, 1975: cap. V y VI).

Esta concepción da sentido al porqué de los numerosos conflictos que surgen en los espacios fabriles por la aplicación de los reglamentos y la lucha por su modificación (Gaudemar, 1991: 35). Un reglamento fija principios generales de obediencia al mando jerárquico, además de señalar lo que está prohibido hacer, sea para evitar accidentes laborales o para no causar daños a las instalaciones.¹² Para el empresario, si la ley fabril ya no era cumplida según sus criterios, había un corto paso a la insubordinación.

En esta etapa, el debate y conflicto obrero-patronal en torno a las llamadas *tarjetas de producción* ocupó un lugar destacado, ya que estas tenían como finalidad otorgar a los trabajadores el derecho a involucrarse en el establecimiento de sus pautas y niveles de producción, y a contar con el

11 En el artículo 70 del convenio metalúrgico quedó estipulado que la patronal no podía interferir en la comunicación entre la comisión y sus representados; se resaltaba que la empresa no debía incomodar a los trabajadores que buscaran enterarse de las noticias que la comisión colocase en las pizarras (Schiavi, 2008: 118-119).

12 En la revista *Tamet* (septiembre de 1947, p. 10) abundan los ejemplos sobre el tema de la seguridad fabril.

acceso a la información sobre el desarrollo técnico de las empresas y, por ende, intervenir en sus ritmos de trabajo. La *tarjeta* fijaba niveles y tiempos de producción promedio de cada obrero. Su particularidad era que la información contenida en estas tarjetas iba a ser manejada por las comisiones internas y los delegados sindicales. Los empresarios se opusieron vehementemente frente a esta propuesta. Y así lo hicieron saber a través de sus publicaciones corporativas:

[Los obreros] han presentado demandas sobre la adopción de una “tarjeta de producción” cuyo mecanismo con la injerencia y contralor diario del obrero, patrón y comisión interna, equivale a la intervención interna de los trabajadores en la marcha de técnica de los establecimientos... (*Metalurgia*, 1949: 2)

La UOM impulsó esta estrategia de disputa del control de producción en las fábricas metalúrgicas, junto a las delegaciones fabriles y las comisiones internas respectivas. Los empresarios, a la vez que denunciaban la injerencia en la organización de la producción, señalaban el “desinterés evidenciado por la parte obrera acerca de la situación económica de las industrias”, al manifestar que les resultaban absolutamente extrañas las intenciones de co-gestión en las plantas:

Es sugestivo además que en el curso de las discusiones del convenio los delegados obreros hayan pretendido intimidar a los industriales manifestando que implantarán la tarjeta de producción para llegar a la fiscalización de los costos... (*Metalurgia*, 1950: 54)

En octubre de 1949 los trabajadores metalúrgicos convocaron a un nuevo paro nacional, que tuvo una importante

adhesión. En los inicios de 1950 la UOM llamó a otro paro en la provincia de Buenos Aires por un conflicto con la firma importadora de cajas registradoras National. Los empresarios consideraban estas protestas como una arbitrariedad.

“Injustificada declaración de huelga general metalúrgica”, titulaban sus comunicados; y un año después las editoriales metalúrgicas señalaban que las principales dificultades de la industria del sector eran “el problema obrero, el problema económico, el problema de la importación y el problema de la competencia” (*Metalurgia*, 1950).

“Declaración de huelga de los obreros metalúrgicos” fue el titular de la nota editorial de la revista *Metalurgia*, al referirse al reclamo patronal sobre la situación social en marzo de 1950. Desde 1948 a 1953 la tónica fue la misma desde la perspectiva de los empresarios: reivindicar los logros económicos o al menos la política de promoción industrial del peronismo, pero señalando las limitaciones que este proceso tenía debido a la indisciplina obrera, al desarrollo de las comisiones internas, a las reiteradas “faltas” expresadas en el incumplimiento del orden fabril, al aumento de accidentes de trabajo, a la rotación, a la tarjeta de productividad y a los cada vez más altos salarios. En definitiva, era notoria en este proceso la existencia de una fuerte disputa en términos de clase por la hegemonía en la planta, evidenciado a través de una fuerte resistencia por parte de los obreros a perder el control de la producción, al tiempo de promover la toma de decisiones respecto a su intervención en el ciclo productivo.¹³

13 La lucha obrera supo incorporar a sus reclamos una amplia gama de interpelaciones a las patronales. Los metalúrgicos —como buena parte de la clase obrera— sumaron reivindicaciones en las que se potencian y promueven otros campos de disputa con el capital —además del salarial—, tal como ocurrió con el ámbito educativo. El pedido de mejoras para facilitar o incentivar la formación integral de los trabajadores, junto a aquellas demandas que hacían pie y articulaban con propuestas estatales de la época —desde las escuelas fábricas a la Universidad Obrera— comple-

Reflexiones finales

Numerosos investigadores han sostenido la hipótesis acerca de la existencia de un fuerte proceso de “transferencia de poder” o “subversión del orden establecido” en el taller en favor de los trabajadores en los años del peronismo. También han rescatado del olvido historiográfico la existencia de picos huelguísticos de magnitud durante esta misma época.¹⁴ En ambos casos, las explicaciones de la naturaleza de los conflictos exceden el mero marco reivindicativo y se relacionan con una fuerte disputa de poder en la planta —resistencias— con las patronales.¹⁵

En los últimos años del segundo gobierno peronista 1953-1955, antes del golpe cívico-militar de 1955, se profundizaron y desbordaron los conflictos entre el capital y el trabajo dentro del espacio fabril. La crisis económica de la etapa delineó un escenario complejo caracterizado por el alza en los niveles inflacionarios y un impacto desfavorable en la capacidad adquisitiva del salario real de los trabajadores. Las luchas obreras aumentaron significativamente y las disputas contrarias al productivismo completaron el abanico de resistencias.¹⁶ De allí que los empresarios, a lo largo de esta etapa, diseñaron estrategias tendientes a procurar el debilitamiento del poder obrero en las plantas. Una de

tan una perspectiva, sin duda, mucho más rica y compleja del mundo del trabajo de la Argentina de aquellos años, en los que la demanda por mejores salarios era planteada como una dimensión más en las reivindicaciones de las huelgas del sector. (AA.VV., 2011).

14 Daniel James (1990) y Eugene Doyon (1970) entre otros/as.

15 Otras interpretaciones relevantes sobre el tema: Fabián Fernández (2005).

16 Desde las mismas plantas fabriles se estaba disputando la transferencia de poder de clase; el proceso de autovalorización obrera, a través de la emergencia de conflictividad en varios frentes con los capitalistas, con el Estado e, incluso, contra las tendencias burocratizantes sindicales encontrarían su continuidad en los años 50 y 60, durante la llamada “resistencia peronista”. Sobre este tema, consultamos Ernesto Salas (1990) *La resistencia peronista: la toma del frigorífico Lisandro de La Torre*, Buenos Aires, Ceal.

ellas fue mejorar los tiempos de trabajo, acelerando la producción y estableciendo propuestas en clave de incentivos laborales. Para ello esperaban contar con el apoyo político oficial, que si bien fue el plafón central a la hora de dar cuenta del cumplimiento de las demandas obreras, veía con inquietud cierta autonomía de los trabajadores en los reclamos desde las comisiones internas e, incluso, en más de una oportunidad, con posiciones desafiantes en las negociaciones por los convenios o acuerdos firmados por las delegaciones de la UOM o la CGT.

Para los empresarios metalúrgicos, estos conflictos expresaban con claridad los límites del “policlasismo del peronismo” —así lo manifiestan los documentos de sus reuniones sectoriales—. Entendían que el proyecto político no los contenía por su fuerte componente “obrerista” y que la conflictividad social se profundizaba a través de una fuerte lucha social, con trabajo a desgano, paros e “indisciplina obrera”.¹⁷

Los trabajadores ganaban protagonismo y era evidente su fortaleza social en la fábrica, así como sus planteos eran cada vez más críticos respecto del rol de la patronal en la sociedad. Asimismo, incluso durante el crítico escenario económico del segundo gobierno, la identidad peronista de la mayoría de los obreros metalúrgicos se mantenía inalterable, más allá del peso que fueron adquiriendo otras corrientes, como los comunistas, en delegaciones de base o comités de huelga.

Uno de los trabajadores de este sector político realizaba una clara radiografía de las representaciones sindicales. Afirmaba que hacia los años cincuenta:

17 Las relaciones de la clase obrera y los orígenes del peronismo nos remiten al análisis del concepto de *estrategia de la clase*. Sobre este concepto ver Iñigo Carrera (2004) y Elisalde (2018).

Trabajaba en la empresa IMPA de Caballito, una empresa metalúrgica importante de 1600 obreros. Allí el peronismo tenía fuerza, era mayoría... entonces el partido [comunista] me plantea asumir una tarea... en una mezcla de audacia y locura... aparezco hablando en todas las asambleas de IMPA San Martín como autodelegado fraternal de la empresa IMPA Caballito... (Barainca, 1999)

Sin embargo, excepto en las publicaciones sindicales en los que se denota —como es natural— una clara puja política entre diferentes corrientes, las fuentes del capital (entrevistas a dirigentes fabriles, archivos empresariales, publicaciones sectoriales) raramente atribuyen a algún sector político sindical en particular el accionar huelguístico durante estos años, incluso en la huelga de 1954. Este proceso, si bien tuvo momentos de discrepancias, en donde jugaron diferencias tácticas y estratégicas entre los diferentes niveles de representación (delegaciones por planta, UOM CGT), lo cierto es que encontró a los/as obreros/as metalúrgicos/as en una acción de clase unificada, más allá de su condición política.

La patronal en todo momento pretendió apoyar sus argumentos amparándose pragmáticamente bajo el discurso oficial de Perón respecto del mejoramiento de la productividad como objetivo de naturaleza social. De allí la importancia de analizar acontecimientos económicos y políticos a favor del “productivismo”¹⁸ como fue el Congreso de Confindustria de 1953, el Congreso de Organización y Relaciones de Trabajo en 1954 y el Congreso de la Productividad de 1955. En

18 En este período son innumerables los debates teóricos y políticos sobre la naturaleza del concepto de productividad. Cada actor social —empresarios, Estado y trabajadores— presentaba su visión sobre esta noción. Los trabajadores rechazaron toda forma de racionalizar —en nombre del taylorismo y fordismo o la modernización— cualquier proceso de trabajo, sea a través de incentivos o cambios en la forma de producir.

estos foros el empresariado esperaba no solo legitimar su discurso de racionalización de la producción y disciplinamiento obrero sino también encontrar un apoyo más decidido por parte del gobierno, e incluso de la CGT.¹⁹

Sin embargo, las organizaciones empresariales se encontraron con que el gobierno peronista y la CGT eran remisos a la hora de aplicar los planes “productivistas” a la medida de sus consideraciones. Por el contrario, al volver a sus fábricas se topaban, como pudimos demostrar, con una férrea resistencia obrera cada vez que intentaban llevar a cabo sus “reformas racionalistas”, tal como ocurrió en las etapas analizadas y signadas por el trabajo a desgano, las huelgas con agitación, piquetes y toma de plantas. Este panorama fue explícito y alcanzó un punto culminante en el pico huelguístico de 1954.

Bibliografía

AA.VV. (2011). *Trabajadores y educación en la Argentina*. Buenos Aires, Buenos Libros.

Basualdo, E. (2010). *Estudios de historia económica argentina*. Buenos Aires, Siglo XXI.

Berrotarán, P., Jáuregui, A. y Rougier, M. (2004). *Sueños de bienestar en la Nueva Argentina*. Buenos Aires, Imago Mundi.

Doyon, E. (1970). *Perón y los trabajadores*. Buenos Aires, Solar-Hachette.

Elisalde, R. (2008). Notas sobre las estrategias del capital y el trabajo en el campo educativo: control, disciplina y educación alternativa. *Anuario IEHS*, Universidad Nacional de Tandil.

19 Algunos historiadores consideran que estos congresos no tuvieron todo el apoyo del empresariado y fue más bien una estrategia del gobierno para evidenciar su preocupación por temas reclamados por las patronales, y a la vez para mejorar el posicionamiento del flamante agrupamiento empresarial pro peronista como lo fue la Confederación General Económica (Berrotarán, Jáuregui y Rougier, 2004).

- _____ (2018). El peronismo como estrategia de los trabajadores. AA.VV., *Historia social de la argentina (1930-2001)*. Buenos Aires, Eudeba.
- _____ (2020). *El mundo del trabajo en la Argentina. La Siam Di Tella: productivismo, educación y resistencia obrera (1935-1955)*. Buenos Aires, Biblos.
- Fernández, F. (2005). La huelga metalúrgica de 1954. *Anuario PIMSA*. Buenos Aires.
- Gaudio, R. y Pilone, J. (1983). Estado y relaciones laborales en el período previo al surgimiento del peronismo, 1935-43. *Desarrollo Económico*, vol. 24, núm. 94.
- Gaudemar, J. P. (1991). *El orden y la producción*. Madrid, Trotta.
- Ilíngo Carrera, N. (2004). *La estrategia de la clase obrera, 1936*. Buenos Aires, Asociación Madres de Plaza de Mayo.
- James, D. (1990). *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina (1946-1976)*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Marx, K. (1975). *El Capital*, libro I. México, Siglo XXI.
- Rougier, M. (2017). La política credicia y monetaria durante el peronismo (1944-1955). *Ejes de Economía y Sociedad*. Concepción del Uruguay, Universidad Nacional de Entre Ríos.
- Schiavi, M. (2008). *La resistencia antes de la Resistencia. La huelga metalúrgica y las luchas obreras de 1954*. Buenos Aires, El Colectivo.

Documentos y periódicos

Archivo Siam. Biblioteca UDTT.

Archivo IMPA.

Crítica, marzo de 1954.

Tamet, septiembre de 1947.

Metalurgia, julio de 1947, abril de 1948, mayo de 1949, julio de 1950 y 1954.

Federación Metalúrgica, 1953.

Entrevistas

Antonio Sudiero, AHODT, 1973

Torcuato Sozio, AHOTDT, 1973.

Guido Clutterbuck, AHOTDT, 1973.

Eduardo Barainca, realizada por Roberto Elisalde, 1999.

Capítulo 6

Crisis de fuerza social y protesta obrera

El movimiento huelguístico de 1954

Fabián L. Fernández

Introducción

El trabajo que presentamos aquí tiene como objeto el conjunto de conflictos laborales ocurridos en la Argentina durante la primera mitad de 1954, en el contexto de las negociaciones obrero-patronales por la fijación del precio de venta de la fuerza de trabajo en las distintas ramas de la actividad económica. Partimos de un problema de carácter general, relativo al conocimiento de las condiciones que determinan la aparición y desarrollo de *crisis de fuerzas sociales con participación obrera* en el momento en que detentan el gobierno del Estado. Consideramos a las fuerzas sociales como alianzas de clases o fracciones de clases en disposición de enfrentamiento: su análisis se ubica entonces en las relaciones de fuerzas políticas, en especial en el momento en que determinadas clases y/o fracciones logran convertir sus intereses corporativos en los intereses generales de otras clases y/o fracciones que les quedan subordinados, articulados todos ellos en el enfrentamiento con los intereses de los grupos que conforman fuerza (o fuerzas) adversaria(s).

Toda *situación de crisis de fuerzas sociales* toma forma en el conflicto entre sus grupos componentes, cuando el “equilibrio de compromiso” entre el interés hegemónico del grupo dirigente y los intereses parciales de los grupos subordinados se encuentra puesto en cuestión a partir de una de estas tres condiciones: una disputa por la dirección de la alianza; por un mayor espacio dentro de ella para llevar adelante políticas propias; o, por último, por un conflicto determinado por un “interés económico profesional” inmediato.¹ Observando el conjunto de la relación de fuerzas políticas y, en particular, la lucha interburguesa en el momento 1943-1946, registramos la conformación de dos fuerzas sociales, cuyo enfrentamiento aparece como contradicción peronismo/antiperonismo. En ese contexto, una parte de los cuadros militares en el gobierno desde el golpe de Estado de 1943 organizó el *interés general de la clase capitalista*, fundado en la reproducción de la relación capital/trabajo asalariado (relación propia del capital industrial) y en la necesidad de que dicha clase asumiera de forma plena la función de clase dirigente.² De allí la convocatoria de dichos cuadros a la “colaboración” de clases, la “humanización” del capital, la función social de la propiedad privada y el fortalecimiento de la organización sindical y política de

1 Hemos elaborado esta clasificación de las tres formas de crisis en alianzas de clases a partir del instrumental teórico aportado por Gramsci (1998).

2 Esto, a pesar de que la fuerza social peronista no incluía, en el momento de su génesis, a ninguna fracción capitalista en tanto sujeto político capaz de plantear con autonomía el interés general de la clase y, a la vez, la realización de sus intereses económico-corporativos. Las fracciones del capital más concentrado, a través de sus organizaciones gremiales, priorizaron la defensa de dichos intereses parciales y sumaron su apoyo a los cuadros políticos nucleados en la alianza electoral conocida como Unión Democrática. Entre esos cuadros políticos los hubo de los partidos de izquierda (Socialista y Comunista) quienes plantearon como alternativa, en su caso frente al movimiento obrero, la realización de sus intereses en tanto asalariados y ciudadanos en el contexto de la lucha antifascista. Para un análisis del momento de génesis de la fuerza social peronista y su relación con la estrategia de la clase obrera *cf.* Iñigo Carrera (2019).

los trabajadores en tanto asalariados-ciudadanos.³ Desde la perspectiva de la clase obrera, su participación mayoritaria en la fuerza social peronista en formación significó la realización de la estrategia orientada a la democratización del régimen social y político, a la ciudadanización y a la institucionalización de sus luchas, a la consolidación del movimiento obrero en tanto sujeto político. Todo ello a través del establecimiento de una alianza entre una parte de los cuadros sindicales y los cuadros militares en el gobierno, alternativa que creó las mejores condiciones para la realización de los intereses parciales de los obreros en tanto grupo social: la defensa de las conquistas salariales obtenidas, la preservación de la organización sindical y el acceso al gobierno del Estado, aunque no al poder estatal centralizado, entendido este último como violencia material organizada y administración burocrática centralizada, como “poder nacional del capital sobre el trabajo” (Marx, 1984: 33).

La fuerza social peronista, en la que el interés del capital industrial (en el sentido señalado más arriba) era hegemónico, detentó el gobierno del Estado en el período 1945-1955. Si por un lado se unificó al interior del sistema institucional, al mismo tiempo atravesó situaciones de crisis, en las que el movimiento obrero cumplió un papel protagónico. La primera situación se inició en 1945-1946: el Partido Laborista (PL), apoyado en la organización sindical, disputó con los otros partidos que integraban la coalición que sostenía la candidatura presidencial de Juan Perón la designación de candidaturas legislativas y ejecutivas. Más tarde la disputa opuso a una parte de los cuadros políticos del PL con el propio liderazgo de Perón, cuando éste decidió fusionar a los

3 Una formulación de esta alternativa política burguesa, en la forma de programa, se encuentra en el discurso pronunciado por Juan Perón ante empresarios reunidos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el 25 de agosto de 1944.

diversos partidos que lo respaldaban en uno solo. Una parte de los dirigentes del PL, sin embargo, resolvió aceptar la fusión y, ya con Perón en la presidencia, defender su espacio en la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), de la que finalmente fue desplazada a principios de 1947 por una fracción político-sindical apoyada por el gobierno.

Una nueva crisis se registró en 1951, en el contexto de la campaña hacia las próximas elecciones generales: la CGT impulsó la candidatura de Eva Perón a la vicepresidencia y para ello llevó adelante la movilización del Cabildo Abierto del Justicialismo, aunque su propósito fue frustrado por la oposición del ejército y la iglesia católica —organizaciones que en ese momento integraban la alianza política en el gobierno—, a lo que se sumó el rechazo del mismo Perón. Mientras en la primera situación de crisis se manifestó una disputa por la dirección de la fuerza social peronista,⁴ en la segunda el movimiento sindical pretendió consolidar las posiciones ganadas en el sistema institucional y a la vez ocupar espacios de mayor influencia dentro del gobierno con el apoyo a un cuadro político que aparecía identificado con sus demandas. La descripción y análisis del conjunto de los conflictos laborales de 1954 (Fernández, 2004, 2005 y 2007) nos llevó a considerar que los mismos constituyeron una manifestación de otra crisis de la fuerza social peronista. ¿A qué forma de crisis refiere el hecho investigado?

4 En el marco de la cual el PL presentó un programa de gobierno orientado hacia la realización de la "democracia política y económica", con nacionalización de los servicios públicos y los recursos minerales, control estatal del comercio de los bienes de primera necesidad, reforma agraria y fin del latifundio, impuestos sobre la herencia y la renta y "eliminación de la especulación" vía la regulación de las ganancias del capital, entre otros aspectos (Gay, 1999: 62-65).

Las huelgas de 1954

Las huelgas del primer semestre de 1954 se produjeron en un contexto señalado, a nivel de las relaciones de fuerza políticas, por la tregua entre el grueso de los cuadros políticos del régimen social distribuidos en las dos grandes fuerzas sociales que tomaban las formas de peronismo y antiperonismo; tregua hecha manifiesta con la sanción de la Ley de Amnistía en 1953 y el consenso para la canalización del conflicto por la vía de las elecciones para vicepresidente de abril de 1954.⁵ En el plano de las relaciones de fuerzas objetivas, los conflictos huelguísticos transcurrieron en un momento caracterizado por la salida de la crisis económica de los años 1949-1952. Tanto para el gobierno como para la fracción del capital organizada de manera económico-corporativa en la Confederación General Económica (CGE) permanecían en pie una serie de problemas irresueltos, referidos a los obstáculos que debía enfrentar la acumulación ampliada del capital en el sector industrial: las dificultades en el aprovisionamiento de maquinarias e insumos para el sector industrial y la capacidad de presión lograda por la organización sindical de los obreros a nivel de unidad de producción. Un efecto de esto era la consolidación de la tendencia al estancamiento de la productividad del trabajo en la industria.

En ese contexto, febrero de 1954 fue el punto inicial de la renegociación de los convenios colectivos de trabajo vigentes, tras la prórroga por dos años dispuesta por el Plan Económico (1952). Esto implicaba nuevos acuerdos

5 Las elecciones del 25 de abril de 1954 resultaron en el triunfo del candidato peronista Alberto Teisaire con 4.994.106 votos, y la consolidación de la Unión Cívica Radical como segunda fuerza electoral, al obtener su candidato Crisólogo Larralde 2.493.422 sufragios. Ambas fuerzas políticas, como en las anteriores elecciones presidenciales de 1951, sumaron más del 90% de los votos: en 1954 el peronismo obtuvo el 62,4% y el radicalismo el 32,5%.

salariales por rama de actividad, congelados durante ese período junto con precios y tarifas de servicios públicos.⁶ La conducción de la CGT apoyó la decisión del gobierno nacional de no intervenir en las negociaciones salariales y a la vez propuso la fijación de una suma básica y general, equivalente al salario mínimo de acuerdo al costo de vida, con aumentos a partir de ese piso por sector. Por otra parte, reprodujo (en las páginas de los periódicos *CGT* y *La Prensa*) los reiterados discursos de Perón en los que llamaba a los trabajadores a incrementar la producción y la productividad del trabajo como condición necesaria para el avance en el proceso de distribución progresiva de la riqueza.

En los meses previos a la convocatoria de las paritarias se extendió el reclamo por aumentos del salario que compensasen el real incremento de los precios de los dos últimos años. La demanda se intensificó a partir de marzo de 1954, ahora impulsada por la apertura de la negociación de los convenios.⁷ Los conflictos se iniciaron en ese mes bajo la forma de huelgas, paros de brazos caídos y trabajo a desgano. A comienzos de abril se registraron trabajo a desgano y paros progresivos en las ramas de la metalúrgica, de la industria del cuero y de la industria del tabaco.⁸ A partir

6 Los nuevos convenios colectivos se encuentran regulados por la ley 14.250, sancionada por el Congreso Nacional en septiembre de 1953, promulgada por el gobierno en octubre y reglamentada por el decreto 6582 de abril de 1954.

7 La existencia de un estado de ánimo obrero marcado por la disposición a la protesta, y que además manifestó la existencia de un grado destacado de contradicción intrasindical, puede observarse en los casos de los conflictos en las empresas Danubio y Pirelli, de las ramas textil y del caucho, respectivamente (Fernández, 2007).

8 El relato de los conflictos huelguísticos se basa en primer lugar en la información provista por los medios de la oposición sindical y política, como el ya citado *Boletín* del COASI y *Nuevas Bases*, ambos ligados al PS; y el periódico *Nuestra Palabra*, la revista *Nueva Era* y el *Boletín Informativo* de Unidad Sindical, vinculados al Partido Comunista y al Movimiento Pro Democratización e Independencia de los Sindicatos. También se recurrió a diversos órganos de la prensa comercial, tanto de la Capital Federal como del interior del país. La censura de prensa existente en ese entonces

del 10 de mayo se extendieron la huelga de brazos caídos, trabajo a desgano, trabajo a reglamento y paros por turno entre trabajadores de diversos sectores de la actividad. En los primeros días de mayo la modalidad del paro comenzó a tomar un peso mayor frente a otras formas de la protesta, al tiempo que se produjeron dos ocupaciones de fábrica en las industrias metalúrgica y del calzado, y huelgas por empresa en la rama petrolera. El 11 de mayo el secretariado de la CGT convocó a los secretarios generales de sindicatos de Capital Federal y Gran Buenos Aires para imponer la “orden [de] levantar los paros y el trabajo a desgano, normalizar las tareas y la producción” (*Nuestra Palabra*, 18-5-1954). Sin embargo, el grado de movilización alcanzado para entonces provocó el desconocimiento de esta directiva y una renovada presión de los obreros de varios sindicatos sobre sus direcciones y, de forma mediata, sobre la de la central obrera, para reclamar la continuidad de las acciones, como lo demostraron las marchas del 12 de mayo hacia los locales sindicales (*Nuestra Palabra*, 18-5-1954). Nos detendremos en el desarrollo de la protesta de cuatro fracciones obreras que se destacaron por su protagonismo en el conjunto del proceso, por el alcance de sus acciones y por las consecuencias que estas trajeron aparejadas.

Los obreros metalúrgicos

Los trabajadores organizados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) iniciaron las negociaciones salariales en marzo. El 9 de abril la conducción de la UOM convocó a huelgas de brazos caídos en las fábricas de la Capital Federal

impuso el silencio sobre las huelgas en los diarios de circulación masiva, salvo en situaciones muy puntuales. Esto es notorio en los diarios de la Capital Federal, mientras que en los del interior suele encontrarse una mayor cantidad de datos.

y el Gran Buenos Aires, para presionar a los empresarios y neutralizar la oposición sindical en los lugares de trabajo, organizada sobre todo por los comunistas.⁹ A comienzos de mayo la presión de una parte de los obreros sobre la dirección se profundizó con paros progresivos en la Capital Federal, sin autorización previa de la jefatura gremial. En ciudades del interior como Tucumán, Santa Fe y Tandil, los paros fueron impulsados por iniciativa de las direcciones de las seccionales respectivas. En Rosario, los obreros aplicaron el trabajo a desgano. El 12 de mayo la cúpula metalúrgica reunió a los delegados de empresas de la Capital Federal para informarles acerca de la posición de la CGT favorable al fin de las medidas de fuerza. Los delegados la rechazaron, mientras grupos de obreros provenientes de fábricas porteñas se concentraron frente a la sede sindical exigiendo la convocatoria a una asamblea general del gremio, al tiempo que repudiaron a los dirigentes. También se realizaron asambleas en diversas fábricas de la capital: en casi todas ellas se decidió la persistencia de los paros, que comenzaron a ser totales. La presión obrera volvió a expresarse en el congreso extraordinario de delegados de la UOM-Capital, el 17 de mayo: frente al reclamo de buena parte de los delegados presentes, la dirección sindical se pronunció a favor de una huelga general de la rama. El día 20 la cúpula de la UOM oficializó la convocatoria a la huelga general nacional a partir del 21 de mayo. Los obreros de distintas fábricas metalúrgicas de Capital Federal y el Gran Buenos Aires fueron organizando “comités de huelga”, algunos

9 En la periodización de la huelga metalúrgica determinamos dos etapas: de la huelga de brazos caídos a la huelga general de la rama —9 de abril al 21 de mayo— y desarrollo de la huelga general de la rama —21 de mayo al 12 de junio—. A la vez, dentro de esta segunda etapa señalamos dos momentos: el de disputa por la conducción entre la dirección de la UOM y la de los comités de huelga —21 de mayo al 4 de junio— y el de conducción de la huelga por parte del Comité de Huelga Central —4 al 12 de junio— (Fernández, 2005).

estrechamente imbricados con las comisiones internas, y orientados a las demandas salariales y por mejoras en las condiciones de trabajo. En la formación de dichos comités participaron delegados y ex delegados, muchos peronistas y otros vinculados al Movimiento Pro Democratización e Independencia de los Sindicatos (MPDIS), organización político-sindical ligada al Partido Comunista.

El 1 de junio se firmó el convenio con la patronal: se estableció una escala de aumentos salariales, el reconocimiento por parte del sindicato de la fijación de premios salariales por productividad y su compromiso de asegurar la no injerencia de los delegados de planta en sentido contrario a su implementación, y la promesa de los empresarios de no tomar represalias contra los obreros una vez “normalizadas” las tareas. En Capital Federal la asamblea de delegados de la UOM, celebrada el 4 de junio, reunió a tres mil trabajadores, a los que se sumaron otros en la calle, muchos de ellos organizados en los comités de huelga y ahora centralizados en una Comisión de Huelga. Una parte de los obreros aceptó la moción de la directiva, orientada al retorno al trabajo a partir del día 7, mientras que otra exigió la renuncia del secretario general Abdala Baluch y de la comisión administrativa de la UOM, la constitución de un comité de huelga y la continuidad de la huelga. Las diferentes posiciones entre ambos sectores se saldaron en un enfrentamiento con intercambio de golpes, pedradas y disparos de armas de fuego. Los partidarios de la huelga se constituyeron en asamblea, dieron por renunciadas a las autoridades del sindicato y rechazaron el acuerdo. Al mismo tiempo, iniciaron una marcha hacia Plaza de Mayo con el objetivo de solicitar a Perón su intervención en el conflicto; pero la policía detuvo su paso en las cercanías de Plaza Congreso. Al día siguiente, 5 de junio, una nueva asamblea de tres mil obreros frente a la sede de la UOM decidió transformar la

Comisión de Huelga en Comité de Huelga Central —integrado en buena medida por delegados de planta y vinculado, hasta donde sabemos, al MPDIS—, desconocer a la dirección del sindicato, continuar la huelga y convocar a una nueva asamblea a realizarse el 7 en la plaza Martín Fierro, en el barrio de Boedo.¹⁰ Este lugar constituía un referente simbólico para las luchas obreras por hallarse en los terrenos ocupados años antes por los Talleres Metalúrgicos Pedro Vasena, epicentro de la Semana Trágica de 1919. Una gran cantidad de obreros metalúrgicos debatió allí los pasos a seguir y aprobó el inicio de negociaciones con los empresarios por parte del Comité (desplazando de hecho a la dirección oficial de la UOM) y la realización de una nueva marcha hacia Plaza de Mayo para exigir una entrevista con Perón. Una parte de los asistentes marchó entonces hacia la sede del sindicato y de allí a la plaza: otra vez fueron detenidos por un cordón policial, y en esta ocasión el resultado fue el choque callejero entre los trabajadores y la fuerza de seguridad. Los manifestantes lograron forzar el paso y llegar a la plaza, donde llevaron a cabo una concentración que duró varias horas. Un grupo de cuatro universitarios, pertenecientes al centro de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y miembros de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), se acercó a uno de los dirigentes del Comité de Huelga para ofrecerle una contribución solidaria. La policía, apostada en las cercanías, detuvo a los estudiantes y obligó a los trabajadores a dispersarse.

10 Una vez finalizada esta asamblea, hacia Avellaneda se dirigió una manifestación de metalúrgicos encabezada por los miembros del Comité de Huelga Central, la que reunió entre dos mil y tres mil personas. Al llegar a las inmediaciones de la planta de la empresa TAMET, los manifestantes fueron baleados por un grupo encabezado por dirigentes de la seccional metalúrgica local, según fuentes vinculadas a la oposición sindical comunista.

Al mismo tiempo se produjeron intentos de organizar a los trabajadores para continuar con la huelga en varios partidos del Gran Buenos Aires, como La Matanza, Morón, San Martín, San Isidro y Vicente López. En este último municipio, obreros enfrentados con la dirección de la seccional organizaron el 7 de junio una manifestación a la sede de la UOM en Presidente Perón (Munro). La columna recorrió las plantas fabriles de la zona, llamando a los trabajadores que habían retornado al trabajo a continuar la huelga y plegarse a la marcha. En las cercanías de la sede sindical los manifestantes fueron baleados por un grupo de personas identificadas como partidarios de la conducción seccional. Mayor impacto tuvo el suceso ocurrido frente a la fábrica La Cantábrica, ubicada en Haedo (Morón): allí se produjo un tiroteo que enfrentó a un piquete de obreros favorables a la huelga con trabajadores que apoyaban a la dirección de la seccional local. El resultado fue la muerte de dos personas, unas de las cuales era Roberto Ruiz, secretario adjunto de la comisión administrativa de la UOM.

En lo que hace al interior del país, sabemos que las asambleas de delegados de las seccionales Tucumán, Rosario y Córdoba decidieron por mayoría la vuelta al trabajo; lo mismo en Vicente López. A partir de los hechos de La Cantábrica se inició una campaña de detenciones en relación a la huelga metalúrgica, mientras que la CGT, la UOM y la prensa denunciaron un supuesto plan de “infiltración comunista” en los sindicatos. A partir del 8 comenzó a registrarse un retorno a la actividad normal en fábricas del Gran Buenos Aires; el día 12, el Comité de Huelga Central difundió un documento informando que:

En esta situación de persecución, con la creación artificial de este clima público de terror policial, a que tanto contribuyó la prensa oficialista, el gremio retor-

na al trabajo forzado por todas estas circunstancias, pero con el espíritu de lucha intacto, alta la moral combativa. (*Nuestra Palabra*, 22-6-1954)

Los obreros textiles

Ante el fracaso de las negociaciones con la patronal, la dirección de la Asociación Obrera Textil (AOT) convocó al trabajo a desgano. Una parte de los obreros, organizada en la oposición sindical, planteó la profundización del conflicto bajo la forma de paros progresivos, como paso previo al “paro total” del gremio. En ciertas provincias las jefaturas locales organizaron paros parciales, como en Santa Fe entre el 2 y el 13 de mayo. En la Fábrica Argentina de Alpargatas (Capital Federal) el rechazo de un sector importante del cuerpo de delegados, tanto a una oferta salarial de la patronal como a la decisión de las direcciones de la CGT y la AOT de suspender la realización de medidas de fuerza, resultó en la convocatoria a asambleas por sección que votaron a favor de un paro total en el establecimiento, junto con una movilización de dos mil trabajadores hacia la sede de la seccional sindical. Tres días más tarde, una asamblea de delegados se pronunció por la continuación del paro para forzar a la conducción a llamar a una asamblea general del gremio. Al mismo tiempo se llevaron a cabo paros en otros establecimientos, como La Fuegoquina, Campomar de Belgrano y Lanera San Justo, mientras que en otros los trabajadores respondieron favorablemente al llamado de la AOT.

Los trabajadores de la industria del caucho

Los obreros organizados en la Federación Obrera del Caucho, Anexos y Afines (FOC) presentaron en febrero sus demandas salariales y por mejoras en las condiciones de

trabajo. Desde inicios de mayo, los trabajadores llevaron adelante paros parciales y trabajo a reglamento en los establecimientos para presionar a la patronal y obligar a la dirección de la FOC a convocar a asamblea general con el objetivo de tratar la marcha de las negociaciones paritarias. La asamblea se hizo el 12 de mayo, con la presencia de más de diez mil obreros: algunos de los participantes rechazaron la orden de la dirección de la CGT de levantar las medidas de fuerza. En el mismo mes, en un contexto de paros, trabajo a desgano y huelgas de brazos caídos, registramos dos ocupaciones de establecimientos, en las empresas India Rubber y Pirelli. El 3 de junio se produjo la intervención de la FOC por parte de la CGT, por la incapacidad de la dirección de aquella de poner fin a las medidas de fuerza. Al frente de la gestión de la FOC fue nombrado Antonio Dopacio, secretario general de la Unión Obrera Maderera y miembro del Consejo Directivo de la CGT. El mismo día se llevó a cabo una asamblea general del sindicato, convocada con anterioridad, en la que una parte de los trabajadores repudió al nuevo funcionario, exigió la normalización de la Federación, resolvió continuar con el trabajo a desgano en las fábricas y llamar a una nueva asamblea para el 5 de junio. La convocatoria fue impugnada por la intervención, lo que llevó a los obreros organizados en la oposición a realizar una concentración frente a la sede de la FOC, el día 9 del mismo mes. Allí se produjo un choque callejero con la policía; luego, unos tres mil obreros marcharon en dirección a la Plaza de Mayo, entonando consignas contra el interventor y la dirección de la CGT, pero fueron detenidos y dispersados por un cordón policial. Al mismo tiempo la intervención reafirmó la “normalización de tareas” y prosiguió con la negociación paritaria, anunciando el 15 de junio el pago de un anticipo salarial. Desde la segunda semana de junio no encontramos referencias a conflictos en la rama del

caucho, aunque sí menciones a despidos y detenciones de obreros, registradas por órganos de la oposición comunista (*Nueva Era*, julio-agosto de 1954; *Nuestra Palabra*, 22-6-1954).

Los trabajadores de la industria del tabaco

Desde el 12 de abril aproximadamente, los tabacaleros —nucleados en la Federación Obrera del Tabaco (FOT)— iniciaron, bajo la convocatoria de la dirección, una serie de acciones consistentes en paros, trabajo a reglamento, trabajo a desgano y huelgas de brazos caídos, acompañadas a veces por sabotaje a maquinarias. En algunos establecimientos, una parte de los obreros estaba organizada, según la prensa comunista, por el MPDIS. Los tabacaleros continuaron la protesta incluso después de la convocatoria cegetista a “normalizar las tareas”. Hacia el 20 de mayo, el secretario general de la FOT, Orlando Célico, llamó a modificar la aplicación del trabajo a desgano y elevar el nivel de la producción, así como a retomar la actividad en algunos establecimientos. Esta decisión provocó descontento en una parte de los obreros y, en el caso de la empresa Piccardo, condujo a la profundización de las acciones a través del paro parcial en determinadas secciones (*Nuestra Palabra*, 25-5-1954).¹¹ El 16 de junio, la FOT decidió la vuelta al trabajo luego de la firma de un acta en el Ministerio de Trabajo y Previsión (MTyP), por la cual el sindicato y las patronales se comprometieron a retomar la negociación colectiva. La iniciativa de la dirección sindical recibió el apoyo de una asamblea general de delegados de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. A pesar de ello, continuó el trabajo a desgano en las principales fábricas del sector.

11 El diario oficialista *Democracia*, en su edición del 25 de junio, informó que a partir del 20 de mayo se retomó la actividad en algunos establecimientos.

El 3 de julio, el MTyP intimó a la FOT a “normalizar las tareas en todas las manufacturas de tabaco”, bajo la amenaza de declarar la “ilegalidad” de las medidas de fuerza. Dos días después los obreros, convocados a asambleas por planta y sección, votaron la continuidad del trabajo a desgano. La respuesta de los empresarios fue el inicio de despidos, mientras que la CGT intervino la FOT, designando al dirigente de la AOT José Manuel Mendoza como titular de la gestión. Por su parte, el gobierno nacional suspendió el “reconocimiento gremial” a la Federación. De acuerdo a las fuentes de la oposición comunista, la protesta de los tabacaleros continuó al menos hasta el 19 de julio (*Nuestra Palabra*, 27-7-1954). El 21 la intervención anunció que “quedaron normalizadas las tareas que cumple el gremio tabacalero” (*La Prensa*, 22-7-1954). La intervención a la FOT privó al movimiento de una instancia de centralización y conducción, a lo que se agregaron los despidos masivos de trabajadores: cerca de ochocientos según el *Boletín* del Comité Obrero de Acción Sindical Independiente (COASI). Desde mediados de julio, la policía inició una campaña que incluyó detenciones de trabajadores del sector, como antes lo había hecho con los metalúrgicos y obreros del caucho, y el envío de destacamentos a algunas fábricas (*Boletín* del COASI, agosto de 1954; *Nueva Era*, julio-agosto de 1954).

La firma de los convenios colectivos

La finalización de la lucha de los obreros del tabaco a fines de julio señaló, de acuerdo a los datos registrados, el punto final del conflicto que trabajadores de diversas ramas venían llevando adelante desde marzo. Los convenios fueron firmados entre mediados de abril y principios de septiembre: además de contemplar aumentos de salarios, en muchos casos incluyeron el establecimiento de premios

por el incremento de la productividad del trabajo o el compromiso de las partes de eliminar las trabas a las modificaciones en el proceso laboral tendientes a ese objetivo. En la *Revista del Ministerio de Trabajo y Previsión* encontramos registros de ese tipo correspondientes a cuarenta y seis convenios. Además, figuran acuerdos para la reducción de la pausa por almuerzo en sesenta y ocho empresas de diversas ramas (Ministerio de Trabajo y Previsión, 1955). Ello significó el reconocimiento formal e institucional de una demanda económico-corporativa del conjunto de la clase capitalista, aunque debe tenerse en cuenta que su aplicación se encontraba supeditada a la relación de fuerza existente en el gremio y a nivel de lugar de trabajo. El MTyP señaló que a lo largo de 1954 se firmaron cerca de mil convenios laborales a nivel nacional, en tanto que en el ámbito de la Capital Federal se produjeron cuarenta y dos “conflictos colectivos”.¹² Esa cifra total parece no tomar en cuenta el conjunto de las medidas de protesta ni aquellas ocurridas a nivel de establecimiento. Una fuente muestra, por otra parte, el impacto de las huelgas de 1954 en términos de pérdida de jornadas laborales y número de trabajadores en la Capital Federal:

**Conflictos laborales, número de trabajadores afectados
y días de trabajo perdidos
Capital Federal, 1934-1954**

Año	Número de conflictos	Trabajadores afectados	Días de trabajo perdidos
1934	42	25.940	742.256
1935	69	52.143	2.642.576
1936	209	85.438	1.344.461

12 Introducción a la “Memoria sintética del Ministerio de Trabajo y Previsión correspondiente al año 1954”, en *Revista del Ministerio de Trabajo y Previsión*, núm. 28, mayo de 1955.

1937	82	49.993	517.645
1938	44	8.871	228.703
1939	49	9.718	241.099
1940	53	12.721	224.599
1941	54	6.606	247.598
1942	113	39.865	634.339
1943	85	6.754	87.229
1944	27	9.121	41.384
1945	47	44.186	509.024
1946	142	333.929	2.047.601
1947	64	541.377	3.467.193
1948	103	278.179	3.158.947
1949	36	29.164	510.352
1950	30	97.048	2.031.827
1951	23	16.356	152.243
1952	14	15.815	313.343
1953	40	5.506	59.294
1954	18	119.701	1.449.497

Fuente: Rotondaro (1971: 240-241).

En 1954 el número de jornadas perdidas mostró un fuerte ascenso en relación a los tres años inmediatamente anteriores, ubicándose en tercer término tras los niveles máximos de 1946-1948 y 1950, correspondientes a los previos movimientos huelguísticos ocurridos en el período 1945-1955. Que en 1954 el total de conflictos registrados en la Capital Federal haya sido menor que en 1953, y que a la vez el número de días perdidos fuera inconmensurablemente mayor, puede ser un indicador de la extensión de la conflictividad en un doble sentido: en número de trabajadores y en duración. Respecto al conjunto de las acciones de protesta contamos con una aproximación, también para la Capital Federal, correspondiente al momento enero-julio de 1954.

Resulta manifiesto el peso de las acciones agrupadas en la categoría “otros conflictos” (paros, huelgas de brazos caídos, trabajo a desgano y trabajo a reglamento), medido por la cantidad de trabajadores participantes, en especial para los meses de abril y mayo:

1954	Huelgas			Otros conflictos
	Mes	Cantidad	Participantes (en miles)	Jornadas perdidas (en miles)
Enero	2	2,5	37	10,7
Febrero	1	-	0,2	4,5
Marzo	1	-	-	0,8
Abril	2	0,4	5,2	178,0
Mayo	7	103,1	795,2	373,3
Junio	3	67,3	479,4	50,8
Julio	1	0,3	3,5	18,7

Fuente: Schiavi (2013: 291). Nótese que el cuadro enumera 17 huelgas en total.

En relación a las demandas salariales de las distintas fracciones obreras, el resultado obtenido en las paritarias requiere un análisis particular para cada gremio.¹³ Puede observarse en el siguiente cuadro que el salario nominal de 1954 se ubicó en una senda ascendente en relación a los años anteriores y en un nivel más de tres veces superior al vigente en 1948:

Índice de salarios nominales (1948 = 100)

Año	Índice
1937	31

13 Una aproximación al resultado de las negociaciones en los gremios textil y metalúrgico puede encontrarse en Schiavi (2013: 289-314).

1938	-
1939	32
1948	100
1949	136
1950	165
1951	209
1952	256
1953	280
1954	327

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1960: 519).

Sin embargo, la inflación de precios impone la necesidad de relativizar la tendencia al aumento de los salarios nominales, como vemos a continuación:

**Cuadro VII. Índices de los precios del consumo
(todos los grupos y el de la alimentación). Base: 1948 = 100**

Períodos	Total	Alimentación
1948	100	100
1949	131	130
1950	165	167
1951	225	227
1952	312	330
1953	324	339
1954	337	336

Fuente: OIT (1955: 273). Los índices corresponden a Capital Federal.

Vemos que los precios de los alimentos, bienes que cubren la parte sustancial del consumo de los obreros, siguieron una tendencia al incremento constante entre 1948 y 1953, e incluso marcaron una mayor distancia respecto al índice general de precios de bienes de consumo a partir de 1952, aunque la tendencia —siempre en lo que hace a los precios

de los alimentos— se revirtió en 1954, lo que implicó una mejora relativa del poder adquisitivo del salario.

Las formas de organización de la protesta obrera

En la protesta se destacaron formas de organización que involucraron a los obreros a nivel de planta, tanto aquellas reconocidas a través de los convenios colectivos de trabajo (las comisiones internas) como las que surgieron en el conflicto, situadas por fuera del sistema institucional (los llamados “comités de huelga”, “comités de lucha” o “comisiones unitarias de lucha”). Los comités aparecieron a principios de 1954 en los gremios del caucho y textil; a fines de abril la negociación de los convenios y la extensión de las medidas de fuerza crearon las condiciones para su extensión a otros. Centrarón sus demandas en la dirección económica de la protesta, pero su misma existencia manifestó otro elemento: la oposición a las conducciones sindicales establecidas. Organizaron no solo a obreros que se identificaban con la oposición al gobierno y a la capa sindical dirigente, sino también a una parte que respaldaba a estos últimos y que, en la coyuntura de la disputa salarial, presionó a sus jefes a través de la acción de los comités. La militancia sindical comunista, a través del MPDIS, cumplió un papel importante en su formación, considerada por aquella como un primer paso en la lucha por la democracia sindical y la independencia política de la clase obrera.

En ciertos conflictos les correspondió a las direcciones sindicales, a nivel local o nacional, la convocatoria al trabajo a desgano o a paros progresivos. Las direcciones evitaron apelar a formas que, como en el caso de la huelga general por rama, habrían significado un enfrentamiento abierto con las patronales y el gobierno. La excepción fue la UOM, donde la huelga general del gremio profundizó una crisis

de liderazgo de amplias proporciones. La dirección de la CGT hizo manifiesta su voluntad de controlar la protesta obrera y erigirse en factor de estabilidad social sin dejar de presionar a los capitalistas, por la doble vía de la atribución de responsabilidades y la amenaza que implicaba el desarrollo de las acciones.

Conclusiones

En este trabajo circunscribiremos las conclusiones al análisis de la relación entre la protesta obrera de 1954 y la problemática de la crisis de la fuerza social peronista.

Conceptualizamos el hecho investigado como un *movimiento huelguístico* (Lenin, 1973a y 1973b): un conjunto de conflictos, por rama y por lugar de trabajo, que alcanzó a diversas capas y fracciones de la clase, con los obreros de gran industria detentando un lugar de conducción indicado por la forma que asumió su lucha, el peso de su organización y el impacto institucional de sus acciones; movimiento que se realizó tras objetivos económicos, pero que a la vez creó las condiciones para la práctica posterior de la lucha política —oportunidad que para el movimiento obrero argentino se cerró con el golpe de Estado que derrocó a Perón en septiembre de 1955 y se recompuso después, en el nuevo contexto determinado por la proscripción política y social. El movimiento huelguístico de 1954 tuvo un carácter *defensivo*, al constituir un medio de defensa de intereses inmediatos relativos al salario. En su movilización, los obreros no pretendieron confrontar explícitamente con la política del gobierno (aunque sin duda lo hicieron de hecho) ni sostuvieron un planteo propio en lo que respecta a los cambios que los capitalistas intentaban introducir en los procesos de trabajo. Por ello el conflicto asumió la forma de

la *protesta*, en el sentido del rechazo a una situación concreta y el planteo de demandas inmediatas, pero sin formular un cuestionamiento al régimen político y social vigente.¹⁴ Y si bien en determinado momento (a principios de mayo) la generalización de las acciones a diversas ramas abrió la perspectiva de una *huelga general de hecho*, como tal expresión del interés del grupo social, la intervención de la capa sindical dirigente limitó su alcance real al nivel de cada grupo profesional.

Si podemos hablar de crisis de la fuerza social peronista en 1954, esta se planteó alrededor de la defensa del interés corporativo, tanto desde la fracción de capitalistas inserta en la industria como desde la clase obrera. La campaña en pos de una mayor productividad del trabajo, junto con la negativa a considerar las demandas de aumentos salariales tal como fueron planteadas por los sindicatos, mostraron que dicha fracción del capital renunció a continuar haciendo “sacrificios de orden económico-corporativo”. Al interior de la fuerza social, tal actitud implicó poner en cuestión el ya mencionado “equilibrio de compromiso”. La defensa del interés corporativo significó que, en 1954, el movimiento obrero no tomó la iniciativa política, en el estricto sentido de plantear la disputa por la dirección de la alianza o por la formulación de políticas propias frente a la coyuntura. Por otra parte, el apoyo del movimiento obrero al gobierno se mantuvo y consolidó, como lo demostró el resultado de las elecciones de abril. Que los obreros llevaran adelante una lucha dirigida en última instancia a la defensa de las posiciones adquiridas en el sistema institucional, evidenció que la estrategia dominante de democratización del régimen social y político vigente seguía en pie: la meta de los obreros

14 Y en este sentido diferente de la *lucha*, concepto que refiere al desarrollo del antagonismo entre clases.

era la realización de su existencia en mejores condiciones dentro de la sociedad burguesa.

Ahora bien, aunque la clase obrera no tuvo la iniciativa política, el movimiento huelguístico sí tuvo una *dirección política*. La campaña de detenciones de militantes sindicales, la censura de prensa, las intervenciones a sindicatos, la suspensión del reconocimiento legal al sindicato tabacalero y las denuncias sobre la “infiltración comunista” fueron indicadores de que dicha dirección estuvo impuesta por el gobierno: no solo como políticas orientadas a la represión del conflicto sino también, y más allá, a la neutralización del surgimiento de una alternativa política propia que cuestionara esa relación de fuerzas al interior de la alianza y llevara sus luchas por fuera del sistema institucional.

Las huelgas de 1954, en tanto *demonstración de fuerza en el ámbito económico-corporativo*, mostraron que la clase obrera conservaba la capacidad para realizar sus intereses parciales y a la vez impedir que la fracción industrial capitalista impusiera de forma plena los suyos. Esa capacidad obrera de *obstaculizar el desarrollo del capitalismo en profundidad* se resolvió para la clase capitalista (y la burguesía en general) en una doble dirección: una parte se abroqueló en la fuerza social y política adversaria, fortalecida luego por la incorporación de la Iglesia católica y un sector del ejército; otra parte, nucleada en la CGE en tanto organización económico-corporativa, fue restando su apoyo efectivo al gobierno y en la coyuntura del golpe de Estado de 1955 se ubicó en la retaguardia, haciendo manifiesto el aislamiento social y político de la mayor parte de la clase obrera.

¿La protesta obrera de 1954 señaló un límite a la estrategia de clase que aparece como *reformismo obrero*, en el sentido de incorporación del conjunto de la clase en tanto grupo social al sistema institucional político? ¿O dicho límite ya se manifestó en la situación de crisis de 1951, cuando el grueso

de la clase sufrió una derrota política en su intento de ocupar mayores espacios de influencia dentro la fuerza que integraba?

Bibliografía

Fernández, F. (2004). La huelga metalúrgica de 1954: formulación de un sistema de problemas. *PIMSA. Publicación del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina. Documentos y Comunicaciones*. Buenos Aires.

____ (2005). *La huelga metalúrgica de 1954*. Documento de Trabajo núm. 51. Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación.

____ (2007). El movimiento huelguístico de 1954. *PIMSA. Publicación del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina. Documentos y Comunicaciones*. Buenos Aires.

Gay, L. (1999). *El Partido Laborista en la Argentina*. Buenos Aires, Biblos - Fundación Simón Rodríguez.

Gramsci, A. (1998). *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*. Buenos Aires, Nueva Visión.

Iñigo Carrera, N. (2019). *Estrategias de la clase obrera en los orígenes del peronismo*. Buenos Aires, Grupo Editor Universitario.

Lenin, V. (1973a). *Informe sobre la revolución de 1905*. Buenos Aires, del Ceibo.

____ (1973b). Sobre las huelgas. *Lucha sindical y lucha política*. Buenos Aires, Anteo.

Marx, C. (1984). *La Comuna de París*. Buenos Aires, Anteo.

Ministerio de Trabajo y Previsión (1955). *Revista del Ministerio de Trabajo y Previsión*, núm. 24-30. Buenos Aires.

Organización Internacional del Trabajo (1955). *Anuario de Estadísticas del Trabajo*. Ginebra.

____ (1960). *Anuario de Estadísticas del Trabajo*. Ginebra.

Rotondaro, R. (1971). *Realidad y cambio en el sindicalismo*. Buenos Aires, Pleamar.

Schiavi, M. (2013). *El poder sindical en la Argentina peronista (1946-1955)*. Buenos Aires, Imago Mundi.

Fuentes citadas

Boletín del Comité Obrero de Acción Sindical Independiente.

Democracia

La Prensa

Nuestra Palabra

Nueva Era

Capítulo 7

1956: los 42 días de la huelga del orgullo metalúrgico

Ernesto Salas

Ambos contaban que habían dado un paso al costado para que asumiera Vandor. Lo decía Avelino Fernández y lo afirmaba Paulino Niembro. La primera vez fue el año 1955 en la Federación de Box, donde se hacía el Congreso de Delegados de la Unión Obrera Metalúrgica para elegir al secretario general de la seccional Capital. Dirigía el gremio a nivel nacional Abdala Baluch. Algunos dicen que fue este último el que lo propuso como candidato, otros que fue el propio Niembro, que lo precedía en el cargo. Lo cierto es que Augusto Timoteo Vandor, un entrerriano de treinta y dos años, que había ingresado como operario en la fábrica Philips en 1948 y se había destacado como delegado desde 1951 en la sección matricería, llegó a la conducción del sindicato dos meses antes del violento derrocamiento del gobierno de Perón. En los últimos años, al compás del crecimiento de la industria por la sustitución de importaciones peronista, el sindicato metalúrgico se había vuelto hegemónico en la vida de las organizaciones obreras.

Sesenta días más tarde, el mundo en el que vivían se derrumbó violentamente. La dictadura que se hacía llamar

“libertadora”, encabezada por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas, comenzó a ejecutar lo que los más han dado en llamar la “revancha patronal” y unos pocos la “reconquista del poder” en las fábricas por parte de los empresarios. La Confederación General del Trabajo fue intervenida por el capitán de navío Alberto Patrón Laplacette. En los corrillos obreros a nadie se le escapó la ironía de que la dictadura había nombrado un patrón en la CGT. Todos los gremios que no habían sido tomados por asalto en los meses previos por grupos sindicales afines a los gopistas fueron ocupados por interventores militares o antiguos líderes socialistas o sindicalistas.

En noviembre, para graficar la asunción del sector más antiperonista del golpe luego del desplazamiento del general Lonardi, la dictadura intentó prohibir los sentimientos mediante el Decreto 4161 que castigaba con prisión el mero acto de nombrar o recordar, en público o en privado, a Juan Perón, a Eva Perón o al peronismo, sus símbolos y sus marchas.

Con el control de los sindicatos en manos de interventores militares y de gremialistas aliados, el gobierno pensó que daría fin al peronismo en la conciencia de los trabajadores. Estaban tan convencidos de que el poder de Perón radicaba en el uso demagógico de los recursos que, ahora que los manejaban ellos, la situación no podía serles menos que favorable. Uno de los primeros pasos fue declarar disueltas todas las comisiones internas en las plantas. A partir de allí, los delegados serían nombrados por el Ministerio de Trabajo (James, 2005: 83).

A fines de 1955, ya eran miles los obreros despedidos; muchos de ellos engrosaron las filas de los detenidos sin causa o con prontuarios inventados. Según datos tomados de *El Líder* y *El Proletario*, en diciembre y durante el primer semestre de 1956 en diferentes fábricas metalúrgicas —Catita,

Atimsa, Philips, Siam, Klockner, Fanal, Piazza, Carma, Siambretta— crecieron las protestas por la intención de las patronales de incrementar los ritmos de producción y por los despidos (Schneider, 2005: 90).

En enero de 1956, encabezados por Vandor, una concentración de trabajadores sostuvo durante varias horas un piquete en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica en protesta por la intrusión del sindicato. Adentro del edificio se encontraba el interventor, coronel Bartolomé Gallo.¹ Como es sabido, cuando los oficiales del Ejército se ven cercados por trabajadores recurren a la policía. Gallo no fue la excepción y ordenó que el edificio fuera rodeado por carros de asalto con órdenes de dispersar a los manifestantes. Días después, Vandor fue detenido como promotor de la protesta. En la prisión conoció otros resistentes, dirigentes sindicales y políticos, como John William Cooke, Amado Olmos, Andrés Framini, Miguel Gazzera. En junio, el mismo mes en que se produjo la sublevación del general Juan José Valle, recuperó la libertad.

Desde antes del golpe existía un reclamo generalizado entre los empresarios para acabar con la prepotencia de los sindicatos en las industrias y recuperar la disciplina y el control de los establecimientos. La mayoría de ellos hacía años que protestaba porque consideraba que la autoridad en las plantas había desaparecido, el mismo tiempo en que habían reclamado infructuosamente la modificación en las condiciones de trabajo para adecuarlas a las nuevas técnicas de racionalidad productiva y obtener la mejora de

1 El coronel Bartolomé Gallo tenía como antecedente sindical el haber formado parte de una conspiración golpista planeada para el mes de mayo de 1951 con el objetivo de apresar a Perón y luego convocar una Convención que restableciera la Constitución de 1853. El golpe fue frustrado por una delación que llevó a la cárcel a su jefe, el coronel José Francisco Suárez. Inmediatamente su comando de oficiales —entre los que se encontraban los tenientes coroneles Gregorio Pomar y Carlos Toranzo Montero, entre otros— se disolvió (Ruiz Moreno, 1994: 42).

la productividad laboral (Elisalde, 2019: 173). Pero no era solo eso: se trataba también de una cuestión de jerarquías sociales que había que volver a encuadrar, lindante con el derecho mismo del uso de la propiedad. Es por esto que la huelga metalúrgica de fines de 1956 deberá entenderse, también, dentro del ciclo de resistencia obrera en defensa de los convenios colectivos de trabajo obtenidos durante el peronismo.

El 25 de enero de 1956, la Federación Argentina de Industrias Metalúrgicas (FAIM) le hizo llegar al Ministro de Trabajo y Previsión, Raúl Migone, sus observaciones sobre las cláusulas que debían ser anuladas del convenio colectivo metalúrgico porque afectaban la productividad y la disciplina en los lugares de trabajo. Entre las demandas expresaban la urgencia de “reglamentar las condiciones de actuación en la fábrica de las comisiones internas y los cuerpos de delegados, transformándolos de organismos de perturbación en verdaderos representantes obreros” (Schiavi y Ferraro, 2010).

Para atender el pedido de los empresarios de reajustar los hábitos del trabajo y aumentar la productividad, en febrero el gobierno dictó el decreto 2739 que, al mismo tiempo que autorizaba un aumento salarial de emergencia del 10%, en su artículo 8 permitía la movilidad dentro de la fábrica si se la consideraba necesaria para acrecentar la productividad, así como se habilitaba a los empleadores a concluir acuerdos especiales con los trabajadores en lo relativo a nuevos sistemas de producción, por encima y al margen de las condiciones estipuladas en los convenios existentes. También ponía excepciones a las tareas y las condiciones de trabajo cuando “directa o indirectamente atenten contra la necesidad nacional de incrementar la productividad” (James, 2005: 91).

Raimundo Villaflor

A los catorce entró de aprendiz en Corrado y a los dieciséis pasó a Baseler Limitada donde se fabricaban vagones y puentes grúa. Era oficial ajustador cuando cayó Perón y los interventores militares nombraron de oficio a los cuerpos de delegados. En Baseler el delegado general fue Raimundo Villaflor: tenía veintiún años. Como era tan pibe y tenía antigüedad, pensaron que no me iba a meter en nada. Entonces les “organi-cé” el taller y les hice una huelga. (Walsh, 1987: 14-15)

Fue entonces que el secretario del coronel Gallo le habló por teléfono:

Me dijo que levantara el paro, y si no, toda la comisión y yo a la cabeza, estábamos todos presos. Le dije que si quería levantar el paro, que viniera él. Me dijo que nos presentáramos inmediatamente al sindicato. Entonces fue la comisión patronal, y fuimos nosotros por separado, no quisimos ir en el mismo camión. Allá nos presentaron, y en seguida nos quisieron apurar.

Un capitán gritaba que daba miedo. Villaflor agrandado gritó más que él:

Que si él estaba acostumbrado a mandar en los cuarteles, con nosotros no iba a mandar, y que a nosotros no nos iba a manosear ningún general, ni coronel ni lo que fuera, porque nosotros éramos trabajadores y nos tenía que respetar. Que si los patrones querían levantar el paro, que pagaran las quincenas atrasadas, porque esa era la causa del paro. Y que además él podía gritar y darse el lujo de decir las cosas que estaba

diciendo porque él no sabía lo que era el trabajo. Se quedó sin palabras, y se la ganamos, ¿no? Se la ganamos. (Walsh, 1987: 16)

Medidas de la dictadura

En abril de 1956 el gobierno de facto impuso el decreto 7107 que inhabilitaba de participar en actividades gremiales a todos aquellos que hubiesen ocupado cargos entre febrero de 1952 y septiembre de 1955. Las inhabilitaciones alcanzaron, según informes oficiales dados por la intervención de la CGT, a 13.541 personas, aunque fuentes de la oposición las calcularon alrededor de las 50.000. Algunos días después, el capitán Patrón se permitió aconsejar:

Estoy seguro de que esta vez los trabajadores sabrán elegir bien. El conocimiento que tienen de sus ex-dirigentes, y la libertad de que gozan, que significa que no habrá presiones ni imposiciones desde arriba, permitirá que surja una nueva generación de dirigentes que se dedicarán exclusivamente a trabajar por el bien de sus compañeros, porque no tendrán ambiciones políticas ni estarán atados al carro de ningún tirano. (Salas, 1995)

Para reforzar aún más el sentido de la nueva etapa, en mayo se dictó el decreto 9.270/56 que instituía el régimen legal de las entidades obreras. El decreto rompía con la tradición gremial peronista de un solo sindicato nacional por rama de actividad al permitir la libre afiliación a más de una organización, y se reconoció la posibilidad de minorías en la conformación de las conducciones. Con todas estas herramientas, los funcionarios de la dictadura y sus

aliados se sintieron seguros para llamar a elecciones para designar los delegados que concurrirían a las reuniones de las comisiones paritarias. Pero algo salió mal. Al cabo de unos meses, las quejas de los empresarios dieron cuenta de que en el nivel de plantas muchas de las elecciones habían sido ganadas nuevamente por dirigentes peronistas, ahora de una segunda línea.

Huelgas

La respuesta de la clase obrera no fue solo por la defensa de las conquistas adquiridas en los años previos sino que a ello se sumó la demostración política airada e indignada frente al golpe de Estado que había restaurado el poder de las clases dominantes. Para dar una medida de dicha reacción resulta útil recurrir a las estadísticas. De un año a otro, las jornadas perdidas por huelga aumentaron un 3.500%, de 144.120 en 1955 a 5.167.294 en 1956.

Cuadro de huelgas, nivel nacional (Rotondaro, 1971: 240-241)

Años	Casos	Trabajadores afectados	Jornadas perdidas
1951	23	16.356	152.243
1952	14	15.815	313.343
1953	40	5.506	59.294
1954	18	119.701	1.449.497
1955	21	11.990	144.120
1956	52	853.994	5.167.294
1957	56	304.209	3.390.509
1958	84	277.381	6.245.286
1959	45	1.411.062	10.078.138
1960	26	130.044	1.661.519

Sabotajes

Los sabotajes en las fábricas acompañaron los conflictos gremiales desde el primer momento de la dictadura de Aramburu. Consistieron, sobre todo, en acciones en los propios establecimientos o en los servicios públicos. En el primer caso se trataba de atentados contra las máquinas o los insumos de las mismas realizados por los propios trabajadores. En el segundo, por la acción de comandos clandestinos con un primitivo nivel de seguridad frente a la represión; contaban principalmente con su número, porque pese a las detenciones de miles de personas, los atentados no solo se sucedieron continuamente sino que crecieron en peligrosidad. El gobierno y los aliados hacían permanentes advertencias contra el sabotaje a la producción; en marzo, el capitán Francisco Manrique hizo el siguiente llamado: “El gobierno sigue atentamente el problema del sabotaje, que es obra de grupos de fanáticos y está presto para adoptar las medidas que sean necesarias para reprimirlo. Si los saboteadores no entienden por las buenas, tendrán que entender por las malas”.²

Durante todo 1956 son innumerables las denuncias que se efectúan. El 22 de marzo, en la fábrica Siam Di Tella se encuentran destruidos treinta hoyos de molde para fundición y en una fábrica de trafilación de acero se daña la cobertura de unos cables. En abril se detecta un sabotaje fracasado en una fábrica metalúrgica de La Matanza (Dawyd, 2017). El 3 de abril, una fábrica textil denuncia a un obrero que “deterioró intencionalmente 61 metros de tela e instó a sus compañeros a que hicieran abandono de tareas [...] provocando una merma del 33% en la producción de la fábrica”. El 8 de abril aparece una denuncia de sabotaje en el frigorífico

2 *La Nación*, 2 de marzo de 1956.

Swift: una pieza de hierro en el engranaje de un molino interrumpió el trabajo (Salas, 1995).

La huelga metalúrgica

No bien comenzaron las discusiones de las paritarias, los comités de huelga clandestinos, las comisiones reorganizadoras, los cuerpos de delegados paralelos e incluso las nuevas comisiones directivas electas presionaron sobre las patronales con medidas de fuerza. Obreros de la construcción, cerveceros, perfumistas, navales, de Luz y Fuerza, telefónicos, de los frigoríficos, textiles, mecánicos, portuarios, choferes, de la madera y los metalúrgicos realizaron huelgas de diferente envergadura superando la negativa de las intervenciones. En noviembre, el interventor en la CGT hizo una exhortación a los trabajadores: “No se puede estabilizar o abaratar los precios haciendo huelgas” y, haciendo referencia a la reciente invasión soviética a Hungría, dijo que las huelgas son “decretadas por extremistas, pareciera que obedeciendo órdenes o en combinación con sus amos, que organizan manifestaciones de pueblos en otros nobles y sufridos países”.³

El 17 de julio de 1956, la Dirección Nacional de Trabajo y Acción Social Directa dispuso la constitución de la Comisión de Revisión Laboral que tendría a su cargo la discusión entre la UOM y la FAIM. En respuesta, los delegados paritarios le comunicaron al interventor del gremio —y este le manifestó al ministerio— la disposición a discutir *todo* el convenio colectivo y presentaron una propuesta detallada de sus demandas. Por su parte, los empresarios respondieron que solo discutirían en los marcos fijados por el artículo 8 del decreto 2739 que estipulaba los cambios que debían

3 *La Nación*, 10 de noviembre de 1956.

implementarse para aumentar la productividad y poner límite al poder de las comisiones internas. Frente a la polémica, el organismo del ministerio encargado de la convocatoria a la mesa paritaria, que dirigía Luis Cabut, dio su apoyo a la federación patronal contra de la pretensión obrera de ampliar el debate.

Hacia fines del mes de agosto comenzó un proceso de inquietud en varias fábricas en defensa de la propuesta de la comisión paritaria. Algunos delegados plantearon la realización de paros localizados en algunos establecimientos y el apoyo general a la huelga de dos horas por turno del 3 de septiembre. Entretanto, las reuniones entre las partes no llegaban a ninguna resolución. A fin de mes, la FAIM reclamó que la propuesta obrera era “un desmesurado peticionario solicitando reclasificaciones del personal, modificación substancial en las condiciones de trabajo, aumentos importantes en los beneficios sociales y salarios” (Schiavi y Ferraro, 2010: 16).

El 31 de octubre, autoconvocado por los delegados de base de las principales seccionales, se reunió el Plenario Nacional de Delegados Metalúrgicos quien, en defensa de la posición de debatir el conjunto del convenio, fijó un plazo a la patronal hasta el 6 de noviembre y llamó a realizar congresos de delegados por seccionales. Unos días más tarde, al no obtener respuesta a los reclamos, se decidió el llamado a un paro general metalúrgico para el 12 de noviembre. Al día siguiente se reunieron nuevamente las partes en el Ministerio de Trabajo y la patronal ofreció un 20% de aumento por lo que la representación gremial se retiró de la reunión. Al no haber acuerdo, el ministerio dio por cerrada la paritaria y, como en otros casos similares del período, trasladó la decisión final a un tribunal arbitral.

El día 15, sin embargo, en un intento de controlar la situación, la intervención del gremio llamó a un Congreso

Nacional Extraordinario de Delegados. Las versiones acerca de lo sucedido en la asamblea difieren en detalles. Tomo la de Víctor Masmún, citada en el libro de Ernesto González (1996). Dado que cada cierta cantidad de horas cambiaban los compañeros que presidían el congreso, cuenta Masmún que tocó en su turno tratar la votación de si se declaraba la huelga general por tiempo indeterminado o, por el contrario, se decidía el trabajo a reglamento:

En ese momento entra un teniente con un montón de ñatos. Sube el tipo al escenario y dice: —Tienen dos minutos para suspender el congreso y evacuar la sala. ¡Y lo hacen tranquilamente!

Entonces yo lo presento: —Bueno, acá se ha presentado el teniente que viene con la precisa de disolver el Congreso por orden del interventor Laplacette. Pero antes, como presidente, vamos a someter al Congreso las decisiones que hay. —Entonces el tipo se quedó ahí parado.

—Primero van a votar los que están por el trabajo a reglamento, —y votan solo cuatro o cinco. Cuando digo:

—Ahora a votar por la moción de huelga por tiempo indeterminado, —suenan una ovación y casi por unanimidad se levanta la mano. Entonces se hizo la señal y avanzaron los ñatos con las armas. Una vez que se votó doy por terminado el Congreso, nos fuimos y quedaron los milicos ahí adentro. En ese momento no encanaron a nadie.⁴

4 Entrevista de los autores a Víctor Masmún, diciembre de 1995 (en González, 1996: 61). Poco después del golpe de Estado de 1955, Masmún había entrado a trabajar en la metalúrgica Santa Rosa

Al día siguiente el gobierno declaró ilegal la huelga. Los obreros metalúrgicos la sostuvieron por más de cuarenta días.

Raimundo

La gente estaba encojonada, quería guerrear. Se reunieron los personales, y todos los personales decidieron ir a la huelga. Pero después en los congresos había delegados de las fábricas grandes que querían aflojar [se refiere, entre otros, a Rosendo García, “orador fogoso de actitudes tibias o prudentes”, que representaba a la Siam].

En mitad del congreso se presentaron dos camiones de la policía y el ejército, con un comandante al frente que nos venía a prepear. Bueno, como siempre, el tipo se creía que estaba en el cuartel, y amenazó con correrarnos a tiros y encanarnos y pelearnos, hasta que no faltó uno que le dijo: ¿Por qué no se va a la puta que lo parió?, y ahí entraron todos: Andate, carnicero, hijo de una tal por cual, y se tuvo que ir. Tenía que irse o matarnos a todos. Pero la impresión les quedó a algunos, y empezaron a exponer posiciones que no eran las que habían decidido los personales, y a buscar pretextos sobre huelgas de brazos caídos, que había leyes que nos protegían, y patatín patatatán. Se habían cagado. Entonces saltamos muchos de los talleres chicos y les dijimos que ahí no era cuestión de exponer el miedo que les había entrado, sino lo que habían decidido los personales. Se votó por la huelga general. Y peleamos,

y fue elegido como uno de los dos delegados de la seccional La Matanza para la discusión de los convenios.

nos mantuvimos cuarenta y cinco días. Sí, dicen que Vandor. Pero aquí en Avellaneda Vandor era desconocido. Al propio Rosendo [García] casi no lo conocía nadie. Aquí los que hicieron la huelga general fueron Curra, Bellón, Alvarez, el finado Fernández, Rincón, Isotti...

Cuando se formó el comité de huelga de treinta miembros, Raimundo era el más joven. Le tocó el enlace con la fábrica más difícil, la Ferrum, que estaba al lado de Gendarmería, además de Tamet, Sánchez y Gurmendi, Gálvez. La policía los buscó, pero nadie sospechaba de ese muchacho que andaba por ahí, con la campera en la mano, comiendo una manzana. El que se dio cuenta fue el oficial Plomer, de la segunda de Lanús. Le allanó la casa, pero ya estaba en Dock Sur. Y cuando lo buscó en Dock Sur, estaba en Berazategui. Al fin cayeron todos, menos él. (Walsh, 1987: 16-17)

Las comisiones de delegados

Si bien el Plenario Nacional de Delegados le dio a la huelga la unidad necesaria, aquella no hubiera sido posible sin los delegados de los comités de base seccionales que construyeron una sólida estructura organizativa que resolvió la consulta frecuente con las bases, la formación de piquetes en la entrada de los establecimientos y la formación de numerosas comisiones mediante las que lograron el apoyo de la comunidad. Estos respondían a variadas líneas sindicales. Dice Schneider que el peso cotidiano de la medida de fuerza correspondió a “hombres vinculados a Abdala Baluch [La Matanza], miembros cercanos a Vandor [Capital], sectores pertenecientes a los “libres” que encabezaron la Comisión

Paritaria, militantes comunistas y trotskistas” (Schneider, 2005: 94). A los que hay que agregar las decenas de militantes peronistas de segunda línea no necesariamente identificados con las dirigencias previas, como fue el caso de Avellaneda.

Las seccionales más activas y movilizadas fueron las de Avellaneda, Capital Federal, La Matanza y Vicente López (Schneider, 2005: 94). Según datos de la UOM de 1953, de un total de 128.177 afiliados nacionales, los cuatro distritos mencionados reunían al 57,30% de los obreros cotizantes. La Capital Federal era la más numerosa con casi el 50% de los trabajadores —60.509 afiliados—, seguida por Avellaneda con el 16,2% — 20.661 afiliados— (Marcilese, 2018).

Desde el primer momento, la dictadura intentó reprimir el conflicto con allanamientos, violaciones de domicilio, detenciones y torturas de los huelguistas. Centenares de obreros metalúrgicos fueron a dar a la cárcel y desde allí animaron la continuidad del conflicto. La participación del Ejército en la represión fue notoria en Avellaneda, en cuyas calles circularon tanques Sherman intimidando a la población para que no prestara apoyo a los trabajadores.⁵

El 29 de noviembre, cuando ya arreciaba la represión en los barrios y eran cientos los obreros detenidos, el periódico del Partido Socialista, todavía bajo la dirección de Américo Ghioldi, se refirió a la detención de uno de sus afiliados: “Incurriendo en evidente error, las autoridades policiales han procedido a la detención del compañero José Rincón, afiliado socialista de Lanús y militante del gremio metalúrgico”. El error para *La Vanguardia* no era la represión de los trabajadores en huelga, las detenciones arbitrarias y los

5 *Unidad Obrera*, año 1, núm. 5, 31 de diciembre de 1956. En la primera página se publica una lista incompleta de detenidos y la foto de uno de los tanques en el centro de Avellaneda (archivo Fundación Pluma).

despidos, el ejército en los barrios y las fábricas, las torturas en las prisiones. En este caso se habían extralimitado pues ise trataba de un afiliado socialista! (Taccone y Delfico, 1990: 198).

A comienzos de diciembre fueron detenidos en la sede de la UOM tres de los miembros del comité de huelga cuando concurren a una reunión a la que los había invitado el interventor del gremio.

El 8 de diciembre, el tribunal arbitral dictó el laudo pero lo hizo solo sobre la cuestión de los salarios, fijando un 38% de aumento. A pesar de ello, los industriales afirmaron que solo se podrían aumentar los jornales si al mismo tiempo aplicaban alzas a los precios. Aunque la cifra no era el 60% que había reclamado el gremio, también se alejaba del 20% que habían ofrecido los empresarios. Sin embargo, la huelga continuó en varias seccionales para forzar la reincorporación de los miles de cesanteados y por los aprensados, que sumaban centenares. En noviembre, el Plenario Nacional de Delegados informó la detención de cuatrocientos trabajadores (Schneider, 2005: 95).

Daniel James refleja bien lo sucedido en las seccionales más combativas:

Durante los días de la huelga aviones y vehículos movilizadas por el gobierno distribuyeron volantes donde se exhortaba a los comerciantes de los suburbios, como Avellaneda y Lanús, a no abrirles crédito a los huelguistas. Camiones con altoparlantes recorrieron esos barrios dando los nombres de los jefes huelguistas y exhortando a los trabajadores a volver a sus ocupaciones porque otros obreros lo estaban haciendo. Tanques y tropas patrullaron las calles; la policía entraba en bares y cafés elegidos al azar y expulsaba a los obreros metalúrgicos. La mayor parte de las plantas

fueron ocupadas por el ejército que efectuaba ostentosas maniobras en las inmediaciones. (2005: 102)

Diversas publicaciones reflejaron lo acontecido durante los duros días del conflicto. En *Unidad Obrera* (núm. 5, 31 de diciembre de 1956) se comentaba que

la represión de la huelga se realizó como en la mejores épocas de la oligarquía. Desde el primer día de la huelga y luego de la habitual puesta en ilegalidad, la policía como en otros tiempos —esta vez con la colaboración de los tanques y el Ejército— ocupó los barrios obreros. [...] Este gobierno, que vino para “terminar con todas las dictaduras”, que proclamó solemnemente el derecho de la huelga, no le va en zaga a los peores gobiernos conservadores en materia de represión al movimiento obrero [...] en el reino de la libertad, el obrero huelguista se transforma automáticamente en un “subversivo”, en un “enemigo del orden”, en un pernicioso para la sociedad. (Schneider, 2005: 95)

En *Semana Obrera* (núm. 1, 5 de enero de 1957):

[Todavía] resuena el eco que acompañaba a los camioncitos que circulaban por el Gran Buenos Aires pidiendo a los comerciantes minoristas que no fiaran a los huelguistas. No bastaba la presión, la calumnia, la intimidación armada; ahora se apelaba al hambre. Ningún recurso era despreciable. [...] El día 26 de diciembre, un día después de Navidad, el Plenario Nacional dispuso el retorno al trabajo para no romper la unidad del gremio y ante la situación insostenible que se creaba en la familia trabajadora que no cobraba salario desde 56 días atrás.

Según *Azul y Blanco* (núm. 29, 2 de enero de 1957), “los obreros metalúrgicos han demostrado una capacidad extraordinaria de organización y resistencia. [...] Sabemos de innumerables obreros que debieron recurrir a la solidaridad de los vecinos para comer” (citado en Schneider, 2005: 95).

Cuando ya se habían cumplido treinta y tres días, el Plenario Nacional advirtió con un comunicado las maniobras de la intervención para levantar el paro, afirmando que “ninguna comisión está autorizada para levantar el movimiento por su cuenta, debiendo proceder orgánicamente de acuerdo a las directivas del Plenario Nacional”. El documento es una demostración del espíritu de la huelga pese a los días transcurridos:

Nadie debe olvidar los centenares de detenidos y los millares de cesantes que se encuentran en esa situación por luchar valientemente en favor de los compañeros metalúrgicos [...]. El peor castigo que llevarán en su conciencia aquellos que pueden solucionar nuestro problema y se muestran insensibles e inhumanos, será el remordimiento de haber querido romper por el hambre un movimiento obrero precisamente en la fecha en que toda la población del país festeja la Navidad. Y nosotros, carne del pueblo argentino, fibra del movimiento obrero, les hemos de demostrar que no somos “estómago” — como nos han calificado —, y que aunque pasemos la navidad con PAN Y MATE COCIDO, mantendremos nuestra lucha por VIDA DIGNA, RESPETO AL SINDICATO, EXIGENCIA DE LIBERTAD PARA LOS PRESOS INJUSTAMENTE RETENIDOS, Y TRABAJO PARA LOS CESANTEADOS POR LA PATRONAL REACCIONARIA Y VENGATIVA QUE APROVECHA UN MOVIMIENTO JUSTO

PARA CLAVAR EL ZARPAZO DE LA DESOCUPACIÓN Y LA MISERIA.⁶

En el mismo volante, los delegados resaltan la formación de una comisión intergremial en apoyo de la huelga: “Ya que la CGT no cumple con su misión, la hermandad de los trabajadores organizados cumplirá el cometido, y su unidad indestructible será la garantía de su solución”.

Sin embargo, una semana más tarde, la huelga, que se había ido debilitando por la represión, la vuelta al trabajo en algunas seccionales y por las dificultades de sostenerla en el tiempo, culminó en una derrota parcial al no haber podido lograr la reincorporación total de los despedidos, aunque no fueron pocos los casos en que ello se resolvió por cada establecimiento. El 26 de diciembre, finalmente, el Plenario Nacional de Delegados resolvió levantar el paro.

Raimundo

Me acuerdo que fue en la calle Catamarca, de Lanús Este, éramos veintinueve miembros del plenario cuando llegó la brigada con camiones, toda la patota. Varios se tiraron de la azotea, pero cayeron en un gallinero, y uno se quebró una pierna. El que cayó bien fui yo. Entonces empezaron a tirar, con carabina incluso. Salté tres alambrados antes de salir a la calle. Cuando iba a saltar el último, venía conmigo un compañero que fumaba mucho, y ya no corría, trotaba, y justo en el momento en que yo iba a saltar, pegan dos tiros contra una pared, y él se quedó parado. Pero yo

6 Plenario nacional de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, Buenos Aires, 18 de diciembre de 1956 (archivo Fundación Pluma).

salté, corrí un tranvía y lo agarré, aunque iba con los nueve puntos. Me saqué la campera y volví, los estaban subiendo al camión policial. La gente se amontonaba, y la policía dijo que eran ladrones, qué grande: una banda de veintinueve ladrones. Entonces ellos gritaban: “¡No somos ladrones, somos obreros!”, pero igual los llevaron.

El comité de huelga de Avellaneda había quedado reducido a este muchacho de estatura mediana y ojos oscuros. Pisándole los talones iba casi siempre un chico nervioso, de humor descomunal: su hermano Rolando, tres años menor, que después recordará esa época con nostalgia y admiración.

[...] Cuando el plenario nacional levantó la huelga, volvió a su fábrica, se sentó en el cordón de la vereda. El personal lo rodeó antes de entrar. Les explicó que ahora había que pelear por los presos.

La gente, con tantos días de huelga, no estaba quebrada. Y había una mishiadura... pero la gente no estaba quebrada. Ahora resulta que adentro de la fábrica me estaba esperando el principal Plomer. [...] De un auto bajaron otros dos con ametralladoras, y el preso fui yo. Catorce días incomunicado en Lanús, eran esos días de cuarenta grados de calor, perdí siete kilos en el calabocito ese. Diez días en Olmos. Cuando el oficial me dio la libertad, me dijo: “Espero no verlo más por acá”. Y yo le dije: “En cada huelga que haya, nos va a encontrar siempre”. (Walsh, 1987: 19-20)

Según denunciaba un volante publicado por un grupo de base, sin fecha, pero datado cerca de enero de 1957:

En algunas plantas fueron despedidos entre el 50 y el 70 por ciento. En la firma CAMEA, una de las principales de Buenos Aires, los empleadores pidieron que los obreros firmaran antes una petición de reincorporación; cuando se negaron, los 1300 que había en la planta fueron despedidos.

La derrota, sin embargo, no fue lo que permaneció en la memoria colectiva de los trabajadores metalúrgicos en los años venideros. Al contrario, al igual que en otros acontecimientos similares, significó una demostración de que la unidad y la fortaleza de las organizaciones podía enfrentar, aun desde la clandestinidad y por fuera de los aparatos sindicales, a las fuerzas empresariales y al Estado (James, 2005: 102).

Algunos años después, Abdala Baluch logró su reelección en la seccional de La Matanza con una lista antivandorista. Respecto de la figura de Vandor, para Álvaro Abós “no hubo un conductor y el protagonismo fue colectivo, pero haber participado en la huelga dio prestigio a Vandor entre los metalúrgicos e hizo conocer su nombre a todos los peronistas” (1999: 22).

La memoria obrera rescató “la ira ante la ferocidad de la represión y el orgullo por la resistencia obrera como parte decisiva de la cultura militante que nació en ese tiempo” (James, 2005: 102). Raimundo, como tantos otros, no volvió al sindicato.

Bibliografía

Abós, A. (1999). *Augusto T. Vandor: sindicatos y peronismo*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Baily, S. (1985). *Movimiento obrero, nacionalismo y política en la Argentina*. Hyspanérica (primera edición: 1967).

- Cardoso, O. y Audi, R. (1982). *Sindicalismo: el poder y la crisis*. De Belgrano.
- Dawyd, D. (2017). La construcción de una hegemonía antivandorista en la UOM La Matanza. Entre la resistencia peronista y las huelgas de 1974. *Antigua Matanza. Revista de Historia Regional*, vol. 1, núm. 2, septiembre, pp. 40-71.
- Elisalde, R. (2019). *El mundo del trabajo en la Argentina 1935-1955. La Siam Di Tella: productivismo, educación y resistencia obrera*. Buenos Aires, Biblos.
- González, R. (coord.) (1996). *El trotskismo obrero e internacionalista en la Argentina*. Buenos Aires, Antídoto.
- Gorbato, V. (1992). *Vandor o Perón*. Buenos Aires, Tiempo de Ideas.
- James, D. (1981). Racionalización y respuesta de la clase obrera: contexto y limitaciones de la actividad gremial en la argentina. *Desarrollo Económico*, núm. 83, octubre-diciembre.
- _____ (2005). *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*. Siglo XXI (primera edición: 1990, Sudamericana).
- Marcilese, J. (2018). La Unión Obrera Metalúrgica durante el primer peronismo: evolución institucional y dinámica organizativa. *Trabajo y Sociedad*, núm. 30.
- Rotondaro, R. (1971). *Realidad y cambio en el sindicalismo*. Buenos Aires, Pleamar.
- Ruiz Moreno, I. (1994). *La Revolución de 1955*. Tomo I: Dictadura y conspiración. Buenos Aires, Emecé.
- Salas, E. (1995). *El movimiento obrero en 1956*. Informe de investigación (inédito).
- Schneider, A. (2005). *Los compañeros: izquierda, trabajadores y peronismo en la Argentina, 1950-1976*. Buenos Aires, Imago Mundi.
- Senén González, S. y Bosoer, F. (2009). *Saludos a Vandor*. Vergara.
- Taccone, J. José y Delfico, A. (1990). *Historia y política en el sindicalismo argentino*. Tomo 2. Oriente.
- Walsh, R. (1987). *¿Quién mató a Rosendo?* Ediciones de la Flor [primera edición: 1969].

Capítulo 8

Las ocupaciones de fábricas en 1964 en el proceso de constitución de una estrategia revolucionaria de la clase obrera

María Isabel Grau

Desde la segunda posguerra se abre una nueva fase de acumulación acelerada que reconfigura las relaciones en la economía mundial. En el marco de una crisis inter-burguesa abierta por esa necesidad de reconfiguración del capitalismo a nivel mundial y local, la clase trabajadora irá desarrollando durante esos años experiencias de lucha, confrontación, aprendizajes de organización que abonaron al desarrollo de la conciencia en una parte de la clase y el pueblo que va a plantearse la superación del capitalismo y la revolución socialista como meta, constituyéndose una fuerza social revolucionaria. Esta estrategia de la clase se irá desplegando en disputa y confrontación con la estrategia mayoritaria del movimiento obrero, y se expresará en organizaciones sindicales, estudiantiles, populares y territoriales, confluyendo en organizaciones revolucionarias de las que forman parte trabajadores, estudiantes, sectores del campesinado y pueblos originarios y pequeña burguesía urbana.

El impacto e influencia de la lucha de clases a nivel internacional, la experiencia de la revolución cubana y el surgimiento de movimientos revolucionarios y guerrilleros en

otras regiones de América Latina, las guerras de liberación de Asia y África, la rebelión del “mayo francés”, la guerra de Vietnam, constituyen experiencias que promueven el desarrollo de una conciencia de posibilidad de transformación concreta, con objetivos y formas específicas.

La estrategia del imperialismo sintetizada en la *Alliance for Progress* (Alianza para el Progreso) y la Doctrina de la seguridad nacional da cuenta de la organización internacional de la lucha contrainsurgente que se desplegará con fuerza en nuestro continente y país, respondiendo al grado de organización y radicalización de la lucha social y política en el marco del desarrollo de una estrategia revolucionaria continental.

El golpe de Estado de 1955 que desaloja al peronismo del gobierno e instaura una proscripción política y social del conjunto del pueblo, abre ese periodo en el que se desarrollará una profundización de la lucha de clases y agudización del enfrentamiento político y social en nuestro país que se cierra en 1976 con el golpe de estado. Esta proscripción política y social, que se mantuvo durante todo el período considerado, no abarcó exclusivamente al peronismo, sino que incluyó a cualquier expresión política del pueblo. Desde la aplicación del Plan de Conmoción Interna del Estado (CONINTES) durante el gobierno de Arturo Frondizi, se sancionaron e implementaron diversas leyes represivas, como la Ley Anticomunista, cuya aplicación significó numerosas detenciones, despidos, listas negras y solicitadas intimidatorias. Durante el gobierno de Illia se mantuvo esta práctica represiva. Por poner solo un ejemplo, las tomas de facultades que realizaron los estudiantes universitarios en reclamo de mayor presupuesto, entre septiembre y octubre de 1964, fueron enfrentadas por la policía.

En este proceso, se considera al Cordobazo —junto con los Rosariazos y demás hechos de rebelión popular de 1969— como un hito que evidencia un cambio cualitativo en

la forma en que empieza a desplegarse la lucha política y social, y a partir del cual emerge con claridad una estrategia de superación de las relaciones sociales capitalistas.

¿Cómo se llegó a ese momento? ¿Cómo se fue desarrollando esa estrategia? ¿Cómo se desarrolló la conciencia de clase revolucionaria al menos en una parte de la clase obrera?

Sin dudas, las acciones, luchas, experiencias de organización y confrontación de los años 1963 a 1965 constituyen parte fundamental de ese proceso.

El Plan de Lucha de la CGT (1963-1965)

A comienzos de la década de 1960, el movimiento obrero había ya plasmado sus reivindicaciones en programas que constituían propuestas generales para el conjunto de la sociedad, como los Programas de La Falda (1957) y Huerta Grande (1962), que implicaban medidas claramente antiimperialistas, recuperando las banderas de independencia económica, justicia social y soberanía política (Baschetti, 1998). Para 1963, tras la normalización de la CGT, la central de la que formaban parte las 62 Organizaciones Peronistas, los gremios Independientes y el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS) (Balvé, 1990) presentó un nuevo documento programático que, si bien no cuestionaba el orden social capitalista —e incluso en algunos aspectos era menos avanzado que los programas de La Falda y Huerta Grande—, contenía metas económicas, políticas y sociales que constituían un programa de gobierno. Las medidas que proponía apuntaban a la defensa de la industria nacional identificada con el “capital productivo” y asociado su crecimiento con el bienestar de los obreros. Esta alianza entre obreros y “capital industrial nacional” estaría en oposición al “capital especulativo”. Algunos de los objetivos del

documento en este sentido eran: fijación de un salario mínimo, vital y móvil; fijación de precios máximos; rebajas de aranceles aduaneros para los insumos de la industria nacional; prioridad para la industria nacional en las licitaciones; anulación de los contratos petroleros; política crediticia para la reactivación de los sectores de la producción; y prohibición de exportar capitales nacionales, entre otros (Grau, Ianni y Martí, 2005). En el programa se reclamaba también la participación del movimiento obrero en general, y de la CGT en particular, en “la administración y dirección de las empresas, ya sean estatales o privadas”, y en órganos de decisión de gobierno (CGT, *Actas Congreso Ordinario*, 1963).

En el plano político se exigía la democratización del sistema, denunciando específicamente la situación de proscripción. Se reclamaba el “retorno a la constitución y a las leyes, el derecho a las libertades y a la igualdad de la ciudadanía ante la ley suprema”, el levantamiento del estado de sitio, la afirmación de la soberanía política y económica, la derogación de las leyes represivas, la restitución de los sindicatos y la devolución de sus personerías gremiales, y la libertad y amnistía a todos los presos sociales y políticos.

En el intento por llevar adelante estos objetivos, la conducción del movimiento obrero expresado en la CGT se plantea las acciones del Plan de Lucha, intentando alinear tras de sí a la llamada burguesía “nacional”.

Entre 1963 y 1965, la Confederación General del Trabajo (CGT) elaboró un Plan de Lucha, que fue llevado adelante por gran parte del movimiento obrero a lo largo de cinco etapas (Grau, Ianni y Martí, 2004 y 2006):

La primera se desarrolló durante la última semana de mayo de 1963 y consistió en actos y concentraciones, culminando en una huelga general el día 31.

La segunda, entre mayo y junio de 1964, con ocupaciones masivas de establecimientos fabriles y lugares de trabajo.

La tercera etapa en agosto y septiembre de 1964, mediante la realización de Cabildos Abiertos en distintas ciudades del país.

La cuarta etapa en noviembre y diciembre de 1964, con marchas y movilizaciones que culminaron en una huelga general los días 17 y 18 de diciembre.

La quinta etapa se desarrolló en dos partes:

La primera, durante los meses de agosto y septiembre de 1965, consistió en reuniones cerradas de esclarecimiento en distintas zonas de Capital y en localidades importantes del Gran Buenos Aires (GBA).

La segunda se desarrolló durante el mes de diciembre de ese año y consistió en marchas, concentraciones y paros parciales.

A pesar de lo que puede suponerse, el Plan de Lucha no constituye una unidad. Sus acciones y etapas, lejos de estar programadas desde un comienzo, fueron definidas coyunturalmente y no siempre fueron las que articularon la protesta, desarrollándose otros hechos que implicaron importantes niveles de protesta y enfrentamientos sociales. En esos años, en el marco del Plan de Lucha y también por fuera de él, se fueron desplegando las acciones que constituyen los antecedentes y disputas que se expresarían en los hechos de rebelión popular de 1969. Sin duda, las luchas en diversos planos desplegadas en este período contribuyeron a crear el terreno para el desarrollo de una fuerza social revolucionaria.

El momento que ha expresado la mayor capacidad de acción y potencialidad de la clase trabajadora como un todo en el enfrentamiento contra el capital se despliega durante la segunda etapa del Plan de Lucha, con el plan de ocupaciones de 1964: un hecho protagonizado por la mayor parte de los obreros, organizado centralizadamente y de alcance nacional (Cotarelo y Fernández, 1994). Pero además de este momento, los choques callejeros que se produjeron con la llegada de De Gaulle y, especialmente, a raíz de los actos del 17 de octubre de 1965, dan cuenta de enfrentamientos que adquieren dimensión nacional, y que, a diferencia de las etapas del Plan, no fueron acciones organizadas centralizadamente por la CGT sino por organizaciones políticas peronistas, si bien la central obrera tuvo participación.

Buena parte de las luchas que se despliegan en ese momento van adquiriendo un carácter político más que sindical reivindicativo, evidenciando la disposición de la clase trabajadora y una parte del pueblo a enfrentar al régimen para recuperar los espacios políticos y sociales de los que había sido desalojado con el golpe de 1955. En ese proceso también influirán las organizaciones políticas de izquierda y revolucionarias que irán teniendo cada vez mayor inserción en la clase y concretamente en ámbitos fabriles, lugares de trabajo y organizaciones sindicales, impulsando acciones y políticas que promoverán el desarrollo de nuevas direcciones y de la organización de poder en los lugares de trabajo.

Las ocupaciones de fábricas y lugares de trabajo

Como medida de fuerza, la ocupación de establecimientos y fábricas venía siendo una medida cada vez más utilizada por los trabajadores para hacer frente a las diversas

ofensivas patronales. Entre otras de importancia, se destaca en 1959 la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre (Salas, 2015). A lo largo de 1963 esta forma de lucha fue desplegándose cada vez más, pero de manera restringida, a los diversos conflictos de forma aislada.

Entre mayo y junio de 1964, la CGT retoma y condensa esa experiencia adquirida desde los años de la Resistencia, y organiza un plan de ocupaciones coordinado a nivel nacional como segunda etapa del plan de lucha. El Comité Central Confederal aprobó su ejecución en dos momentos: a) entre el 18 de mayo y el 15 de junio, ocupación parcial y zonal; b) entre el 15 y el 18 de junio, ocupación total y simultánea en todo el país por el término de veinticuatro horas (Cotarelo y Fernández, 1994).

Para asegurar el máximo de disciplina, seguridad, eficacia y sincronización, se planteó que las organizaciones confederadas tomarían todas las disposiciones para cumplir estrictamente todas las consignas de los cuerpos directivos. Las directivas eran transmitidas a los secretarios generales de los distintos sindicatos participantes y regionales del interior del país, los que, a su vez, el mismo día en que se produciría la ocupación, las transmitirían a los delegados y comisiones internas. Los delegados las comunicaban a los obreros y, posteriormente, al personal directivo del establecimiento.

El plan de ocupaciones se desarrolló a lo largo de siete operativos, entre el 21 de mayo y el 24 de junio de 1964 en los que, según datos de la CGT, 3.913.000 trabajadores (75,4% del total de asalariados) ocupan 11.000 establecimientos (cerca del 10% del total de establecimientos industriales del país). La lucha abarcó todo el territorio nacional, aunque con mayor incidencia en las ciudades más importantes del país y con neto predominio del territorio donde se concentra la gran industria, en el cordón industrial del Gran Buenos Aires y el Paraná (Cotarelo y Fernández, 1994).

La casi totalidad de los trabajadores que ocuparon los establecimientos estaban insertos en la rama industrial (97,1% del total de ocupaciones), mientras que 0,2% del total eran asalariados de la rama agricultura, 1,5% de la rama comercio, y 1% trabajadores estatales. La mayor parte de las ocupaciones se realizó en fábricas metalúrgicas (33,9% de las ocupaciones registradas) y textiles (21,5%), mientras que el 41,8% restante corresponde, en orden decreciente, a las ramas de la construcción, de la alimentación, química, calzado, automotriz, electricidad y gas, bebidas, petrolera, de la madera, del caucho, del vidrio y del papel. Claramente, la fracción obrera protagonista de esta lucha es la de los obreros de gran industria.

La lucha fue llevada a cabo con un alto grado de disciplina y organización. Se cerraban las puertas, se cortaban las comunicaciones con el exterior; en algunos casos, los obreros colocaron barricadas delante de las puertas de acceso; en todos los casos, se paralizaron las actividades. En numerosas ocupaciones se tomó de rehenes a los propietarios, el personal directivo, técnico, administrativo y de seguridad como medida preventiva ante una posible represión policial. Las ocupaciones duraron entre cuatro y seis horas, excepto en el último operativo, en que se prolongaron por veinticuatro horas. En aquellas ocupaciones en que los propietarios presentaron la denuncia, concurría un juez federal acompañado de la policía, que instaba a desalojar el establecimiento.

La disciplina y centralización por parte de la CGT, a la vez que mostraba la potencia de la medida, era también una forma de control de posibles desbordes por abajo. Pero, sin duda, esta lucha constituyó una enorme experiencia para una parte importante de la clase trabajadora, que incluyó un ejercicio de una amplia democracia y el sostenimiento de un estado de asamblea permanente que reinaba entre los obreros durante todo el conflicto (Schneider, 2005) y el

surgimiento de un activismo forjado en esa experiencia de lucha y fuerte confrontación, tanto con la patronal como contra el Estado.

Ahí nos organizamos todos, ahí empecé a ser activista, éramos el grupo de la interna, delegados, una fábrica de unos 300, hacíamos bulones, 300 personas [...] todos de la UOM. Bueno, ahí nos preparamos. Un día nos reunimos, éramos... seríamos unos treinta, entre los delegados y los activistas, unos treinta más o menos. Planificamos toda la toma. Entonces había que hacer gomeras, por ejemplo. Yo me encargué de la tarea de hacer las gomeras. En la sección de caliente, de la alambra, hacíamos las horquetas. Yo me encargué de comprar la goma, la armamos todas en el cuarto de delegados. Hicimos, más o menos, unas cuarenta gomeras. [...] Teníamos que esperar que toda la jefatura esté adentro, porque era con rehenes. [...] Y bueno, vino la orden que tal día teníamos que tomar... y a las ocho cuando entró el gerente, que era un coronel retirado. Bueno, que hacíamos con los posibles carneros... [...] qué hacíamos, cómo los frenábamos, teníamos que tener todo preparado, para que no se nos escapen. Pero serían veinte, treinta, que podrían ser... pero con mucho temor... nosotros éramos muy agresivos, ése era el tema. Veníamos todos de la experiencia de la Resistencia y del peronismo [...]. Y dio la orden y corrimos... teníamos tareas. Había un grupo que iba a cerrar el portón, los dos clarkes tenían que llevar rollos de alambre y mezclarlos, llevaron eso, llevaron tarima con bolsas de unos bulones así de largo y así de grueso [hace el gesto]... hicieron con eso una barrera como de dos metros de ancho. Todo el alto del portón. No entraba nadie. Me acuerdo vino el autito de la

cana, esos que tienen la chapa adelante, le pegaban al portón y rebotaba [risas].

La tarea que teníamos con Carlos y con otro delegado [...] y un uruguayo, que no decía nada, pero cuando se armó el quilombo tuvo una audacia tremenda. Teníamos que tomar el coso del jefe de personal, la oficina, la oficina era una casa de alto y un chalecito arriba, era en el medio del patio [...] fue una carrera quien llegaba primero ahí. Quién subía. Porque le teníamos una bronca a ese hijo de puta. Porque tenía... aparte milico. ¡Hijo de remil puta! Y yo ahí estaba [...] me acuerdo que manoteé la puerta, pero el uruguayo me ganó y entró. [...] Había un ventanal grande, así abierto y un cuadro de M., del viejo... Y dice 'qué pasa acá'. Enérgico el tipo. El uruguayo entró, cazó el cuadro y dijo 'yo te voy a enseñar qué pasa acá', dice. Lo tiró por la ventana y lo empujó, el escritorio lo llevó contra la pared [risas] el tipo se puso blanco con el temor. Quince tipos éramos, porque después se prendieron otra gente, en el proceso...

Bueno, bajamos, lo llevamos al jefe, a ése, a otro jefe más, eran tres o cuatro, en una oficina. Tenía puerta de chapa. Entonces el uruguayo fue a mantenimiento y se trajo la soldadura eléctrica y lo soldó. La cortó así [hace el gesto] y le hizo un agujero. Para pasarle la comida [risas]. Ahí lo tuvimos... Arriba, en la terraza nosotros hicimos, llevábamos bolsas, cargados con bulones, los bulones se ponían en bolsas, [...] hicimos toda una barricada así [gesto de altura]. Le poníamos bolsa a toda la orilla. Teníamos tachos [...] llevábamos unos tachos, poníamos los tachos ahí, teníamos proyectiles para tirar con la gomera. No se arrimaba

la cana, en ese tiempo la cana andaba a caballo, [...] las gomereras eran dobles tirábamos cien metros tranquilamente [...].

P: ¿Cuánto tiempo la tuvieron ocupada?

R: Casi una semana.

[...] ahí fue esa, mi primera experiencia. (testimonio de “El Cabezón”, en Schneider, 2005: 225)

Por lo general, en la experiencia de las ocupaciones ocurridas en el marco del Plan de Lucha, los obreros acataban la orden de desalojo casi de inmediato, aunque en algunos casos resistieron la acción judicial y policial antes de finalmente acatarla. Tras algunas ocupaciones se produjeron detenciones de obreros, mientras que solo en unas pocas, algunos resultaron heridos (Cotarelo y Fernández, 1994). Posteriormente, se le inició sumario a gran parte de los delegados y miembros de comisiones internas de fábrica acusándolos de “usurpación a la propiedad privada” y “privación ilegítima de la libertad”. También fueron procesados los 119 miembros del Consejo Directivo de la CGT.

Si bien la dirección de la central obrera de ninguna manera se planteaba cuestionar el orden social vigente, la segunda etapa del plan de lucha fue caracterizada por organizaciones empresarias y partidos políticos del régimen como “subversiva” y “revolucionaria”. Aunque se ocupa menos del 10% de los establecimientos, estos constituyen las fábricas del capital más concentrado; y a pesar de que los objetivos expresados en términos programáticos no se plantean un cuestionamiento a la propiedad ni a las relaciones sociales capitalistas, en la práctica, las ocupaciones ponen en cuestión el mando al interior de la fábrica: por un

lado, el capitalista y sus funcionarios; por otro, los obreros y sus propios jefes. Esto se profundiza en los casos en que además la ocupación incluye la toma de rehenes. Así lo percibieron las clases dominantes, que alertaban a su vez del peligro que estas acciones podían “desencadenar”:

Nosotros entendemos que se debe luchar cuando hay que conseguir algo justo que se niega por capricho, por eso ante el llamado plan de lucha, decretado por la CGT y sus organizaciones adheridas, es inexcusable este comentario [...]. No es motivo para instrumentar un plan subversivo como se intenta poner en marcha el 18 de mayo... la exigencia de un salario mínimo, vital y móvil [...]. No entendemos cómo una entidad responsable [...] puede dar marcha a un Plan de Lucha revolucionario que puede desencadenar gravísimos hechos de impredecibles consecuencias. (Editorial de *Mundo Metalúrgico*, en Schneider, 2005: 215)

A pesar de que, como dijimos, no se expresa programáticamente una estrategia que plantee la expropiación del capital ni el control obrero de la producción, en la práctica la burguesía percibe un cuestionamiento a su propiedad y a las relaciones sociales mismas. Por ello, frente a esta forma de lucha, el conjunto de la burguesía se opuso a las ocupaciones, argumentando que éstas violaban el derecho a la propiedad privada.

Las ocupaciones son una clara demostración del poder y la capacidad de la clase obrera y esto constituye un aprendizaje, tanto para la clase dominante como para la clase obrera. Pero la estrategia con la que se orientará ese “poder” no será unívoca. Durante el plan de ocupaciones, se ponen de manifiesto las distintas direcciones en que la lucha se lleva adelante. Por un lado, el conjunto de la clase, en la acción

misma, se enfrenta a la clase capitalista como un todo —expresada en la totalidad de las organizaciones empresarias y el Estado—, lo que podría constituirse como poder obrero, expresando su interés en tanto expropiados. Sin embargo, para la parte mayoritaria del movimiento obrero, el objetivo es postularse como dirección (o al menos formar parte de la dirección) de la alianza que se expresa políticamente como peronismo, lo que manifiesta es su interés en tanto asalariados. Para la conducción de la CGT, implica consolidar la organización sindical como “factor de poder” dentro del sistema.

Pero, además, esta conducción no es homogénea. Si bien en las acciones de esta segunda etapa el conjunto de la dirección del movimiento obrero actúa unificadamente, se desarrollan intensas disputas en su interior y en su conducción. Por un lado, las 62 Organizaciones Peronistas y los Gremios Independientes constituyen la conducción nacional de la CGT. Las 62 Organizaciones, con mayoría de sindicatos de obreros fabriles dirigidos por la UOM, impulsan y organizan el plan de ocupaciones de fábricas, planteando un programa de gobierno en torno a dos ejes: la democratización del régimen político y el desarrollo industrial sustentado en el llamado capital nacional. Los gremios independientes, conformados, fundamentalmente, por los sindicatos de los trabajadores pertenecientes a las ramas de comercio, bancarios y del transporte, se oponen a proseguir con el plan de ocupaciones, aduciendo que el gobierno ha comenzado a dar respuesta a algunos de los reclamos obreros (ley del salario mínimo vital y móvil, fijación de precios máximos, entre otros). Sin embargo, dos de los sindicatos más importantes de este nucleamiento, la Unión Ferroviaria y la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza (precisamente, los dos gremios independientes importantes que agrupan a obreros de gran industria), participan activamente del plan

de ocupaciones sin subordinarse a la delimitación política peronismo/antiperonismo. Las dos corrientes minoritarias del movimiento obrero organizado toman posiciones opuestas en relación a las ocupaciones masivas de fábricas: mientras que el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS), de orientación comunista (que forma parte de la CGT pero no de su conducción) las apoya en términos generales, los 32 Gremios Mayoritarios Democráticos (antiperonistas, que no integran la CGT) las rechazan frontalmente.

La estrategia de esa fracción mayoritaria de la clase obrera de gran industria no se propone ir más allá de ocupar un lugar en el sistema vigente. Sin embargo, el propio desarrollo de la lucha genera un espacio para que se desarrolle y potencie otra fracción, que encuentra condiciones favorables para plantear una estrategia que tenga como meta la superación de las relaciones sociales capitalistas.

En tanto alineamiento político, la dirección de la CGT expresa a sectores peronistas con disputas en su interior, como se expresaron en las elecciones provinciales de 1962 mediante el voto a las listas de la Unión Popular, impulsadas por el sector de Andrés Framini en la provincia de Buenos Aires quien encabezaba una línea distinta de la de Vandor, dentro de las 62 Organizaciones, lo que llevará posteriormente a la ruptura de la CGT y las 62 entre las “De pie junto a Perón” y “Leales a Perón”.

Disputa política

El alto nivel de confrontación, la falta de apoyo de los sectores de la burguesía tradicionalmente aliados y la persecución judicial de que fueron objeto los 119 dirigentes que habían aprobado la realización del Plan de Lucha, provocaron un fuerte desgaste en el conjunto del movimiento

obrero y el alejamiento de los gremios Independientes. La conducción de la CGT evaluó que era momento de reagrupar fuerzas. Pero, además, ante el potencial desborde de las acciones de lucha, será unificadamente la dirección de la central la que se plantee contener y disciplinar a la propia clase y usar la previa demostración de fuerzas para lograr una mejor negociación con los sectores de la burguesía. Así lo expresará Alonso en la convocatoria a los cabildos abiertos de la tercera etapa del Plan de Lucha:

...es necesario que todos sin excepción, gobierno, Fuerzas Armadas y partidos políticos se den cuenta de una vez por todas que no es hora de seguir peleando entre hermanos, devorándonos unos a otros, ya que las asechanzas ideológicas extrañas al espíritu y pensamiento argentino son una amenaza latente que golpea cerca. [...] La tercera etapa del Plan de Lucha, es un llamado al reencuentro nacional. (Schneider, 2005: 230)

Con esta perspectiva, entre agosto y septiembre de 1964, la CGT decidió convocar a representantes de instituciones y partidos políticos para que se pronunciaran en torno a los ocho puntos mínimos del Plan, que consistían en: establecimiento del salario mínimo vital y móvil, aumento a los jubilados y pensionados, derogación de las leyes represivas, sanción de una amplia y generosa amnistía, reincorporación de trabajadores cesantes por cuestiones políticas o gremiales, esclarecimiento de la desaparición del trabajador Felipe Vallese, medidas para solucionar el problema de la desocupación y control de precios. Incluso se invitó a representantes de partidos manifiestamente opuestos al movimiento obrero como la UCR del Pueblo (UCRP), la Unión del Pueblo Argentino (UdelPA) y el Partido Socialista

Democrático (PSD). En esta tercera etapa se realizaron cuarenta y ocho Cabildos Abiertos zonales y veinte provinciales en diferentes ciudades del interior del país, pero claramente no fueron la acción más importante durante esos meses.

Durante los meses de agosto y septiembre de 1964, la mayoría de los gremios se encontraba negociando sus convenios colectivos de trabajo, logrando importantes aumentos, y se creó el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. A partir de la recuperación económica de 1964 y logradas algunas reivindicaciones económicas en tanto asalariados, las movilizaciones del conjunto se desplazan a la esfera política.

Tras el anuncio de que Perón regresaría antes de fin de año, las estructuras políticas y sindicales del peronismo se abocaron de lleno a la propaganda del retorno. La lucha democrática pasó a ocupar un lugar central y se reactualizó la escisión de la sociedad delimitada como peronismo versus antiperonismo, fuerzas que se enfrentarían abiertamente en diversos choques callejeros. Para reafirmar la validez de los principios de la autodenominada “Revolución Libertadora”, que eran los de la proscripción social y política, el antiperonismo salió a la calle. El 16 de septiembre, en el aniversario del golpe de 1955, todo el arco del “antiperonismo”, desde el Partido Socialista Democrático hasta UDePA, realizó actos celebratorios.

En este contexto de creciente polarización, se produjo la visita al país del presidente francés, el general Charles De Gaulle, cuya figura fue disputada por ambas alianzas sociales. Desde el antiperonismo se resaltó en De Gaulle al luchador de la resistencia en contra del nazismo y de los “totalitarismos” en general, lo que les permitía oponerle a la figura de Perón. Desde el peronismo, De Gaulle simbolizaba la “tercera posición”, no alineada ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética.

Las manifestaciones por su llegada dieron lugar a enfrentamientos callejeros entre militantes peronistas y partidarios de la “Revolución Libertadora” tanto en Buenos Aires como en la ciudad de Córdoba, donde la policía no pudo impedir los reagrupamientos de los manifestantes a pesar del uso de gases lacrimógenos, resultando doce heridos de bala y cincuenta detenidos, entre ellos dirigentes sindicales como Augusto Vandor, Rosendo García y Armando Cabo. En dichas acciones organizadas por la CGT contra la proscripción en sentido amplio, se movilizaron no solo obreros peronistas sino también otros sectores del pueblo.

En noviembre de 1964, el Comité Central Confederal de la CGT aprobó el inicio de la cuarta etapa del Plan de Lucha con el objetivo de “protestar públicamente por la situación de los trabajadores y del país, por el caos en que estamos sumidos y en sus aspectos gremiales, sociales y políticos”. En los actos y movilizaciones que se realizaron en ese marco, los trabajadores y trabajadoras demostraron una enorme disposición al enfrentamiento, aún a pesar de la conducción cegetista. La lucha del pueblo por recuperar las calles materializaba el intento de reconquistar los espacios políticos y sociales de los que fueran desalojados desde el golpe de Estado de 1955.

Luego del fracaso del Operativo Retorno de Perón al país, sin que se produjeran las grandes movilizaciones esperadas, la dirigencia de la CGT decidió continuar con las concentraciones previstas para la cuarta etapa. En todos estos actos y movilizaciones los manifestantes respondieron a los ataques de la policía tirando bombas molotov, piedras, palos, y golpeando con sus puños, y, según la policía, disparando armas de fuego. La montada cargó contra los manifestantes, utilizando además camiones Neptuno y armas automáticas. El número de detenidos y heridos comenzó a incrementarse considerablemente. En uno de los actos fue

detenido José Alonso, secretario general de la CGT, y hubo varios heridos de bala.

El gobierno profundizó las medidas represivas, pero no logró frenar la resolución de los trabajadores de recuperar los espacios públicos. Mientras el gobierno sostenía que

La actitud de grupos que con o sin permiso policial pretendan ser dueños de las calles públicas constituye una expresión subversiva inadmisibles, que el gobierno reprimirá con todo el poder de que dispone, dentro de las normas de la ley...

En una carta al presidente Illia, la Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (*ACIEL*) declaró:

... una alarmante pluralidad de conflictos gremiales en el sector oficial causa intranquilidad, traban la buena marcha de la administración, paralizan los servicios públicos, perjudican la actividad creadora privada y detienen el restablecimiento económico del país [...] ejemplos que denotan un estado de convulsión social y subversión de principios dentro del ámbito oficial. Evidencian profundas fisuras en el principio de autoridad y sientan escuela de que, en la Argentina, la indisciplina colectiva es el medio más hábil para obtener las mejoras reclamadas [...]. Este proceso de anarquía se arrastra desde mucho tiempo atrás [...]. Algunos dirigentes gremiales se creen con derecho a esgrimir la fuerza, desdeñando los procedimientos legales aún a costa de interrumpir el proceso productivo, romper la armonía que ha de existir entre capital y trabajo, como fuerzas mancomunadas de la producción y consecuentemente, encarecer la vida y mantener la intranquilidad pública [...], por lo

que exhorta al gobierno a “tomar medidas que como es deber del estado pongan orden interno”. (*La Nación*, 11-11-1964)

La proscripción cuestionada en las calles por el pueblo no pudo sostenerse sin recurrir a la fuerza física. Ante la huelga, los ministros de Defensa y del Interior se reunieron, para garantizar el “orden”, con los comandantes de las tres fuerzas armadas. Juan Carlos Onganía ya había hecho en agosto de ese año su famoso discurso en la Academia de West Point en Estados Unidos en línea con la doctrina contrainsurgente de Seguridad Nacional.

A pesar de estas amenazas, la huelga general se llevó adelante y con un alto acatamiento que en la industria alcanzó porcentajes del 100% (*La Prensa*, 18-12-1964). La disposición al enfrentamiento se despliega abiertamente en la generalización de la lucha de calles. En los actos los obreros chocaron con la policía, se multiplicaron los sabotajes y atentados que tuvieron por blanco especialmente a los medios de transporte: cartuchos de gelinita, bombas molotov, balazos, piedrazos y clavos “miguelito” fueron arrojados por los huelguistas a colectivos, trenes, vías de ferrocarril, postes telefónicos, instalaciones eléctricas de SEGBA y columnas de alumbrado. También fueron atacados oficinas municipales, comercios, fábricas, periódicos, locales de partidos del régimen e incluso al Círculo Militar. En Mataderos, retomando las luchas contra la privatización del Frigorífico Lisandro de la Torre, alrededor de cien jóvenes de entre dieciséis y veinte años arrojaron piedras y bombas molotov a la policía, formaron barricadas y focos de incendio en las diferentes calles del barrio. Policías de civil ingresaron por la fuerza en varios domicilios, tirando gases lacrimógenos. Solo en este hecho hubo treinta y cuatro jóvenes detenidos (*La Nación*, 18-12-1964).

Durante el primer semestre de 1965 la clase obrera continuó defendiendo su nivel de ingresos y condiciones de trabajo a través de numerosos enfrentamientos, fundamentalmente en el sector privado. La mayoría de los conflictos se desarrollaron en función de las negociaciones paritarias. Pero también se desarrollaron intensos conflictos contra despidos y suspensiones en los que los trabajadores retomaron la práctica de la toma de fábricas y establecimientos. Entre las ocupaciones se destacaron las de Astilleros Astarsa (metalúrgicos), Siam Electromecánica (metalúrgicos), Papelera Hurlingham (papeleros), Astillero Ryan (navales), Astilleros Alianza (navales), General Motors (mecánicos/automotriz), Jabón Federal (jaboneros). También se registraron importantes conflictos en el segundo semestre, como el de la fábrica Duenloz de Lanús, La Bernalesa de Quilmes, y, fundamentalmente, la lucha de los obreros azucareros de Tucumán que ocuparon los ingenios (Schneider, 2005). En noviembre, se llevaría adelante la importante toma de Ford Motors de General Pacheco.

Durante ese año, se registró también un importante crecimiento de la militancia de izquierda en los ámbitos fabriles, tanto desde las corrientes marxistas, trotskistas, como peronistas. Por poner solo un ejemplo, el recientemente fundado Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) promovía la inserción fabril, que, aun siendo incipiente y sin disputar todavía la conducción de las organizaciones sindicales, logró una creciente participación y organización en fábricas y lugares de trabajo. A través de la inserción directa, piqueteos, asados, cursos de formación política y sindical, publicación de volantes y boletines, realización de pintadas y circulación del periódico partidario, fueron logrando un desarrollo de organización clandestina de las bases en las unidades de producción, impulsando luchas parciales, en ocasiones por fuera de las estructuras orgánicas sindicales,

logrando tener representación en cuerpos de delegados y comisiones internas, con métodos más radicalizados y cuestionando a la dirigencia sindical burocrática. En la rama metalúrgica, por ejemplo, en las elecciones de 1965 ya participaron en la disputa junto a otras corrientes conformando el Movimiento Nuevo Metalúrgico de Vicente López (Mangiantini, 2016).

El hecho de protesta política más importante y con alcance nacional que puso de manifiesto nuevamente los alineamientos sociales fue el acto por el 20° aniversario del 17 de octubre de 1945. A pesar de la prohibición del acto y del operativo policial, los manifestantes trataron de realizarlo. Se realizaron actos en diferentes ciudades del país. En Parque Patricios, los enfrentamientos con la policía se mantuvieron hasta las 21 horas. Hubo 659 detenidos y varios heridos, cuyo número no se determinó ya que muchos no fueron a los hospitales para evitar la detención. En protesta, la CGT convocó el 21 de octubre a una movilización general consistente en paros, concentraciones y manifestaciones relámpago. En la mayoría, la policía atacó a los manifestantes con gases lacrimógenos y con balas de plomo. Los trabajadores formaron barricadas y enfrentaron a la policía a pedrazos, y en algunos casos, hasta respondieron a los ataques con armas de fuego. En San Justo, cinco mil trabajadores metalúrgicos fueron atacados, hubo un tiroteo entre los manifestantes y la policía, resultando varios heridos. Uno de los obreros heridos, Néstor Musy, de veintitrés años, obrero de Siam Electromecánica (San Justo), murió ese mismo día. Conocida la represión en todos los actos y la muerte de Musy, la CGT convocó a una huelga general para el día siguiente. En los días siguientes se conoció la muerte de otros dos obreros heridos por la policía el 21 de octubre: Norberto Retamar y Néstor Méndez. Se lanzó entonces una Semana de Duelo y Protesta entre los días 22 y 27 de noviembre durante

la cual se realizaron una misa y caravanas. El día 25, en algunas fábricas los trabajadores interrumpen sus tareas para rendir homenaje a los obreros caídos.

Reflexiones finales

El desarrollo del plan de ocupaciones de fábricas en el marco del plan de lucha de la CGT constituye un hito en la profundización del enfrentamiento contra la patronal y el Estado, implicando al conjunto de la clase obrera y con un alcance nacional. Evidencia —como dijimos— la potencialidad de la clase trabajadora como conjunto, de su capacidad de acción, y de las formas concretas en las que se alteran las relaciones de fuerza, lo cual es percibido fuertemente por la burguesía también en su conjunto que deja en segundo plano sus disputas internas para unificarse frente a la radicalización de la lucha obrera, quedando relegado el alineamiento peronismo/antiperonismo. Pero la radicalidad de la acción no implica necesariamente un desarrollo inmediato de la conciencia de la clase trabajadora en tanto explotada.

Las acciones, confrontación y disposición al enfrentamiento que se registra en la lucha de calles fundamentalmente en el segundo semestre de 1965, también dan cuenta de una mayor radicalidad en las luchas. Durante estos dos años, el movimiento obrero desarrolla luchas en las que el contenido político va adoptando cada vez más peso. En las luchas en las que prima este último, el movimiento obrero logra movilizar a gran parte del pueblo por la recuperación de los espacios sociales perdidos.

Dentro del campo del peronismo, la conducción de la CGT expresa una estrategia que solo se plantea el interés de la clase obrera en tanto asalariada, desplegando una lucha sindical y política que tiene como objetivo lograr mejores

condiciones dentro del sistema social vigente. Sin embargo, en el desarrollo mismo de la lucha que despliega, el choque con la imposibilidad del sistema institucional de revertir la proscripción irá promoviendo cambios en la conciencia: se ponen de manifiesto las contradicciones que evidencian la inviabilidad de dicha estrategia, y que abren una brecha por donde comienza a configurarse otra. La clase trabajadora y el pueblo despliegan fuerzas, enfrentan a los empresarios y al Estado, confrontan abiertamente en las calles y ponen en cuestión, en la práctica, el nudo de las relaciones sociales capitalistas: la propiedad privada de los medios de producción, aunque aún esto no sea formulado de manera explícita a nivel de masas. Las conclusiones y aprendizajes que va desarrollando una parte de la clase abonarán a un desarrollo de su conciencia y se plasmarán además en la disputa por la conducción del movimiento obrero organizado sindicalmente.

Dentro del sindicalismo peronista se van configurando las dos corrientes que expresarán distintas tácticas dentro de una misma estrategia que expresa el interés de la clase en tanto asalariados: el sindicalismo de participación (o “participacionismo”) y el llamado “colaboracionismo”. En ambas tendencias, la organización sindical se constituye como un factor de poder dentro del sistema, que “golpea” para negociar, como se evidencia en el fortalecimiento del vandomismo.

Pero, además, al calor de estas luchas, y como resultado también de una política y una práctica consciente y sistemática por parte de organizaciones de izquierda, de dirigentes políticos y sindicales, que impulsan una acumulación política y organizativa de la clase con perspectiva revolucionaria, se irá desarrollando una corriente político-sindical que abonará a la constitución de una fuerza social revolucionaria, que emergerá como el sindicalismo de liberación.

Por poner solo dos ejemplos significativos, en agosto de 1966, como resultado de la experiencia desarrollada en un largo conflicto, los trabajadores gráficos lograron con la lista Verde imponer como secretario general del sindicato a Raimundo Ongaro. En esos años, ya se consolidaba en el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba la figura de Agustín Tosco, quien impulsaba un rol político del sindicato, que abonara al desarrollo de la democracia interna, de la formación y desarrollo de la conciencia obrera, a la combatividad sostenida en el interés del conjunto de la clase (Iñigo Carrera, Grau y Martí, 2006).

En las luchas por la conducción del movimiento obrero, ambos protagonizarían la lista que en las elecciones de la CGT en 1968 fue elegida mayoritariamente, y que luego de la ruptura dio lugar a la formación de la CGT de los Argentinos. Estos dirigentes serán expresión clara de una estrategia revolucionaria que una parte de la clase trabajadora y el pueblo comenzarán a desplegar en las calles a partir de los hechos de rebelión de 1969.

Bibliografía

- Balvé, B. (1990). Los nucleamientos político-ideológicos de la clase obrera. Composición interna y alineamientos sindicales en relación a gobiernos y partidos. Argentina, 1955-1974. *Cuadernos de CICSO*, Serie Estudios, núm. 51. Buenos Aires.
- Baschetti, R. (1988). *Documentos de la Resistencia Peronista 1955-1970*. Buenos Aires, Punto Sur.
- Cotarelo, M. C. y Fernández, F. (1994). La toma de fábricas. Argentina, 1964. *PIMSA*, documento de trabajo, núm. 2. Buenos Aires.
- Grau, M. I., Ianni, V. y Martí, A. (2005). Una aproximación a las acciones de la lucha de la clase obrera argentina. Primera etapa del Plan de Lucha de la CGT. 1963/1965. *PIMSA*, documentos y comunicaciones. Buenos Aires.

- _____ (2006). El Plan de Lucha de la C.G.T., 1963-1965. *PIMSA*, documentos y comunicaciones.
- Iñigo Carrera, N., Martí, A. y Grau, M. I. (2006). *Agustín Tosco, la clase revolucionaria*. Buenos Aires, Madres de Plaza de Mayo.
- Mangiantini, M. (2016). El PRT y la fábrica. Estrategias de inserción y participación sindical en el mundo del trabajo de una estructura revolucionaria (1965- 1968). *IX Jornadas de Sociología de la UNLP*, 5-7 de diciembre.
- Salas, E. (2015). *La resistencia peronista. La toma del frigorífico Lisandro de la Torre*. Buenos Aires, Punto de Encuentro.
- Schneider, A. (2005). *Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo, 1955-1973*. Buenos Aires, Imago Mundi.

Capítulo 9

Córdoba, mayo de 1969

Resonancias latinoamericanas e interpretaciones en disputa

Gustavo Guevara

En la mañana del 29 de mayo de 1969, entre las 10 y 11 horas, se inicia una huelga general en Córdoba que se refuerza con una movilización de trabajadores y estudiantes al centro de la ciudad. El accionar de las fuerzas policiales genera una reacción mayor aún, se amplía la participación de otros sectores sociales en la protesta y esta deviene en una auténtica rebelión popular que se adueña de la topografía de la ciudad, obligando a la dictadura militar, que encabeza el general Juan Carlos Onganía, a dar intervención a las Fuerzas Armadas para recuperar el control sobre el ejido urbano. La irrupción de las masas en aquellas jornadas de lucha de calles modifica las relaciones de fuerza existentes entre las clases e inaugura una nueva situación a escala nacional. Desde el momento mismo de la configuración del “Cordobazo” en tanto acontecimiento comenzaron a publicarse distintos relatos de protagonistas y testigos, se elaboraron múltiples interpretaciones desde las más diversas perspectivas políticas, y en el ámbito de los estudios sociales, disciplinas como la sociología propusieron acercamientos heurísticos a un fenómeno que es abordado en

gran medida como excepcional en la historia argentina contemporánea.

En un temprano estudio redactado antes de cumplirse el primer aniversario del Cordobazo, el sociólogo Francisco Delich sostiene que en nuestro país no son demasiado los movimientos sociales que han irrumpido con cierta violencia para lograr “modificaciones sustanciales en el sistema de relaciones sociales”; para el siglo XX, tal sería el caso del Grito de Alcorta (1912) ligado a lo rural, pero en el ámbito urbano reconoce que, si bien el 17 de octubre (1945) “fue una gigantesca movilización con resultados inmediatos” (Delich, 1970: 7), en su desarrollo no se registra acciones represivas para impedir la o frenarla. En otro trabajo clásico, elaborado también desde el ángulo de la sociología y publicado en 1971, el equipo de CICSO (Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales) dirigido por Beba Balve, Miguel Murmis y Juan Carlos Marín, se refirieron a los acontecimientos del 29 y 30 de mayo en la ciudad mediterránea como una “explosión de masas” que hizo de la “lucha de calles” una “nueva forma” (Balve, 1973: 8) que adquiere el enfrentamiento de clases en la Argentina.

Mónica Gordillo expresa, en su ineludible tesis doctoral publicada en 1996 sobre Córdoba en los sesenta, que ninguna de las interpretaciones previas “intentó una explicación verdaderamente histórica, tendiente a reconstruir el proceso previo, a indagar a los nuevos actores sociales desde el momento de su constitución” (1996: 13); de manera más reciente la autora, en el prólogo a una compilación de CLACSO dedicada a repensar el ciclo de protestas obreras con motivo de los cincuenta años del Cordobazo, sostiene que mucho se ha escrito profundizando el análisis sobre aspectos particulares del tema, pero que continúa siendo insuficiente el proponerse “pensar los acontecimientos de manera más integral” (2019: 12), subsumiendo a los mismos

en el campo de las acciones políticas de alcance nacional e incluso trascendiendo los propios límites del país.

Como puede apreciarse a pesar de haber transcurrido más de medio siglo, el Cordobazo y los otros “azos” de 1969 continúan siendo objeto de un vivo interés investigativo en la medida que aprehender el sentido de los mismos se presenta como una empresa aún inconclusa. Lo que está en discusión no es fijar a qué hora se inició la huelga general decretada por los sindicatos cordobeses, por dónde se desplazó la movilización estudiantil o cuáles fueron las sentencias de los tribunales militares que juzgaron a los participantes; de lo que se trata es de dar cuenta de los cambios y continuidades que se pusieron en marcha a partir de aquella huelga general que el periódico CGT describió señalando el componente dinamizador que aportó a la protesta la conformación de contingentes obreros que a partir de dejar sus puestos de trabajo nutrieron las columnas que se iban engrosando con la participación de “estudiantes, empleados, mujeres” que, según los cálculos policiales, estuvieron en el orden de las cuarenta mil personas. Los manifestantes pasan a tener en sus manos el dominio de la ciudad, según la pluma de Rodolfo Walsh: “fueron dueños de lo que era de ellos” y se requirió del despliegue del III Cuerpo del ejército completo para que la dictadura retome el control. La crónica se tituló: “15 días que sacudieron al país” y allí se podía leer: “Los detalles son motivo de anécdotas, serán parte de la historia junto con los catorce días anteriores” (CGT, 1997: 37).

El Cordobazo, en tanto anécdotas e historia, es apropiado por distintas matrices de sentido que disputan su inscripción como acontecimiento al interior de una cadena de significados que lo tornen inteligible. Para un general de la “Revolución Argentina” como Levingston es el punto de arranque de la “subversión” y de la “guerra revolucionaria”, mientras para la izquierda en general es un punto de viraje decisivo

de nuestra historia reciente. Por ello a continuación no nos proponemos reconstruir en unas pocas páginas una historia integral del Cordobazo, sino esbozar cómo en el pasado algunos ensayos interpretativos se entrecruzaron en un campo de disputa por fijar su sentido que tuvo presente la realidad latinoamericana como un “dato” insoslayable. Vamos a explorar entonces cómo el Bogotazo reverbera en las lecturas del Cordobazo y también la forma en que la coyuntura vivida en nuestra América a partir del triunfo de la Revolución Cubana se incorpora a las apreciaciones que se hacen en la *Historia del movimiento obrero* publicada por el Centro Editor de América Latina en 1972-1974 sobre el parteaguas que representaron las jornadas del 29 y 30 de mayo de 1969.

Del Bogotazo al Cordobazo

El 9 de febrero de 1948, en la ciudad de Bogotá, el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán encabeza una multitudinaria manifestación de oposición al gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. La marcha, que reúne a unos cien mil manifestantes pasa frente al Palacio presidencial portando banderas negras, en señal de luto y protesta por las víctimas de la violencia conservadora. La Plaza Mayor es el punto de concentración de la multitud que escucha con un silencio militante la “Oración por la Paz” que pronuncia Gaitán. Interpelando al presidente dice:

En todo el día de hoy, excelentísimo señor, la capital de Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene precedentes en su historia. Gentes que vinieron de todo el país, de todas las latitudes —de los llanos ardientes y de las frías altiplanicies- han llegado

a congregarse en esta plaza, cuna de nuestras libertades, para expresar la irrevocable decisión de defender sus derechos...

Vos que sois un hombre de universidad debéis comprender de lo que es capaz la disciplina de un partido, que logra contrariar las leyes de la sicología colectiva para rescatar la emoción de un silencio, como el de esta inmensa muchedumbre. Bien comprendéis que un partido que logra esto, muy fácilmente podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa.

Ninguna colectividad en el mundo ha dado una demostración superior a la presente. Pero si esta manifestación sucede, es porque hay algo grave, y no por triviales razones. Hay un partido de orden capaz de realizar este acto para evitar que la sangre siga derramándose y para que las leyes se cumplan... (citado por Trujillo *et al.*, s/f: 12 y 13)

La manifestación se desarrolla de manera completamente pacífica y tiene como centro del reclamo recordar a los hombres “villanamente asesinados” y la defensa de la vida. Sobre el final del discurso, con signos de exclamación, Gaitán demanda al señor presidente que “nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como queréis que os traten a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y a vuestros bienes!” (citado por Trujillo *et al.*, s/f: 14).

En esa misma jornada morían producto de la represión estatal: nueve personas en Pereira, once en Manizales y otras cincuenta en otras pequeñas poblaciones dispersas por el interior de Colombia.

El 30 de marzo del mismo año, se reúne en Bogotá la Novena Conferencia Internacional Americana. El secretario de Estado (EE.UU.) George Marshall inaugura las sesiones. A Gaitán, el gobierno conservador de Colombia le niega el derecho a participar del cónclave continental en su calidad de jefe del Partido Liberal. El 9 de abril las sesiones se interrumpen y son retomadas el día 14. En mayo finaliza la conferencia dejando aprobado un conjunto de instrumentos jurídico-institucionales para el diseño de la arquitectura panamericana funcional a los requerimientos propios de la guerra fría. El TIAR había sido aprobado un año antes; ahora queda establecida la carta que da origen a la Organización de los Estados Americanos.

El 9 de abril es una fecha clave para la historia contemporánea de Colombia, pero adquiere también una proyección más allá de sus fronteras. Ese día es asesinado a la una de la tarde en la vía pública Jorge E. Gaitán. A partir de allí se desencadena el llamado “Bogotazo”.

El autor material es linchado por la multitud enardecida. Juan Antonio Osorio Lizarazo, autor de la célebre novela *Un día de odio*, describe así aquel instante:

La multitud se movía, se abalanzaba y retrocedía y sus oleadas eran más gigantescas, empujadas por los innumerables contingentes que emergían en todas partes. El cadáver del asesino era un guiñapo que un grupo llevaba a rastras. La ira crecía como la erupción de un volcán largo tiempo amortiguado... Un inmenso clamor comenzó a hacer indescifrables las palabras que restallaban como látigos y azotaban las cabezas y los corazones. (1952: 295-296)

La gente exasperada se dirige al centro de la ciudad. Los símbolos del poder conservador son atacados. Se toman

varias emisoras y se propalan mensajes llamando a la creación de juntas revolucionarias, al desencadenamiento de “una revolución sin par en la historia del país”, al anuncio de que “el pueblo manda en Colombia por primera vez en su historia”. En tanto, en las calles, los saqueos e incendios se convierten en la nota dominante. Las armerías son blanco predilecto, pero también los almacenes de víveres y otros comercios, como los dedicados a la venta de licores o joyerías. En algunos barrios se improvisaron subastas públicas con lo obtenido, convocadas con el nombre de “feria panamericana”.

El edificio de la embajada norteamericana fue incendiado, al igual que varios ministerios y otras dependencias oficiales. La Nunciatura Apostólica, el Palacio Arzobispal y el Instituto La Salle también fueron alcanzados por las llamas. El periódico conservador *El Siglo* se convirtió en una hoguera. Varios coches del transporte público corrieron igual suerte. Los presos comunes de varias cárceles “aprovecharon” la confusión para evadirse de su reclusión y sumarse a la revuelta.

La Confederación de Trabajadores de Colombia, cuyas bases son de orientación gaitanista, decretan la huelga general.

El ejército finalmente se alinea con el gobierno y lanza una sangrienta represión.

En la edición del 12 de abril, el diario *La Prensa* en la Argentina informa:

Decretóse la ley marcial a fin de apresurar el restablecimiento de la normalidad. A pesar de esa severa medida durante todo el día continuaron los disturbios y el fuego esporádico de los francotiradores... El presidente Ospina Pérez repitió su acusación de que los comunistas instigaron el levantamiento. El Comité Nacional del Partido Conservador atribuyó el levanta-

tamiento a agitadores profesionales a las órdenes de Moscú... El Comité Nacional del Partido Liberal ins-
tó por radio a sus miembros para que apoyen a Os-
pina Pérez y a que cooperen en la restauración del
orden... (1948)

El 11 de abril los liberales reingresan al gabinete de Ospina, tras el alejamiento de los ministros conservadores Laureano Gómez y José Antonio Montalvo, y se conforma así un gabinete de “unión nacional”. El 14 de abril la CTC levanta formalmente la huelga general. En Bogotá la “restauración del orden” deja un saldo de tres mil muertos, cinco mil heridos y miles de presos.

En la Argentina de fines de los años sesenta, expresiones como “Cordobazo” o “Rosariazo”, por ejemplo, son adoptadas como un eco referencial de aquel “Bogotazo”. Esto no implica que quienes apelan a esas expresiones lo hagan en función de una definición unívoca respecto de la interpretación de uno u otro fenómeno; así es posible identificar una gama de sentidos que van desde quienes identifican al Bogotazo con una rebelión popular, de base urbana y carácter espontánea contra una situación de injusticia, hasta los que elaboran una etiología de la violencia con carácter irracional e instrumental/conspirativo.

Fidel Castro, por aquel entonces estudiante universitario, viajó a Colombia para participar del congreso estudiantil anticolonialista y antimperialista, que debía funcionar en paralelo con las sesiones de la Conferencia Panamericana. La reunión estudiantil contaba con el apoyo tácito del gobierno argentino. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Diego Luis Molinari, se había mostrado interesado en que el conclave estudiantil actualizara el reclamo de los derechos de la Argentina sobre las islas Malvinas. Temática que, junto a la independencia de Puerto

Rico, la devolución del canal de Panamá y la condena de la dictadura en República Dominicana, tendrían que ser incorporadas a la agenda de discusión de las delegaciones estudiantiles. Sin embargo, el 9 de abril se precipitan los acontecimientos. El joven universitario cubano de veintiún años lo recuerda así:

Su muerte [la de Gaitán] fue el detonante de una explosión. El levantamiento del pueblo, un pueblo que buscaba justicia, la multitud ocupando armas, los policías que se suman, la falta de dirección, la destrucción, los miles de muertos... Vi el espectáculo de una revolución popular totalmente espontánea.¹ (Ramonet, s/f: 6)

En cambio, Jules Dubois, corresponsal del *Chicago Tribune* y autor de una biografía de Fidel Castro publicada en 1959 —inmediatamente después del triunfo de la Revolución en Cuba—, suscribe a la versión oficial del gobierno conservador colombiano respecto de la existencia de una conspiración comunista internacional. Dubois estuvo presente en aquella capital y, como corresponsal extranjero cubriendo el desarrollo de la IX Conferencia Panamericana, afirma entonces:

Diversos elementos convergieron en Bogotá con el propósito de desbaratar la conferencia o ejercer presión sobre determinadas delegaciones. Los comunistas tenían interés en que se suspendiera la conferencia.

La razón que da resulta francamente poco creíble:

1 Para una descripción más extensa hecha por el propio Fidel Castro de aquella experiencia se puede consultar a Alape (1983).

Solo faltaban nueve días para las importantes elecciones en Italia. Un éxito comunista en Colombia hubiera producido un efecto en las elecciones italianas y podía haber impulsado la campaña roja en aquel país. (Dubois, 1959: 18)

Para que no quede duda que se trata, desde su óptica, de un complot fríamente pergeñado y ejecutado, agrega:

Una hora después de haberse confirmado la muerte de Gaitán sobre la mesa de operaciones de un hospital, los comunistas tenían en su poder el palacio del gobernador en la ciudad de Barranquilla, puerto del Caribe donde desemboca el gigantesco río Magdalena. La bandera del Partido Comunista, con la hoz y el martillo y la estrella roja, ondea en el balcón de aquel palacio. (1959: 21)

Aquí no nos interesa hacer un balance historiográfico de las interpretaciones sobre el Bogotazo, mas sí señalar la existencia de un abanico de tesis que recorren un arco tan amplio como contradictorio. Las mismas van desde las visiones de un movimiento revolucionario popular y espontáneo hasta quienes denuncian la existencia de una conspiración de agentes comunistas extranjeros. La visibilidad que adquiere la violencia también será una nota dominante y será leída en función de perspectivas muy distintas. La mayoría de la prensa colombiana, durante meses y años posteriores al 9 de abril, continúa caracterizando las acciones del pueblo como “bárbaras”,² mientras que Osorio Lizarazo habla de “iracundia vengadora que prendía en el

2 Al respecto, se pueden consultar las abundantes fuentes citadas por Herbert Braun en “Los mundos del 9 de abril, o la historia vista desde la culata” (en Sanchez y Peñaranda, 2007).

corazón del pueblo” o que “la urgencia de la represalia, que los impelía a sembrar la muerte y la destrucción” se origina en redimir “el infinito amor” (1952: 295) que les ha despertado la voz de Gaitán.

El presidente Mariano Ospina Pérez, desde la noche misma del 9 de abril de 1948, responsabilizó a los comunistas del asesinato del Gaitán, del levantamiento que le sucedió y del ciclo de violencia que se incrementó a partir de allí. Consideró al 9 de abril como “el día más peligroso de la historia de Colombia”.

Ramón Genaro Díaz Bessone, general de la última dictadura militar, presenta una visión del Cordobazo que parece volver sobre alguno de los lugares comunes del guión anti-histórico y anticomunista propalado por el gobierno conservador de Colombia acerca de los sucesos del Bogotazo:

El 29 de mayo de 1969 se produjo el “Cordobazo”... Aquel día la ciudad de Córdoba quedó bajo el control de la subversión, perfectamente organizada, que nada improvisó... Se incendiaron numerosos edificios y negocios... Durante varios días se escucharon disparos de francotiradores. Ante la gravedad de la situación, durante las últimas horas de la tarde el Gobierno ordenó que tropas del Ejército, de la guarnición cercana, entraran a la ciudad para controlar el caos. (1986: 126)

El despliegue de la IV Brigada Aerotransportada encabezada por el general Carcagno logró restablecer el control en el centro de la ciudad; sin embargo, “los subversivos” (sic) lograron resistir e impedir que durante varios días pudiesen restituirse la seguridad y el orden de la población. El saldo que detalla es de: muertos, heridos y cuantiosas pérdidas materiales.

“La subversión” aparece como el sujeto de la rebelión, o al menos el que controla su curso. Además es quien promueve la violencia con la quema de inmuebles y la presencia de francotiradores; esto obliga al ejército a intervenir, convirtiendo una vez más a esta institución en garante de la restauración del orden perdido y de la alterada tranquilidad pública. El 29 de mayo de 1969 debe ser “considerado como el punto de partida para acciones de violencia sin precedentes”, agrega Díaz Bessone (1986: 126). Inmediatamente agrega que los días 16 y 17 de septiembre del mismo año, Rosario “vivió momentos parecidos a los que ocurrieron en Córdoba”, registrándose quema de colectivos y estaciones ferroviarias, asaltos a comercios, bancos y fábricas y el restablecimiento del orden calificado como represión “salvaje” por la revista *Evita Montonera* de 1975.

Ya sea que se identifique Bogotazo y Cordobazo, por caso, con la irrupción de la violencia irracional instrumentada por el accionar planificado de la subversión, o como expresión espontánea —y por tanto genuina y legítima— de los sectores populares, habilita a que los ecos del 9 de abril resuenen dos décadas más tarde, un 29 de mayo.

Sin embargo, desde otro modelo interpretativo, José Luis Romero analiza el 9 de abril de 1948 en el contexto de las ciudades masificadas en América Latina. Para él, en algunas ciudades latinoamericanas, tras la crisis de 1930 “comenzaron a constituirse esos imprecisos grupos sociales, ajenos a la estructura tradicional, que recibieron el nombre de masas” (Romero, 1986: 321). Estas se constituían a partir del aporte de migrantes internos, “ajenos a las reglas de la urbanidad”, que entraron en tensión con las clases y grupos articulados que constituían la sociedad tradicional normalizada.

Romero compara la Buenos Aires de 1945 con la Bogotá de 1948:

Ambas ciudades habían crecido rápidamente en número a causa de las migraciones internas; ambas habían visto formarse alrededor de la ciudad tradicional un cordón de barrios populares; y ambas verían polarizarse contra la sociedad tradicional la nueva masa, en la que se fundían los grupos inmigrantes con los sectores de clase popular y de pequeña clase media que más habían sufrido la crisis y la recesión económica. (1986: 339)

Pero no solo encuentra elementos análogos sino que también señala diferencias entre el 17 de octubre y el 9 de abril. La primera fecha remite a un movimiento de masas que persigue el objetivo de defender a un líder preso; la segunda está motivada con vengar el asesinato de Gaitán; esto explicaría por qué en este caso “la cuota de violencia fue mucho mayor”. Las diferencias también se señalan en relación al propio pasado de Colombia: 1948 es un momento de ruptura con respecto al tipo de conflicto que se habían generado entre liberales y conservadores desde el siglo XIX. Los hombres de levita y de ruana se habían enfrentado e incluso habían participado en las guerras civiles, pero ahora las masas que recorren la ciudad el día del Bogotazo constituyen “una multitud diferente, en la que abundan los recién llegados, inmigrantes llegados de las áreas rurales y para quienes la ciudad era todavía algo que no les pertenecía” (Romero, 1986: 340).

Si bien en el registro de su escritura Romero llega hasta principio de los sesenta, la primera edición del texto es de 1976, es decir posterior al Cordobazo o a los Rosariazos, y sin embargo desde su óptica las décadas posteriores al cuarenta fueron restándole agresividad a la “nueva masa urbana”, al tiempo que el “populismo” fue la expresión ideológica del impacto de ese proceso de masificación

urbana. El papel de la migración del campo a la ciudad, la anomia que impone la dinámica de masas o la emergencia de formas ideológicas populistas, son nociones que pueden brindar elementos explicativos de ciertos tramos del proceso, pero son insuficientes para brindar claves heurísticas sólidas para comprender en profundidad las rebeliones que tuvieron por epicentro importantes centros urbanos de la Argentina a fines de los años sesenta.

El Cordobazo y la *Historia del movimiento obrero* del CEAL

En 1972 comienza a publicarse en forma de fascículos semanales la colección *Historia del movimiento obrero* que se presenta con el sello del mítico CEAL y cuenta con el asesoramiento general de Alberto J. Pla, quien toma a su cargo la redacción del capítulo introductorio a cada uno de los tomos en que se divide la obra. La publicación encontró en aquel momento (1972-1974) un público lector numeroso e interesado por un renovado discurso historiográfico orientado a presentar una mirada de conjunto de la historia de los trabajadores de los diversos continentes.

La escalada represiva, iniciada en el país a mediados de los setenta por el accionar de la Triple A y llevada al paroxismo por la última dictadura cívico-militar, colocó a los colaboradores y publicaciones de la empresa que dirigía Boris Spivacov en un blanco privilegiado del terrorismo de Estado. La *Historia del movimiento obrero* no fue una excepción: Daniel Luaces, el responsable de la original ilustración gráfica de la colección, fue asesinado en 1974 por la Triple A, y en 1980, una orden judicial dictaminó incinerar los fascículos junto a otras colecciones del CEAL.

A partir de 1984, tras el retorno de la democracia, se reimprime parte de esa colección (los tres primeros tomos).

Había transcurrido apenas algo más de una década entre la primera y la segunda “época”, el contexto institucional se modificó radicalmente y, si bien el interés de un extenso público se mantuvo, en el caso de la *Historia del movimiento obrero* la calidad de los y las autoras y sus textos no fue razón suficiente para recolocar a la obra en un lugar destacado de los debates académicos que se suscitaron en los años posteriores.

No nos podemos detener aquí en analizar los rasgos originales y aportes específicos que identifican dicha propuesta y que contó con el aporte de Aníbal Ford como redactor responsable (de los primeros sesenta números). A modo de ejemplo, dejamos señalado que de los 110 títulos aparecidos, 43 cuentan con la rúbrica de historiadoras mujeres. En el primer tomo, por ejemplo, que cubre el período que va de los orígenes del movimiento obrero a las revoluciones de 1848, el 70% del material fue elaborado por investigadoras, lo que ya se anticipa como un rasgo de originalidad respecto de la producción historiográfica en ese campo dominado por varones. Otro renglón a destacar es la articulación que se plantea entre los planos “universal”, “latinoamericano” y “nacional”, habitualmente escindidos en compartimientos en los tratamientos brindados por las historias tradicionales hasta entonces, referidas al mundo de los trabajadores. Un ejemplo de ello son los tres tomos escritos por Eduard Dolléans, publicados por Eudeba con el título: *Historia del movimiento obrero* (Dolleans, 1961), obra traducida por Diego Abad de Santillán, en la que se realiza un repaso histórico de los acontecimientos protagonizados los trabajados y sus organizaciones sindicales en Estados Unidos y Europa desde 1830 hasta 1953 (año de aparición de la edición francesa del texto). Queda por fuera de dicha historia el tratamiento orgánico de América Latina, África o Asia.

Si queremos detener nuestra mirada en el lugar que ocupa el Cordobazo en la obra debemos remitirnos entonces

al quinto tomo. En el esquema de periodización general propuesto por Alberto Pla³ corresponde a los dos volúmenes finales de la colección dar cuenta de los “últimos quince años”, es decir, al ciclo que se abre con el triunfo de la Revolución Cubana y se proyecta hasta los primeros años de la década del setenta. En sus líneas de caracterización de la etapa se destaca la realidad y actualidad del socialismo. La historia encarna una dirección de superación de la explotación imperialista a escala mundial, y la proclamación del carácter socialista de la revolución en una isla del caribe a escasos kilómetros de Estados Unidos es una confirmación de tal orientación. Pla no duda en afirmar: “la crisis del imperialismo es seria, profunda y sin salida” (1984: 302) y ve la confirmación de ello en hechos como el escándalo de Watergate o en las multitudinarias manifestaciones a favor de Vietnam en el propio territorio norteamericano. Si a ello se agregan experiencias del protagonismo obrero que se desenvuelven en Europa occidental como el Mayo francés, el otoño caliente en Italia, la instalación de un nuevo gobierno laborista en Gran Bretaña y la caída en Portugal de la dictadura de “mentalidad fascista” de Salazar, aquel fantasma que recorría el viejo mundo por 1848 parece tornarse de carne y hueso.

En la visión del director de la colección, la crisis del capitalismo convive con la existencia de “Estados obreros” y estos poseen un carácter irreversible (sic). La estructura obrera de la URSS, con sus más de 50.000.000 de trabajadores del sector primario y secundario, sumado a los 13.000.000 empleados en el área de servicio, constituye no solo un dato cuantitativo sino que da paso a una estructura

3 Pla redacta la introducción correspondiente a cada uno de los tomos de la obra, los cuales se volvieron a editar como capítulos del libro *Introducción a la historia general del movimiento obrero* (Pla, 1984).

cualitativamente distinta que torna cualquier planteo de vuelta al capitalismo en “un problema descartado hasta por los sectores más ilusionados en restaurarlo” (Pla, 1984: 304). En el mismo sentido, la existencia de la revolución cultural China se convierte en un elemento dinamizador para el avance del campo socialista, aún cuando no deja de señalarse el papel contradictorio jugado por Lin Piao primero y Chou En-lai después, a partir del distanciamiento con la URSS y el acercamiento con Estados Unidos.

En los países dependientes y en América Latina en particular, la rebelión de los pueblos contra la presencia imperialista se torna un dato central. La potencia revolucionaria de las masas una y otra vez es puesta de manifiesto en los diversos continentes, pero “la falta de una dirección centralizada” (Pla, 1984: 307) resta eficiencia a ese empuje irrefrenable. En nuestro continente, el triunfo de la Revolución Cubana tributa a modificar las perspectivas ideológicas de los movimientos nacionalistas de masas que ahora se proponen ir más allá del capitalismo (sic), como lo atestiguan los militares en Perú que acompañaron la llegada de Velasco Alvarado al gobierno o la presidencia de Torres en Bolivia.

Chile es colocado en el centro de las lecciones que deben extraerse para el resto de los procesos en el subcontinente. El golpe de Estado encabezado por Augusto César Pinochet está dotado de una cuota de terrorismo y violencia represiva que solo puede ser explicada por el odio concentrado de clase, odio de clase que respondería a un sector de la reacción imperialista que siente amenazada su supervivencia tanto en Santiago como en Yakarta; pero “tamaño locura sanguinaria” es leída como impotente para lograr “detener ya a la historia”.

El tono que predomina en el análisis de coyuntura que realiza Pla es claramente optimista: “hay una meta que cada

vez se vislumbra como más cerca: la meta de una sociedad donde desaparezca explotados y explotadores”; y plantea que se está en presencia de “una de las etapas que más de un autor caracteriza ya como de las más hermosas de toda la historia de la humanidad” (1984: 301). Apenas aparece una vez la mención a la Argentina, junto a Bolivia, para reafirmar la existencia de una corriente nacionalista revolucionaria, pero no se hace referencia alguna a la dinámica de la lucha de clases concreta en nuestro país. Esa cuestión es abordada en dos fascículos específicos de la colección: el 92 que aparece con la firma de Federico Cerro titulado “De Perón al Cordobazo”, y el 95: “Argentina. Sindicatos y movimiento de masas”, a cargo de Natalia Duval. Para la cuestión específica del Cordobazo, ambos textos se elaboran en base a diarios y revistas de la época y toman como bibliografía básica de referencia los trabajos ya citados de Balve (1973) y Delich (1971), como así también Gazzera y Ceresole (1970) y Senén Gonzalez (1971).

El texto de Cerro reconstruye la trayectoria del movimiento sindical desde 1955 a 1969, es decir, desde el año del derrocamiento del gobierno de Juan Domingo Perón hasta el ascenso de la lucha de los trabajadores que puso en crisis al gobierno de Juan Carlos Onganía. El trabajo destaca entonces cómo el movimiento obrero, mayoritariamente identificado con el peronismo, se encuentra a partir del intento primero de golpe (junio de 1955) y finalmente la concreción del mismo (septiembre del mismo año) envuelto en una crisis de dirección política. Mientras las masas están dispuestas a luchar y enfrentar a quienes derrocan al gobierno popular, se encuentran con que el propio Perón y la cúpula sindical no organizan la resistencia armada al mismo, lo que genera un hiato entre las acciones que se generan desde abajo para defender derechos conquistados y las instancias orgánicas que debieran encauzarlas. A partir de

la autodenominada Revolución Libertadora, el Estado ejerce un rol claramente represivo e intervencionista en la vida sindical y hará de la búsqueda de entendimiento con sectores de la burocracia sindical una constante de su política. No obstante ello, la no resignación de las bases obreras y la emergencia de nuevos cuadros sindicales alumbran experiencias inéditas. La primera regional de la CGT en normalizarse es la de Córdoba; su secretario general, el peronista Atilio López integra la conducción con sectores de izquierda no peronistas y, bajo ese dinamismo, los “legalistas” van marcando un derrotero combativo ascendente.

En 1957, convocada por la CGT de Córdoba, se aprueba en la localidad de La Falda un programa que incluye medidas económicas, sociales y sindicales que van desde la nacionalización del comercio exterior hasta el respeto a los fueros sindicales, pasando por la defensa del desarrollo de la industria pesada, el control obrero de la producción, salario mínimo, vital y móvil, y el control popular de precios, para citar tan solo algunos ejemplos. En 1962, las 62 organizaciones funcionando en el seno de la CGT profundizan el programa anterior, y en Huerta Grande se propone la nacionalización de la banca y sectores claves de la economía como la siderurgia, el petróleo, la electricidad y los frigoríficos, al tiempo que se postula la necesidad de una planificación para el crecimiento y defensa del aparato productivo nacional. Muchos de estos puntos son retomados en el Programa del 1 de mayo de 1968 de la CGT de los Argentinos que encabeza Raimundo Ongaro.

Se establece entonces que hay un protagonismo de los trabajadores a partir de implementar los más diversos métodos de lucha para recuperar sus organizaciones sindicales intervenidas y orientar la acción sindical en favor de las reivindicaciones obreras, no solo parciales sino también integradas a una mirada de conjunto de los problemas de

la realidad nacional. Contrasta entonces este protagonismo de la vida sindical con la marginalidad de los partidos obreros que discursivamente aspiran a servir de brújula a las masas, pero permanece en los bordes de la dinámica del proceso. Esto resulta elocuente a la hora de repasar los acontecimientos que dan origen al Cordobazo. Aunque militantes de distintas fuerzas de izquierda jugaron un rol en las rebeliones que se multiplicaron en 1969 por todo el país, es la infraestructura sindical y el carácter espontáneo de la sublevación la que dio la tónica de los sucesos. Esto sin desconocer, claro está, la existencia de una burocracia que sobrevive administrando la tensión que se genera entre las demandas de las bases y la fuerza de atracción gubernamental que busca cooptarla.

En el apartado “Cordobazo” se hace una crónica de la huelga y movilización iniciada a partir de las diez de la mañana de aquel 29 de mayo de 1969, se describe como el punto culminante del accionar de “50.000” manifestantes se consigue cuando la policía se repliega impotente y la ciudad queda en mano de obreros, empleados y estudiantes. Sin embargo, en el relato el resultado es paradójico, mientras el protagonismo popular no puede ir más lejos, la llegada de la noche se convierte en el marco en el cual: “lentamente y con pesadumbre se van retirando los combatientes del día hacia sus barrios”. El próximo paso hubiese sido la toma del gobierno, pero “no hay dirección que esté preparada y dispuesta a ir tan lejos” (Cerro, 1974: 223). En resumen, la línea interpretativa de mayo de 1969 remite a los intentos reiterados desde 1955 por el capitalismo para imponer mediante diversas fórmulas —que fueron desde la revolución libertadora hasta el Onganía— un disciplinamiento sobre la clase trabajadora. La rebelión permanente de esta ha impedido consumir ese objetivo. En el plano ideológico político organizativo, restaría a la clase transformar ese

accionar objetivamente revolucionario en una consciencia plena y consecuente que fije una dirección política revolucionaria al curso del proceso. Dicha perspectiva debería plantearse como continuidad y superación de la identidad peronista, no como oposición radical a ella, como, según el autor, erróneamente plantearon muchas organizaciones de izquierda a lo largo de aquellos años.

El fascículo 95, a cargo de Natalia Duval —seudónimo de Susana Fiorito— (Celentano, 2020), se centra en el ciclo que se abre con el Cordobazo en mayo de 1969 y avanza hasta fines de 1972, momento que según su visión cierra la perspectiva abierta por las luchas clasistas al imponerse una salida institucional que anuncia en simultáneo el llamado a elecciones y la firma de un Pacto Social entre la CGT que encabeza José Ignacio Rucci y la CGE que conduce José Ber Gelbard. Una firma que, sabemos, se concretará en 1973, en el marco del nuevo gobierno constitucional surgido de las urnas, pero que en el capítulo no se aborda por quedar fuera del recorte temporal establecido. Sin embargo, sí se menciona el aval al mismo que anuncia en septiembre de 1972 el entonces presidente de la nación, general Agustín P. Lanusse.

Para Duval, el proceso abierto en 1969 recorre en el ámbito sindical una tensión permanente entre lucha e institucionalización. Los sindicatos clasistas de SITRAC y SITRAM encarnan en 1970 —para la autora— la expresión más lúcida y consecuente de esa participación de las bases obreras en la configuración de una nueva vanguardia política. Pero la derrota de los mismos, aunque siguió mostrando la emergencia de posicionamientos clasistas, no pudo revertir la ilusión generada por la salida electoral propuesta por el régimen y aislando a quienes adherían a la consigna: “Ni golpe, ni elección. Revolución”. En sus propias palabras: “Ante el proceso electoral nacional, una época se cierra. Sin embargo, la contradicción entre

movimiento de masa y las estructuras que aspiran a canalizarlo no está superada” (Duval, 1974: 320).

Ese debate se expresa también en las páginas de *Cuadernos de Pasado y Presente* número 44: “Economía y política en la acción sindical”, que se publica a finales de 1973. Allí se reúne una serie de trabajos de autores europeos acerca de la forma sindicato, aclarando que la intención de la compilación es “contribuir, a través del debate y la investigación, a llenar el vacío teórico existente en la Argentina acerca de la naturaleza y de las implicancias de la acción sindical” (AA.VV., 1974: XI). La “ausencia de una reflexión madura” se señala como algo paradójico en un contexto como el de nuestro país, con un alto grado de sindicalización de la fuerza de trabajo y el papel central que el sindicalismo había desempeñado en la vida institucional y política. Una situación nueva se configura desde fines de los sesenta, y las nuevas posiciones conquistadas en el seno del movimiento obrero por la izquierda peronista y marxista obligan a estas fuerzas a indagar sobre nuevas problemáticas y asumir inéditas responsabilidades. Los movimientos de 1969, según los editores, ponía en cuestión el esquema leninista de importación de la consciencia desde el exterior de la clase obrera y demuestra que “pese a las reticencias de sus organizaciones sindicales y políticas, la clase obrera —o al menos sus sectores más avanzado—” se plantean un tipo de acción que superan ampliamente reivindicaciones a las que el sistema capitalista puede dar respuestas sin mayores dificultades. El año 1969 es un punto de inflexión, en el cual el activismo sindical juega un papel inocultable, pero como se señala los esquemas leninistas, deben ser rediscutidos en función de configurar una nueva vanguardia política que pueda intervenir activamente y conducir un proyecto de transformación social. En términos de estrategia sindical, los interrogantes que quedan planteados son:

¿Cómo forzar la inercia de las instituciones sindicales y formular una plataforma reivindicativa que unifique aquello que la división capitalista del trabajo divide y separa? ¿Cómo es posible articular una movilización que deje un saldo de autonomía política en los trabajadores una vez que se concluya la negociación salarial? (AA.VV., 1973: xi)

Sin embargo, ese debate resulta abstracto si no se aborda también la complejidad específica de la coyuntura argentina de aquellos años, en el cuál la “salida electoral” propuesta finalmente por la dictadura se ve interpelada por expresiones como el clasismo expresado en el programa de Sitrac-Sitram o las organizaciones político-armadas que toman como referencia las propuestas guevaristas.

Algunas consideraciones finales

Para las interpretaciones canónicas de la izquierda, el Bogotazo fue una expresión del descontento popular que no pudo adquirir la forma de una revolución social por la falta de una dirección política, un momento de ascenso en las luchas antioligárquicas de las masas, pero que se frustró por la ausencia de un canal adecuado para encauzar la enorme fuerza desplegada en las calles. Para quienes están en la antípoda ideológico-política se trató de la puesta en acción de las turbas a través de una planificación subversiva para alterar el orden en la ciudad y modificar el régimen a nivel nacional e, incluso, a escala planetaria.

Con respecto al Cordobazo, la disputa por su sentido sigue siendo hoy una batalla en curso. Intelectuales como Rosendo Fraga, en una nota publicada en el diario *La Nación*, insisten en enfatizar “los hechos de violencia” como

la nota esencial del Cordobazo: “los desórdenes adquirieron gran magnitud en la capital provincial; hubo muertos y heridos”; le cupo entonces a las tropas del Ejército reprimir y restablecer el orden, debiendo apelar para ello a “medidas enérgicas” (Fraga, 2001). Expurgar la imagen simplista de la pura violencia asociada a las rebeliones populares y dejar al desnudo el accionar de las fuerzas represivas como garantes de un orden tan injusto como ilegítimo, continúa siendo una tarea al que nos convocan la perspectiva de una ciencia social crítica. La referencia a la Revolución Cubana, como ha vuelto a proponer Gordillo (2019: 29), es una referencia insoslayable para la comprensión de aquel evento. Quizás una forma elocuente de ilustrar esa cuestión sea recordar que en 1973, en la primera conmemoración del Cordobazo tras el fin de la dictadura, en la tribuna levantada en las calles de Córdoba participó junto a protagonistas sindicales como Atilio López y Agustín Tosco, el presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós Torrado.

Bibliografía

- Alape, A. (1983). *El bogotazo: memoria del olvido*. La Habana, Casa de las Américas.
- AA.VV. (1973). Economía y política en la acción sindical. *Cuadernos de Pasado y Presente*, núm. 44. Córdoba, Siglo XXI.
- Balve, B. et al. (1973). *Lucha de calles. Elementos para su análisis (Córdoba 1971-1969)*. Buenos Aires, La Rosa Blindada.
- Celentano, A. (2020). Susana Fiorito y el archivo de los cordobazos, del clasismo y de la nueva izquierda. *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, vol. 24, núm. 1. Santiago de Chile, USCh.
- Cerro, F. (1974). Argentina: de Perón al Cordobazo. Pla, A. (ed.) (1972-1974), *Historia del movimiento obrero*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

- CGT (1997). *Semanario CGT*, núm. 4. Buenos Aires, Página/12 - Universidad Nacional de Quilmes.
- Delich, F. (1971). *Crisis y protesta social. Córdoba, mayo de 1969*. Buenos Aires, Signos.
- Díaz Bessone, G. (1986). *Guerra revolucionaria en Argentina*. Buenos Aires, Fraterna.
- Dolléans, É. (1961). *Historia del movimiento obrero*, 3 tomos. Buenos Aires, Eudeba.
- Dubois, J. (1959). *Fidel Castro*. Buenos Aires, Grijalbo.
- Duvall, N. (1974). Argentina: sindicatos y movimientos de masas. Pla, A. (ed.) (1972-1974), *Historia del movimiento obrero*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- Fraga, R. (2001). Una historia repetida en América Latina. *La Nación*. Buenos Aires.
- Gazzera, M. y Ceresole, N. (1970). *Peronismo, autocrítica y perspectivas*. Descartes.
- Gordillo, M. (1994). El cordobazo en la producción bibliográfica. *Estudios*, núm. 4. Córdoba.
- _____ (1996). *Córdoba en los '60. La experiencia del sindicalismo combativo*. Córdoba, UNC.
- _____ (2019). *1969. A cincuenta años. Repensando el ciclo de protestas*. Buenos Aires, Clacso.
- La Prensa* (1948). Buenos Aires.
- Mignon, C. (2014). *Córdoba obrera. El sindicato en la fábrica. 1968-1973*. Buenos Aires, Imago Mundi.
- Orosio Lizarazo, J. A. (1952). *Gaitán. Vida, muerte y permanente presencia*. Buenos Aires, López Negri.
- Pla, A. (ed.) (1972-1974). *Historia del movimiento obrero*, 8 volúmenes. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- _____ (1984). *Introducción a la historia general del movimiento obrero*. Buenos Aires, Tierra del Fuego.
- Ramonet, I. (s/f). *Cien horas con Fidel*. La Habana, Juventud Rebelde.

Romero, J. L. (1986). *Latinoamericana: las ciudades y las ideas*. Buenos Aires, Siglo XXI.

Sanchez, G. y Peñaranda, R. (comps.) (2007). *Pasado y presente de la violencia en Colombia*. Medellín, La Carreta.

Senén González, S. (1971). *El sindicalismo después de Perón*. Buenos Aires, Galerna.

Trujillo, F., Gaitán, G. y Valencia, L. E. (s/f). *Jorge Eliécer Gaitán*. Montevideo, Biblioteca de Marcha.

Capítulo 10

El Mendozazo (1972)

Un acontecimiento multiforme

Patricia Chaves

El Mendozazo (1972) ha estado impregnado por las memorias epocalmente situadas, además de las reconstrucciones históricas. Nuevos archivos y relatos convierten al hecho en multiforme y, por lo tanto, sujeto a nuevas reinterpretaciones y reescrituras. El Gran Acuerdo Nacional (GAN), lanzado por Lanusse, se trataba de un pacto político incompleto que tampoco logró diluir la protesta. El Mendozazo puede ser considerado multiforme porque sumó las huelgas de trabajadores y la indignación de las clases medias ante la suba de tarifas. Además, activó la militancia local —cada vez menos clandestina— y tuvo consecuencias nacionales. Perón lo tomó a su favor en el “match” Perón-Lanusse. Las y los mendocinos no olvidaron esas jornadas épicas. En esta reconstrucción se combinan esos elementos.

Crónicas en disputa: una reconstrucción

Durante 1971, el GAN había demostrado la imposibilidad de que el descontento tuviera como canal a los partidos

tradicionales; por el contrario, incrementó el activismo de las organizaciones político-militantes (de Amézola, 1999: 61).

El grado de indignación popular en Mendoza quedó claro para el gobierno nacional de Lanusse, quien rápidamente ordenó la represión federal por medio de las fuerzas armadas. Los dirigentes “gansos” (Partido Demócrata) entendieron que los nuevos tiempos daban poco margen para simular la neutralidad política. Ello fue evidente con la confusa renuncia del gobernador Francisco Gabrielli. La ciudadanía y las propias agrupaciones políticas vertiginosamente adaptaron las posibilidades de organización al marco de resistencia, a la sazón habilitado por la pueblada mendocina para objetivos de mayor alcance.

En esta breve crónica se subraya el imaginario alentado entonces desde los medios de comunicación locales y la impugnación de sus participantes en el Mendozazo ante la desinformación sobre el acontecimiento que provocó la prensa. También se resalta cómo la provincia nuevamente estuvo a punto de aguar los planes de Perón incitando a una huelga que la CGT venía postergando y de hecho tuvo epicentro en Mendoza.

Las imágenes que forman el imaginario social habilitan posibilidades de transgredir sus componentes. Sin embargo, en el universo simbólico que les da organización y sentido a sus componentes tiende a que “cada cosa permanezca en su lugar”.¹ Las imágenes que las clases sociales se hacen de sí requieren de la imagen que las otras clases sociales tienen sobre la misma (Thompson, 1984: 59). Así, se establece la hegemonía cultural de una clase sobre otra y la legitimación de un orden social. En este sentido, en Mendoza la mayoría de sus habitantes es alentada a creer en las imágenes

1 Las representaciones colectivas e ideas-imágenes de la sociedad encuentran consonancia con la historia de las mentalidades. *Cfr.* Baczo (1999) y Berger y Luckmann (1995).

que resaltan la calma de la siesta, la espera de la vendimia en marzo y la confianza de estar entre “gente tranquila”. Estas imágenes fueron estimuladas tempranamente durante el siglo XX y han contribuido a conformar un universo simbólico provinciano del cual las clases dominantes se beneficiaban. Sin embargo, contradiciendo la organización de dicho universo simbólico, se debe registrar que Mendoza ha sido en el siglo XX tierra que acogió a anarquistas inmigrantes, participó violentamente en las luchas de los radicales de principios de siglo, alentó el personalismo populista provinciano de los Lencinas, bulló su calma con huelgas prolongadas de docentes y obreros en la década del veinte y organizó una clara solidaridad con los republicanos durante la guerra civil española.

Estos hitos entran en conexión con los años setenta de alta conflictividad social (Scodeller, 2006 y Rodríguez Agüero, 2014) de estudiantes universitarios, trabajadores del Estado, contratistas de viñas, obreros despedidos y nuevos sectores politizados como los sacerdotes tercermundistas y los abogados vinculados a los presos políticos. A estos grupos se deben agregar las uniones vecinales de las villas del oeste de la capital provincial. Los reclamos coincidían contra el encarecimiento del costo de vida, en un contexto en que las tarifas subían semanalmente. En 1970 se había producido un aluvión que dejó inundadas varias zonas de la ciudad y acrecentó el reclamo por casas y salubridad, que aún afectaban por la falta de luz y agua en algunos barrios. Todo ello constituye una realidad alejada de la imagen de una provincia tranquila “donde nunca pasa nada”. Poco a poco irrumpen imágenes de protesta social disimuladas por los demócratas en el poder local; aun así, les mantenían en el gobierno al amparo de la dictadura de Lanusse. Hasta que llegó la revuelta provincial.

La revuelta fue indiscutible cuando los estruendos en la Casa de Gobierno el 4 de abril de 1972 aturden al vecindario y los estudiantes secundarios son despachados a sus casas de inmediato y los negocios bajan sus persianas. La mayoría de la población apagó las radios. El clamor popular se extendió al microcentro mendocino, a los barrios donde creció la combatividad.

¿Por qué la población apagó las radios? La población pareció entender que el estallido contradecía la información radial; incluso era mejor salir a la calle, informarse y manifestarse. La información de los medios gráficos de la época, los diarios *Los Andes*, *Mendoza* y *El Andino*, se mantuvo contradictoria. Incluso a *El Andino*, cuya edición vespertina era popular, le fue secuestrada completa su tirada del 5 de abril por las fuerzas a cargo de la represión. Las imágenes filmadas por camarógrafos de Canal 7 no fueron exhibidas sino guardadas por precaución, y forman parte de un emergente archivo audiovisual.²

La represión estuvo a cargo del Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña bajo las órdenes del III Cuerpo del Ejército, comandado por el general Alcides López Aufrac.³

2 He accedido al archivo audiovisual filmado por los camarógrafos de Canal 7 gracias a la labor que desde 2004 efectúa el grupo "Celuloide" en el rescate de imágenes documentales y de ficción de la provincia de Mendoza. El 27-11-2007 fueron exhibidas por Sergio Sánchez, a cargo de Proyecto Celuloide, al colocarle el nombre "León Gieco" a una escuela mendocina; el cantautor recordó que su canción "Hombres de hierro" se inspiró en la represión que ocurriera en 1972 durante el Mendozazo. Esas imágenes se tratan de cuatro minutos filmados en medio del humo y las barricadas, con una pesada cámara Arri; Proyecto Celuloide pudo recuperarlas y pasarla a formato DVD.

3 Luego del Vitorazo (1971), Córdoba había sido declarada "zona de emergencia" por el decreto n.º 888 del 1-3-1971; el III Cuerpo del Ejército, comandado por el General López Aufrac, ya había estado a cargo de la represión en el Cordobazo (1969) y luego lo será en sucesos como en Villa Constitución (1975). Ya en la dictadura tomó el cargo de director en la metalúrgica Acindar (desde 1976 a 1992). A López Aufrac se lo reconoce como uno de los 120 militares que en 1958 viajaron a formarse en la Escuela de Guerra de París, creada por el general Marcel Bigéad. Desde 1959 llegaron a Argentina ex torturadores franceses de la guerra de Argel. El primer instructor argentino en esos oscuros entrenamientos fue Alcides López Aufrac. Cfr. Shinzato (2019: 46-48).

El día 4 a la madrugada, el general de división, Luis Carlos Gómez Centurión, había comunicado telefónicamente al gobernador Francisco Gabrielli que el orden quedaba a cargo del III Cuerpo del Ejército y que se estaban trasladando tropas desde Córdoba de Infantería, Gendarmería y Aeronáutica. La participación militar en el desarrollo de los acontecimientos se anunció al gobernador en carácter de inminente. Así, la policía local y Gómez Centurión, de la VIII Brigada de Infantería, formaban parte del operativo conducido por López Aufrac (Romano, 2009: 185).

Los días posteriores las fuerzas castrenses se reservaron la comunicación oficial de los acontecimientos. Las radios locales fueron obligadas a entrar en cadena con LV Radio Nacional. Tampoco los canales locales realizaron sus transmisiones. La participación militar se hizo evidente. Aun así, la protesta recrudeció: el día miércoles 5 de abril en los barrios y microcentro, el jueves 6 bajo estado de sitio y el viernes 7 con enfrentamientos y paro total de actividades durante todos esos días.

Lo que pasó en los barrios comenzó como un trueque entre vecinos: se buscaba información y se recibía concientización, se averiguaba por el transporte y se pasaba a ser parte de la construcción de barricadas o doblado de “miguelitos” contra los camiones del ejército, o portavoz del “boca en boca” y luego parte de las guardias nocturnas entre vecinos. ¿Una excepción a la “tranquilidad mendocina”? Cabe preguntarse también por qué se organizó tan rápidamente la resistencia después del estallido, aún con el estado de sitio y toque de queda.

El Mendozazo no se limita al día 4 de abril de 1972, pretensión del imaginario social predominante. Su inicio fue anterior, asociado a la conflictividad gremial en la que destacan las luchas docentes y de los gremios estatales. En lo inmediato, se gestó por la acción que desarrollaron desde

fines de marzo distintos sectores de la sociedad mendocina al conocer el anuncio que realizó el gobierno de facto nacional de un aumento tarifario del 300% en el servicio eléctrico. El descontento que generó la noticia, en un clima socioeconómico ya deprimido, impulsó la creación de numerosas juntas vecinales, además de las ya establecidas: sumaron en total más de cien organizaciones vecinales y barriales en pie de protesta.

El día 29 de marzo los vecinos de la 4.ª Sección de la capital mendocina se autoconvocaron en una asamblea que reunió a setecientas personas. La asamblea se reunió con los otros organismos vecinales autoconvocados en diversas zonas del Gran Mendoza y se instituyó una coordinadora que agrupó al conjunto. Luego marcharon al centro de la ciudad recibiendo adhesiones a su paso.

Al día siguiente, en el departamento de Maipú, un grupo de obreros vitivinícolas convocados por la intersindical alentada por la CGT local se reunieron en asamblea y decidieron igualmente no pagar la luz y agregaron sus reclamos. También marcharon por el centro del departamento. Ese mismo día 30, en horas de la noche, los comercios del microcentro decidieron realizar un apagón y colgaron en sus vidrieras letreros en los que se leía “No pague la luz”. En diversos departamentos se realizaron acciones similares reproduciendo esos carteles en imprentas semiclandestinas. Ya por la noche del viernes 31, en el Centro Republicano Español, se realizó una masiva reunión de representantes de numerosas instituciones obreras, vecinales y populares. Dieron una orgánica institucional a la coordinadora provincial denominándose “No pague la luz”. Allí formalizaron el plan de protesta con una concentración y marcha a la Casa de Gobierno para el día 2 de abril.

La concentración citada para ese domingo 2 de abril contó con la presencia de una verdadera multitud: alrededor de

veinte mil personas marcharon bajo la consigna “No pague la luz”. Se convocaron frente a la Casa de Gobierno, luego se dirigieron a la sede de Agua y Energía, ubicada a pocas cuadras, para finalizar en la Plaza Independencia. Entre los oradores estuvieron presentes el secretario de la CGT local Carlos Fiorentinni, y por la coordinadora Roberto Vélez. Se acordó asistir al día siguiente a una mesa redonda y adherir a la manifestación convocada por la CGT para el día 4 de abril, citada a las 22 horas. La coordinadora provincial también decidió llamar a paro activo para el día 4 y cambiar el horario de convocatoria a las 10 horas y no a la noche como había anunciado la CGT. La respuesta del gobierno demócrata no se hizo esperar y anunció esa madrugada la prohibición de realizar cualquier acto de protesta, ante la presión de Gómez Centurión ya mencionada.

El paro se puso en marcha, tal como había sido convocado, el día martes 4 de abril a la mañana. Si bien el punto de reunión sería la sede de la CGT, algunos gremios establecieron reunirse previamente en su sede para luego unirse a la marcha hacia Casa de Gobierno. Tal fue el caso de las 2.000 maestras que se encontraban en la calle Montevideo frente al Sindicato del Magisterio, cuando fueron sorprendidas por el pedido policial de desconcentrarse en pocos minutos. Ante la negativa de las docentes comenzó la represión policial con fuertes chorros de agua lanzados desde un camión hidrante “Neptuno”, imágenes que quedaron registradas por las cámaras de Canal 7. Esta acción fue seguida por el despliegue de la Caballería. Un grupo de docentes respondió entonando el Himno Nacional, otras maestras ya habían sido dispersadas y corrían buscando refugio. La represión continuó con una segunda pasada del Neptuno, que esta vez arrojó grandes chorros de agua coloreada de azul. También actuó la Infantería, con la compañía de lanzagases y agentes con bastones y armas largas. Este brutal atropello

se convirtió en uno de los hechos más impactantes en las crónicas. El tema central está perpetuado en la memoria colectiva sobre el Mendozazo, tanto en las imágenes fotográficas como en las filmaciones.

A las maestras en días previos al 4 de abril, desde el gobierno provincial, se las había instado a no continuar con el paro que llevaba ya dos semanas de duración. Desde la prensa, se las exhortó a volver a las escuelas, aunque se reconoce la “importancia que juega el rol del educador en una sociedad organizada” (*Los Andes*, 1972a). Todas las escuelas primarias de Mendoza se encontraban con más de quince días sin clases. Por otra parte, las maestras intentan mantener un rol de protesta “educada y tranquila”. La sorpresa del día 4 de abril fue que fueron fuertemente reprimidas:

Los maestros acostumbrados en el gremio del magisterio, desconociendo que podía haber represión contra nosotros, les hicimos frente. Inclusive como el gremio del magisterio es siempre tan tranquilo, lo único que atinamos a hacer fue cantarle Himno Nacional; a pesar de eso como no nos corríamos vino la caballería y comenzó a castigarnos, no solamente tirándonos los caballos encima sino con fustazos. (CEDIP, 1972: 49)

La represión a las maestras que trataron de mantener una protesta educada provocó diversas reacciones del resto de los manifestantes. El gremio SMATA las protegió en las intermediaciones de la Catedral San Francisco al grito “maestras adentro que los metalúrgicos estamos en la calle”. Esta reacción protectora respecto al género femenino predominante en el gremio del magisterio contrasta con otras reacciones a las que alude el siguiente testimonio:

Frente a la Casa de Gobierno, gritábamos “Gabrielli, hijo de puta” y una maestra le dice a una viejita: “Así no, con educación”. Al rato entra el carro hidrante dispersándonos con agua y la viejita se da vuelta y le dice “Ahí tenés la educación”. (CEDIP, 1972: 80)

En las imágenes de Canal 7 se observa la custodia de la Caballería con armas largas, amenazantes hacia las maestras que quedaron cerca de la Casa de Gobierno, y también los gestos de sorpresa de algunas maestras.

Por su parte, el núcleo de mil obreros agrupados en el local de la CGT, a más de quince cuadras del sindicato del magisterio, ubicado en la calle 25 de Mayo cerca de la avenida Las Heras, al iniciar la marcha se encontró con un pelotón de Infantería de la Policía Provincial a las órdenes del Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña. La represión a este grupo consistió en arrojar granadas de gases contra los sindicalistas. Los trabajadores se dispersaron en diferentes direcciones, unos se defendieron con piedras sacadas de las acequias que arrojaron contra las fuerzas represoras, otros intentaron reagruparse en la central obrera marchando por 25 de Mayo desde Las Heras. Estos llevaban grandes pancartas en las que se protestaba “por el abusivo aumento en las tarifas eléctricas”; los policías se retiraron mientras eran insultados y recibían una lluvia de piedras.

Otro grupo de manifestantes, entre ellos mujeres y dirigentes estudiantiles, avanzó por avenida San Martín formando barricadas con vehículos que volcaron e incendiaron para detener el avance policial. Al llegar a la arteria principal de la ciudad algunos ciudadanos espontáneamente se unieron. También expresaron su repulsión contra el City Bank arrojándole piedras en la esquina de San Martín y Sarmiento. Al tiempo que expresaban su repudio y coreaban “¡¡¡Patria sí!!! ¡¡¡Colonia no!!!”. Como se puede observar,

la protesta ya no era solo por las tarifas eléctricas, sino que contribuyó a la agregación de demandas. Los atropellos continuaron en el frente del Correo donde se hallaban apostados los efectivos de la Policía y de la Gendarmería. La columna desvió el rumbo hacia el oeste para reunirse en calle Mitre con los trabajadores de Sanidad y juntos marcharon hacia la Casa de Gobierno. El Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña ya había difundido un comunicado alertando sobre la infiltración de elementos subversivos.

En la Casa de Gobierno, ya desde las 10 de la mañana se encontraban reunidos, respondiendo a la convocatoria realizada días antes, el grueso de los manifestantes integrado por familias, delegaciones de uniones vecinales, productores vitivinícolas que portaban carteles con consignas contra el aumento de las tarifas eléctricas. A ellos se fueron sumando las columnas de la CGT, el Sindicato del Magisterio y ATSA. En total sumaban treinta mil personas según las diversas fuentes de la época. La multitud desafió con sus cánticos al gobierno de Gabrielli: “¡Mendoza, Mendoza!; ¡El pueblo unido, jamás será vencido!; ¡Que sí, que no, Gabrielli se quemó!” (CEDIP, 1972: 10-26).

Entonces lo que ocurrió fue un expresivo indicio de quién tenía el poder. ¿Salió el gobernador a hablar? No. ¿Se comisionó una delegación para ingresar a la Casa de Gobierno con el petitorio? No. Sin una solución a la situación candente, sin aviso a las familias que se encontraban con niños, el asunto fue resuelto en el terreno. La Policía y la Gendarmería arremetieron contra la multitud con bombas de gases lacrimógenos, disparos al aire y con armas largas. La manifestación se dispersó en distintas direcciones; es aquí cuando cayó la primera víctima de arma de fuego, el canillita Ramón Quiroga que se encontraba en el lugar.

El gobernador Gabrielli había declarado ilegal el paro. Envió primero a las fuerzas policiales y luego a la Gendarmería

para dispersar la multitud frente a la explanada de la Casa de Gobierno. Fue insuficiente: la Caballería entró en acción, aunque se vio superada por el número y la resistencia a pedradas que recibió. En esos momentos el delegado regional de la CGT, Carlos Fiorentinni, habló a los manifestantes. El secretario general de la CGT, Ignacio Rucci, le había expresado su apoyo telefónicamente, a pesar de encontrarse postergando una huelga general nacional para no ensombrecer los planes políticos de Perón. Asunto que, como se verá, tuvo sus complicaciones.

Han quedado registrados en el material audiovisual de Canal 7: las corridas, la resistencia, los heridos, la quema de vehículos oficiales de las inmediaciones de Casa de Gobierno. También se reconoce el accionar de los carros hidrantes y las detenciones que realizan las fuerzas de seguridad.⁴ No se observa en ellas ningún manifestante que cubra su cara para no ser identificado o que fuera armado con algo diferente a piedras y palos.

Entre los aproximadamente cuatrocientos detenidos y detenidas —algunos torturados— no todos pertenecían a agrupaciones políticas. Sin embargo, por parte del gobierno se informó a la prensa la presencia de “subversivos” e “infiltrados”, lo cual se reprodujo en la prensa escrita. Ese relato dominante contradice con la memoria de las agrupaciones políticas, que tomaron posteriormente el 4 de abril como bandera.⁵

4 Las imágenes del archivo de Canal 7, conservadas por Proyecto Celuloide, se trata de tres momentos del 4 de abril: 1) la vigilancia antes de la represión a las maestras en las inmediaciones de la Casa de Gobierno con caras de asombro; 2) un breve paneo a algunos destrozos en el microcentro y patrullaje de las fuerzas de seguridad; 3) la quema de automóviles, el humo y foco a vidrios y destrozos de un incendio, de los tantos que hubo ese día. Si bien las imágenes no están montadas como un documental ni poseen voz en off, funcionan para el análisis como una vigilante herramienta de observación social. Cfr. Breschand (2004: 17).

5 En el diario *Mendoza* del 4 de abril de 1973 se publicó “El peronismo conmemora los sucesos de

La represión actuó con prácticas destinadas a infundir terror hacia la protesta social. Un joven manifestante indica su periplo una vez detenido:

Luego de discutir con unos policías de un patrullero, el heroico oficial del ejército argentino se deshizo del paquete de prisioneros y nos metieron a los tres en el asiento de atrás de un Falcon azul de la policía. [...]. En una oficina de la policía —después supe que era investigaciones— lo que poco después se conocería como el D2— junto a unos veinte o treinta presos como yo, me golpearon hasta el anochecer. (Rule, 2006: 47-48)

Una joven estudiante indica que como testigo no vio que hubiera organizada una revuelta sino realmente una huelga:

Yo fui por mi cuenta, llego a la casa de gobierno me entero de que el PC estaba con su camionetita colorada. La verdad que fue lo único que yo vi organizado y la CGT que trajo una columna grande que venía desde la sede de la CGT que era en la calle 25 de mayo, ellos venían desde ahí con unas banderas argentinas flameando. Y en ese momento cuando vemos acercarse la columna de la CGT empiezan las bombas

abril de 1972". En el contexto de 1973, aun así, informa que "la JP no se dejó llevar a la provocación del régimen". Rindieron su homenaje en el cementerio de la capital en la tumba del compañero canillita Ramón Quiroga "personificando en él a todos los caídos no solo en el Mendozazo sino en estos 18 años de vergüenza nacional". La Mesa Única de la Juventud Peronista informó a través de un comunicado dirigido al pueblo de Mendoza que el gobernador electo señor Martínez Baca adhirió totalmente a lo expresado en la conferencia de prensa realizada en la sede del Partido Justicialista. La citada conferencia de prensa tuvo el propósito de dejar sentado cuál era el sentido que para los peronistas revestía el 4 de abril: "en ella participaron el candidato a vicegobernador compañero Carlos Mendoza, las 62 organizaciones, el Comando Electoral del Partido Justicialista, el Bloque de abogados y procuradores peronistas, el sindicato de canillitas, las agrupaciones de la juventud" (*Mendoza, 4-4-1973*).

lacrimógenas. [...] ahí se queman autos, los autos que estaban en la playa de estacionamiento, en parte también porque se había convocado a una huelga general y la gente de la casa de gobierno no había adherido, entonces fue como una venganza. Porque realmente se hizo una huelga, venían de la calle Rodríguez Peña los obreros de las fábricas, yo los vi llegando por la calle San Martín. Sacaban los tachos de basura de la municipalidad y con eso pegaban los palos haciendo ruido como tambores, la gente se acercaba espontáneamente. (Entrevista a Graciela Coussinet, estudiante universitaria, en 1972)

El enfrentamiento con las fuerzas policiales se extendió a otros puntos de la ciudad donde continuó la quema de autos y colectivos y los desmanes contra vidrieras comerciales. Para Benito Marianetti, dirigente del PC de Mendoza, quienes realizaban los destrozos se trataba de grupos parapoliciales:

Grupos parapoliciales se dedican a efectuar deprecaciones. Saquean ellos e incitan a vecinos menos esclarecidos a saquear también. Actúan con un diario enrollado en la mano, para ser visualizados por las fuerzas represivas y poder actuar impunemente. (Marianetti, 1972: 15)

La presencia de extraños se reprodujo en la prensa de la época utilizando el relato canónico oficial del gobierno: se refieren a “los otros” o “profesionales del terror” o “grupos foráneos”. En el caso de las organizaciones partidarias, acusan a una encubierta actividad de “parapoliciales”.

Al anochecer del agitado 4 de abril se comunicó la renuncia del gobernador Francisco Gabrielli. El diario *Los Andes* (1972b) informa:

A últimas horas de la noche del día 3 de abril dio precisas instrucciones al señor jefe de la policía de Mendoza para que no obstante la actitud asumida [...] “en el caso de que se produjese alguna manifestación tratara de lograr su encauzamiento sin impedir su realización, evitando la represión”.

También Gabrielli se excusa que por intermedio del Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña se le comunicó la disposición de que el Tercer Cuerpo del Ejército quedaba a cargo desde ese instante de la policía de la provincia. En la misma portada el diario *Los Andes* anuncia que ha sido nombrado interventor el general Gómez Centurión.⁶

Gabrielli dejó claro que estaba en desacuerdo con la actitud adoptada por el Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña y comunicó su intención de renuncia al ministro del Interior Arturo Mor Roig. Producidos los acontecimientos, Gabrielli optó por dejar sentado el precedente de que la responsabilidad de los acontecimientos recaía en un grupo de activistas funcionales al ala más fuerte del ejército para impedir la salida democrática. ¿Tenía ese relato asidero? No lo suficiente. Sin dudas era un lenguaje que proporcionaba a las partes directamente interesadas un sentido a una resolución de emergencia ante la contundencia de la protesta y que pretendía no tambalear al gobierno nacional. Pero, a su vez, daba pie a desconfiar del potencial golpe de Estado dentro de la Fuerzas Armadas y del endeble poder civil en el gobierno. ¿Acaso no había sucedido antes?

6 Los titulares del diario *Los Andes* del día 5 de abril fueron: “Violenta jornada sufrió Mendoza y renunció el ingeniero Gabrielli”; “La provincia ha sido intervenida”; “Mensaje del gobernador fundamentando su dimisión”; en la tercera página: “Capital y sus zonas aledañas han sido declaradas zonas de emergencia por el PEN.

Esa noche Mendoza estuvo bajo el estado de sitio. Sus habitantes escucharon disparos, gritos, corridas. Al día siguiente, el paro convocado por la CGT por la muerte del canillita y en repudio por la represión gubernamental tuvo un total acatamiento, a pesar de la falta de difusión en los medios de comunicación. La ciudad amaneció con los negocios cerrados. Hubo nuevos choques en las calles entre la población y las Fuerzas Armadas. Los escenarios de lucha se desplazaron a los departamentos de Las Heras y Guaymallén.

El jueves 6 nuevamente Mendoza se vio paralizada. Los comercios cerraron sus puertas a media mañana y las empresas de transporte público retiraron sus vehículos por miedo a nuevos enfrentamientos callejeros. Se reunieron en el microcentro cuatro mil personas, una multitud que expresaba en cánticos “¡luchar, vencer, el pueblo al poder!”, “¡viva Perón!”, “¡viva la revolución!” (Scodeller, 2006: 88). La protesta por la luz habilitó una ostentación del descontento de grupos autoconvocados. Los motivos que aglutinan a jóvenes y trabajadores excedían el reclamo tarifario.

Así, en el tercer día del Mendozazo, en la tarde allanaron nuevamente la sede del vespertino *El Andino*. Esa noche, las fuerzas represivas intentaron hacer cumplir el toque de queda. Hubo enfrentamientos entre las fuerzas militares y los vecinos de Guaymallén y Las Heras. Se armaron barricadas y fogatas en las calles con vigilia de vecinos. Se produjo la muerte por una bala del Ejército de la segunda víctima de la represión, una comerciante en la plaza de Las Heras. La protesta se hizo notar en los barrios por medio de barricadas que impidieron el ingreso del Ejército. Según Benito Marianetti:

Barricadas y fogatas son el símbolo de la resistencia popular. Las juntas vecinales, en los momentos de res-

piro, hacen asambleas, discuten cómo continuar la brega. Se les está tomando el pulso a la debilidad de la dictadura. El pueblo unido y organizado se siente dueño de la situación. El poder se ejerce en zonas y barriadas de distintos lugares. El departamento de Las Heras es controlado por las vecinales, lo que se expresa en una consigna que simboliza el momento que viven y sienten los trabajadores y vecinos: “Las Heras, primer territorio libre de Mendoza”. (Mariannetti, 1972: 18)

La indignación popular y el desborde de las fuerzas represivas afirman la magnitud de la protesta social. En las tomas del archivo filmico del Mendozazo se observan los coches incendiados como parte de las barricadas que utilizaron los manifestantes para protegerse de las balas reales, puesto que hubo tres muertos declarados.

En el entierro del compañero Mallea, los extremistas foráneos motociclistas de la policía federal, se metieron en el cementerio con motocicletas y todo y pasaron por encima de las tumbas. (CEDIP, 1972: 81)

Las fuerzas represivas continuaron realizando apresamientos y provocaciones. El viernes 7 de abril hubo numerosas detenciones en las calles y domicilios. El gobierno anunció que dejaría sin efecto el aumento tarifario; esta medida logró que los principales gremios, la coordinadora provincial y las uniones vecinales suspendieran las medidas de fuerza. La unidad de la clase obrera y de la clase media tuvo su momento organizativo más alto de los setenta.

El Mendozazo lo hizo fundamentalmente la clase obrera. Esa clase que sabía que no iba a protestar por

las tarifas eléctricas, sino que iba también a luchar contra el poder político y contra el imperialismo y contra la dominación. La prueba está que el Mendozazo, lo hizo la clase obrera porque al comenzar la represión había como 30.000 personas, formadas por la clase obrera y la clase media. (CEDIP, 1972: 81)

Sin embargo, si se atiende al cuadro general de la situación, la provincia de Mendoza estuvo a punto de aguar en 1972, nuevamente, los planes de Perón y obligó a la clase obrera a tomar sus propias decisiones.

El lugar de Mendoza en los planes de Perón

El Cordobazo había eliminado a Onganía del poder y el Viborazo había hecho otro tanto con su sucesor Levingston. ¿Por qué el Mendozazo no destituyó a Lanusse? Las tintas se deberían cargar al ajustado proyecto del GAN, es decir, la propia Revolución Argentina había hecho un giro al propiciar la salida electoral con el nombramiento del radical Arturo Mor Roig en el Ministerio del Interior y habilitó el diálogo intermediado con Perón, pero sin fecha de elecciones. Tampoco se puede obviar que Perón desde 1971 restableció su preeminencia política y multiplicó sus interlocutores: juventud, grupos guerrilleros, la Hora de los Pueblos, intermediarios castrenses, peronistas ortodoxos, neoperonistas, sindicalistas. En 1972 Perón era más que Perón. Perón, una institución, un factor de unidad, una salida electoral. En ese sentido, es posible deslizar algunas consideraciones sobre la relación de la CGT, el Mendozazo y Perón.

La CGT jugó un papel importante en los planes de Perón (James, 1990: 321). Ignacio Rucci, un vandorista de la UOM, luego del asesinato de Vandor había sido consagrado por

Perón como interlocutor político de las fuerzas de la CGT y de las 62 Organizaciones.⁷

Desde inicios de 1972 el Secretario General de la CGT, Ignacio Rucci, seguía las instrucciones que le había dado Perón: reorganizar las 62 Organizaciones (que designaban el 33% de los miembros del Consejo Superior del Partido), concurrir al Ministerio del Interior para pedir la liberación de los presos políticos y gremiales y bregar por el levantamiento del estado de sitio. En dos oportunidades, Lanusse había recibido al Consejo Directivo de la CGT encabezado por Rucci, a inicios de 1972. Ante los reclamos paritarios, Lanusse contestó que el gobierno no podía arriesgarse porque perjudicaría los índices de la economía.⁸ El índice de precios de enero marcaba un 11,8% de inflación mensual, pero para todo el año 1972 se había calculado el 20% (Beraza, 2012: 172-173). Entonces, Lanusse prometió otorgar un 10% adicional recién en junio.

¿Cuál era el camino para la CGT? Un paro general, sin dudas. ¿Quién decidiría? El confederal que recién se reuniría en marzo. Pero, antes de marzo, las 62 Organizaciones fueron a Madrid a conversar con Perón. ¿Qué respondió? Perón

7 Producido el Cordobazo, la línea sindical de la CGT de Paseo Colón estaba prácticamente disuelta: solo quedó la CGT de Azopardo orientada por Vandor. Unos días antes de su asesinato, se dio a conocer una carta de Perón desde Madrid apoyándolo. Luego Rucci fue electo Secretario General de la CGT, y lanzó el 14 de septiembre de 1970 un documento sobre la situación nacional, donde retomó las banderas de las primeras 62 Organizaciones y de La Falda de 1957 (Beraza, 2012: 89).

8 La UOM, en ese momento, contestó con solicitudes y trató de entrevistar a Isabel Martínez de Perón, que se hallaba en reorganización de la Rama Femenina. María Estela Martínez de Perón, Isabel, había sido enviada en su segunda misión política. Desde diciembre de 1971 a marzo de 1972 permaneció junto a José López Rega, secretario privado de Perón en Argentina. Las corrientes subterráneas de la discordia aparecieron desde la izquierda. El teniente coronel Osinde dirigía la custodia. Perón había reorganizado el Consejo Superior: Héctor Cámpora, Rodolfo Galimberti, Francisco Licastro, Jorge Osinde, e Isabel. Se lanzó la revista *Las Bases*, con López Rega y Raúl Lastiri como editores. *Cfr.* Page (1984: 211).

validó ante las bases la suspensión del confederal del 13 de marzo de 1972 por medio de una carta dirigida a Rucci:

Comprendo que algo hay que hacer con los salarios, por las paritarias, por los presos, etc., pero considero que, dentro del plan que tenemos en marcha, todavía no ha llegado el momento de lanzarnos a nada que pueda presuponer una violencia exagerada que, si no encuentra el apoyo oportuno y decidido de las otras partes, constituirá un esfuerzo aislado que, aunque produzca efectos momentáneos, bien puede malograr lo que, en definitiva, representa el objetivo principal de nuestra acción de conjunto. Parar el país puede ser de fundamental importancia si ese esfuerzo va acompañado de otras acciones decisivas para su aprovechamiento oportuno y eficaz. Parar el país por pararlo no representa sino una manifestación de poder y una demostración de fuerza; queda ahora por considerar: ¿para qué lo hacemos? (*Primera Plana*, año X, núm. 477, citado por Beraza, 2012: 174)

Para Rucci, el proyecto político estaba por encima de los reclamos gremiales: acataba la decisión. Pero el 4 de abril telefoneó el secretario general de la CGT de la regional mendocina, Carlos Fiorentini, que expresó que conducía una concentración de protesta desde la Regional y Rucci le dio luz verde para la protesta bajo el amparo de la CGT. Rucci, además, dio a conocer con su sola firma ante la prensa el “Comunicado 64 de la CGT” en el que responsabilizaba a la policía de la violencia ejercida en Mendoza: “La violencia de abajo es el resultado de la violencia de arriba” (*Confirmado*, núm. 356, abril 1972).

El Mendozazo le acarreó un serio conflicto a Rucci con el Consejo Directivo de la CGT, con las 62 Organizaciones y con

el propio Lanusse. Rucci había apoyado en solitario y en el terreno a la CGT Regional Mendoza. Lanusse amenazaba con sanciones para la CGT. Rucci mismo fue citado por el gobierno para ratificar o rectificar sus declaraciones sobre el conflicto mendocino. Lanusse amenazó con la intervención de la CGT. ¿Era esto factible? Sin dudas, pues el ajustado GAN abría y cerraba oportunidades.

El gobierno replicó al comunicado de Rucci y conminó a la CGT a ratificar o rectificar las declaraciones del secretario general. Para el consejo directivo de la CGT, ¿qué significaba “un aprovechamiento oportuno y eficaz”, según las palabras de Perón? La CGT votó la rectificación del comunicado del secretario general, lo cual significó atribuir todo a Rucci.⁹ Ese consejo directivo de Azopardo no lo hubiera apoyado, y al menos Rucci resolvió en el acto, porque no podía dejar sin protección a los dirigentes de la regional Mendoza, ya en la calle junto a la gente por un reclamo justo. En definitiva, en forma voluntaria, con su propio criterio y sus principios, Rucci apoyó la rebelión mendocina.

Además, Mendoza funcionó como un experimento imprevisto y clave. Un ensayo inesperado. Pues, si se coloca en la mira las palabras de Perón, en primer lugar, tuvo “apoyo oportuno y decidido de las otras partes”; si con ello Perón se refería a sus interlocutores, lo fue. Y en cuanto al “aprovechamiento oportuno y eficaz”, el Comando Superior Justicialista remató el asunto en su interpretación en terreno.

9 Lanusse, para obtener una rápida respuesta, aplicó un congelamiento por 48 horas de los fondos de las asociaciones gremiales, obras sociales y cuentas personales de dirigentes sindicales. Luego de que el consejo directivo de la CGT aprobara la rectificación del comunicado del secretario general, una comisión de cuatro miembros compuesta por Wimel, Hugo Barrionuevo, Héctor López y Maximiano Castillo redactaron el nuevo comunicado. Jorge Triacca, de Plásticos, se encargó de hacerle llegar una copia al general Tomás Sánchez de Bustamante. Dos días después, el gobierno levantó el bloqueo de los fondos gremiales. *Cfr.* Beraza (2012: 177).

Si bien, al Mendozazo se lo hizo aparecer en la prensa en sus efectos momentáneos, debería revisarse nuevamente el cuadro general donde engarza esta pieza local: la revuelta de Mendoza “convenció a los militares que tenían mucho más que perder que Perón si la solución política seguía demorándose” (James, 1990: 315).

Esa línea de interpretación es apoyada por los hechos, porque el día 5 de abril, durante una alocución por radio y TV, el ministro del Interior, Arturo Mor Roig, acepta como razonables las causas que activaron este movimiento, pero fustiga a un “grupo organizado, llegados desde otros puntos del país”, aún bajo el efecto del secuestro del empresario Sallustro.¹⁰ El propio Arturo Mor Roig se desdice en esa misma declaración: “sería simple atribuirlo todo a agentes de la subversión” (*Los Andes*, 1972d). El 6 de abril, Héctor Cámpora, seguramente al tanto de la situación por su hermano Pedro Cámpora residente en Mendoza y potencial candidato a gobernador, reparó que el “esfuerzo aislado” se había derramado nacionalmente y seguramente los “efectos momentáneos” se podían prolongar. De hecho, Héctor Cámpora fue portavoz del comunicado justicialista desde Buenos Aires con el liso y llano pedido de llamado a elecciones con fecha definida:

- 1) Dar solución de emergencia al grave problema económico que afecta a la población y respetar la legislación laboral y las organizaciones sindicales que son

10 Al comenzar abril, durante uno de los operativos “rastrillo” se descubre la “cárcel del pueblo” donde hasta horas antes se encontraba detenido Sallustro. El Dr. Oberdan Sallustro, director general de la empresa Fiat, fue secuestrado por los comandos Luis Pujals y Segundo Gómez, del ERP, en Córdoba. El Ejército Revolucionario del Pueblo informaba por medio de comunicados que se encontraba en la cárcel del pueblo. La Policía Federal finalmente encontró la finca en la que estuvo en cautiverio el director de Fiat en la localidad de Chilavert (*Los Andes*, 6-4-1972). Luego en el bajo Flores, fue hallado el cuerpo de Oberdan Sallustro.

conquistas inalienables de los trabajadores argentinos. 2) Derogar las leyes represivas como el estado de sitio y decretar una amplia amnistía. 3) Convocar de inmediato al pueblo argentino a elecciones nacionales y provinciales fijando una fecha que permita la entrega del poder antes de finalizar el presente año. (*Los Andes*, 1972c)

El día 7 de abril el presidente Lanusse dirigió un mensaje al país para referirse a los sucesos mendocinos donde anunció la suspensión del cobro de las tarifas: dispuso “suspender a partir de la fecha en todo el país el cobro del suministro de energía eléctrica correspondiente a la primera y segunda facturaciones bimestrales del año en curso” (*Los Andes*, 1972e). También expresó que “en los ataques armados contra las fuerzas de seguridad, la respuesta ha sido y seguirá siendo inmediata y utilizando también las armas”. Caracterizó “una actitud”, no ya la pueblada, o a los sindicalistas en huelga, o a los vecinos en protesta, de “absurda irresponsable conducta negativa”. Y fiel a un estilo indirecto que todos entendían cuando Lanusse, le hablaba principalmente a Perón:

Estamos en lo decisivo del proceso y es por esa razón que se hace fundamentalmente necesario que todos comprendamos que no hay otra forma de manifestación que no sea la auténtica, dando todos la cara, jugándonos todos, aceptando todos los riesgos, si es que realmente queremos la paz, para lograr la verdadera y definitiva solución Argentina [...] si así lo piensan los sectores responsables que actúen en consecuencia, que también se jueguen en esta alta empresa, sin temor a repudiar esta violencia, porque estén seguros de que a ella nadie la capitaliza, y además el pueblo argentino no la quiere. (*Los Andes*, 1972e)

Allí también Lanusse dijo lo fundamental que esperaba de Perón: repudiar la violencia. Tan rápido como ante los rumores de golpe de Estado interno entre las Fuerzas Armadas, el GAN estaba derrumbándose, en interpretaciones castrenses variopintas y desenmascarados gobernantes civiles. Mendoza no había sido una excepción a los estallidos populares que ya se habían producido en el país; su coyuntura en el contexto del GAN lo tambaleó como acuerdo en su ya indudable realismo insuficiente (de Almézola, 1999: 57). El gobierno de Mendoza incluso mantuvo la fachada civil una vez pasado el cimbronazo. El ministro del Interior, Arturo Mor Roig, le ofreció la gobernación a otro miembro del Partido Demócrata: Félix Enrique Gibbs. Sin mucha dificultad, la prensa volvió a recrear una interpretación basada en recortes y tergiversaciones de los acontecimientos que quedaron en el imaginario social como algo “atípico”, reproducidas por los sectores beneficiarios.¹¹ Pero el Partido Demócrata no pudo reponerse al descrédito de su prestigio hasta entonces invicto (Lacoste, 2004: 351).

A menos de un mes de haber acontecido el Mendozazo, Perón ya daba extremaunción al GAN con los argumentos de la institucionalidad:

Si se persiste en un Gran Acuerdo Nacional inexistente y no se apoya la existencia del Frente Cívico de Liberación Nacional donde ese acuerdo ya está realizado, nada se logrará en el sentido de la pacificación de la que todos hablan pero que pocos hacen algo efectivo para lograrla. (*Las Bases*, 1972)

11 El diario *Los Andes*, sin comentarios explícitos sobre la revuelta en páginas interiores, muestra que la calma ha vuelto a la ciudad. Las fotos del día sábado de paseos de Mendoza exhiben gente sonriente realizando compras, “en actividad normal”, con el centro “nuevamente concurrido por gran cantidad de personas”, mientras que “la calle mostró un tránsito habitual” (1972f).

Sin dudas y en los hechos, los sucesos de Mendoza fueron velozmente leídos por Perón, pues vio los aliados, la población, el descontento; mientras que Lanusse proyectó otra vez hechos de violencia, aludiendo a un potencial pronunciamiento antiviolencia de parte de Perón. Pero, la pulseada del GAN aún tendría otros rounds.

Algunas reflexiones

Lo que pasó en Mendoza fue rebelde y clandestino, de alguna manera excepcional. En muchos barrios se optó por el “boca en boca” y las “volanteadas” con comunicados producidos en secretas imprentas. Esto evidenció un reconocible grado de organización ante la censura de la prensa escrita, radial y televisiva. La desinformación trató de ocultar la represión.

También es necesario insertar el Mendozazo en la historiografía de la confrontación entre Perón y Lanusse. Pues, en muchos casos, se pasa por alto el momento sincrónico que en la línea de tiempo jugó el Mendozazo en la estrategia de Perón y su velocidad en el trazado de la llegada al golpe final posterior, pues el hecho había tenido el “apoyo suficiente” y el “para qué” quedó a la vista cuando, el 4 de mayo, la ley 19.608 fijaba el 25 de marzo de 1973 para la realización de elecciones, y el 25 de mayo para la asunción de cargos electos.

Bibliografía

- Baczko, B. (1999). *Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas*. Buenos Aires, Nueva Visión.
- Beraza, L. F. (2012). *José Ignacio Rucci*. Buenos Aires, De Bolsillo.

- Berger, P. y Luckmann, Th. (1995). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires, Amorrortu.
- Breschand, J. (2004). *El documental. La otra cara del cine*. Barcelona, Paidós.
- James, D. (1990). *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina. 1946-1976*. Trad. L. Justo. Buenos Aires, Sudamericana.
- Lacoste, P. (2004). Utopía y resistencia (1955-1973). Roig, A., Lacoste, P. y Satlari, C., *Mendoza, a través de su historia*. Mendoza, Caviar Bleu - Andina Sur.
- Page, J. (1984). *Perón, una biografía. Segunda parte (1953-1974)*. Buenos Aires, Vergara.
- Pucciarelli, A. (1999). *La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN*. Ed. A. Pucciarelli. Buenos Aires, Eudeba.
- Rodríguez Agüero, L. M. (2014). Lucha docente, historiografía y género. Chaves, P., Paredes, A. y Rodríguez Agüero, L., *Conflictos e identidades en la educación en Mendoza (1969-1976)*, pp. 17-34. Mendoza, Qellqasqa.
- Romano, A. M. (2009). El "Mendozazo" en el contexto de la escisión ideológica nacional. *Revista de Historia Americana y Argentina*, núm. 44, pp. 171-194.
- Rule, F. (2006). *Un allegro muy largo. De la vida social y cultural en las cárceles de la dictadura militar argentina, 1976-1983*. Buenos Aires, Acercándonos.
- Scodeller, G. (2006). Paso, paso, paso... se viene el Mendozazo. Baraldo, N. y Scodeller, G., *Mendoza 70. Tierra del sol y de luchas populares*, pp. 85-106. Buenos Aires, Manuel Suárez.
- Shinzato, F. I. (2019). *Narrativas militares sobre los 70: el general (r) Díaz Bessone y el Círculo Militar durante la transición democrática*. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.
- Thompson, E. (1984). *Tradición, revuelta y conciencia de clase*. Barcelona, Crítica.

Fuentes

- CEDIP (Centro de Estudios y Difusión Peronista) (1972). *El Mendocinazo*.
- Las Bases* (1972). Los militares han agarrado un tigre por la cola, ahora tienen el problema de largarlo. 2 de mayo, núm. 12.

Los Andes (1972a). La huelga de los maestros de Mendoza. 2 de abril.

Los Andes (1972b). Mensaje del gobernador fundamentando su dimisión. 5 de abril.

Los Andes (1972c). El Justicialismo deploró los sucesos. 6 de abril.

Los Andes (1972d). Mor Roig: sería simple atribuirlo todo a agentes de la subversión. 6 de abril.

Los Andes (1972e). La suspensión del cobro de las tarifas anunció Lanusse. 8 de abril.

Los Andes (1972f). 9 de abril.

Marianetti, B. (1972). *El Mendozazo. La sublevación de los mendocinos*. Mendoza, Anteo.

Mendoza (1973, 4 de abril). El peronismo conmemora los sucesos de abril de 1972.

Capítulo 11

Jornadas de junio y julio de 1975

María Celia Cotarelo y Fabián Fernández

En junio y julio de 1975 tiene lugar una lucha llevada a cabo por el conjunto del movimiento obrero argentino contra la política del gobierno de María Estela Martínez de Perón, cuyo detonante es el intento de aplicación de las medidas económicas conocidas con el nombre de “Rodrigazo”. A partir de entonces, en el marco de la crisis del conjunto de la forma de organización de la sociedad basada en las relaciones propias del capital industrial, se agudiza la crisis del gobierno, que se resolverá con el golpe de Estado de marzo de 1976 llevado a cabo por los cuadros militares y políticos de la oligarquía financiera. Nos aproximamos aquí a una conceptualización de la lucha contra el Plan Rodrigo, para lo cual tomamos en cuenta las fracciones sociales que la llevan adelante, los alineamientos en relación a la lucha, sus objetivos, las formas que asume y sus formas de organización.

Presentamos estos diversos aspectos en relación a cada uno de los dos períodos que delimitamos: el primero se extiende desde el 2 de junio —día en que comienzan las acciones— hasta la huelga general declarada por la CGT el 27

del mismo mes; el segundo, desde el 27 de junio hasta los días 7 y 8 de julio, en que se lleva a cabo la segunda huelga general convocada por la CGT en el transcurso del hecho. Las Jornadas de Junio y Julio de 1975 constituyen uno de los hechos más importantes en el proceso de luchas sociales en la Argentina. En ellas se pone de manifiesto la crisis de la fuerza del capital industrial (la fuerza de la reacción), a la vez que se encuentran presentes los elementos que tienden a su superación (tanto desde el campo del pueblo como desde el campo del régimen). A partir del relato de los hechos que hemos realizado en un trabajo anterior (Cotarelo y Fernández, 1997),¹ vemos que la lucha comienza a desarrollarse en algunas de las ciudades más importantes del país, asumiendo la forma de huelga por lugar de trabajo, por rama y parcial por localidad, acompañadas de manifestaciones callejeras y concentraciones frente a casas de gobierno y locales sindicales, hasta llegar a dos huelgas generales convocadas por la CGT. El detonante es el anuncio de las medidas económicas por parte del ministro Celestino Rodrigo, que lleva a la suspensión temporal de las negociaciones paritarias entre sindicatos y cámaras empresarias, que se estaban desarrollando desde tiempo antes.

Uno de los pilares del Plan Rodrigo es el intento de reducir el salario de los trabajadores, por lo que el gobierno trata de establecer topes a los aumentos salariales a fijarse en los convenios colectivos que deben renovarse. A pesar de esto, finalmente se firman aumentos que superan esos topes, por lo que el gobierno declara que no homologará los convenios. Sin embargo, como resultado de la lucha del movimiento obrero, el gobierno debe retroceder en su posición original: homologa los convenios y renuncian los ministros

1 Este trabajo es una síntesis de un documento de trabajo publicado en PIMSA (Cotarelo y Fernández, 1998), que a la vez se basa en la descripción citada realizada en 1997.

y funcionarios involucrados en esta política, en particular, Rodrigo y el ministro de Bienestar Social, José López Rega.

Aun si las jornadas de 1975 se limitaran a constituir una huelga general, se trataría de un hecho altamente significativo, ya que es la primera que el movimiento obrero organizado realiza contra un gobierno peronista, lo que estaría poniendo en evidencia una crisis en esa alianza social. Sin embargo, presenta algunos rasgos específicos que la caracterizan y la diferencian de otras huelgas generales llevadas a cabo por el movimiento obrero argentino.

Primer período: de la huelga por establecimiento a la huelga general

La lucha comienza el 2 de junio en la ciudad de Córdoba; días después, comienzan las acciones en la ciudad de Santa Fe, luego en Mendoza y en Rosario, y posteriormente, en las zonas norte y sur del Gran Buenos Aires (GBA), Capital Federal y Bahía Blanca. La lucha se va extendiendo, pues, desde las principales ciudades del interior hacia el centro urbano de mayor concentración de obreros industriales del país. Solo en el momento de la huelga general del 27 se suman trabajadores en otras ciudades del país, tales como San Juan, Río Gallegos, Corrientes, Catamarca y Neuquén. Desde el inicio mismo del movimiento, la lucha es encabezada por obreros industriales, en particular aquellos pertenecientes a grandes establecimientos. Los primeros en parar y movilizarse son los de las grandes fábricas automotrices de Córdoba, sumándose los días siguientes los obreros de Ford General Pacheco (zona norte del GBA), Fiat Concord de Sauce Viejo (Santa Fe), General Motors de San Martín (GBA), Chrysler (zona sur del GBA) y obreros automotrices de Bahía Blanca y Rosario. Tanto en Córdoba

como en las zonas norte y sur del GBA, los obreros de las fábricas automotrices articulan la lucha de obreros de otras ramas industriales. La mayoría de los obreros del gremio en Córdoba responden a una conducción sindical opuesta a la conducción nacional del sindicato; en Fiat Concord los obreros se movilizan conducidos por la comisión interna, a pesar de la oposición de la dirección de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Santa Fe. Y en gran parte de las fábricas automotrices del GBA, los obreros movilizados responden a la iniciativa de las Coordinadoras de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha, opuestas a la dirección nacional del SMATA encabezada por José Rodríguez, de las 62 Organizaciones Peronistas (en adelante “las 62”). Los obreros metalúrgicos cumplen también un papel activo en la movilización y, en menor medida, obreros de otras ramas industriales. Participan también, con el correr de los días, grupos de trabajadores pertenecientes a otras fracciones: de prensa, estatales, judiciales, de comercio, docentes y trabajadores de sanidad. Por lo tanto, hasta el 26 de junio lo que se moviliza es principalmente una parte del territorio del capital industrial: obreros de grandes fábricas, en su mayoría de las ramas automotriz y metalúrgica, en las ciudades con mayor concentración de obreros industriales del país, y organizados por fuera de la estructura sindical institucionalizada.

En este período, las direcciones sindicales pertenecientes a las 62, salvo algunas excepciones, se pronuncian en contra de las huelgas y manifestaciones. La primera que se expresa en este sentido es la Comisión Normalizadora del SMATA-Córdoba:

No permitamos que nuestras energías revolucionarias sean utilizadas para generar aventuras que desemboquen en un caos para frustrar este proceso que llevó

años de lucha, donde todos los que nos desgobernaron negaron sistemáticamente la voluntad del pueblo, que hoy, por voluntad del mismo, conduce la compañera Isabel de Perón. (*La Nación*, 6-6-1975)

La CGT y las 62 locales emiten un comunicado en el que sostienen que

visto la situación imperante, en momentos en que los elementos apátridas al servicio de la contrarrevolución —a través de una campaña perfectamente estructurada— aprovechando legítimos derechos y reivindicaciones de los trabajadores, pretenden con su acción provocar la caída del gobierno del pueblo, expresan su firme voluntad y decisión de defender el proceso institucional en el marco de la revolución justicialista y, dentro del mismo, buscar las soluciones que anhelan los trabajadores y el pueblo en orden y en paz. (*La Opinión*, 13-6-1975)

El secretario general de la CGT nacional, Casildo Hererras, pide a los trabajadores que expresen “orgánicamente” sus demandas, pues las acciones “espontáneas” sirven de “caldo de cultivo” a los “intereses antipopulares” (*La Opinión*, 19-6-1975).

Tras suspender las negociaciones paritarias con los empresarios ante el anuncio del nuevo plan económico y rechazar los condicionamientos salariales que intenta imponer el gobierno, los sindicatos de las 62 se abocan luego a resolver la negociación con los empresarios de cada rama hasta lograr firmar convenios con aumentos salariales muy por encima de los topes que pretende el gobierno. Priorizan la negociación y la presión indirecta sobre el gobierno; sin embargo, algunas organizaciones sindicales

de las 62 también apelan a la movilización. Evitan aparecer enfrentados a la presidenta —por el contrario, todas las huelgas son declaradas en apoyo a Isabel— señalando como objeto de su protesta a algunas conductas empresarias, tales como el desabastecimiento, la especulación y el agio. La primera en convocar a una huelga es la UOM de Córdoba; en Mendoza, la UOM, la CGT y las 62 se ponen a la cabeza de marchas hacia la casa de gobierno provincial; la CGT y las 62 de Córdoba declaran el estado de alerta y movilización. El 24 de junio la UOM nacional llama a una concentración en la Plaza de Mayo a fin de presionar al gobierno para que homologue el convenio firmado por el sindicato. Finalmente, la misma CGT nacional convoca a una huelga con concentración en la Plaza de Mayo el 27 de junio, a la que adhieren diversas regionales de la CGT; la huelga es declarada para reclamar la homologación de los convenios colectivos firmados y en apoyo al gobierno. En este primer período no se registra ninguna participación de otras fracciones sociales, con excepción de estudiantes universitarios en Mendoza. Tampoco se registra ninguna declaración por parte de organizaciones que expresen el interés de otras fracciones sociales en relación a la lucha que lleva a cabo el movimiento obrero.

Desde el comienzo del movimiento hasta el día 24 de junio, los objetivos inmediatos planteados por los trabajadores que se movilizan conducidos por sectores opuestos a las 62 son los siguientes: que las direcciones sindicales avancen en la firma de los convenios colectivos con aumentos salariales del 100% y contra los topes establecidos por el gobierno (primero del 38%, luego aumentado al 45%); rechazo al Plan Rodrigo, en particular al aumento en los precios de los combustibles y tarifas; normalización de sindicatos intervenidos por el sindicato nacional respectivo; y libertad de los presos políticos y gremiales. Por su parte, las

organizaciones sindicales de las 62 que convocan a huelgas y manifestaciones lo hacen en todos los casos, como vimos, en apoyo a las conducciones nacionales de los sindicatos y de la CGT y a la presidenta Isabel, y en contra de la “intransigencia patronal” en las paritarias y de los “especuladores” y “acaparadores”. A partir del 24, ya firmados los convenios colectivos por parte de la mayoría de los sindicatos con aumentos superiores al tope que intentaba fijar el gobierno, y ante los rumores de que el gobierno no los homologaría, la lucha pasa a desarrollarse en torno a dos objetivos centrales, compartidos por el conjunto de los trabajadores: la homologación de los convenios por parte del gobierno y la renuncia de los ministros Rodrigo y López Rega, reclamos presentes en la huelga general con manifestación del 27 de junio.

La lucha toma en sus inicios la forma de huelga por establecimiento. Estas se extienden luego a otras fábricas en cada ciudad, de la misma rama o de otras ramas de la industria. En las ciudades en que la movilización comienza más tarde la lucha se inicia tanto bajo la forma de huelga por establecimiento como de huelga por rama. El desarrollo del movimiento no es igual en todas las ciudades en que se registran acciones. Mientras que en Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanca, zona sur del GBA y Capital la lucha no supera la forma de huelgas por establecimiento y por rama en forma simultánea, en Córdoba, zona norte del GBA y Rosario el movimiento se desarrolla hasta asumir la forma de una huelga parcial por localidad. En Córdoba, las huelgas y movilizaciones que se vienen produciendo desde el 2 de junio en diversas fábricas y ramas confluyen el día 12 en una huelga con manifestación de la que participan trabajadores de numerosos gremios, paralizando de hecho la actividad industrial en la ciudad. También en la zona norte del GBA, lo que había comenzado como una huelga por establecimiento en la fábrica automotriz Ford se transforma

el 16 en una huelga y marcha que reúne a obreros automotrices, metalúrgicos, químicos, gráficos y de otras ramas. Lo mismo sucede en Rosario el 26, cuando paran y se movilizan trabajadores del transporte automotor, empleados de comercio, docentes, obreros automotrices y obreros ceramistas, entre otros. La huelga parcial por localidad que se produce en estas tres zonas no constituye una simple sumatoria de huelgas, coincidentes en el tiempo y con objetivos similares pero sin una efectiva coordinación entre ellas, sino un cambio cualitativo en la forma que asume la lucha, que se corresponde con la presencia de organizaciones que tienden a coordinar y centralizar las acciones. En general, las huelgas son decididas por los trabajadores en asambleas que se realizan en cada lugar de trabajo y, en su mayoría, están acompañadas de marchas y de concentraciones que constituyen asambleas conjuntas de obreros de distintas fábricas y ramas. Algunas marchas se dirigen hacia casas de gobierno, encabezadas por direcciones pertenecientes a las 62. Pero la mayor parte se dirige hacia locales sindicales, a fin de presionar a las direcciones de los sindicatos para que se pongan a la cabeza de la lucha. Se encuentran encabezadas por conducciones opuestas a esas direcciones y son repudiadas por estas. Los trabajadores marchan encolumnados. En varias oportunidades, la policía interviene para detener el desplazamiento de las columnas, pero no intenta disolverlas sino que insta a los manifestantes a retirarse. Ante esto, los trabajadores se desconcentran o desvían su marcha hacia otro lugar, evitando deliberadamente el choque con la policía. Las únicas excepciones a esta actitud se producen en Santa Fe el 6 de junio y en Rosario el 26, en que los obreros deciden seguir avanzando a pesar de la advertencia policial, produciéndose entonces choques callejeros. Finalmente, la lucha se extiende y se centraliza en la huelga general con movilización convocada por la CGT nacional

el 27 de junio. Participan todos aquellos trabajadores que ya se encontraban en lucha, sumándose ahora fracciones que no se habían movilizado hasta entonces. La huelga es cumplida masivamente en las zonas norte, sur y oeste del GBA, en Capital, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mendoza y Bahía Blanca, paralizándose todas las actividades. Y se cumple también masivamente en ciudades donde no se habían producido huelgas ni manifestaciones antes, como La Plata, Berisso y Ensenada, Mar del Plata, San Juan, Río Gallegos, Corrientes, Catamarca y Neuquén. Por lo tanto, la lucha se desarrolla de la huelga por establecimiento hasta llegar a centralizarse en la huelga general; y se desarrolla fundamentalmente por fuera del sistema institucional, pero termina canalizándose institucionalmente.

En el primer momento las acciones son organizadas fundamentalmente por comisiones internas de fábricas y cuerpos de delegados, y por sindicatos por empresa y sindicatos por rama locales, que ponen en cuestión, por lo menos a nivel local, la autoridad de las direcciones sindicales nacionales. En el caso de Córdoba, estas organizaciones se encuentran nucleadas en la Mesa Provisoria de Gremios en Lucha, la cual encabeza la lucha de los obreros de la provincia desde los inicios del segundo momento (12 de junio), con la realización de una huelga parcial por localidad con manifestación. Se produce entonces una transformación en la forma que asume el movimiento: la lucha se centraliza a nivel local gracias a la intervención de la Mesa.² En lo que res-

2 La Mesa Provisoria se encuentra integrada en junio de 1975 por trabajadores de la empresa Perkins, del caucho, lecheros, Luz y Fuerza, de prensa y gráficos, entre otros; es decir, que agrupa sobre todo a obreros de gran industria. Reúne a seccionales de sindicatos por rama nacionales, comisiones internas y cuerpos de delegados, y sindicatos por rama locales. Sus direcciones se encuentran vinculadas a fuerzas políticas de izquierda, que se encuentran enfrentadas con las capas dirigentes de sus ramas respectivas a nivel nacional, alineadas en el peronismo a través de las 62. Su principio organizador hace a la dirección teórica de la lucha de clase del proletariado, en

pecta al GBA, la comisión interna y el cuerpo de delegados de la fábrica Ford pertenecen a la Coordinadora Interfabril de Zona Norte del GBA, de la que participan obreros de otras plantas de la zona. Pero será en el segundo momento cuando se intensificará la participación de las coordinadoras en la dirección del movimiento, llegando a centralizar la lucha a nivel local. Constituidas a partir de 1973, agrupan mayormente a comisiones internas de fábrica y cuerpos de delegados, es decir, que su inserción se concentra en las organizaciones que agrupan a los obreros por lugar de trabajo. No incluyen a los obreros de una rama, como los sindicatos, sino de varias, y dentro de determinadas zonas, que abarcan varios partidos del GBA, así como el conjunto de la Capital Federal. Las coordinadoras organizan predominantemente a obreros pertenecientes a la fracción obrera de gran industria, destacándose los automotrices. Expresan a aquellos sectores del movimiento obrero que, desde posiciones políticas de izquierda, se enfrentan a la capa dirigente de los sindicatos de los que forman parte. Es decir que, al igual que en la Mesa Provisoria, el eje de la organización de las coordinadoras hace a la dirección teórica de la lucha, y su constitución ocurre por fuera del sistema político-institucional.

la medida que plantea la disputa por la conducción del movimiento obrero contra las direcciones sindicales locales y nacionales; una lucha teórica que también se expresa al interior de la Mesa Provisoria entre las distintas fuerzas políticas que la componen. Desde allí se impulsa la lucha contra la explotación del capital (dirección económica) y contra la opresión política del régimen (dirección política). La Mesa Provisoria, pues, es una organización que se plantea librar una lucha concertada en las tres direcciones de la lucha de clase del proletariado (Engels, 1994). En la medida en que la Mesa Provisoria reúne organizaciones pertenecientes a distintas ramas de la producción social, expresa en apariencia el segundo momento de las relaciones de fuerzas políticas, en las que se constituye la unidad del grupo social (Gramsci, 1990). Pero la Mesa se constituye por fuera del sistema institucional-político, y parte de su dirección pertenece a una fuerza social que en el transcurso del período 1969-1976 plantea la cuestión de la toma revolucionaria del poder en la Argentina.

A partir del día 12 de junio —comienzo del segundo momento del primer período— empiezan a participar en el movimiento, a través de huelgas y manifestaciones, diversas fracciones obreras agrupadas en sindicatos por rama local. Mientras que algunas de las direcciones de estos sindicatos —tales como las de la UOM, la UPCN y el SMATA— se encuentran alineadas con las direcciones nacionales de la CGT y las 62, otras —tal es el caso de CTERA— lo hacen con las fuerzas políticas de la oposición oficial; por último, en algunos de estos sindicatos tienen influencia organizaciones políticas de izquierda. Desde el 20 comienzan a convocar a huelgas y manifestaciones sindicatos por rama a nivel nacional. Hasta entonces, sus direcciones, mayoritariamente alineadas en las 62 (con excepción de CTERA) se habían mantenido alejadas de las acciones o se habían opuesto frontalmente a ellas. Los sindicatos por rama nacionales son los encargados de negociar y firmar los convenios colectivos de trabajo con las respectivas patronales. Los primeros convenios, firmados después del 20 de junio fijan, como vimos, aumentos salariales superiores a los topes fijados anteriormente por el gobierno. De esta manera, la dirección sindical nacional cumple con su objetivo específico de negociar con el capital el precio de venta de la fuerza de trabajo en sus ramas respectivas, pero soportando al mismo tiempo una creciente presión del movimiento obrero en lucha. A la vez, al obtener porcentajes de aumentos salariales en muchos casos superiores a lo esperado, esas direcciones intentan controlar y dirigir el movimiento. La huelga general con concentración del 27 de junio convocada por la CGT nacional constituye el tercer momento del primer período; implica la centralización de la lucha en manos de la dirección nacional de la CGT, y su extensión a nivel nacional. En efecto, aunque convocada en principio solo para Capital Federal y el GBA, la huelga

se cumple en los principales centros industriales del país. Si bien solo la CGT parece en condiciones de extender la lucha a nivel nacional, y los sindicatos nacionales controlan la concentración en Plaza de Mayo, no debe olvidarse que el conjunto de las organizaciones que participaron de la conducción de la lucha en los dos momentos anteriores, incluyendo las comisiones internas, cuerpos de delegados y coordinadoras de gremios, cumplen un papel importante en la organización de la huelga y la concentración. Pero, el hecho de que solo la CGT disponga de la capacidad para convocar a una huelga general que de hecho toma forma nacional, indica que las organizaciones y direcciones político-sindicales que no forman parte del sistema institucional, aunque hayan iniciado una efectiva disputa por la conducción del movimiento obrero que las enfrenta a las direcciones expresadas en las 62, no están en condiciones de centralizar y nacionalizar la lucha por su cuenta. Por último, al ponerse al frente de una movilización que en gran medida se expresa a través de organizaciones que no forman parte del sistema político-institucional, la CGT nacional prepara las condiciones para que la presión del movimiento obrero en lucha se coloque a otro nivel. Si antes del 27 los obreros habían presionado a las direcciones de los sindicatos y CGT locales para que se pusieran al frente de la movilización, a partir del 28, cuando el gobierno nacional da a conocer su decisión de no homologar las paritarias, esa presión se ejercerá directamente sobre la CGT nacional, proviniendo tanto de organizaciones no insertas en el sistema político-institucional como de las reconocidas oficialmente.

Segundo período: desarrollo de la huelga general del 28 de junio al 8 de julio

La lucha sigue desarrollándose en las mismas ciudades que en el período anterior, pero se extiende ahora también a otras que se suman en la huelga general del 27 de junio. Sigue llevándose a cabo en la misma estructura económico-social, aunque con una mayor extensión. Los obreros industriales siguen siendo la fracción central en el desarrollo de la huelga general de hecho que se produce en este período. Entre los más activos en la movilización siguen encontrándose los obreros de automotrices y se incrementa la presencia de obreros metalúrgicos de diversas fábricas en distintas ciudades. Se movilizan también obreros textiles, de la alimentación, astilleros, electricidad, transporte colectivo, petroquímicos, químicos, ferroviarios, de gas, gráficos, ceramistas, mosaístas, papeleros, petroleros, transporte aéreo. También aumenta la participación de trabajadores de otras ramas de la economía, como por ejemplo, empleados de Lotería Nacional, bancarios, sanidad, estatales de administración nacional, judiciales, docentes, comercio y prensa. Participan en la lucha direcciones tanto opuestas como pertenecientes a las 62; varias de estas últimas convocan a huelgas; también lo hacen seccionales de sindicatos. Finalmente, el 4 de julio la dirección nacional de la CGT y las 62 convocan a una huelga general nacional por cuarenta y ocho horas para los días 7 y 8 de julio, a la que adhieren también regionales de CGT que hasta entonces no habían participado en la lucha. Por lo tanto, a partir de la huelga del 27 de junio y hasta el 8 de julio, el movimiento deja de ser parcial y se vuelve general.

Las huelgas y movilizaciones que se desarrollan por fuera de las organizaciones sindicales reconocidas oficialmente ya no son abiertamente repudiadas por los dirigentes

pertenecientes a las 62, aunque insisten en la canalización de la protesta dentro del sistema institucional. Los esfuerzos de estos dirigentes por contener la movilización obrera no conducida por ellos son permanentes. Por ejemplo, el 30 de junio, en momentos en que el local de la CGT nacional se encuentra rodeado de manifestantes, la CGT y las 62 llaman a mantener la calma y “no prestarse a maniobras confusionistas”, e instan a esperar el resultado de las negociaciones que están llevando a cabo. También militantes de la Juventud Sindical Peronista exhortan infructuosamente a la desconcentración frente al edificio de la CGT. En Córdoba, la CGT y las 62 locales señalan que adhieren a la huelga “por tiempo indeterminado” decidida en las asambleas realizadas en las grandes fábricas, pero no adhieren a la marcha que realizan los trabajadores bajo la conducción de la Mesa Provisoria, e instan a los trabajadores a esperar en sus casas las decisiones de la CGT nacional.

El 3 de julio, una vez más, la CGT y las 62 Organizaciones llaman a la calma y a “obedecer a los cuerpos orgánicos”. A la vez, como dijimos, organizaciones pertenecientes a las 62 convocan a huelgas. El 30 de junio distintos sindicatos de La Plata, Berisso y Ensenada se declaran en estado de alerta o convocan a la huelga, a la vez que dan plenos poderes a sus representantes en la CGT nacional para defender la ley de convenciones colectivas de trabajo “hasta sus últimas consecuencias”. El mismo día se cumple una huelga por 24 horas declarada por la CGT y 62 Mendoza. El 2 de julio la UOM Córdoba declara una huelga por 48 horas y el 3 llama a continuarla “por tiempo indeterminado”, mientras la CGT local llama a no realizar huelgas por su cuenta al tiempo que convoca a una huelga para el día siguiente. El 4 comienza una huelga general convocada por la CGT y las 62 de La Plata, Berisso y Ensenada “en apoyo a las decisiones que adoptará el Comité Central Confederado”, que al mismo

tiempo exhortan a los trabajadores a movilizarse con las organizaciones reconocidas. También en el GBA, la CGT y las 62 de la zona norte convocan a un paro general “por tiempo indeterminado” exigiendo la homologación de las paritarias y en respaldo a las gestiones de la CGT nacional. En este segundo período se observa una mayor participación de otras fracciones sociales, aunque sigue siendo minoritaria.

El día 30 de junio, mil estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realizan una asamblea, exigiendo la homologación de las paritarias y las renuncias de los ministros Oscar Ivanissevich (de Educación) y López Rega; el 3 de julio realizan asambleas en varias facultades de la Universidad Nacional de Córdoba. Mientras que la lucha del movimiento obrero por fuera del sistema institucional no produce alineamientos en la sociedad, sí lo hace la huelga general del 7 y 8 de julio declarada por la CGT, en relación a la cual se expiden diversas organizaciones sindicales y políticas. Declaran su apoyo a esta huelga general centrales estudiantiles como el Consejo Nacional de Federaciones y Centros y la Federación Universitaria Argentina; diversos partidos políticos, tales como Política Obrera, el Frente de Izquierda Popular, el Partido Comunista, el Partido Intransigente, el Partido Revolucionario Cristiano, el Encuentro Nacional de los Argentinos, el Partido Socialista Popular, el Partido Socialista de Lanús, la Junta Provincial del Partido Demócrata Progresista de Rosario, el Partido Demócrata Progresista y UDELPA de Córdoba. Una parte minoritaria del movimiento obrero organizado se opone a la lucha, tanto a la huelga general de hecho como a las huelgas generales convocadas por la CGT. Se expiden en ese sentido la CGT y las 62 de San Luis,³ la Asociación Trabajadores del

3 “Condenan expresamente toda medida que tienda a paralizar las tareas y la producción del país, porque elementos subversivos y antinacionales están pretendiendo aprovechar esta coyuntura

Estado (ATE) Capital y la Unión Ferroviaria de Rosario;⁴ así como el dirigente sindical Hugo Ortolán, secretario adjunto de la CGT Rosario, quien el 4 de julio encabeza, junto con el intendente de esa ciudad, un acto en apoyo a Isabel y una marcha hacia la CGT local, de los que participan unas mil quinientas personas que gritan consignas contra Miguel y Herreras. Entre las organizaciones estudiantiles que se alinean con el gobierno en contra de la huelga se encuentran el Frente de Agrupaciones de Izquierda (orientado por el PCR) y Estudiantes Universitarios Peronistas (vinculados al peronismo ortodoxo), los cuales difunden un documento conjunto criticando a la dirigencia sindical y llamando al pueblo a “defender activamente el gobierno de Isabel Perón”. Y entre las organizaciones políticas, se expiden de la misma manera diversos sectores pertenecientes exclusivamente al Partido Justicialista: las Mesas de Trabajo, la Juventud Peronista de la República Argentina, la Mesa de Unidades Básicas, el Ateneo para la Comunidad Organizada, el Movimiento Nacional Justicialista de San Luis, así como diversos funcionarios del gobierno de Santa Fe y concejales de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco).

Los objetivos inmediatos compartidos por todos los participantes de la lucha son la homologación de los convenios colectivos de trabajo ya firmados, con aumentos superiores al 100%, por parte del gobierno, y la renuncia de los ministros Rodrigo y López Rega. El reclamo por la homologación unifica la lucha de todo el movimiento obrero contra el gobierno, y en particular contra el sector político que es visualizado como el que está traicionando el programa con que el que el peronismo accedió al gobierno en 1973.

circunstancial para producir un golpe de estado y terminar con la institucionalidad de la doctrina nacional” (*Clarín*, 6-7-1975).

4 En un comunicado se refieren a que “apátridas y traidores emboscados con maniobras arteras pretenden socavar los cimientos de la Constitución, atentando contra las instituciones republicanas”.

Los objetivos, que se plantean por primera vez en forma unificada en la manifestación del 27 de junio, son pues explícitamente políticos. Desde entonces, los trabajadores se movilizan en las calles reclamando la convocatoria a la huelga general “por tiempo indeterminado”, es decir, hasta lograr los objetivos planteados, no dejando ningún margen para la negociación.

Entre el 30 de junio y el 6 de julio se llevan a cabo huelgas generales por localidad por “tiempo indeterminado”, es decir, hasta lograr la homologación de los convenios colectivos de trabajo, en la Capital Federal y el GBA, Córdoba y Rosario, que no son convocadas por los sindicatos; lo mismo sucede en Santa Fe el 2 de julio y en La Plata, Berisso y Ensenada el día 3. En estas últimas ciudades, en los demás días se desarrolla también una huelga general pero declarada por la central obrera local. Se produce una huelga general por localidad convocada por la CGT regional y huelgas por rama en Mendoza, así como huelgas por rama en Tres Arroyos, Campana y Bahía Blanca. Las huelgas están acompañadas de manifestaciones callejeras y marchas hacia los locales sindicales en cada ciudad. El edificio de la CGT nacional en Capital se encuentra rodeado durante varios días por manifestantes provenientes tanto de la misma Capital como de las zonas norte, sur y oeste del GBA. Tanto las huelgas como las manifestaciones y marchas son decididas en asambleas en cada lugar de trabajo. En algunos casos se forman piquetes de huelguistas que recorren las fábricas instando a los obreros a sumarse a la movilización. Como en el período anterior, la policía intenta nuevamente detener el avance de las columnas y, ante esto, en algunos casos los manifestantes vuelven a desviar su marcha a fin de evitar el choque. Sin embargo, en La Plata, Capital Federal y Santa Fe los manifestantes siguen avanzando, produciéndose entonces choques callejeros. Finalmente, la huelga de

hecho con movilización callejera que se viene desarrollando culmina en la huelga por cuarenta y ocho horas convocada sin movilización por la CGT, que termina cuando se logra imponer al gobierno la homologación de los convenios colectivos. Al igual que en el primer período, la lucha que se desarrolla fundamentalmente por fuera del sistema institucional y presionando sobre él termina canalizándose institucionalmente.

La organización de la movilización obrera recae fundamentalmente sobre las comisiones internas y los cuerpos de delegados, es decir, las mismas formas de organización que inician la lucha en el período anterior. A la vez, una parte de estas organizaciones responde a las coordinadoras, y otra, a la CGT y las 62. En la medida en que las coordinadoras organizan la huelga de hecho desde sus inicios, y que a ella se van sumando los obreros de distintas ramas de la industria haciéndola general, aparecen señalando los medios más efectivos para el logro de los objetivos planteados. A partir del 30 comienzan a convocar a paros y movilizaciones los sindicatos por rama local. Sin embargo, lo hacen a partir de una movilización que comienza y continúa por fuera de ellos. Esto explica que las huelgas continúen más allá del término de la convocatoria que dichos sindicatos realizan. Sin embargo, hay que señalar que en muchas fábricas del GBA y La Plata una parte de los obreros, si bien adhieren a la huelga general de hecho, no se movilizan si no lo disponen los sindicatos, y en muchos casos, al no recibir directivas, abandonan sus lugares de trabajo y retornan a sus hogares. Se trata entonces de obreros que, si por un lado participan de una medida de fuerza que no ha sido convocada por la dirección sindical, por otro lado no ejercen sobre ésta la presión directa que implica movilizarse hacia la sede del propio sindicato o de la CGT. Lo dicho con respecto a los sindicatos por rama local puede aplicarse a las

regionales de la CGT y las 62: cuando convocan a huelgas generales locales, lo hacen en el contexto de movilizaciones que ya se vienen desarrollando. Como ya hemos visto, el 30 de junio la CGT y las 62 de Córdoba convocan a una huelga “por tiempo indeterminado”; sin embargo, no adhieren a la marcha organizada por la Mesa Provisoria ese mismo día. La convocatoria a la huelga es dada a conocer en el mediodía del día 30, cuando ya hace varias horas que el paro general se extiende de hecho en el cordón industrial de la capital provincial.

El 1 de julio, la regional cegetista levanta la huelga, pero esta continúa con la misma intensidad que antes, e incluso, direcciones de sindicatos por rama local como la UOM deciden plegarse al movimiento, a pesar de que la propia CGT cordobesa llama “a no decidir paros por su cuenta”. El día 3, finalmente, la regional cegetista vuelve a convocar a un paro “por tiempo indeterminado” hasta la homologación de los convenios cuando la huelga general de hecho ha alcanzado a casi todos los sectores de la actividad económica local. Similar es la situación en la zona norte del GBA y en La Plata, donde, como ya vimos, tienen peso las coordinadoras. En ambos casos, la huelga general de hecho se va extendiendo por fábrica y por rama, hasta que el 4 de julio las regionales cegetistas respectivas convocan a una huelga (en el caso de zona norte “por tiempo indeterminado”) exigiendo la homologación de los convenios. Las direcciones de los sindicatos y de las CGT locales convocan a huelgas pero se cuidan en todo momento de participar u organizar ellas mismas movilizaciones callejeras. En cambio, las organizaciones que se encuentran por fuera del sistema político-institucional convocan a manifestaciones callejeras, tal como lo hace la Mesa Provisoria en Córdoba y las coordinadoras de la zona norte del GBA y de La Plata. Finalmente, el 4 de julio, doblemente presionada por la

huelga general de hecho que viene paralizando los principales centros industriales desde hace cinco días, y por la negativa del gobierno a homologar los convenios, la dirección nacional de la CGT convoca a la huelga general nacional. La CGT logra nuevamente centralizar y nacionalizar la lucha de los obreros, pero a partir de la presión ejercida por estos a través de la huelga general de hecho con manifestación callejera que se extiende entre el 30 de junio y el 6 de julio. Correspondiéndose con el mayor grado de centralización y extensión en la lucha, las formas organizativas centrales en este período son, entonces, las coordinadoras y la CGT nacional y sus regionales, y no las comisiones internas de fábrica en forma aislada o los sindicatos por rama.

Conceptualización de las Jornadas de Junio y Julio

Ya dijimos que aun si las Jornadas de 1975 se limitaran a constituir una huelga general convocada por la CGT, se trataría de un hecho altamente significativo, ya que son las primeras huelgas generales que el movimiento obrero organizado realiza contra un gobierno peronista. Sin embargo, hemos visto que existen otros elementos contenidos en este hecho, que trascienden el marco de una huelga general institucionalizada. La huelga general declarada por la CGT aparece como el reconocimiento por parte de la dirección oficial del movimiento obrero organizado sindicalmente de la huelga general de hecho que se viene desarrollando desde nueve días antes en el corazón económico y político del país. Los trabajadores —la mayoría de los cuales responden a la dirección de las 62— ya habían paralizado las actividades en las principales ciudades y se habían movilizado en forma masiva, marchando hacia los locales sindicales, rodeándolos y reclamando en la calle la

convocatoria a una huelga general, a pesar de los llamados a la tranquilidad y a la espera de los resultados de las negociaciones emprendidas con el gobierno por parte de esa dirección sindical. La lucha desborda, pues, el marco institucional, presionando por medio de la movilización masiva directa en las calles. En buena parte de la bibliografía consultada, esta movilización es caracterizada como “espontánea”, entendiéndolo por ello que carece de organización. Como hemos visto, la movilización presenta, por el contrario, diversas instancias de organización: se realizan asambleas en cada lugar de trabajo, en las que se decide la participación en las huelgas, marchas y manifestaciones; los trabajadores marchan encolumnados; ante la intervención policial, el avance o no de la columna es decidido en asambleas callejeras; se forman piquetes de huelga; y una parte importante de los manifestantes se encuentra conducida por coordinadoras de comisiones internas, cuerpos de delegados y gremios. ¿Cuál es, entonces, el hecho que se desarrolla en estas jornadas? ¿Cómo caracterizar y conceptualizar una lucha llevada a cabo por el movimiento obrero en la que, junto a formas de lucha y organizaciones sindicales y políticas existentes desde décadas antes, se encuentran presentes elementos que aparecen desbordando el sistema institucional y presionando sobre él? La movilización masiva y organizada de trabajadores desbordando las instituciones que expresan sus intereses en tanto asalariados nos remite a la existencia de una situación de masas. En un primer momento, pensamos que se trataba de una huelga general de masas, basándonos en el sujeto que protagoniza la lucha (la fracción obrera de gran industria, encabezando al conjunto de los trabajadores) y en el hecho de que la lucha desborda el sistema institucional. Pero esta forma de lucha implica el enfrentamiento directo en las calles entre dos fuerzas, lo que se manifiesta en choques

entre las masas movilizadas y la fuerza armada del gobierno o del Estado. Si bien se producen algunos choques callejeros, vimos que no constituyen el rasgo distintivo del hecho. No se observa la disposición de apoderarse de un territorio por parte de las masas movilizadas ni de impedirlo decididamente por parte del gobierno. Lo que se produce es un desplazamiento de manifestantes, principalmente hacia un territorio propio, como son las sedes de las organizaciones sindicales, mientras que a la vez el gobierno se limita a proteger su propio territorio (los edificios públicos, sobre todo la casa de gobierno). Si bien se trata de un enfrentamiento social, las fuerzas no libran choques en las calles en forma directa.

En síntesis, lo que sí se produce en las jornadas de junio y julio es que la acción de las masas desborda y subordina a las organizaciones tanto sindicales como políticas; las masas movilizadas manifiestan disposición al enfrentamiento; existen fuerzas enfrentadas, pero el enfrentamiento no es directo, lo que se manifiesta en que los choques callejeros no caracterizan al hecho en su conjunto. A partir de estos rasgos conceptualizamos el hecho como una huelga general con movilización de masas (Iñigo Carrera, 1993). La lucha se dirige contra dos aspectos de la política que lleva adelante el gobierno, y que luego serán desarrollados por el gobierno militar: la política económica, en particular el intento de reducir el salario real y la participación de los trabajadores en la distribución de la renta, y la política de aniquilamiento de militantes del campo popular, expresada en la acción de la Triple A. La oposición a la política económica del gobierno y a la presencia en este de la línea encabezada por López Rega es común al conjunto de los participantes de la lucha. Pero, mientras que para una parte esta lucha constituye solo un paso, un medio para acumular fuerzas, en una estrategia que apunta a superar el sistema

vigente, para otros —la mayoría— se trata de mantener su espacio dentro de la alianza social que integran y del sistema institucional.

Bibliografía

Colom, Y. y Salomone, A. (1998). Las coordinadoras interfabriles de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, 1975/76. *Razón y Revolución*, núm. 4.

Cotarelo, M. C. y Fernández, F. (1997). Lucha del movimiento obrero y crisis de la alianza peronista. Argentina, junio y julio de 1975 y marzo de 1976. Documento de Trabajo 6. *PIMSA, Documentos y Comunicaciones*, núm. 97. Buenos Aires.

_____ (1998). Huelga general con movilización de masas. Argentina, junio y julio de 1975. Documento de Trabajo 13. *PIMSA, Documentos y Comunicaciones*, núm. 98. Buenos Aires.

Engels, F. (1984). Prólogo. *Las guerras campesinas en Alemania*. México, Grijalbo.

Gramsci, A. (1990). Análisis de las situaciones. Relaciones de fuerza. *Escritos políticos (1917-1933)*. México, Siglo XXI.

Iñigo Carrera, N. (1993). Lucha democrática de la clase obrera argentina en las décadas de 1930 y 1940. *Crítica de Nuestro Tiempo*, año II, núm. 6.

Capítulo 12

La huelga de abril de 1979

“Jornada nacional de protesta”

Guillermo Caviaasca

En el siguiente artículo realizaremos un estudio de aproximación sobre la huelga general del 27 de abril de 1979 conocida como “Jornada nacional de protesta” o popularmente como “huelga de los 25”. Fue la primera huelga general contra la dictadura iniciada en marzo de 1976. Nuestra hipótesis es que esta huelga, llamada “Jornada nacional de protesta” y convocada por la Comisión de los 25 —un agrupamiento de sindicatos y agrupaciones sindicales tradicionales— fue un momento bisagra en el que la dictadura encuentra su límite y da una perspectiva nacional a los conflictos dispersos, a partir del cual la actividad popular en general comenzó a crecer y la dictadura a retroceder. Y segundo: que esta huelga general solo podía ser posible si existía una actividad conflictiva y huelguística parcial y por “abajo” que fuera su antecedente; como también era necesario que la decisión de “los 25” fuera la conclusión de un largo periodo de actividad, reorganización y disputas al interior de la dirección sindical, y de esta con la dictadura.

Teniendo en cuenta que hablamos de abril de 1979, a solo tres años de inicio del “Proceso”, y a su vez si lo comparamos

con otras experiencias latinoamericanas, parece sugerente pensar que el Movimiento Obrero (MO) argentino fue un actor clave en la “resistencia” a la dictadura, en el cambio de etapa de la misma y en su relativamente corta duración. Abordaremos nuestro tema a través de los conceptos de *experiencia* y de *estrategia de clase* desde las perspectivas de E. P. Thompson (1989) e Iñigo Carrera (2000), la categoría *resistencia* desde Rodolfo Walsh y Ernesto Salas (2006), y la categorización de Iñigo Carrera sobre *huelga general* (2000).

El proceso de repliegue del pueblo en general era observable hacia 1976, aunque una numerosa vanguardia siguiera activa. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se desplegó en ese contexto y aplicó una represión quirúrgica de un nivel de capilaridad no conocido, con un efecto de choque tipo *blitzkrieg* represiva clandestina que penetra en las estructuras más profundas del bando enemigo, desarticulándolo. Más una ocupación territorial pública, sobre una sociedad que ya se encontraba saturada de diversos mensajes relacionados con la violencia. Sin embargo, este repliegue no implicaba pérdida de organización ni capacidad de la clase obrera, para ser determinante en cualquier decisión nacional y específicamente en las que afectaban a la acumulación de capital y tasa de explotación del trabajo, ya que esto era estructural a la formación económico social argentina y su “modo de regulación”.

La vanguardia de la clase trabajadora, entendida esta como una fracción de la clase muy movilizada y combativa (Brunetto, 2007 y De La Torre, 1993), a diferencia de lo sucedido en las oleadas anteriores, estaba esta vez inmersa en una sociedad agotada y no pudo officiar de motor de resistencia en forma inmediata y lineal.¹ Complementariamente

1 En los primeros dos años de la dictadura, miles de delegados y activistas fueron despedidos, detenidos, asesinados o desaparecidos y la organización pública se hizo muy riesgosa. Es destacable

con los intentos de eliminar la protesta el gobierno militar intervino la CGT al igual que los grandes sindicatos (como UOM, SMATA, etcétera) o los combativos (como Telefónicos, Gráficos, etcétera), muchos dirigentes detenidos o exiliados, inclusive asesinados. Sin embargo, no hay que confundir represión con parálisis de la protesta, ya que esta continúa por diversas formas en acciones de resistencia pública o clandestina, reclamos por desapariciones, despidos, salario, ajuste, etcétera, y una serie de conflictos de mayor envergadura, inclusive centralizados, como el de Luz y Fuerza.

Para comprender el desarrollo de la resistencia y reorganización que permitió la huelga general en 1979 hay que observar algo más que la coyuntura. Vayamos a una etapa anterior, no muy lejana, y que muchos de los protagonistas habían vivido y, en muchos casos en calidad de dirigentes. Entre 1966 y 1967, si bien en un primer instante el golpe de la “Revolución Argentina” contó con la parálisis voluntaria de los actores sindicales y probablemente de las bases obreras también, muy pronto con una ofensiva estructurada en torno al plan económico del ministro “Krieger Vasena”, los trabajadores enfrentaron al gobierno. Las luchas fueron derrotadas y durante dos años se vivió una relativa paz laboral a nivel de grandes conflictos, durante la cual el MO vivió una dinámica de reorganización. Pero poco después, a partir de 1969, una nueva oleada mucho más dura que las anteriores dio por tierra con el gobierno y abrió paso a una etapa signada por enfrentamientos radicales.² Si 1969 con su

que la represión fue masiva durante 1976 y 1977 (Izaguire, 1988); sin embargo, estadísticamente la mayoría de las desapariciones en la clase obrera sucedieron desde fines de 1976 y durante 1977. La dictadura manejó etapas en su plan: primero, imponer orden y eliminar a la guerrilla; y luego, avanzar sobre la administración estatal y sus dependencias (ley de prescindibilidad, y demás leyes que quitaban privilegios a los trabajadores del estado). En una segunda etapa se avanzó sobre las fábricas y los sectores privados tanto en lo militar como en lo económico.

2 Pensamos el ciclo de lucha del movimiento obrero en oleadas. La de 1955 con sus antecedentes

huelga general y levantamientos populares fue un cambio de etapa, 1979 con la “Jornada nacional de lucha” también lo fue. Mucho más cauteloso, más moderado, más cuidadoso en los niveles de radicalidad. Pero creemos se podría asimilar en su tiempo al de diez años antes. Sin embargo, el tipo de lucha no fue el mismo y la etapa abierta tampoco; esto se relaciona con dos cuestiones complementarias: la mayor dureza de la represión y el cambio radical del modo de acumulación.

Debe tenerse en cuenta que el proyecto económico y social de la dictadura difería de los anteriores y dificultaba el acercamiento al gobierno aun para los sectores más colaboracionistas de la dirección sindical. La dictadura sancionó un paquete de leyes antisindicales³ muy amplio y desreguló la economía, produciendo una abrupta caída del salario cercana al 40%; y de la mano de una caída de la participación absoluta y relativa de la producción industrial, no vinculada a la elaboración de productos exportables del campo, en torno al 20%. Es decir, un achicamiento social y productivo, que fue el fin de un modelo y el nacimiento de otro. Esto fue acompañado por nuevas formas de trabajo y el inicio de un proceso de segmentación de la clase trabajadora que se

y consecuencias. La de 1969 inclusive debería vincularse en muchos de sus métodos con el Plan de Lucha de la CGT de 1963-1964 con sus ocupaciones de lugares de trabajo, etcétera. Lo mismo que la resistencia obrera (y la acción represiva) con todo el periodo anterior, especialmente la lucha contra el “Rodrigazo”.

- 3 Este es solo un recuento de las principales herramientas legales con que la dictadura buscó eliminar la actividad sindical y reordenar/disciplinar el tipo de organización obrera: “Bases para la intervención de las Fuerzas Armadas en el Proceso nacional” (24 de marzo de 1976); ley 21.261 de suspensión del derecho de huelga y toda medida que afecte la producción; ley 21.263 que elimina el fuero sindical; ley 21.297 que elimina todos los derechos laborales; ley 21.400 que profundizaba la ilegalización de toda medida de protesta; ley 21.476 que elimina los regímenes especiales de trabajo; “Documento de trabajo bases políticas para el Proceso de Reorganización nacional” de agosto de 1978; ley 22.105 de asociaciones profesionales (15 de noviembre de 1979); ley 22.269 de obras sociales (8 de agosto de 1980).

profundiza hasta nuestros días. De este modo se deteriora el poder de los trabajadores en cualquier circunstancia. Las formas de respuesta ante tamaña transformación produjeron como resultado respuestas obreras y sindicales de características distintas. Por ello, cualquier estudio que tenga como parámetro las luchas del pasado debe tener en cuenta este escenario para valorar el tiempo que va desde el golpe de marzo de 1976 hasta la huelga de 27 de abril de 1979.

Dentro del gobierno convivían dos tendencias, una que pretendía eliminar todo tipo de organización sindical (en general asociada a los jefes directos de la represión y a gestores económicos civiles), y otra que buscaba un sindicalismo apolítico y de apoyo al capital sin peso político ni social (asociada al Ministerio de Trabajo y algunos otros reductos de las FF.AA. como la Marina).

Se puede asimilar el proyecto laboral del “Proceso” con la estructura sindical existente en Chile.⁴ Desde ese sector salieron las políticas laborales y el marco de relaciones con el sindicalismo, impulsado desde un mismo inicio por la dictadura. Inicialmente tuvieron que organizar una representación sindical para la asamblea anual de la OIT a solo dos meses del golpe. El ministro de trabajo dividió a los gremios no intervenidos en cuatro grupos (los más grandes, “peligrosos” o combativos estaba intervenidos), que debían designar cinco representantes cada uno e ir a funcionar a la CGT intervenida, y constituir así un “sindicalismo oficial”. Estos armarían una comisión para ir en la delegación oficial a la asamblea de la OIT en Ginebra.

4 Para quien quiera conocer cómo hubiera sido el modelo en la práctica de haber quebrado la resistencia de los trabajadores, puede mirar al país vecino.

Cambios y continuidades

A diferencia de las anteriores, la nueva oleada de resistencia aparecía con un desarrollo “insurreccional” más cuidadoso, y más lento. Buscaba presentarse con moderación y evitar la exposición. “El Proceso” vino a instaurar, a través del superministro José Alfredo Martínez de Hoz, una nueva estructura económica que impulsaba un cambio radical del “modo de acumulación”, y no de qué clase se beneficiaba dentro del mismo modelo de sustitución de importaciones. Con este cambio se pasaba el eje económico y la conducción del mismo a las fracciones capitalistas vinculadas a una acumulación financiera y a grupos económicos y sectores anclados en el mercado mundial (Basualdo, 2006; Rapoport, 2006).

También cambió la relación de fuerzas entre las clases respecto de los trabajadores y al interior de la misma clase obrera. Se inició un camino hacia la segmentación, pérdida de peso de las fracciones vinculadas a la industria, aumento de la precariedad y transformación en las formas de producción que tendieron a debilitar el peso del sindicalismo tradicional y de la masa obrera (e inclusive asalariada) en su conjunto. Aunque esto fue un proceso tendencial de décadas, los primeros pasos dados por la dictadura fueron centrales e hicieron sentir sus efectos en forma inmediata. Por lo tanto, debían afectar el desarrollo de las luchas sindicales. Y eso a su vez fue acompañado de un proceso a nivel estructura sindical, en el cual un sindicalismo gerencial (distinto a “burócrata”) encontró espacio para su desarrollo.

Ahora bien, aun con este nuevo escenario, dos hechos extraeconómicos pesaron y pesan aun en la gran presencia social y política de la clase obrera organizada. Uno fue el entramado de legislación creado durante el gobierno peronista desde el año 1944 que transformó a los sindicatos

en una función de “estado” ineludible. Estado en sentido amplio como señala Antonio Gramsci, pero también en el sentido estrecho, como parte del funcionamiento de áreas reguladas por el Estado. Segundo, la existencia de una conciencia colectiva de la clase obrera de que la agremiación fuerte y unificada es una parte importante de la vida laboral. La estructura sindical argentina está en “la mente” de los trabajadores.

Antecedentes: formación de “los 25”

La dictadura, como vimos, intentó lograr la total parálisis de la clase obrera. O sea, transformarla en una variable de mercado del capital. Sin embargo, a pesar del terror y la conflictividad, la actividad se mantuvo durante los años previos a 1979 en todo el MO, desde su cúspide hasta los lugares de trabajo. Durante el mes de abril un grupo de dirigentes gremiales se reunieron y discutieron cómo encarar la dictadura. Allí, según relata Pablo Pozzi, hubo dos posiciones. Una orientada a conformar una comisión asesora (“participacionistas”) y otra una comisión de enlace (no se puede llamar “combativa”; pretendía tomar distancia sin arriesgar). Se formó la “Comisión de los 10”. Esta reunión se relacionaba con la convocatoria de la dictadura a veinte representantes gremiales de los gremios no intervenidos.⁵ El gobierno dividió a los gremios en cuatro grupos, donde solo participaban los no intervenidos.⁶ Cada uno debía

5 El 1 de mayo de 1976, Horacio Liendo indicaba que había intervenido temporalmente 28 sindicatos sobre un total de 1.368. El total de intervenciones de 1976 fue de 88, excluyendo la CGT. A ello se suman los “delegados normalizadores”, con lo que se eleva el número a 101 (Zorzoli, 2016).

6 La clave era que como estaban suspendidas las actividades políticas, los gremios no podían renovar sus autoridades; entonces, el ministerio de trabajo debía —o no— prorrogar los mandatos. Así realizaba presión sobre todos los sindicatos.

elegir un delegado para integrar la comitiva a la OIT. En ese momento, a dos meses del golpe, un grupo de dirigentes se sumó a la delegación oficial del gobierno militar; entre ellos se encontraban Serrano como secretario general de SUTNA —quien habló en Ginebra—, Ramón Baldassini de FOECYT —quien presidió la delegación—, Ricardo Horvat de ATE y varios más.⁷

A comienzos de 1977 se formó la “Comisión de los 7”, que fue coyuntural. Eran sindicatos no intervenidos que pidieron una reunión con el ministro de trabajo Horacio Liendo y presentaron un pliego de reivindicaciones firmado por setenta y ocho organizaciones. Incluía el pedido por el poder adquisitivo de los salarios, la derogación de la ley de prescindibilidad, la normalización de la actividad sindical y la liberación de los presos gremiales. Estos reclamos se daban con el marco de un alza de conflictos, reclamos y huelgas que se extendía desde las bases, y en relación con la agudización de la represión sobre los trabajadores. En ese contexto se desarrollaban oleadas de secuestros: fue el momento de mayor represión sobre los obreros.⁸

Los primeros días de 1977 también algunos dirigentes de los cuatro bloques que se reunían en la CGT convocaron a un

7 La convocatoria a Ginebra por la dictadura no fue lineal ni aceptada pasivamente por toda la dirigencia sindical. Varios se opusieron, tanto secretarios como dirigentes intermedios. Relata Víctor De Genaro, en ese entonces miembro del secretariado de ATE Capital, que “cuando Horvat viaja a Ginebra en mayo de 1976, algunos militantes sindicales volanteamos en un congreso en Córdoba en contra de esta decisión, que se consideraba cómplice con la dictadura. Cuando volvemos a Buenos Aires, Horvat nos hecha de nuestros cargos, y al estar despedidos nos quedamos sin ingresos. La discusión era qué hacer y por iniciativa de un compañero con más experiencia decide armar una agrupación para desde allí actuar sindicalmente y pelear el gremio desde la ilegalidad” (en Caviasca, 2021).

8 Una lucha sindical paradigmática del periodo de terror como la del sindicato de Luz y Fuerza, que durante meses confrontó con el gobierno, sufrió numerosos ataques de fuerzas militares y desapariciones. Hacia el final del conflicto desaparece Oscar Smith, secretario general de la regional capital.

encuentro fuera de la misma. El objetivo era que se reconociera que había un sector de gremios excluidos (que a su vez eran de mucha importancia), que eran los intervenidos. La propuesta de algunos era que había que incluir otros cinco representantes por estos, que se sumaran a los 20. Y allí se forma una comisión de 25 integrantes. Los intervenidos, gremios de peso como SMATA, UOM y otros, comenzaron a tener un rol importante en la comisión de, ahora, veinticinco miembros. La discusión no fue sencilla ya que incluir a estos gremios con representación propia era desconocer la decisión del gobierno de intervenirlos, o sea, mantenerlos sin representación autónoma.

Las peleas al interior de los gremios y entre ellos estallaron en febrero de 1977, cuando nuevamente la dictadura quiso constituir la delegación a una nueva asamblea de OIT. La comisión sindical que integraban los gremios intervenidos desequilibraban la balanza entre “colaboracionistas” y “duros”. Así se impuso la idea de no concurrir. Con debates y duras discusiones al interior del campo gremial, en 1977 no hubo representantes obreros en Ginebra, lo que implicaba un gran golpe contra la dictadura, especialmente en el plano internacional.

Esto llevó a una división con los dirigentes más vinculados al gobierno, que comenzaron a funcionar por su cuenta para mantener un diálogo fluido. Así surgió una “nueva” Comisión de los 25, que era la continuidad de la anterior, pero sin la presencia de los participacionistas, cambiando la naturaleza del grupo, para pasar de ser un organismo formado por el gobierno a un organismo de los sindicatos.

Esa “Comisión de los 25” convocó a un plenario en la sede del gremio de taxistas (conducido por Roberto García) el 1 de marzo de 1977 que puede considerarse el punto inicial de “los 25” como actores políticos independientes. El objetivo era lograr una organización estable para negociar de

forma orgánica y colectiva con la dictadura. Allí se vivieron momentos de entusiasmo, se cantó la marcha peronista, se propusieron y tomaron algunas iniciativas trascendentes. En el plenario participaron dirigentes de gremios no intervenidos, intervenidos y dirigentes opositores de gremios colaboracionistas.⁹

En el marco de “los 25” se impulsó la creación de dos estructuras que empezaron a aparecer hacia fines del 77. La “CGT regionales” y las “Agrupaciones gremiales peronistas de las 62”. Así comenzó a estructurarse nacional y orgánicamente el MO, fortaleciendo, coordinando o relanzando a las CGT regionales a lo largo de todo el país. De esta forma, “los 25” plantean lo superestructural, que se transformó en clave para lograr mayor capacidad de respuesta y de unificación de los conflictos dispersos. A ello se suman “las agrupaciones gremiales peronistas de las 62”, que serían una representación paralela en los gremios que colaboraban con el gobierno.¹⁰

Desde el comienzo de esta primera reestructuración estable se planteó una cuestión política de fondo. Fue José Rodríguez de SMATA quien señaló el tema de la proscripción del peronismo y las organizaciones políticas como las 62 Organizaciones peronistas. Además de la representación gremial, planteaba que era necesario reivindicar al peronismo. Propuso la conformación del Movimiento Sindical Peronista (MSP), que se conformó públicamente al año siguiente. Contó con la adhesión de Lorenzo Miguel

9 Los dirigentes más destacados eran Enrique Micó del vestido, el taxista Roberto García, Fernando Donaires de papeleros, Miguel Gazzera de fideeros, Ricardo Pérez de los camioneros, el mecánico José Rodríguez, Roberto Digón del tabaco y Carlo Loza de SUPA. Había otros muchos gremios y agrupaciones; entre ellos estaban los cervecedores, cuyo secretario adjunto era alguien que sería famoso la década siguiente: Saúl Ubaldini.

10 Estaban Minichilo de comercio, Jesús Gonzales de navales, “Pato” Galmarini de FATPREN, Santa María de porteros, y De Genaro por ATE, todos dentro de “Los 25” como agrupaciones.

desde la cárcel. Así, “los 25” debatían desde el comienzo la necesidad de un “sindicalismo político”.¹¹

Todas estas herramientas implicaban una proyección política y un dispositivo de nacionalización y organización de los focos de resistencia dispersos. Pero además, eran una confrontación con las ideas fuertes de la dictadura, y también lo eran con los grupos sindicales que deseaban priorizar el acuerdo con los militares y orientar la actividad sindical hacia la colaboración integrada. La idea de la existencia de un “sindicalismo político” versus un “sindicalismo profesional” era de vieja data y encubría la idea de mayor connivencia con “el proceso” y aceptación de un nuevo modelo sindical de gestión. Pero también, un debate acerca de cuál debía ser el rol de la clase trabajadora dentro del sistema capitalista, llevando la colaboración e integración de los trabajadores a un nivel completo (algo así como una oficina de recursos humanos y gestión laboral autogestionada) y aceptado pasivamente las reglas de mercado. Esta contradicción se agudizó con el lanzamiento del MSP, las CGT regionales y las Agrupaciones, ya que proyectaba desde abajo la fuerza y organización de las bases y cuadros medios mucho menos adaptables que los dirigentes posibles de cooptar. A su vez, tuvo su correlato con una mayor definición opositora de “los 25” y su vinculación con la inquietud de las bases.

El MSP, organismo político público, fue proscrito inmediatamente por la dictadura, lo que no significó su disolución.

11 Los planteos de Rodríguez también implicaban una pelea de representación política del peronismo frente a Lorenzo Miguel. El MSP “reemplazaba” a las 62 prohibidas, mientras que las “Agrupaciones gremiales peronistas” eran “de” las 62. Como vemos, en el seno de “Los 25” se expresaba otra línea histórica de tensión del gremialismo peronista. Las diferencias en este tema entre la UOM y SMATA por la conducción del MO se expresan en la formación de las agrupaciones gremiales y las 62 más cercanas al “miguelismo”: peronista clásico *versus* El MSP impulsado por SMATA de Rodríguez, cercanos a la CIOLS.

En general, las tareas políticas de los dirigentes no eran otra cosa que el desdoblamiento o multiplicidad de funciones de los mismos, sobre lo cual tenían una larga experiencia desde 1955. Varios dirigentes (entre ellos el tabacalero Roberto Digón) habían sufrido detenciones,¹² pero esta aparición pública y opositora llevó a que en octubre de 1978 varios de los integrantes de la comisión fueron encarcelados por unos días a causa de las violaciones a las leyes vigentes de inactividad sindical.

Como consecuencia de la diferencia de orientación, a fines de 1977 quienes dudaban de hacerse cargo de la conflictividad, por temor a confrontar con el gobierno o por adherir a una línea “procesista” de sindicalismo de gestión, crearon la “Comisión de gestión y trabajo” (CGyT) en donde confluieron algunos clásicos negociadores como Gastronómicos, FOECYT, Mercantiles y otros sindicatos o fracciones de sindicatos. Como UF, UOM, LyF, plásticos, calzado, textiles, etcétera. Por ejemplo, la UOM, gremio clave, intervenido y con Lorenzo Miguel preso, tenía a cargo del sindicato al participacionista Luis Guerrero (UOM Avellaneda), quien colaboraba con la intervención. Mientras que Lorenzo Miguel apoyaba a “los 25” y enviaba para participar a Hugo Curto de la UOM Caseros. Por su parte, ATE, al mando del colaboracionista Horvat, tenía una agrupación opositora (ANUSATE) dentro de “los 25”.

12 Roberto Digón fue secuestrado en 1976 y permaneció un tiempo desaparecido. Cuando escuchó llegar un nutrido grupo de asaltantes a su edificio supo que venían por él y tuvo tiempo de llamar y avisar a otros colegas sindicalistas. Digón, como parte de otros dirigentes sindicales, venía participando de las reuniones que se desarrollaban. Frente al secuestro del dirigente, la mesa que funcionaba en la CGT señaló al interventor que no había más diálogo si Digón no aparecía. Así fue liberado y partió al exilio, donde se sumó a la campaña de denuncias en marcha. Volvió al país poco más de un año después. El ministro Liendo señaló que se le garantizaría la vida. Esto es una expresión de las diferencias entre militares “duros” y blandos” frente al MO. Es decir, los que pretendían matar sin contemplaciones y los que creían que era necesario establecer algún canal de diálogo (Cedrón, 2020).

Los sectores participacionistas también fueron definiendo su identidad y práctica política durante ese año 1978. Todo se daba en una disputa por la conducción del MO, sin rupturas tajantes; por un lado, los colaboracionistas querían arrastrar al conjunto para presentarse como un interlocutor sólido ante los militares; por otro, “los 25” querían lo mismo, pero partiendo desde la confrontación y rechazando las políticas gremiales y económicas. Debe tenerse en cuenta que la unidad para enfrentar las políticas económicas y represivas era una exigencia que los dirigentes sentían desde abajo. Pasados los festejos del mundial de fútbol de 1978, los sectores más ligados al diálogo con los militares que integraban la Comisión de “Gestión y Trabajo” conformaron la Comisión Nacional del Trabajo (CNT) a instancias de los dirigentes Oscar Lescano de Luz y Fuerza, Luis Guerrero de UOM y Delfor Giménez de los textiles, entre otros. Sumaron un grupo que se aleja de “los 25” y un sector de los independientes, entre los que se encuadran Baldasini, Jorge Luján, Luis Etchezar de la fraternidad, Armando Cavalieri de Comercio, Diz Rey, el radical Hugo Barrionuevo, Horvat de ATE, etcétera. La línea expresada en las declaraciones públicas mostraba las profundas diferencias entre el sindicalismo peronista tradicional (más o menos combativo) y el sindicalismo ligado a un nuevo modelo de acumulación que proponía una gestión sindical colaborativa. Diferencias que se arrastraban desde la década de 1960. Así, frente a frente, se organizan y definen sus contornos y prácticas estas dos vertientes del sindicalismo que continuarán hasta la transición democrática. Por un lado, el polo dialoguista-colaboracionista. Y por otro el de “los 25”, que se irá afirmando como el polo más confrontativo, aglutinando tras de sí a los restos de los sectores combativos y sondeando a otros actores sociales, como DD.HH., empresarios e Iglesia, sin excluir militares.

Los últimos pasos

En 1978 comenzó a mostrarse con mayor visualización una presencia a nivel nacional de los conflictos sindicales. Se rompió el cerco de silencio, aislamiento y clandestinidad; también la represión disminuyó y se agotó en su extrema violencia. Ya la cúpula sindical denunciaba las desapariciones, la falta de libertad sindical, la conculcación de derechos en Europa, los EE.UU. y ante la OIT. Se expresa otra hegemonía en la cúpula respecto de 1976. La aparición de denuncias públicas, de dirigentes en los medios, criticando, genera más confianza hacia abajo, en donde además aparecen las “Agrupaciones” y se generaliza la actividad de las CGT regionales. Se realizan actividades en todo el país, cursos, plenarios, reuniones, volanteadas y hay una semilegalidad para el MO.¹³

Ante la sesión anual de la asamblea de la OIT, los gremialistas argentinos debían tomar una definición. En 1976 hubo una representación sindical complaciente en Ginebra que acompañó la delegación oficial. En 1977 ya se había ausentado la delegación sindical y había sido una señal de oposición. En 1978 es la primera vez que se produce una denuncia muy fuerte, la primera de envergadura a nivel internacional. Las dos tendencias resuelven hacer un plenario conjunto. Allí se acuerda ir a la nueva asamblea de la OIT en Ginebra en junio de 1978, antes del mundial. Se discute un documento que se presentaría y que tenía que ir la delegación compuestas por el porcentaje de cada una de las comisiones. Además, se acuerda que ese documento no se

13 La dictadura, después de secuestrar y asesinar a miles de trabajadores, nota que la actividad gremial se reproduce. Esto es por un error conceptual: la actividad gremial no es producto de una “minoría de activistas revolucionarios” insertos desde afuera o cooptados por organizaciones revolucionarias —que puede haberlos, como de cualquier tendencia política—; en el MO argentino es muy densa la idea del sindicato y sus derechos: es una cultura de clase.

podía modificar si no había pleno consenso. Roberto Digón recuerda la discusión al señalar que en el momento parecía un documento muy duro, aunque hoy pueda verse un poco moderado (Cedron, 2020). En realidad, para el momento lo era, ya que exponía varios de los elementos más graves que la dictadura quería ocultar: la represión salvaje con desapariciones, los encarcelamientos arbitrarios, las graves restricciones a la actividad sindical en todos los niveles, el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y las oleadas de despidos y cierres de fábricas. Pero sobre todo era un documento de consenso de todas las corrientes. El ministro de Trabajo intentó que el documento se modificara, pero los sindicalistas (con discusiones) no aceptaron y fue leído como se había acordado por Serrano de SUTNA (de tendencia colaboracionista).¹⁴

A pesar de este acuerdo en la OIT, las diferencias estaban plasmadas. Ya el 1 de mayo de 1978 ambas tendencias elaboraron declaraciones en las que se podían observar sus puntos de vista claramente distintos. “Los 25” señalaban su

firme postura adoptada en pos de las legítimas reivindicaciones obreras, la plena ocupación, la inmediata

14 La lectura del documento en el cierre de la asamblea de la OIT era con el mundial de fútbol ya comenzado. El general Liendo invita a todos a la residencia a ver el partido de Argentina de inauguración del mundial. Señala a los invitados antes de darles el asado que sabe del documento y que le parece que hay que cambiarlo. Se produce un fuerte debate en la delegación (estaba compuesta por todos los sectores) pero por poco se impone que no se modificaría. Había un grupo muy duro que no estaba dispuesto a acordar con Liendo. Castillo, secretario general de Navales, juega un rol clave; varios de los sindicalistas querían aflojar y corregir el documento para no tener un enfrentamiento grave. Castillo se resistió y su decisión era fundamental para desequilibrar. Finalmente, se le informa a Liendo que no se modificará nada. Se recuerda que el ministro se enojó y echo a los sindicalistas de la embajada. Mientras que el embajador amenazó a los sindicalistas con consecuencias al volver a Argentina. Estos se perdieron el partido de Argentina y el asado. El documento se leyó como se había acordado, con la delegación en pleno, y fue un duro golpe para el gobierno.

derogación de la ley de alquileres, la libertad de los compañeros trabajadores detenidos, la normalización de los gremios intervenidos, la plena actividad sindical y la vigencia de la ley de convenciones colectivas de trabajo. (Declaración de “los 25”, 1978)

Por su parte, CNT indicaba que “el día mundial del trabajo constituye hoy un desafío a realizar y a partir de esa perspectiva propone la necesidad de enfrentar los numerosos problemas del movimiento obrero argentino desde un ángulo profesional” (Declaración CNT, 1978).

Para fines de 1978, “los 25” dieron un nuevo paso hacia adelante desde el armado superestructural. Organizaron una cena en Buenos Aires con la participación de tres mil sindicalistas y la presencia de delegados de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) y agregados laborales de EE.UU. y Alemania Federal, con lo que se amplía el paraguas político que brindaba el sindicalismo internacional. La estrategia que incluía el frente internacional político sindical y de DD.HH. dio a “los 25” una importante cobertura. Era un periodo de gran actividad para los dirigentes, de articulación de “focos de resistencia aislados”, de tomar contacto y reactivar. Se realizaban viajes por el país, plenarios, gestiones, cursos de formación, cualquier actividad que fuera posible más o menos legal. Se legalizaba lo que se podía o lograba, y se iba instalando la idea de un paro nacional.¹⁵

A nivel de direcciones sindicales se puede ver un proceso de recomposición que va desde el shock y parálisis inicial, que benefició a los colaboracionistas, hacia un proceso de

15 Durante 1978, la organización Montoneros encargó a Jorge Cedrón la realización de un material audiovisual que se llamaría “Resistir”, con la dirección de Cedrón y textos de Juan Gelman. Transmite una lectura de la situación del movimiento obrero en la cual los guerrilleros preveían que en el año 1979 sería de “contraofensiva popular” y pensaban insertarse en ella.

recomposición y redefinición de las estructuras, hasta una recomposición de los diferentes niveles, nacionales, regionales y locales durante 1978. A nivel bases y lugares de trabajo, la dinámica fue distinta. Se desarrollaron una cantidad de conflictos, en general por lugar de trabajo, durante 1976 y 1977, muy numerosos, pero aislados, con una caída del número de los mismos en 1978. Esto puede ser interpretado como la constatación de que la dictadura impuso su ofensiva económica y militar (esos dos años coinciden con la masa de muertos y desaparecidos). Sin embargo, cuando valoramos esta cuestión no debemos dejar de tener en cuenta que en 1978 Argentina estuvo al borde de entrar en guerra con Chile, lo que no fue un momento de crisis circunstancial, sino que el Estado y la sociedad se pusieron en tensión. Y ese mismo año de jugó el mundial de fútbol en Argentina, y la copa fue ganada por nuestro país, con la consiguiente euforia. O sea, observamos dos importantes factores que deben ser incorporados para analizar el clima de contexto y cierta caída de los conflictos. También sucedió que la situación económica general a nivel distribución del ingreso dejó de deteriorarse después de dos años de caída del reparto de la riqueza.

Las estadísticas nos permiten identificar la siguiente proyección hasta 1979: en 1976 se registran 89 conflictos; en 1977, 100 conflictos; en 1978, 40; en 1979 la impactante escalada de 188 conflictos y, en 1980, 261. Para ver con más claridad se debe sumar la cantidad de trabajadores involucrados. En 1976 participan 191.660 trabajadores; en 1977, 514.710; en 1978, 212.140; en 1979 nuevamente se registra un salto impresionante, pasando a 1.818.020 trabajadores que participan en conflictos, mientras que en 1980 la cifra disminuye a 362.447 trabajadores (Fernández, 1985: 140-141). También, si incluimos otra variable —siguiendo a Fernández—, la de tiempo de trabajo, vemos que durante 1979 se pierden por huelgas 500.000 días-hombre contra unos 100.000 de 1978.

Esto nos permite afirmar, siguiendo a los autores que niegan una pasividad del MO —o derrota del mismo frente a la dictadura—, que la conflictividad fue muy intensa. Que, ante la ofensiva represiva y el ataque a las condiciones de vida, a pesar de las duras condiciones de contexto, hubo una alta conflictividad. El año 1977 coincide con la mayor cantidad de obreros desaparecidos y la reconstrucción embrionaria de las estructuras sindicales. Mientras que, en 1979, la lectura de los sectores más confrontativos que plantean que la inquietud de las bases era muy alta y estaban las condiciones para unificarlas a nivel nacional, parece verse reflejado por los datos estadísticos.

No debemos pensar la existencia de dos planos escindidos entre las bases por un lado y la dirigencia por el otro. Por el contrario, existe una continuidad e interrelación desde los más encumbrados dirigentes, a dirigentes intermedios y militantes insertos en sus lugares de trabajo. La discriminación de “cúpulas” versus “bases” es únicamente útil a nivel analítico. A nivel político es solo demostrable en una cantidad de dirigentes burocratizados en extremo que se transforman en una capa auto-reproductiva, pero no es una mayoría. Aun autonomizados en muchos casos, dependían de la legitimación y estaban relacionados con la conflictividad de las bases.¹⁶

En 1979 había luchas parciales como los años anteriores, pero estaban empezando a crecer en forma notoria, asemejándose a un salto numérico evidente. El plan de Martínez

16 Un paradigma controvertido fue José Rodríguez quien, siendo un encumbrado dirigente de SMATA, se hizo presente en huelgas automotrices durante la dictadura (aunque también fue acusado de tener relación con la desaparición de delegados) y fue uno de los motores de “los 25”. Debemos señalar que, especialmente los agrupamientos que tienden a la confrontación, necesitan de la legitimidad desde abajo mucho más que los que tienden a la conciliación, que se pueden respaldar en el apoyo del aparato estatal, judicial o empresarial. Y SMATA (en este caso) fue muy golpeada por la política económica de la dictadura, que devastó la industria automotriz.

de Hoz estaba en una crisis. Las consecuencias del plan económico y los cambios de las condiciones financieras internacionales afectan la estabilidad de un plan que se basaba en el intento de hacer converger variables internas con las internacionales, sin regulaciones, y poner el peso dinámico en el sector financiero. En el gobierno militar había discusiones sobre el plan económico y sobre la continuidad institucional. Marina versus ejército; fracciones del ejército entre sí. Sectores de la industria contra sectores del campo. Industrias no transnacionalizadas y sectores vinculados al mercado mundial. Cada uno con “sus” militares. Parte importante de la burguesía rompió con el gobierno y entró en diálogo con “los 25”.

En este contexto de mayor lucha sindical, crisis económica y política, de conflictos dispersos pero numerosos, de inquietud general por el deterioro de las condiciones de vida, la Comisión de los 25 lanza la “Jornada nacional de lucha” del 27 de abril de 1979. Esto no puede dejar de ser pensado como el intento consciente de un salto cualitativo para orientar y unificar los conflictos. El comunicado que llamaba al paro señalaba que se “convoca a todos los sectores nacionales a realizar una protesta nacional (...) restitución del poder adquisitivo del salario y plena vigencia de la ley 14250 de convenciones colectivas de trabajo (...) en oposición a la reforma de las leyes de Asociaciones profesionales y de Obras Sociales (...) Normalización sindical”.

“Los 25” tenían claro los riesgos: la posibilidad de detención de los dirigentes era verdaderamente concreta. La dictadura no aceptaría una huelga general que implicara una nueva escalada en las violaciones de las leyes vigentes. Por ello prepararon una comisión suplente que funcionaba en el armado del paro y que, en caso de que los jefes principales desaparecieran de escena, debía hacerse cargo de la conducción. La Comisión de los 25 funcionaba en los gremios,

no había un local central, se elige un centro coordinador que funcionaría en Orecsur (Oficina regional del Cono Sur, de la CLAT) en la calle Venezuela al 2000, un local de la CMT (Central Mundial de Trabajadores) vinculada a socialcristianismo, lo que daba una cobertura de una organización internacional vinculada a la Iglesia y a grupos europeos con peso internacional. Allí se coordinarían las actividades de la comisión suplente.

La convocatoria aparece como un intento de darle a las luchas dispersas una referencia nacional y busca un marco de alianza amplio.¹⁷ La expresión del documento en que se señala que se “convoca a todos los sectores nacionales” es clara y tiene su correlato en los acuerdos y respaldos de sectores de la Iglesia, empresas, cultura, etcétera. Los partidos políticos aún no se atrevieron a pronunciarse por la huelga. Y la acción de los sindicatos también generó peleas al interior de las FF.AA. O sea, pegar el salto hacia la huelga política desde la presión dispersa y económica. Además, es claro que las direcciones sindicales podían testear el ánimo de las bases, que los trabajadores se encontraban golpeados y con amplios sectores que llevaban adelante conflictos y sin dudas se preguntaban qué hacían sus dirigentes. Las declaraciones públicas de “los 25” dan cuenta de la presión desde abajo; de forma similar, los colaboracionistas de CNT apuntan en el mismo sentido, pero dejando entender que “los 25” tiene una actitud demagógica ante las bases para “zanjar disputas internas”.

La tendencia a la unidad de los dirigentes se manifiesta a pesar de las diferencias que planteamos. Tanto por ser

17 En el año 1979 la conflictividad se mostró con un fuerte ascenso con algunos conflictos que trascendieron, en fábricas y sectores económicos importantes: Aceros Olief en marzo, Alpargatas (un muy fuerte conflicto en abril), la toma de Cura hnos., IAME y La Cantábrica en julio, Peugeot en setiembre, Colectivos de Tucumán, una huelga del frigorífico Swift en octubre y otra en noviembre, transportes de Rosario, etcétera.

consecuencia del deterioro económico, que ya para 1979 era muy fuerte, como por la misma actividad desde las bases que, en esta como en otras circunstancias históricas, presionan a los dirigentes para unirse, específicamente ante momentos difíciles.¹⁸ La CNT proponía una dirección unificada, la disolución de ambos agrupamientos y el resurgimiento de la CGT; mientras que la “Comisión de los 25” planteaba la unidad en la lucha y la realización de una jornada de protesta. No hubo acuerdo ya que para la CNT la unidad era para potenciar el diálogo, mientras que para “los 25” debía priorizarse la confrontación, sin la cual el diálogo carecería de sentido. El sábado 21 de abril de 1979, en el sindicato de Molineros, “los 25” lanzan oficialmente la “Jornada nacional de protesta” con paro nacional para el viernes 27. Días antes, los sindicalistas Cavalieri y Donaires se habían reunido con el subsecretario de Trabajo, el coronel Américo Daher, y habían sido advertidos respecto a que los gremios participantes en cualquier movilización de protesta serían inmediatamente intervenidos.

Desde el momento en que se amenazó con un paro general, el gobierno militar intentó por todos los medios frenar la convocatoria.¹⁹ El 23 se citó a los dirigentes a una reunión

18 No está demás recordar nuevamente la coyuntura del Cordobazo, diez años atrás. Allí las dos centrales obreras (las dirigidas por Vandor y por Ongaro) se unificaron para lanzar la huelga general que sirvió de escenario nacional de esa pueblada.

19 Relata De Genaro (2021): La idea de “por todos los medios” debe ser matizada, ya que “todos” en ese periodo podía ser interpretado como la muerte, detención o desaparición de una cantidad de dirigentes y activistas, y esto no llegó a ese límite. Las presiones fueron todas las que no llegaran a asesinato. Y esto demuestra también el límite de la dictadura. Veamos qué dice De Genaro. En ese entonces trabajaba en la construcción de la agrupación opositora a Horvat y estaba encuadrado en “los 25”. Tenía una relación con Ángel Cairo, antiguo miembro del sindicalismo combativo peronista, asesor cercano a Amado Olmos o Julio Guillán. Relata que Cairo pasó por el quiosco de diarios en el que trabajaba y le dice “acompañame que esta noche vamos a ir a comer un asado en lo de Digón (...). Fuimos a la reunión, estaban Gaitán, Digón, Roberto García, Cairo y yo. Había también dos tipos se suponía que eran dos militares, vestidos de civil pero dos militares.

en la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo. Allí, más que una reunión de diálogo, se les exigió a los sindicalistas que se comprometieran a no adherir a la convocatoria con la firma de un acta con la que se desligaban oficialmente de la misma. A los que se negaran se los acusaría de violar el decreto 9/76 que prohibía la actividad gremial y la ley 21.400 de seguridad industrial que penaba con penas de hasta seis años a las medidas de acción directa. Les preguntaban si integraban el grupo de “los 25”. Ninguno de los interrogados respondió. El gobierno arrestó de inmediato a todos los sindicalistas a la salida del ministerio, junto a dos militantes que aguardaban noticias en un bar de la esquina, y fueron

Porque hay una relación, que venían de parte de tal, para intercambiar información, era una semilegalidad. Yo era colado, o no, pero no era de los jefes”. Hubo una discusión muy fuerte, Y en un momento se calentaron todos, y dijeron que no (no se iba a levantar la huelga). Que había que cambiar la política económica y que sino el MO iba a hacer paro. Y ellos insistían que no tenía que ser el paro, que iba a ser un quilombo. Y Cairo tomó la palabra y les dice: “ustedes tienen que entender que se están equivocando. Todavía tienen posibilidades, tiene que echar ya a Martínez de Hoz. Es la única manera”. Los tipos dicen que esto, que lo otro... Y Cairo insiste: “No, ustedes se equivocaron. Y no son los únicos errores que cometieron. Porque yo entiendo lo que ustedes piensan. Pero la represión fue absolutamente innecesaria. Y hubo una equivocación antes. Ustedes hablan de los Montoneros. Pero los Montoneros se equivocaron porque quisieron hacer parir a una madre que tenía 5 meses de embarazo sentándose arriba. Y eso es antinatural. Y ustedes también quieren hacer algo también antinatural. Porque al bancar a Martínez de Hoz lo que quieren hacer es meter al pibe adentro de la panza de la madre después que nació. Y eso es antinatural. Y a mí por lo que estoy diciendo me pueden hacer cualquier cosa. Y es más, yo no tengo ningún problema, podemos salir de acá y una capucha, y se acabó lo que se daba conmigo. Yo ya soy grande no tengo problemas. Pero hay una diferencia, si ustedes siguen bancando a M. de Hoz los van a juzgar por televisión. Vieron cómo está haciendo Komeini, así los van a juzgar a ustedes”. Yo estaba ahí... sorprendido, pensaba: “acá salimos todos mal”. Los tipos recalientes. Un milico le dice: “¡;Pero como dice eso!, ¿en nombre de qué representación, de quién habla?” porque no lo tenía identificado como a García o a Digón. Y el viejo le responde: “Ustedes lo sepan o no lo sepan represento la conciencia de 8 millones de trabajadores”. Los tipos no sabían que decir. Allí intervinieron Digón y García relajando... Creo que García y Digón lo habían invitado a Cairo para que dijera lo que ellos no podían. Yo salgo de ahí y le digo que ¡bárbaro Ángel! ¡No lo puedo creer! Y él me dice: “Lo que vos tenés que aprender es que estas personas son empleados estatales, y que algún día vamos a gobernar y van a ser tus empleados. O los tratas así o te cagan”.

puestos a disposición de la División de Orden Gremial de la Policía Federal.

La detención fue un escándalo. La disputa con los sindicatos ocupaba la tapa de los diarios y se transformó en la noticia más importante. Lo cual fue un boomerang para la dictadura. Tuvo trascendencia internacional. La acción de tender lazos hacia diferentes sectores en el país y el extranjero dio buen resultado, en el marco, insistimos, de crisis económica e inquietud de los políticos profesionales por la normalización de la política. La CIOSL, la CMT y ahora la Federación Sindical Mundial manifestaron su inquietud al gobierno. Por primera vez el PJ, a través de su vicepresidente Deolindo Bittel, y la UCR, con Ricardo Balbín, solicitaron la libertad de los dirigentes sindicales, aunque no apoyaron el paro, lo mismo que el ex presidente Frondizi. El sector empresarial, golpeado por la crisis que impuso la política de Martínez de Hoz, a través de la Asociación de Industriales de Buenos Aires (ADIBA), se solidarizó con la huelga. El Departamento de Estado de los EE.UU. rechazó las detenciones.²⁰ La CNT, por su parte, desautorizó la convocatoria al paro e instó a todos los trabajadores a no acatarlo, aunque pidió la liberación de los detenidos y la mediación del Cardenal Primatesta.

La Iglesia católica criticó públicamente la persecución sistemática a las organizaciones sindicales y a sus dirigentes. Mientras, el Equipo Pastoral Social emitió un documento sobre la “agremiación”, en el que avalaba el derecho de los trabajadores a crear autónomamente sus agrupaciones,

20 Las RRll establecidas por los líderes sindicales debería ser un capítulo en un estudio sobre el desarrollo de las estrategias del MO en este periodo. La longitud del artículo lo impide, pero para un estudio integral de la construcción del marco de RR.FF. que permitió la huelga de 1979 recomendamos incluir esta variable. Por ejemplo, Cesar Loza, secretario general de Portuarios, recuerda los viajes al exterior a pedir la intervención de organismos de DD.HH. *Cfr.* el documental *Se va a acabar* dirigido por Andrés Cedrón.

criticando las leyes sindicales que el gobierno dictó ese año.²¹ Como respuesta a la presión sindical y para atenuar la posible adhesión a la medida de fuerza, la Junta militar decretó un aumento general de salarios del 15 % para el mes de mayo y otro del 6% para los meses de junio y julio.

Si bien el año había comenzado con intentos de unidad sindical que incluían la posibilidad del paro nacional, lo cierto es que a medida que la fecha se acercaba y la situación se tensionaba, el paro se fue desgranado. Los 25 habían “primeriado”, impuesto la medida a los dialoguistas, pero con el paso de las semanas la CNT se distanció públicamente. Emitió un comunicado donde señalaba que el paro era unilateral e inconsulto, y que solo buscaba dirimir diferencias internas. De hecho, llamaba a no adherir.

Igualmente, el 27 de abril las grandes ciudades aparecieron semiparalizadas, aunque muchas actividades se desarrollaron con cierta normalidad. Pero se notaba impacto con la disminución del transporte (principalmente camiones, trenes y aviones), y muchas fábricas cerradas. La clase obrera industrial respondió con importante consenso. Eso mostró la existencia de una fuerza sindical opositora capaz

21 Un ejemplo de la construcción de la relación con la Iglesia católica se puede ver en el vía crucis de Quilmes de 1978. Esta relación fue trabajada por “los 25”, peor no solo a nivel “cúpulas” sino que fue más capilar. La Iglesia como institución era muy amplia y contaba con diversas corrientes, algunas más cercanas a vincularse con el MO. El secretario general de la CGT regional Quilmes llamó a participar en el vía crucis de ese año. Relata De Genaro (2021) que se preguntaron “¿vía crucis?... Allí estaba Novak, ya habíamos formado y participábamos en la APDH y se estaba gestando el movimiento ecuménico por los DDHH. Decimos que como nos lo pidió el secretario general de Quilmes no lo podíamos dejar pagando. Fuimos. Allí iba en el micrófono un cura. El padre Farinello, allí lo conozco, y hablaba de cosas religiosas, María, Jesús. Pero en el medio se despachaba: con el tema de la tortura, como María Magdalena y la madre de Jesús podían entender la tortura, como lo hacen nuestras madres que pelean por los desaparecidos. Porque hay desapariciones en Argentina. Llegamos y habló Novak muy bien, la resistencia crecía y era 1978... el vía crucis es antes de que vaya la delegación a Ginebra a principios de año”. Esta relación siguió adelante, siendo el punto cúlmine la marcha de San Cayetano por Paz, Pan y Trabajo de 1981, encabezada por Saúl Ubaldini.

de contar con la adhesión de una parte sustancial de los trabajadores en un momento difícil. Lo que se intentó para evitar el paro fue insuficiente. Si bien en comparación con otras medidas de fuerza llamadas por la CGT a lo largo de la historia la adhesión fue bastante menor, lo cierto es que era la primera huelga general en medio de un periodo de terror y aparecía en público a nivel nacional e internacional, mostrando la existencia de una fuerza sindical opositora de peso en la clase obrera y con adhesión de otros sectores fundamentales. Además, la convocatoria era del mismo sindicalismo que se había buscado eliminar como factor distorsionante de las fuerzas del mercado. Como señala Digón, “el asunto era tocarle la cola al león y que la gente viera que el león no era tan bravo como se creía. Y eso correspondía al Movimiento Obrero” (Cedrón, 2020).

Según el consenso mayoritario, la huelga alcanzó un acatamiento del 40%, especialmente en el Gran Buenos Aires y demás centros industriales. Por ser una huelga lanzada desde la semiclandestinidad, que contó con el rechazo de la fracción sindical dialoguista, en medio de un clima represivo y de amenazas, con el grueso del activismo más duro y combativo muerto o desaparecido, y los dirigentes detenidos, consideramos que fue un éxito. Sin embargo, ese éxito que señalamos se ve con mayor claridad cuando lo insertamos en el conjunto del periodo, en el antes y después. El acatamiento afectó principalmente al cinturón industrial del Gran Buenos Aires, a las ciudades más importantes del interior del país y a fábricas como Celulosa Argentina, Chrysler, Santa Rosa, Mercedes Benz, Peugeot, Citroën y La Cantábrica. Las líneas Roca, Mitre y Sarmiento quedaron completamente paralizadas. El gobierno acusó el golpe, más allá de que no se consiguieran las reivindicaciones, laborales y políticas, que incluían la restitución del poder adquisitivo del salario, el restablecimiento de las convenciones

colectivas de trabajo, la normalización sindical y el rechazo a la reforma de las leyes de asociaciones profesionales y de obras sociales. La dictadura no pudo responder con la eliminación de los dirigentes y, ante la situación económica cada vez más crítica, “los 25” se consolidaron como articuladores de la oposición al régimen. Los sindicalistas que habían quedado detenidos antes del paro finalmente fueron liberados a los dos meses. La repercusión y condena internacional fue muy alta. Si bien la dictadura siguió con su programa a partir del lanzamiento de la nueva ley de asociaciones profesionales y la de obras sociales, lo cierto es que tuvo que hacerlo en medio de la recomposición de las estructuras tradicionales con muchos de los mismos viejos dirigentes a la cabeza. Esto implicó una traba insuperable, ya que la reorganización de los sindicatos se fue desarrollando mediante los viejos esquemas sin acatar la nueva ley. Esto tiene su razón central en el fracaso de la ofensiva de la dictadura en lo que hace a destruir las estructuras sindicales. El protagonismo de los viejos dirigentes (y otros nuevos) fue creciendo. Y avanzaron en medio de disputas entre las dos grandes tendencias por la reconstrucción de sus estructuras. En este sentido, también la “Jornada nacional de protesta” fue el fin del terror.

Reflexiones finales

El desarrollo del plan económico, la represión, la resistencia y los conflictos sindicales durante los cinco primeros años de la dictadura tienen un hito en la huelga nacional de “los 25”, que representó un salto cualitativo y cuantitativo. Fue un momento clave de nacionalización de la lucha sindical que a su vez arrastró e impulsó las demás acciones de resistencia desarrolladas en los variados ámbitos de la

vida social. Es el paso de la resistencia a una acción ofensiva que ya piensa con claridad el desplazamiento de la dictadura, aunque tuvo un nivel de radicalidad distinto (menos violento, menos “duro” en el discurso) que las etapas anteriores similares, en términos comparativos. Sin embargo, debemos destacar que las consecuencias del plan económico impulsieron una transformación de la estructura argentina de más largo plazo. Y eso llevó a cambios en los sectores más dinámicos del MO. Cambios que se irán profundizando con el paso de los años y serán la consecuencia de la continuidad del modelo indicado por la dictadura. Por ello, si consideramos que la resistencia del MO fue clave en frenar a la dictadura militar y en obligar a su retirada, eso no implica negar el “éxito” más genético de los cambios estructurales.

El 15 de noviembre la Junta Militar aprueba la ley 22.105 de asociaciones gremiales con la intención de adecuar el sindicalismo a un modelo de tipo chileno (Famá, 2017). Sin embargo, la reconstrucción del sindicalismo argentino se hizo sobre las bases tradicionales. Eso implicó una dura derrota para la política laboral de la dictadura, y una expresión del éxito de los sectores que habían apostado a resistir esa ofensiva. También implicó una lenta pero inexorable pérdida de espacio de los sectores dialoguistas.

Con posterioridad al 27 de abril, la organización del movimiento obrero en todos los niveles se recuperó más allá de la nueva legalidad sancionada por la dictadura, que prontamente fue quedando vacía. 1981 fue un año de ofensiva. Se conformó la CGT Brasil con Saúl Ubaldini como secretario general, en base a la experiencia de “los 25”. En torno a ella se aglutinaron y realizaron diversas actividades, paros locales y nacionales, y la primera gran manifestación pública por “paz, pan y trabajo” hacia la iglesia de San Cayetano, patrono del trabajo, donde se reclamó claramente contra el modelo económico, por la democracia y los DD.HH.

“Se va a acabar la dictadura militar” comenzó a resonar en las calles sin que los militares pudieran responder. Las actividades de sectores de DD.HH., empresariales, religiosos e intelectuales salieron a la luz. El “proceso” comenzó a estar acosado. A dos años del paro de abril de 1979, los nuevos paros generales serían masivos y contundentes, y la discusión ya se orientaba hacia el “fin de la dictadura”.

Bibliografía

- Basualdo, V. (2006). *La clase trabajadora durante la última dictadura militar argentina (1976-1983)*. En línea: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/dictadura-actitudes_basualdo.pdf>.
- Basualdo, E., Manzanelli, P. y Calvo, D. (2020). *Los grupos económicos locales durante el siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI*. Buenos Aires, Flasco.
- Caviasca, G. (2021). *Entrevista a Víctor de Genaro*, el 10 de agosto.
- Cedrón, A. y Blaustein, D. (2020). *Se va a acabar*. Largometraje.
- Chaves, G. (1983). *Las luchas sindicales contra el Proceso. Cinco años de resistencia*. Buenos Aires, La Causa.
- Delich, F. (1983). Desmovilización social, reestructuración obrera y cambio sindical. Waldman, P. y Garzón Valdés, N. (comps.), *El poder militar en la Argentina, 1976-1981*. Buenos Aires, Galena.
- Fernandez, A. (1985). *Las prácticas sociales del sindicalismo (1976-1982)*. Buenos Aires, CEAL.
- Iñigo Carrera, N. (2000). *La estrategia de la clase obrera, 1936*. Buenos Aires, Pimsa - LRB.
- Petras, J. (1981). El terror y la hidra: el resurgimiento de la clase trabajadora argentina. *Clase, estado y poder en el tercer mundo*. México, Fondo de Cultura Económica.
- Pozzi, P. (1988). *Oposición obrera a la dictadura (1976-1982)*. Buenos Aires, Contrapunto.

- Rapoport, M. (2006). *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003)*. Buenos Aires, Crítica.
- Salas, E. (2006). *La resistencia peronista*. Buenos Aires, Retórica - Altamira.
- Thompson, E. P. (1989). *La formación de la clase obrera en Inglaterra*. Barcelona, Crítica.
- Zorzoli, L. (2016). Operativo Ginebra. La dirigencia sindical ante la instalación internacional de la dictadura militar (1976). *Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda*, núm. 8, pp. 13-32. En línea: <<https://doi.org/10.46688/ah-moi.n8.144>>.

Capítulo 13

La huelga docente de 1988

De la huelga de los 43 días a la Marcha Blanca...

Martín Acri

Introducción

Al reconstruir la historia de los conflictos, luchas y huelgas docentes¹ —provinciales y/o nacionales—, es necesario considerar si tales situaciones fueron un fenómeno de presión espontáneo u organizado, que fue expresando la maduración de ciertas condiciones y posturas sindicales ante las autoridades escolares nacionales y/o jurisdiccionales. Cómo si tales acciones contribuyeron a fortalecer a las distintas organizaciones sindicales docentes, y si se lograron reconfigurar las relaciones de diálogo con los estados y/o si realmente se consiguieron los objetivos trazados antes del inicio del conflicto.

1 A lo largo del proceso organizativo sindical de la docencia Argentina, desde principios del siglo XX hasta nuestros días, la huelga se fue convirtiendo en una herramienta de lucha, en la que la interrupción colectiva de la actividad laboral de enseñar, por parte de maestras/os y profesoras/es de las escuelas estatales y en algunas oportunidades privadas, fue utilizada para ejercer presión a los estados provinciales y el nacional, con el objetivo de exigir ciertas demandas y conquistar determinadas reivindicaciones.

Para la Argentina de fines de la década de 1980, atravesada por una contante inflación de precios de los artículos de primera necesidad y la consecuente desvalorización del salario real docente, la educación no era una prioridad gubernamental. No era una labor de producción de bienes esenciales o servicios imprescindibles (por lo menos a corto o mediano plazo), en la que tras la feroz represión de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) se desarrolló un proceso organizativo en términos gremiales como sindicales. Los sucesivos reclamos docentes fueron parte de las luchas que se llevaron adelante en la ciudad de Buenos Aires como en todo el país, a lo largo del siglo XX. Una serie de esfuerzos organizativos, en materia sindical, motorizaron el debate público de sus planteos y acciones, logrando —en varias oportunidades— un amplio apoyo y solidaridad social a sus reivindicaciones y luchas. Esto se verá para el caso de la huelga de 1988.

En aquellos momentos de la década de 1980, la gradual expansión educativa, las problemáticas escolares existentes en cada escuela y sus debates en clave nacional y provincial, fue todo canalizado a partir de los constantes reclamos docentes por aumentos en el presupuesto y en los magros salarios que percibían. Junto a ello, la necesidad de que se lleve un plan de mejoras en la infraestructura edilicia, la distribución escolar de diferentes materiales pedagógicos y la creación de nuevas escuelas en todo el país. Además, era necesario el reconocimiento de sus labores pedagógicas, la creación de nuevos cargos y la posibilidad de jubilarse dignamente, tras décadas de trabajo.

La lucha por el mejoramiento salarial para docentes primarios y secundarios hizo que tales cuestiones sean parte de los reclamos en las distintas provincias. A esto se suman las propuestas sindicales de valoración de sus trayectos formativos, la antigüedad en los cargos, la jerarquía de los

mismos y la modalidad de cada institución escolar, a partir de la defensa del estatuto docente y la valorización y adecuada retribución de sus labores nacionales o provinciales según el mentado nomenclador salarial nacional.

Resulta necesario entonces dejar en claro que, en el plano político-social, el largo conflicto nacional de cuarenta y tres días, durante 1988, permitió hacer visible la problemática docente para la opinión pública, convirtiendo a la defensa de la educación pública y popular en la premisa fundamental para asegurar el cambio cultural que la sociedad argentina estaba reclamando tras la dictadura cívico-militar. Si bien la mayor transformación que produjo este histórico plan de lucha fue el cambio que generó en la conciencia de muchos/as docentes, que empezaron a considerarse verdaderos/as *trabajadores/as de la educación*, desterrando cada vez más la concepción de apóstol heredada del siglo XIX y la profesional de los sucesivos intentos de reforma desde la década de 1960.

Los antecedentes y el inicio de la huelga

En 1987, mientras el país estaba sumergido en una profunda crisis económica, la cuestión del salario se tornó cada vez más acuciante para el conjunto de la docencia. Aquel ciclo lectivo finalizó con maestros/as y profesores/as movilizados contra la fragmentación, la pérdida acelerada del poder adquisitivo del salario real, y un sistema educativo que empezaba a manifestar signos de una crisis que lo atravesaría de lleno a lo largo de la década siguiente. La docencia organizada sindicalmente en torno a la CTERA-Garcetti²

2 Este sector del sindicalismo de la CTERA estuvo coordinado por el mendocino Marcos Garcetti, referente de docentes que provenían del peronismo, el movimiento intransigente, los demócra-

realizó, el día 30 de noviembre de aquel año, una movilización a Plaza de Mayo bajo la consigna “así terminamos las clases, así no empezamos”. Ese mismo día, la Junta ejecutiva de CTERA hizo llegar una carta al presidente Raúl Alfonsín donde dejó en claro la particular situación social y educativa nacional, los problemas salariales y de inversión educativa (desfinanciamiento) que a diario se vivían en las distintas comunidades educativas del país. Siendo necesario promover:

La unificación efectiva del salario docente, a través de fondos de la coparticipación federal que financian el nomenclador salarial básico común, porque ello significará el punto de partida para un sistema educativo con criterio realmente nacional. (Carta CTERA, 1987)

A este contexto, se le debe sumar que el gobierno nacional se encontraba debilitado por la derrota en las elecciones legislativas, las constantes marchas opositoras nucleadas en torno a la CGT y los organismos de DD.HH., tanto por cuestiones salariales y reivindicativas, la política neoliberal que comenzaba a dar sus primeros pasos, y por el juicio y castigo a los culpables del “terrorismo de estado” en el país.

Al año siguiente, 1988, se desencadenó en torno a los reclamos docentes un largo conflicto sindical con tres ejes centrales: el establecimiento de un nomenclador básico común y la unificación del sueldo básico del maestro de grado; la implementación de un estatuto federal del trabajador

tas cristianas, los socialistas, no oficialistas y los independientes al oficialismo radical y el partido comunista, entre otros sectores políticos. En 1987, la Confederación se fracturó en torno a los sectores que conformaron la CTERA-Arizcuren y la CTERA-Garcetti. Esta última reconoció y contó con el apoyo del Sindicato Unificado de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), creado en 1986, y la mayor parte de los sindicatos docentes provinciales, la dirigencia de la CGT y el Partido Justicialista.

de la educación; y, finalmente, una ley federal de educación. Así lo recuerdan las maestras y dirigentes sindicales Angélica Graciano y Claudia Mario:

Se venía preparando el paro, el no inicio de clases, los que éramos delegados, teníamos que ir hablando con los compañeros, porque se venía gestando ya desde el año anterior, que quizás no empezamos las clases, pero nunca pensamos que iba a durar 42 días ni que íbamos a obtener el salario, la reivindicación que estábamos esperando, así que nos largamos sin pensar que íbamos a llegar a 42 días de conflicto y la consigna en ese momento era ir todos los días a las puertas de la escuela todos los días a hablar con los compañeros, si algún compañero se debilitaba convencerlo de que no entre porque en las reuniones se hablaba así. Luego de ahí nos íbamos a otras reuniones que se hacían en los clubes de [Nueva] Pompeya, en distintos lados, a resolver en plenario de todas las agrupaciones cómo sostener el conflicto a lo largo del tiempo porque se iba prolongando y desgastando. (Acri y Salvarrey, 2013: 2-3)

Fue un conflicto nacional, que en el caso de Capital fue muy sorprendente la respuesta que hubo ya que era siempre una jurisdicción muy difícil y CTERA no era algo conocida por los maestros comúnmente, no era como ahora, que todo el mundo dice CTERA y sabe de qué está hablando. Había que explicar todo. Políticamente fue un conflicto muy importante, todos los sindicatos de base nos desarrollamos, crecimos, afiliamos y sindicalizamos un montón. (Acri y Salvarrey, 2013: 1)

El conflicto comenzó con un paro por tiempo indeterminado, declarado por la CTERA-Garcetti, a partir del 14 de marzo, y se extendió por 42 días, teniendo su punto culminante en la “Marcha Blanca”: una contundente movilización el día 23 de mayo, que concentró a una multitud de docentes en el Obelisco. Las siguientes palabras de la docente y dirigente sindical Graciela Cingolani evidencian la importancia histórica de aquella jornada de lucha:

Fue de esas cosas que no se repiten, y si se repiten no se repiten de la misma manera, porque además son tiempos distintos. A nosotros nos tocó ir donde ahora está el Puente Pueyrredón. Ahí esperamos a los compañeros, fuimos muy temprano, hacía un frío bárbaro y estábamos ahí esperando, y de golpe ves que desde Avellaneda, por ese puente viejo venían una infinidad de guardapolvos blancos. Yo me emocione, y me emociono hoy. (Acri y Salvarrey, 2013: 2)

Bajo este clima de conflictividad social, a comienzos de febrero de aquel año, un congreso extraordinario de CTERA votó el paro por tiempo indeterminado, medida de fuerza que se inició “casi simultáneamente con la organización de la Asamblea de cierre del Congreso Pedagógico Nacional” (Migliavacca, 2006: 5). El día 16 de febrero, la Junta ejecutiva envió un documento a sus sindicatos de base, dirigido a los/as compañeros/as Secretarios/as Generales para convocarlos/as a una reunión a realizarse en la ciudad cordobesa de Embalse, los días 28 y 29 de ese mes, para debatir sobre la problemática educativa nacional, la actitud de los distintos gobiernos en cuanto a la participación gremial y popular, la necesidad de promover una ley nacional de educación y la importancia de debatir la política educativa nacional con miras a elaborar una contrapuesta que parta

de las y los trabajadores de la educación y sus problemáticas concretas. Se solicitó también la elaboración en cada provincia de un informe sobre el número de estudiantes en cada nivel y modalidad escolar, el promedio de alumnos/as por aula en cada jurisdicción, el número de docentes en cada nivel y modalidad, el número de establecimientos y condiciones edilicias, la cantidad de establecimientos privados o estatales y el número de escuelas que recibían subsidios del Estado. También la situación laboral y/o revista de los docentes: titulares, interinos, previsionales o suplentes; además, el porcentaje de deserción escolar por nivel y modalidad, el número de la población analfabeta existente, la provisión de material didáctico y mobiliario escolar, la información sobre planes de estudio y actualizaciones curriculares, y el número de los docentes en condición de jubilados en cada una de las jurisdicciones nacionales (Documento CTERA, 1988: 1).

Posteriormente, entre los días 7 y 8 de marzo, se llevó a cabo el V Congreso Extraordinario de CTERA, en el salón de actos Felipe Vállese de la CGT, bajo la advocación de la “Mujer Trabajadora”, donde se resolvió llevar adelante un plan de acción y una huelga por tiempo indeterminado en pos de las siguientes demandas:

Nomenclador básico común (NBC) y unificación del salario básico del maestro de grado, jornada simple en 770 australes, Estatuto Federal del Trabajador de la Educación, Ley Federal de Educación, usar los recursos en función de la unidad, [...] un proyecto educativo diferente para nuestro país, y por una transformación profunda del sistema educativo. (Garcetti, 1988: 1-3)

Días después, el 14 de marzo comenzó formalmente la huelga docente por tiempo indeterminado, con el aval del conjunto de la docencia en todo el país y la propia CGT, que

brindó de manera solidaria su apoyo moral y material al conflicto. El dirigente cervecero Saúl Ubaldini, por entonces secretario general de la CGT, fue el orador principal en varios de los actos convocados por la CTERA-Garcetti, como por ejemplo en el realizado ante unas treinta mil personas, el día 25 de ese mes.

La CTERA-Garcetti promovió una serie de acciones y asambleas docentes en las provincias, “declarando el estado de emergencia educativa en todo el país” (*Página/12*, 1988). Esto llevó a la CTERA-Arizcuren a tener que impulsar el paro con la exigencia un básico de 1.000 australes. El día 6 de marzo, este sector sindical emitió un comunicado de prensa donde dejó en claro la necesidad de que la docencia del país pueda jubilarse tras veinticinco años de trabajo escolar, sin límite de edad y con el 82% móvil, mejores condiciones de trabajo, pago de los días de paro y un sueldo básico de 1.000 australes más un nomenclador salarial docente nacional (Documento CTERA, 1988).

Por otro lado, las negociaciones con el gobierno nacional, en la comisión de política salarial y con los gobiernos provinciales, permitieron a la CTERA coordinar las negociaciones y la lucha por las reivindicaciones docentes, proponiéndose incluso la posible realización de un congreso reunificador del gremio, según el diario *Clarín*. (1988). El paro se cumplió con un gran acatamiento en todo el país, aún por los/as docentes no sindicalizados/as, privados/as y de otros sindicatos tradicionalmente enfrentados a la CTERA, como la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que inició el ciclo lectivo con un paro de cuarenta y ocho horas (*Página/12*, 1988). La huelga también se extendió con el correr de los días a las universidades, con el impulso de la Confederación de Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

La huelga docente posibilitó en varias jurisdicciones del país que los sindicatos de base de CTERA aceleren sus procesos de unificación provincial: en La Pampa se unificaron en torno a la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPA), en tanto la Asociación Correntina decidió no iniciar el paro, pues había negociado por su cuenta con el gobierno provincial; pero un sector interno impulsó el cumplimiento del paro, con el apoyo de la dirigente nacional Mary Sánchez que viajó a la provincia. A partir de esta situación, la Asociación Correntina fue sancionada y posteriormente expulsada de la Confederación, en tanto que del grupo de docentes que convocaron a la huelga nació el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO).

Debe mencionarse que, al poco tiempo de iniciarse el conflicto, el sector de Arizcuren se fue desgranando: los sindicatos donde tenía influencia el PC —la AMP de La Rioja, la UMP, la Asociación de Docentes de Educación Física (ADEF) y la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS) de la ciudad de Buenos Aires— abandonaron sus filas, aunque no todos volvieron a integrar la CTERA, como en el caso de ADEMYS. La huelga fue adquiriendo una visibilidad social y mediática sin precedentes, logrando la adhesión mayoritaria de la docencia en todo el país. Las movilizaciones que se llevaron adelante permitieron

encolumnar a todo los sectores docentes detrás de la conducción, pero también era una clara demostración de fuerzas al gobierno. Cada manifestación que se realizaba contaba con una considerable participación de maestros, pero además recibía el apoyo de diferentes sectores sociales y políticos que legitimaban la medida. (Glaz, 2002: 42)

El desarrollo de la huelga cobró resonancia con el paso de las semanas y quedó atravesado por la cuestión partidaria en las diferentes jurisdicciones, donde la confrontación entre los sindicatos docentes y el gobierno nacional “alineó la actitud de los gobernadores: los que apoyaban el gobierno de Alfonsín comenzaron a descontar los días de paro, el resto no (y algunos hasta *‘simpatizaban’* con el reclamo)” (Vázquez, 2005: 28-29).

El alto acatamiento docente a la huelga demandó la intervención del presidente Alfonsín, pero la CTERA-Garcetti rechazó las presiones y sus sindicatos de base, sobre todo en las provincias con gobernadores justicialistas, lograron acatar las medidas resueltas a principios de marzo y no se realizaron acuerdos provinciales que hubieran posibilitado la fragmentación de la lucha. Además, desde el día 21 de marzo los y las docentes de secundario se plegaron a la medida de fuerza por tiempo indeterminado y, junto a docentes y estudiantes universitarios nucleados en la FUA, se plegaron solidariamente a la lucha docente nacional (*Clarín*, 1988).

A fines de aquel atribulado mes de marzo, el día 30, la CTERA-Garcetti rechazó el ofrecimiento salarial que hizo llegar el gobierno nacional por considerarlo insuficiente y ratificó el paro por tiempo indeterminado. El día 7 de abril, en la cancha del club Atlanta, se realizó un festival denominado “Canto solidario: CTERA triunfará”, donde actuaron el Cuarteto Zupay, Litto Nebbia, Jorge Marziali y Teresa Parodi, que alentó a la docencia a continuar la lucha.

Nueve días después, y a un mes de haberse iniciado el conflicto, el gobierno nacional declaró la conciliación obligatoria, acatada en un principio, pero, como las negociaciones fueron infructuosas, vencido su plazo legal, la CTERA-Garcetti retomó el paro el día 19 de mayo, más allá del irritante e inconstitucional descuento salarial en cinco jurisdicciones (las gobernadas por el radicalismo): Córdoba,

Capital Federal, Río Negro, Tierra del Fuego y Corrientes. Pero debe destacarse que la docencia nacional siguió sosteniendo la lucha, gracias a la acción de distintas medidas organizativas. Como señalaron el entonces dirigente y secretario general de la Unión de Maestros Primarios, Carlos Rico Alcázar, y la dirigente y maestra Eloísa Barreiro:

Las y los maestros concurríamos a las escuelas para trabajar el tema de la solidaridad en la red territorial de las mismas, y además en algunas escuelas del distrito escolar, en alguna plaza, en alguna avenida o puntos de concentración, se hacían reuniones, marchas y demás. Y después se coordinaban distintas acciones en el orden nacional y regional. (Acri y Salvarrey, 2013: 8-9)

El año 87/88 fue una año muy movilizante por los conflictos y las asambleas docentes que se dieron en todo el país. A mí me tocó militar el conflicto en el norte (Tucumán, Salta y Jujuy) al ser de capital y de la UMP, pero en esos momentos por estar en la CTERA estuve en el norte del país. (Acri y Salvarrey, 2013: 2)

La Marcha Blanca

Al hablar de la Marcha Blanca es innegable recordar las palabras de la dirigente sindical Cecilia Martínez (2021):

Hablar de la Marcha Blanca es inevitablemente revivir la emoción infinita de haber sido constructores todos los docentes del país, cado uno desde su lugar, fundamentalmente desde cada escuela de una gesta histórica de la docencia y junto con la Carpa Blanca

fueron los dos hitos fundamentales de la lucha docente a nivel nacional.

Desde los primeros días de marzo, la docencia fue protagonizando una gesta histórica de lucha y defensa de la escuela pública, junto con amplios sectores de nuestro pueblo. Tras la reanudación del conflicto, el día 18 de mayo, desde el norte, el sur y el oeste del país partieron distintas columnas de docentes que convergieron en la ciudad de Buenos Aires; y el día 23 de mayo, con un acto en el Obelisco, lugar en el que miles y miles de trabajadoras y trabajadores de la educación de todo el país llenaron varias cuadras de la avenida 9 de Julio. La Plaza de Mayo, histórico lugar de concentración de las luchas de nuestro pueblo trabajador, permaneció cercada y cerrada por las fuerzas de seguridad (Balduzzi, González y Vázquez, 2003: 36).

Aquella jornada de movilización marcó un antes y un después en la conciencia de docentes de todo el país, al sentir y reflexionar masivamente que eran trabajadoras y trabajadores capaces de organizarse, reclamar por sus derechos y la educación en general. Es innegable que la lucha docente se vivió a lo largo y ancho del país, hasta confluir en las calles de la ciudad de Buenos Aires, pues como enfatizó la docente entrerriana Ana Lucca, para miles de maestras/os y profesoras/es de ambos sexos que vinieron del interior todo era nuevo:

No sabíamos si nos perderíamos al marchar, si sufriríamos algún daño, pero seguíamos y guardábamos entre mate y mate el miedo, para que no se viera. Ya en Buenos Aires nos encontramos con la columna en la que estaban los compañeros de otros lugares de Entre Ríos haciendo cordón para la multitud que entraba desde Rosario; “*Siga, siga, siga el baile. Al compás del*

tamboril. Que el pueblo se c... de hambre. De la mano de Alfonsín". Este fue nuestro primer canto político gremial, nunca antes habíamos nombrado al gobierno o a sus funcionarios. En los pueblos no se usaba demasiado; estábamos inaugurando el cancionero que seguiría años después con: "*Traigan al gorila musulmán...*" (2008: 7)

Según recuerdan sus protagonistas, durante cinco días de caminatas que atravesaron pueblos y ciudades, las y los docentes fueron recibidos por miles de argentinos/as que les expresaban su solidaridad y su afecto, sumándose a sus cantos y comidas comunitarias, en las fiestas en las plazas, en los bailes populares, en los fuegos artificiales y en las incontables veces que se escuchaba: "si son maestras/os pasen, no les cobramos". A pie, en ómnibus, en trenes y en el reconocimiento de que la gesta de aquellas/os docentes hizo posible pensar y vivir la importancia de luchar para recuperar la dignidad de la vida y la alegría de enseñar y aprender. Aquella fue sin dudas una movilización que, además, permanecerá en la memoria colectiva como un punto de inflexión para los procesos de lucha del sindicalismo docente argentino.

De esta manera, la Marcha Blanca cosechó a su paso la adhesión e importantes muestras de solidaridad por parte de la comunidad, en un contexto donde "las luchas de los docentes se transformaron en luchas públicas, ocupan las calles, rompen los límites sectoriales porque son comprendidas (y apoyadas) por el ciudadano común, por otros trabajadores" (Vázquez, 2005: 30). Fue la huelga, la organización sindical y la lucha lo que permitió al colectivo docente alcanzar ciertas conquistas parciales, que abrieron un intenso debate hacia el interior de la CTERA-Garcetti, que finalmente terminó levantando el paro.

De hecho, dicha decisión puso fin a la huelga y permitió el predominio del sector sindical conducido por Garcetti, mientras que el sector que respondía a Arizcuren se terminó de desgranar y desarticular de forma progresiva en el transcurso de ese mismo año. Un tiempo después, se logró realizar la reunificación de la Confederación de cara a futuros congresos y definiciones organizativas, que perduran en dicha confederación hasta nuestros días. Como sostuvo la maestra y dirigente Stella Maldonado:

La Marcha Blanca como la Carpa Blanca son acontecimientos de una densidad política y social tan contundente que sirvieron para abrir espacios y tiempos diferentes en los que nuestra organización, la CTERA, ganó presencia política como actor insoslayable en materia de discusión de las políticas educativas, disputándole el sentido de la educación al modelo del neoliberalismo. (2008: 1)

Al día siguiente del cierre de la Marcha Blanca, el 24, se realizó un congreso de la CTERA-Garcetti donde se debatió que, si bien no se habían conseguido todas las reivindicaciones y seguía vigente el espinoso tema de los descuentos salariales realizados por algunas jurisdicciones, se resolvió levantar la medida de fuerza. En simultáneo, el congreso nacional sancionó un paquete impositivo para proveer un mayor financiamiento a la educación y estuvo presente la expectativa por lograr la sanción de una ley de paritaria docente, impulsada por el diputado Carlos Auyero, finalmente sancionada.

El levantamiento del paro provocó grandes discusiones y debates: los sectores vinculados con la izquierda (Partido Comunista, Movimiento al Socialismo y el Partido Obrero), que desde ese momento se convirtieron en algunos de los

principales sectores de oposición en CTERA, condenaron el levantamiento de la medida por considerarla una demostración del espíritu de “conciliación” propio de un sindicalismo burocrático. La conducción de CTERA, por el contrario, consideró que al unificarse la lucha nacional —más allá de los resultados obtenidos— se logró la mirada y la atención pública nacional sobre los reclamos docentes y los cambios educativos que debían llevarse adelante. Fue una lucha que posibilitó el encuentro fraterno de docentes de todo el país en una causa común, en una lucha solidaria que permitió lograr un sentido de la conciencia gremial como nunca antes en la historia docente del país.

Consideraciones finales

Uno de los resultados positivos de la huelga docente de 1988 y la Marcha Blanca fue que la opinión pública tomó un real conocimiento de la problemática docente, dado que los salarios de las escuelas nacionales eran bajísimos, al punto que dicha huelga fue conocida como la huelga de los cien dólares, valor que se pedía de salario para un cargo de maestra/o o cargo testigo. Es cierto que el valor del dólar era otra cosa con respecto a la actualidad, pero así lo entendieron todos/as los/as docentes del país, en un contexto de inflación galopante y pérdida diaria del valor adquisitivo del salario real.

La educación pública y popular se constituyó en una de las premisas fundamentales para asegurar el cambio cultural de la sociedad argentina tras la dictadura cívico-militar. Aunque se puso en el centro la cuestión educativa, en varias provincias los descuentos por los cuarenta y dos días de paro pudieron ser reintegrados. Se logró también la creación de un nomenclador básico común y la unificación

salarial en 21 de las 24 jurisdicciones, la aprobación de la Ley de Paritaria Docente y la irrupción masiva de los docentes en las luchas populares para defender la educación pública, la posibilidad de acceder a condiciones dignas de trabajo y mejores condiciones de vida. También, la necesidad social de luchar por la construcción de una sociedad más igualitaria y justa en términos económicos y político-sociales. Contaron aquellas/os trabajadoras/es de la educación con un fuerte apoyo social, como también del sindicalismo organizado del país.

Otro de los resultados de aquellos días de lucha y eferescencia docente fue que gran parte de las y los docentes argentinas/os comprendieron que como trabajadoras/es de la educación, en cada lucha, en cada movilización y en cada huelga, “no se dejaba de enseñar”, sino que “enseñaba a luchar” por un trabajo más digno y una sociedad más justa, igualitaria y democrática.

Al mismo tiempo, el sector sindical encabezado por el docente mendocino Marcos Garcetti al frente de la CTERA logró parte de los reclamos, consolidó su posición organizativa e interpretó que la huelga y la Marcha Blanca fueron centrales para la modificación en la conciencia de las y los trabajadores de la educación, que pasarían de una conciencia profesionalista y vocacionista a una que hace eje en su identificación como “trabajador/a de la educación”. A su vez, la CTERA, junto a sus sindicatos de base, logró consolidar una organización sindical sobre el conjunto de la docencia nacional, y articular acciones de lucha junto a otras organizaciones sindicales provinciales y nacionales de otras actividades económicas. Además, como sostuvo Marcos Garcetti, durante aquellos cuarenta y dos días de paro:

La vorágine interminable de asambleas, reuniones, audiencias y anécdotas heroicas atravesando el país de

sur a norte y de este a oeste, fueron el soporte moral, gremial y político necesario para construir los cuatro rumbos cardinales que conducirían victoriosamente a la Marcha Blanca. (Garcetti, 2008: 3)

Por otro lado, la posterior reforma del estatuto de la CTERA, votada por el congreso de la entidad, que se llevó a cabo en Mendoza en octubre de 1988, terminó de convalidar el rumbo político y sindical de la lista Celeste, que había cobrado fuerza en los años previos y que expresó el proyecto sindical de la mayoría docente del país:

Un sindicato único por provincia, uno por la Capital Federal y uno para los docentes que dependían del Ministerio de Educación de la Nación; superación de la organización por ramas con un nuevo diagrama de Junta Ejecutiva elegida por lista completa; y ratificación de una nueva forma de representación. (Balduzzi, González y Vázquez, 2003: 36)

Así, tras la realización de aquel congreso, se estableció la reforma del estatuto de la CTERA, con lo que se asienta la idea de tener un sindicato único por jurisdicción provincial y uno para los docentes que dependían del Ministerio de Educación nacional: el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Nacionales (SUTEN). Una medida que propuso superar la organización por ramas con un nuevo diagrama de la Junta ejecutiva elegida por lista completa, ratificándose una nueva forma de representación sindical. Una decisión que culminó, además, con una antigua disputa que desde la creación de la CTERA había enfrentado a sus sectores internos en una áspera disputa sindical, que había llevado incluso a su fractura en varias oportunidades. También se acordó que el día 23 de mayo sea recordado

como el “Día del Trabajador/a de la Educación”, y se debatió la necesidad de creación de una Escuela de Capacitación Sindical y un sistema integrado de salud para docentes, iniciativas que años más tarde se concretaron en el marco de la lucha contra las reformas neoliberales que las políticas educativas menemistas irían imponiéndose desde 1989.

Acto seguido, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación de Maestros de Educación Técnica (AMET) se retiraron de la CTERA, constituyendo un nuevo intento por fracturar la organización nacional de los docentes, creando una nueva federación nacional. Una maniobra que contó con la complicidad del ministro radical Ideler Tonelli, y posteriormente del gobierno menemista. Cabe aclarar que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Nacional (SUTEN), cuya creación influyó sobre el alejamiento de la UDA y de AMET, tuvo no obstante una existencia efímera, dado que en 1992 se inició la transferencia a las provincias y la ciudad de Buenos Aires de los establecimientos de nivel medio y superior de jurisdicción nacional, lo cual vino a completar el proceso de descentralización y fragmentación educativa que las clases dominantes habían proyectado desde la segunda mitad del siglo XX.

Bibliografía

Balduzzi, J., González, H. y Vázquez, S. (2003). Suplemento especial: 30 años de lucha y compromiso. *Canto Maestro*. Buenos Aires, CTERA.

Garcetti, M. (1988). Hacia un nuevo movimiento gremial. *Balance Político Gremial*, V Congreso de CTERA, 7 y 8 de octubre. Buenos Aires.

_____. (2008). Marcha Blanca: 20 años. *Canto Maestro*, núm. 15. Buenos Aires, CTERA-CTA.

- Glaz, E. (2002). *La huelga blanca*. Tesina de licenciatura. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En línea: <<http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.507/te.507.pdf>>.
- Lucca, A. (2008). Desde el interior. *Marcha Blanca: 20 años. Canto Maestro*, núm. 15. Buenos Aires, CTERA-CTA.
- Maldonado, S. (2008). Se hace camino al marchar. *Marcha Blanca: 20 años. Canto Maestro*, núm. 15. Buenos Aires, CTERA-CTA.
- Martínez, C. (2021). *33 años de la histórica Marcha Blanca*. Video. Buenos Aires, SUTEBA. En línea: <<https://www.suteba.org.ar/23-de-mayo-de-1988-la-marcha-blanca-16376.html>>.
- Migliavacca, A. (2006). La huelga de 1988: una aproximación desde la perspectiva de los docentes autoconvocados. *XIV Jornadas Argentinas de Historia de la Educación*, 9-11 de agosto. La Plata. En línea: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.13238/ev.13238.pdf>.
- Vázquez, S. (2005). *Luchas político educativas: el lugar de los sindicatos docentes*. Buenos Aires, CTERA. En línea: <https://ctera.org.ar/index.php/educacion/investigacion/item/download/255_a5ee432fc8cdf1881f930f6d532fcf69>.

Documentos y entrevistas

- CTERA (1987). *Carta dirigida al presidente Raúl R. Alfonsín por la Junta Ejecutiva*, 30 de noviembre. Buenos Aires.
- _____ (1988a). *A los compañeros Secretarios Generales*. Buenos Aires.
- _____ (1988b). *Comunicado de prensa*, 6 de marzo. Buenos Aires.
- _____ (1988c). Culminará hoy la Marcha Blanca. *Clarín*, 23-5-1988. Buenos Aires.
- _____ (1988d). Docentes, un final a toda orquesta. *Página/12*, 24-5-1988. Buenos Aires.
- _____ (1988e). La CTERA-Garcetti declaró una emergencia educativa. *Página/12*, 1-3-1988. Buenos Aires.
- _____ (1988f). La FEB también está de paro. *Página/12*, 12-3-1988. Buenos Aires.
- _____ (1988g). Peligra el inicio de clases. *Clarín*, 8-3-1988. Buenos Aires.

_____ (1988h). Profesores secundarios se suman al paro del magisterio. *Clarín*, 21-3-1988. Buenos Aires.

Acri, M. y Salvarrey, L. (2013a). *Entrevista a la compañera Angélica Graciano*. Buenos Aires, UTE-CTERA-CTA.

_____ (2013b). *Entrevista a la compañera Claudia Mario*. Buenos Aires, UTE-CTERA-CTA.

_____ (2013c). *Entrevista a la compañera Eloísa Barreiro*. Buenos Aires, UTE-CTERA-CTA.

_____ (2013d). *Entrevista a la compañera Graciela Cingolani*. Buenos Aires, UTE-CTERA-CTA.

_____ (2013e). *Entrevista al compañero Carlos Rico Alcázar*. Buenos Aires, UTE-CTERA-CTA.

Capítulo 14

Tres insurrecciones

La insurrección espontánea de diciembre de 2001

María Celia Cotarelo

Veinte años después, los hechos ocurridos en diciembre de 2001 siguen presentes en la memoria colectiva y son visualizados como un hito en el proceso de luchas sociales y políticas de nuestro país.

Tanto en ámbitos académicos como políticos existe coincidencia en afirmar que los hechos que precipitaron la caída del gobierno de Fernando de la Rúa fueron el punto culminante de un proceso de rebelión, aún no superado en el período. Pero hay diferencias en cuanto a su interpretación. Una de las interpretaciones es que se trató de un complot o de un golpe de Estado, motorizado desde el Partido Justicialista (PJ) y en particular, por el PJ bonaerense encabezado por Eduardo Duhalde. En esas miradas prima la observación de las disputas en la cúpula del poder y entre sus cuadros políticos y la manipulación que harían de los pobres. Fue la versión sostenida por el gobierno de la Alianza Unión Cívica Radical (UCR) - Frente País Solidario (Frepaaso).¹ Esto fue así, pero se trata solo de una parte del

1 Un año después, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo afirmaba que "el golpe institucional

hecho. La lucha interburguesa se entrelazó con la lucha popular, que se venía desarrollando en un proceso iniciado en 1993 —desde el motín de Santiago del Estero (el llamado “Santiagazo”); y en cuanto a la “manipulación”, esta es vista en relación con la extensión de los saqueos y nada se dice acerca de una posible “creación de clima” con respecto al cacerolazo del día 19;² finalmente, la mera “manipulación” o “creación de clima” no tiene efecto si no hay condiciones para que prospere, por lo que no tiene fuerza explicativa por sí misma.

Otros análisis ponen el acento en la lucha popular, en general dejando de lado el papel que jugaron las disputas interburgueas, así como los elementos que hacían a la preservación del régimen mismo; entre los nombres más frecuentes para referirse al hecho se encuentran los de “rebelión popular”, “Argentinazo” o “insurrección

que planearon Duhalde, Alfonsín, algunos dirigentes de la Unión Industrial y de otras corporaciones y que fue ejecutado el 19 y 20 de diciembre del año pasado por grupos violentos, siempre dispuestos a promover el caos, ha destruido el Estado de Derecho [...]. Los que organizaron esta campaña tenían objetivos bien claros: recomprar sus deudas a un pequeño porcentaje de su valor, con los capitales que previamente habían sacado del país” (*Crónica*, 2-12-2002). De la Rúa afirmó que “estos graves hechos se presentaron como un espontáneo estallido social pero tras ellos habría existido una incitación organizada para precipitar la crisis” (*Crónica*, 7-4-2002), y que “había intereses políticos y económicos conjurados, ansiosos por imponer la devaluación y la pesificación” (*La Nación*, 17-7-2003). Acusó, entre otros, a los sindicalistas Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, los políticos bonaerenses Leopoldo Moreau y Federico Storani (UCR), el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, *Crónica* TV y Radio 10, el jefe de gobierno de Buenos Aires Aníbal Ibarra, el presidente de la UIA Ignacio de Mendiguren, el presidente de la CAME Osvaldo Cornide, Eduardo Duhalde, Elisa Carrió, el intendente de Moreno Mariano West y Luis D’Elía.

- 2 La ex ministra Patricia Bullrich afirmó que “los cacerolazos del 19 y 20 fueron una expresión genuina” pero expresó su duda de “si no hubo una incitación a los saqueos” (*La Nación*, 16-4-2002). No se registra la invitación realizada unos meses antes desde el diario *La Nación* a que amas de casa “recorran nuestras avenidas, las plazas de provincia, se encuentren en la Plaza de Mayo, armadas de cacerolas, y clamen para que en toda nuestra vasta República vuelvan el orden y la paz, la seguridad, se castigue lo que hoy goza de impunidad, contemos con una fuerza de orden que cuente con las debidas instrucciones para protegernos y defendernos como en todo país civilizado” (Helbling, 2001).

destituyente”. El primero de los términos nos resulta demasiado general, ya que utilizamos el concepto de “rebelión” para referirnos a toda manifestación de protesta o de lucha contra el orden de cosas vigente; en lo que respecta a “argentínazo”, consideramos que tiene importancia política ya que lo constituye en amalgama ideológica y, a la vez, ariete ideológico de una fuerza popular: permite entroncar los hechos presentes con uno de los momentos más altos de las luchas de masas de nuestra historia reciente, al evocar los rasgos de combate callejero vinculándolos con los *azos* de 1969 y primeros años de los setenta y señala la forma nacional que toma el hecho. Pero carece de universalidad, ya que refiere solo a Argentina, y remite al sufijo *-azo*, utilizado sin precisión para denominar hechos que tienen en común el rasgo de las acciones callejeras pero que son muy distintos entre sí, si se atiende a los intereses presentes en ellos, sus protagonistas y los procesos históricos de los que forman parte. El nombre de “insurrección destituyente” presenta la debilidad de recortar el análisis: parece difícil poder encontrar alguna acción que en la misma medida en que destituye representaciones, no instituya otras, o dicho en términos más generales, no se destruyen relaciones sociales sin construir otras. En este sentido, debería analizarse qué relación existe entre los hechos de diciembre de 2001 y el desarrollo posterior del proceso histórico en el campo de las relaciones políticas y, más específicamente, con el desenlace en términos de qué alianza social ocupó el gobierno en Argentina entre 2003 y 2015.

Algunos de los rasgos que han sido destacados como una virtud por algunos autores y militantes, en particular aquellos que abrevan en el autonomismo, es la falta de una conducción política en el hecho, así como también la dispersión en las acciones, su alto grado de espontaneidad y el protagonismo de trabajadores desocupados y pobres,

junto con sectores de las clases medias. Más allá de la dudosa virtud de la carencia, lo que observan esos autores es solo una parte del conjunto de hechos que constituyeron el enfrentamiento.

A la vez, suele realizarse un recorte del hecho, reduciéndolo a alguno de los elementos que lo componen —cacerolazo, saqueos— o limitándolo temporalmente a los días 19 y 20.

En otros trabajos³ hemos presentado un relato pormenorizado de las acciones, así como un análisis de las mismas, llegando a una conceptualización del hecho en su conjunto. Aquí nos limitamos a exponer una síntesis, comenzando por un breve relato de lo sucedido desde comienzos de diciembre de 2001 hasta terminar con la presentación de los atributos que nos llevaron a conceptualizar el hecho como insurrección espontánea.

Hacia la insurrección: los últimos días del gobierno de la Alianza

Hacia fines de 2001, el régimen de la convertibilidad peso-dólar establecido por el ministro Domingo Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem en 1991 se encontraba en una crisis terminal. Dejaba un tendal de desocupados y pobres, proliferación de cuasimonedas, crecimiento de la deuda externa y de la fuga de capitales, de la mano de planes de ajustes impuestos y acordados con el Fondo Monetario Internacional. La crisis económica y social había llevado también a una profunda crisis de representación política, evidenciada en las elecciones legislativas de octubre de 2001,

3 Lo que presentamos aquí es una síntesis de lo ya expuesto (Cotarelo, 2016), que, a la vez, se basa en otros trabajos (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2004 y 2006), a los que remitimos para una descripción minuciosa.

en las que se registró un alto porcentaje de votos nulos (“voto bronca”) y en blanco. A la vez, la cantidad de acciones de rebelión de trabajadores y otros sectores del pueblo se había incrementado fuertemente en los años 2000 y 2001.

A comienzos de diciembre de 2001, ante el anuncio del ministro Cavallo⁴ acerca del límite de 250 pesos por semana para el retiro de dinero de los bancos —incluyendo el dinero depositado en las cuentas sueldo y en las de los planes sociales— desde comienzos de diciembre a fin de frenar la corrida bancaria (el llamado “corralito”), la Confederación General del Trabajo (CGT) conducida por Hugo Moyano se declaró en estado de alerta y emitió un comunicado que decía que

el gobierno de Fernando De la Rúa, Cavallo y el FMI confiscó virtualmente los salarios y los depósitos de todos los argentinos, transformándolos en rehenes de la banca usuraria. Los trabajadores no vamos a quedarnos cruzados de brazos frente a este robo y frente a esta virtual liquidación de la Nación. La dolarización es la última etapa de la denigración nacional y el inicio de una etapa colonial para quienes defendemos la libertad, la democracia, el trabajo, la dignidad y la identidad nacional. La confiscación a favor de los bancos transforma la usura financiera en beneficiaria del esfuerzo de los argentinos, cuando ha sido esta verdadera dictadura financiera que viene asolando a la Argentina la que ha succionado la riqueza del país hasta llevarnos a una desesperante situación. [La central sindical llamó a] todos los sectores gremiales, empresarios, sociales, profesionales y a la Iglesia Católica y a los demás creídos para que salgan en defensa de esta tierra antes de que sea demasiado tarde. (*Clarín*, 2-12-2001)

4 Cavallo asumió nuevamente el cargo de ministro de Economía en marzo de 2001.

Mientras algunos dirigentes de esa central sindical, entre ellos Moyano, proponían una huelga general por treinta y seis horas con toma de edificios públicos —o al menos con una movilización al Congreso o a la Plaza de Mayo—, otros se opusieron a una medida “tan extrema” y se inclinaron por una huelga por veinticuatro horas en coincidencia con la CGT conducida por Rodolfo Daer. Esta se expresó su oposición a cualquier intento de dolarización o devaluación del peso y se pronunció en contra de nuevos ajustes que implicaran un recorte en los salarios y en las jubilaciones, y coincidió con los empresarios del Grupo Productivo (formado por la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y Confederaciones Rurales Argentinas) al reclamar la concreción de un gran acuerdo nacional que sirviera para consensuar las medidas prioritarias que se necesitaban para salir de la crisis. La central sindical y las organizaciones empresarias emitieron un documento conjunto contra la dolarización:

Más allá de las obvias razones de autonomía y dignidad nacional, significaría privarnos para siempre de instrumentos esenciales de política económica. Abandonaríamos definitivamente la posibilidad de tener política monetaria. La Argentina pasaría a importar definitivamente y pasivamente la política monetaria de los EEUU y a depender de su fase del ciclo económico y de su aumento de productividad. Consolidaría los actuales altos niveles tarifarios de los servicios públicos monopólicos e implicaría un dramático ajuste de los gastos esenciales del Estado, desprotegiendo a los más débiles. (*Clarín*, 9-12-2001)

La CGT Daer amenazó con una huelga general de veinticuatro horas, aunque aclaró que “la medida no se concretará

antes del 10 de diciembre porque a partir de esa fecha habrá una nueva correlación de fuerzas donde el justicialismo presidirá las cámaras de diputados y senadores” (*Crónica*, 5-12-2001).

Finalmente, el 5 de diciembre ambas CGT convocaron a una huelga general para el día 13 en reclamo de la libre disponibilidad de los salarios y la restitución del sistema de asignaciones familiares anterior al vigente en ese momento. Resulta notable que en medio de la situación de crisis aguda en que se encontraba la sociedad, el presidente De la Rúa seguía afirmando que la convocatoria a una huelga general le resultaba “incomprensible”: “Son incomprensibles estos paros que se convocan sin fundamento sindical real y que la gente rechaza, pero tienen un efecto negativo sobre la economía y se lo agregan a las tensiones existentes” (*Clarín*, 13-12-2001). El dirigente de los empleados de comercio, Armando Cavalieri, dijo que la renuncia de Cavallo permitiría una convocatoria de todos los sectores para la formulación de un nuevo plan económico e insistió con su propuesta de una devaluación moderada para mejorar el tipo de cambio. Por su parte, Moyano convocó a una movilización al Congreso Nacional el 12, día anterior a la huelga general, en que se reclamaría la derogación de los “superpoderes” de Cavallo e hizo un llamado a la sociedad y en especial a los pequeños y medianos comerciantes, a los empresarios, a los profesionales y a los estudiantes. La CGT Daer no apoyó la marcha por entender que la medida podría ser tildada de “política” y porque temían que derivara en hechos de violencia.

El día 7 la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) convocó también a una huelga general para el mismo día 13 con marchas en el interior del país y a una concentración frente al Ministerio de Economía para acompañar los reclamos de los trabajadores de la Asociación de Trabajadores

del Estado (ATE) contra los ajustes y los despidos en la administración pública. A la vez, el Frente Nacional contra la Pobreza, por el Trabajo y la Producción, y en particular la CTA, seguían con los preparativos finales para la realización de una consulta popular por un seguro de empleo y formación para jefes o jefas de hogar desocupados. Se votaría en las puertas de fábricas, oficinas, supermercados, iglesias y escuelas y en barrios de todo el país entre el 13 y el 15 de diciembre. No contaban con un soporte institucional para la consulta por parte del Congreso Nacional pero sí en algunas legislaturas provinciales y municipalidades.⁵ Las alternativas de financiamiento del seguro propuestas eran una mayor recaudación impositiva, al volcarse al consumo el dinero del seguro y las asignaciones, restitución de aportes patronales a grandes contribuyentes, reasignación de planes sociales, mayor presión impositiva a consumos suntuarios, quita de exenciones al impuesto a ganancias y rentas y modificaciones al régimen de las Administraciones de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Asimismo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) convocó a un apagón de protesta, acompañado de bocinazos y cacerolazos, para el día 12 en defensa de las pymes como fuentes de trabajo y para reclamar urgentes medidas que impidieran el cierre masivo de establecimientos y evitar así mayor recesión y desocupación. Recibieron el apoyo de la Federación Económica de Buenos Aires.

Varias organizaciones de izquierda proponían la realización de una huelga general desde unas semanas antes. Por ejemplo, a fines de noviembre el Partido Obrero afirmaba que era

5 Contaban con el apoyo de la gobernación de Santa Cruz, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, las cámaras de diputados de 5 provincias, 22 intendencias y 25 concejos deliberantes.

necesario reunir en un frente político al movimiento piquetero; a los partidos de izquierda que se movilizan para echar a De la Rúa-Cavallo; a las organizaciones de desocupados; a las centrales sindicales de Córdoba que marchan contra De la Sota; a Foetra de Buenos Aires y Rosario que luchan contra la rebaja salarial; a los trabajadores y jubilados del Pami; a los centros de estudiantes ganados a Franja Morada; y es necesario llamar a todas las organizaciones populares, para emprender una movilización política y la huelga general para que el gobierno nacional y los de las provincias pasen a manos de asambleas populares constituyentes, que repudien el pago de la deuda externa y reestructuren al país sobre nuevas bases sociales. (*Prensa Obrera*, 29-11-2001)

También el PTS hablaba de la necesidad de una huelga general; para ello proponía una Asamblea Nacional Piquetera

con un delegado cada 20, tanto desocupados como ocupados. Ésa sería la mejor manera de exigir y obligar a las grandes centrales de masas a romper la tregua sindical y llamar a un paro general con cortes de ruta para que los trabajadores y el pueblo irruman en la escena de la crisis nacional. (*La Verdad Obrera*, 28-11-2001)

En noviembre el MAS convocaba a la “más amplia movilización popular” para enfrentar y derrotar “el nuevo paquete económico y el déficit cero”, bajo las consignas “¡Fuera Cavallo-De la Rúa!” y “¡Por un gobierno de los trabajadores!” (*Socialismo o Barbarie*, agosto/septiembre de 2001).

Durante la primera semana de diciembre, desocupados (en jornadas de protesta), militantes de partidos de

izquierda, trabajadores de gremios agrupados en la CGT de Moyano y de la CTA, militantes de organismos de derechos humanos (en la Marcha de la Resistencia),⁶ ahorristas y comerciantes expresaron en las calles su rechazo a las medidas económicas. Las manifestaciones callejeras del 12 de diciembre y la huelga general del día 13 marcaron el comienzo del fin para el gobierno de la Alianza: la insurrección popular que terminó de sellar su caída se ponía en marcha, estrechamente entrelazada con la lucha interburguesa.

La insurrección espontánea de diciembre de 2001

Nos resulta imposible, por razones de extensión, presentar una descripción minuciosa de los hechos. Por lo tanto, optamos por realizar una apretada síntesis, señalando solo lo que consideramos que son los elementos más importantes.

El hecho de diciembre fue un proceso que se inició el día 12 con las manifestaciones callejeras convocadas por la CGT Moyano, la CTA y la CAME, que mencionamos en el punto anterior, y otras acciones llevadas a cabo por trabajadores asalariados, desocupados, jubilados, estudiantes y vecinos en distintas ciudades del país. Al día siguiente, la huelga general convocada por las tres centrales sindicales articuló la rebelión contra el gobierno; tuvo un altísimo acatamiento y en su transcurso se combinaron diversos instrumentos de lucha, como marchas, ataques a edificios públicos, piquetes de huelga, ollas populares, ataques a bancos, cortes de calles y rutas, tractorazos, cierre de comercios, choques callejeros

6 Hebe de Bonafini llamó a un paro general y a la desobediencia civil y pidió que "el gobierno se quede hasta el último momento para demostrar la mierda que son los radicales" (*Crónica*, 7-12-2001).

con la policía y lucha de barricadas; a la noche se produjo el primer saqueo de esos días, en Guaymallén (Mendoza). Por lo tanto, la lucha comenzó desarrollándose dentro del sistema institucional, pero ya se advierte la tendencia a la desinstitucionalización.

Entre el 14 y el 18 se extendió la lucha por reivindicaciones inmediatas de distintas fracciones y capas sociales: pobres, obreros y pequeños burgueses realizaron saqueos, cortes de calles y rutas, huelgas, cacerolazos y manifestaciones callejeras en Santa Fe, Entre Ríos, Gran Buenos Aires (GBA), ciudad de Buenos Aires y Neuquén. Sin embargo, el 18 el presidente De la Rúa dijo que “no encontramos motivos para que haya una magnificación de estos episodios. El problema existe, pero no debe ser motivo de alarma o de hablar de conflicto general” (*Clarín*, 19-12-2001).

El 19 la lucha económica de los trabajadores derivó en combates callejeros en ciudades como Córdoba y La Plata. Simultáneamente, se multiplicaron los saqueos en casi todo el país, deviniendo en una revuelta con elementos de motín, que se prolongó hasta el día 20 (e incluso, hasta el 21 en algunos lugares): miles de pobres arrasaron con todo tipo de mercadería de hipermercados y comercios pequeños, enfrentándose con comerciantes que defendían su propiedad a balazos y con la policía que tiraba gases lacrimógenos, balas de goma y balas de plomo; otros atacaban automóviles y signos de “riqueza”, evidenciando un profundo odio y resentimiento. Fue la *insurrección de los hambrientos*.

A la noche, tras el discurso presidencial anunciando la declaración del estado de sitio, miles de manifestantes, en su mayoría fracciones de pequeña burguesía, comenzaron a golpear cacerolas y se desplazaron pacíficamente hacia los centros de los barrios primero y de las ciudades luego, en abierto desafío al estado de sitio, en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, San Miguel

de Tucumán y Mendoza.⁷ El llamado cacerolazo que recorrería las principales ciudades del país puede conceptualizarse como una *manifestación pacífica de masas*. La rebelión desbordó el sistema institucional, en tanto era el rechazo práctico al estado de sitio significaba el desconocimiento de las decisiones del gobierno, tanto del ejecutivo que declaró ese estado de sitio, como del legislativo, que estaba reunido para convalidar la decisión presidencial. Era la *insurrección de la pequeña burguesía*.⁸ Se abrió el camino a la lucha callejera de masas que se desarrollaría al día siguiente.

Desde la madrugada del día 20, miles de manifestantes se concentraron en la plaza del Congreso y en la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, al tiempo que se conocía la renuncia del ministro Cavallo. Desde entonces y a lo largo de todo el día, se sucedieron fuertes choques entre manifestantes y policías en el centro de Buenos Aires, disputándose el control de la Plaza de Mayo, con levantamiento de barricadas y ataques a bancos, empresas privatizadas y símbolos del imperialismo como la cadena estadounidense de comida rápida McDonald's. En ese combate, cinco manifestantes resultaron muertos por la policía, sumándose a los casi treinta muertos durante los saqueos del 19 y 20.⁹ Finalmente, el presidente

7 Fueron muy pocas las provincias en las que no se registraran algunas o todas las formas de la rebelión que conformaron el hecho.

8 El término "insurrección" está utilizando aquí, lo mismo que cuando se habla antes de la *insurrección de los hambrientos*, aludiendo a que se trata de la forma más alta de rebelión a que puede llegar esta capa social librada a su acción en tanto tal capa; en el caso de la pequeña burguesía, es la *manifestación pacífica*.

9 Al final de la batalla librada en el centro político de Buenos Aires, las cifras de bajas que se dieron a conocer por los diarios solo coincidían en contabilizar 5 muertos entre los manifestantes y 50 policías heridos; las cifras de heridos entre los manifestantes diferían entre 90 (15 de ellos por balas de plomo), 150 (25 con heridas de bala), 50 (15 heridos de bala), 102 (41 de bala) y 182 (12 de bala). Los detenidos fueron 70 (según *Clarín y Diario Popular*), 59 (según *Crónica*), 57 (según *La Prensa*) o 55 (según *Página/12*).

De la Rúa presentó su renuncia y huyó en helicóptero desde la casa de gobierno.

En el momento del combate, la lucha se descorporativizó para constituirse una situación de masas; el combate fue librado, entonces, por masas en lucha que mostraron una clara disposición al enfrentamiento contra la fuerza armada del gobierno y, potencialmente, contra las fuerzas armadas del Estado.¹⁰ Los que participaron directamente en el enfrentamiento fueron quienes se encontraban, por necesidad o decisión, menos insertos en el sistema institucional político y jurídico: militantes y principalmente (aunque no exclusivamente) jóvenes proletarizados, en buena medida población sobrante en las actuales condiciones del capitalismo argentino. Los que se expresaron en ese enfrentamiento fueron los excluidos del poder político (pueblo) y su meta, tal como lo muestran las consignas y los blancos que eligieron, era antiimperialista y democrática (en el sentido de influir sobre el gobierno del Estado para poder imponer sus intereses). Se manifestaron contra el gran capital, especialmente extranjero; su enemigo era la oligarquía financiera y sus cuadros políticos en ejercicio del gobierno; su meta era revertir o superar las políticas implementadas en Argentina durante el último cuarto de siglo y sus efectos sobre la sociedad: centralización de la riqueza, proletarización y pauperización de grandes masas de población. En este sentido, y aunque no siempre fuera explícito (y en muchos de ellos ni siquiera consciente), la meta que estaba potencialmente presente era una transformación de raíz de la sociedad, y, en ese sentido, puede vincularse en el análisis

10 El 20, los jefes de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa Horacio Jaunarena elaboraron "un plan de contingencia para el caso hipotético de que tengan que auxiliar a las fuerzas de seguridad en el restablecimiento del orden en el país", aunque en lo inmediato no preveían "participar de las tareas de represión de manifestantes, sino que contemplan medidas de apoyo al accionar de la policía y la gendarmería" (*Clarín*, 21-12-2001).

con el interés histórico de la clase obrera, en tanto expropiada de sus condiciones materiales de existencia. Hemos conceptualizado el hecho como una *insurrección espontánea*, cuyos rasgos son muchedumbre en la calle, no organizada, que espontáneamente levanta barricadas, dando lugar a una lucha de calles, en que las masas pasan por encima de las organizaciones. La observación del hecho investigado permite señalar que estas cinco condiciones se cumplen.

En síntesis, el hecho constituyó el punto culminante de la rebelión por fuera y en contra del sistema institucional en el período, en medio de una profunda crisis económica, social, política e ideológica. Comenzó con la yuxtaposición dentro del sistema institucional, el 12 de diciembre, de las distintas formas que hasta ese momento se daban separadamente; se articularon en la huelga general del 13, a partir del sistema institucional, pero comenzando a salir de él. Y finalizó con una nueva articulación por fuera del sistema institucional, el 20 de diciembre, a partir de la movilización de aquellos menos insertos en el sistema institucional. La nueva articulación tuvo como condición que todos los sujetos que se habían movilizado a lo largo de la década de 1990 lo hacían ahora simultáneamente en esos nueve días. El hecho contuvo en su seno y, a la vez, superó, todas las formas de rebelión (*revuelta del hambre, motín, manifestación, toma o barricada, huelga*) presentes en la década anterior, constituyéndose en este sentido en punto de llegada de un proceso.

En lo que respecta a su fisonomía y naturaleza, se observa que fue nacional en la medida en que abarcó el conjunto del territorio;¹¹ fue popular en el sentido de que lo llevaron a cabo distintas fracciones sociales excluidas del poder

11 No debe perderse de vista que el hecho fue nacional porque toda la nación quedó involucrada en él (aun donde puntualmente no se produjeran acciones), más aún cuando su culminación se produjo en el centro político del país.

político; fue democrático en el sentido de que esas fracciones pretendían influir en el desarrollo de los negocios públicos en defensa de sus intereses inmediatos y, para ello, se dieron sus propias formas de acción y organización; en las acciones mismas se esbozó como enemigo no solo al gobierno y los políticos sino a la cúpula de la burguesía, visualizada en los bancos y las empresas privatizadas; las formas de organización preexistentes (sindicatos, organizaciones empresarias, organizaciones de desocupados, partidos políticos) que comenzaron organizando las acciones (huelgas, manifestaciones y cacerolazos) fueron superadas en las acciones mismas.

Las fracciones sociales involucradas incluyen a la totalidad de aquellas excluidas del poder político: el proletariado en sus distintas capas y fracciones, en su activo y su reserva, y la pequeña burguesía asalariada y no asalariada, pobre y acomodada. La participación de la pequeña burguesía no se produce bajo la figura de “los ahorristas”, como se suele afirmar: al comienzo se movilizan en tanto comerciantes y vecinos y el 19 lo hacen contra el estado de sitio. A la vez, el rechazo al llamado corralito excede a la pequeña burguesía en tanto son afectados por esa medida los asalariados insertos en la llamada economía formal y las capas más pobres del proletariado insertas en el “trabajo en negro”. La meta de todas estas fracciones y capas no se limita exclusivamente a sus reivindicaciones económicas inmediatas sino que está presente el rechazo a lo que era percibido como un “abuso de autoridad” (manifestado tanto en la acción de la policía como en la declaración del estado de sitio) por parte de un gobierno que se tornó ilegítimo a los ojos del pueblo en la medida en que constituyó, en todos los aspectos, una continuidad degradada del gobierno anterior.

Aunque contiene en su seno distintos elementos, el hecho constituye una unidad. Si bien algunas acciones, que

corresponden a la lucha económica práctica —como aquellas de trabajadores con reclamos salariales de su propio gremio— parecen no formar parte del hecho y no las hemos considerado para periodizar, aparecen de alguna manera vinculadas a él en tanto tienden a desarrollarse como lucha callejera. A la vez, la lucha que se da dentro del sistema institucional también forma parte del hecho investigado. En la huelga del 13 todo se articula, pero después, entre el 14 y el 18, parece volver a separarse siguiendo las líneas de los intereses de cada fracción social, con relación al sistema institucional.

Es la *revuelta con elementos de motín* lo que abona al desborde del sistema institucional. Debe señalarse que existen diferencias entre los saqueos, algunos más teñidos por la lucha entre partidos políticos del régimen y el clientelismo, y otros donde esto no aparece. También que cuando los pobres forman parte de una organización reconocida, sea en tanto desocupados, habitantes de villas u otras formas, no llegan al saqueo sino que ejercen presión en demanda de alimentos en los hipermercados o ante funcionarios municipales o provinciales, generalmente con éxito, al menos parcial. El martes 18 aparece como un momento de cambio en los rasgos de los saqueos: hasta ese momento los que reclaman alimentos y los saqueadores se dirigen más bien a las cadenas de supermercados locales y a los hipermercados de empresas transnacionales (lo que permite señalar un punto en común con la insurrección del 20); son pocos los pequeños comercios saqueados; después, los saqueos se multiplican y extienden a los comercios pequeños. Simultáneamente, el 17, se producen los primeros choques armados entre pobres (saqueadores) y policías (tiroteos en Rosario y Concordia). Como dijimos más arriba, éstos hechos constituyen la *revuelta* pero, en algunos casos, aparece el elemento de odio y venganza propio del *motín*. En la

revuelta y motín se observa el papel de los adolescentes. También puede observarse que así como entre el 14 y el 18 se desarrollan los saqueos, que desembocan en *revuelta y motín* el 19 y 20, en esos días se desarrollan las manifestaciones que desembocan en la *manifestación de masas* del 19, que conduce al combate del 20 cuando no la dejan expresar pacíficamente. En el combate se observa el papel de los jóvenes. Los que se expresaron en ese enfrentamiento eran los excluidos del poder político y su meta era antiimperialista y democrática para lograr revertir o superar las condiciones en que se desarrollaba su vida.

La insurrección de los hambrientos y la insurrección de la pequeña burguesía constituyen el terreno donde se desarrolla la *insurrección espontánea* del pueblo. Es por eso que el hecho constituye una unidad. En tanto forma, la insurrección espontánea propiamente dicha es el combate en Buenos Aires, pero observado en su desarrollo, el hecho todo es insurrección espontánea: sin el combate en Buenos Aires no habría insurrección, y sin todo lo que precede al combate tampoco hubiera habido insurrección.

Culminaba así un ciclo de rebelión, que marca un punto de inflexión en el período. Miles de personas experimentaban por primera vez el poder de la movilización para forzar un cambio político significativo, poniendo en práctica de hecho la revocatoria del mandato de un presidente. Las rutas, las calles y las plazas eran del pueblo, sin mediaciones. Al menos durante el verano de 2002.

Bibliografía

Cotarelo, M. C. (2016). *Argentina 1993-2010. El proceso de formación de una fuerza social*. Buenos Aires, PIMSA - Imago Mundi.

Helbling, C. (2001). A qué jugamos. *La Nación*, 9 de julio.

Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. C. (2004a). *La insurrección espontánea. Argentina diciembre 2001. Descripción, periodización, conceptualización*. Buenos Aires, PIMSA.

_____ (2004b). Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA). *Documentos y Comunicaciones*, pp. 201-308.

_____ (2006). Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre 2001 en Argentina. Caetano, G. (comp.), *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*. Buenos Aires, CLACSO.

Prensa

Clarín

Crónica

La Nación

La Verdad Obrera, núm. 93, 28-11-2001.

Página/12

Prensa Obrera, núm. 731, 29-11-2001. En línea: <<http://archivo.po.org.ar/po/po732/colapsar.htm>>.

Socialismo o Barbarie, núm. 8, agosto/septiembre de 2001. En línea: <www.socialismo-o-barbarie.org/revista/sob9/enfrentarlos.htm>.

Los autores

Martin Acri

Profesor e investigador de historia de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte de la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América Latina (RIOSAL).

Joaquín Calvagno

Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte de la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América Latina (RIOSAL).

Nicolás Iñigo Carrera

Profesor de historia por la Universidad de Buenos Aires. Investigador principal del Conicet, miembro del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA). Autor de *La estrategia de la clase obrera 1936, la otra estrategia*; *La voluntad revolucionaria*; *Las estrategias de la clase obrera en los orígenes del peronismo*; y coautor de *Agustín Tosco. La clase revolucionaria*.

Guillermo Caviasca

Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte de la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América Latina (RIOSAL).

María Celia Cotarelo

Profesora de historia y doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Directora del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA). Autora de *El proceso de formación de una fuerza social. Argentina, 1993-2010*.

Patricia Chaves

Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo. Forma parte de la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América Latina (RIOSAL).

Roberto Elisalde

Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte de la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América Latina (RIOSAL).

Fabián Fernández

Profesor de historia por la Universidad de Buenos Aires. Miembro del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA). Docente en la materia "Historia de la clase obrera y el movimiento obrero en la Argentina", en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

María Isabel Grau

Profesora de Historia, docente en la cátedra "Historia social general" de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Docente en escuelas medias públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Coautora de *Agustín Tosco, la clase*

revolucionaria y autora de La revolución negra. La independencia de Haití. Militante sindical y política.

Gustavo Guevara

Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Rosario. Forma parte de la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América Latina (RIOSAL).

Ernesto Salas

Profesor e investigador de historia de la Universidad de Buenos Aires. Docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

